

# NOAM CHOMSKY



El lingüista, profesor e intelectual estadounidense Noam Chomsky es fundador de la teoría generativo-transformacional que ha revolucionado la lingüística. En las décadas de 1960 y 1970 se opuso a la intervención de su país en la guerra del Vietnam por lo que escribió varias obras y pronunció numerosas conferencias en distintos ámbitos sociales y políticos.

Chomsky inició su activismo político relativamente pronto, pero comenzó a publicar más intensamente sobre estos temas en la década de 1960, en respuesta a la actuación de su país en el Sudeste asiático. Restó dedicación a su trabajo sobre lingüística para escribir acerca del papel de la comunidad académica y de los medios de comunicación en la obtención del apoyo de la opinión pública a la política de Estados Unidos. Abordó igualmente las consecuencias de la política exterior de Estados Unidos, y se manifestó a favor de que los intelectuales recurran a métodos científicos para cuestionar las políticas gubernamentales que encuentren inmorales y desarrollar estrategias prácticas que las combatan.

ISBN 978-987-617-015-4



9 789876 170154

ILUSIONES NECESARIAS



NOAM CHOMSKY



Noam Chomsky



## ILUSIONES NECESARIAS

CONTROL DEL PENSAMIENTO  
EN LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS







Abraham Noam Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Pensilvania. Estudió en la Universidad de Pensilvania, donde se doctoró en Lingüística en 1955. Ese mismo año se incorporó como profesor de francés y alemán al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y en 1976 pasó a ser catedrático de Lingüística de la mencionada institución.



ILUSIONES NECESARIAS



Noam Chomsky

# ILUSIONES NECESARIAS

CONTROL DEL PENSAMIENTO EN LAS  
SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS

EXLIBRIS Scan Digit



The Doctor

*Libros, Revistas, Intereses:*  
<http://thedoctorwho1967.blogspot.com.ar/>





Caronte Filosofía  
dirigida por Carlos Torres

Chomsky, Noam  
Ilusiones necesarias – 1ª. ed. – La Plata: Terramar, 2007.  
200 p. ; 20x14 cm. – (Caronte Filosofía)  
  
ISBN 978-987-617-015-4  
  
I. Sociología. I. Título  
CDD 301

**Todos los derechos reservados**

Traducción: Loreto Bravo de Urquía y  
Juan José Saavedra Estevan

Primera edición en castellano: Marzo 1992

© Noam Chomsky  
© **Libertarias/Prodhufi, S.A.**  
C. Lérida, 80-82  
28020 Madrid  
Tel: 571 85 83 - 571 21 61

Para esta edición en Argentina: Setiembre 2007

© Terramar Ediciones  
Plaza Italia 187  
1900 La Plata  
Tel: (54-221) 482-0429

Diseño: Cutral

ISBN: 978-987-617-015-4

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723  
Impreso en la Argentina / Printed in Argentina

## ÍNDICE

Prólogo .....	9
1 La democracia y los medios de comunicación .....	11
2 Conteniendo al enemigo .....	41
3 Los límites de lo expresable .....	73
4 Adjuntos al gobierno .....	115
5 La utilidad de las interpretaciones .....	159



Los cinco capítulos que siguen son versiones modificadas de las cuatro conferencias Massey 1988, que pronuncié a través de la emisora de radio de la Canadian Broadcasting Corporation en noviembre del mismo año. Estas conferencias sugieren ciertas conclusiones en cuanto al funcionamiento de los sistemas democráticos más avanzados de los tiempos modernos, y especialmente en cuanto al modo en que el pensamiento y la comprensión se conforman a favor del interés del privilegio nacional.

Los temas que se presentan tienen sus principios en la naturaleza de las sociedades industriales occidentales, y han sido sometidos a debate desde sus orígenes. En las democracias capitalistas existe cierta tensión con respecto al lugar donde reside el poder. En una democracia, en principio, gobierna el pueblo. Pero el poder de toma de decisiones en cuanto a los aspectos centrales de la vida reside en manos privadas, lo que produce efectos a gran escala en todo el orden social. Una manera de resolver la tensión consistiría en ampliar el sistema democrático de manera que abarcara la inversión, la organización del trabajo, etcétera. Esto constituiría una revolución social de primera magnitud, que, al menos en mi opinión, consumaría las revoluciones políticas de una época anterior y haría realidad algunos de los principios libertarios en los que, en parte, se basaban. O la tensión podría resolverse, como a veces sucede, por medio de la eliminación forzosa de la interferencia pública en el poder estatal y privado. En las sociedades industriales avanzadas, el problema se suele abordar por medio de una variedad de medidas destinadas a despojar las estructuras políticas democráticas de un contenido esencial, al tiempo que éstas quedan intactas a nivel formal. Gran parte de esta tarea la asumen las instituciones ideológicas que canalizan el pensamiento y las actitudes dentro de unos límites aceptables, desviando cualquier reto en potencia hacia el privilegio y la autoridad establecidos, antes de que éste pueda tomar forma y adquirir fuerza. La tarea consta de muchas facetas y agentes. Yo me dedicaré



principalmente a un aspecto: el control del pensamiento, tal como se lleva a cabo por medio de la acción de los medios de comunicación nacionales y elementos afines de la cultura intelectual de elite.

En mi opinión, son demasiado pocas las indagaciones que tienen lugar en relación con estos asuntos. Mi sentimiento personal es que los ciudadanos de las sociedades democráticas deberían emprender un curso de autodefensa intelectual para protegerse de la manipulación y del control, y para establecer las bases para una democracia más significativa. Ésta es la preocupación que ha motivado el material que aparece a continuación, y gran parte del trabajo que se cita durante el transcurso de su estudio.

## 1 LA DEMOCRACIA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Bajo el titular, "Los obispos brasileños apoyan un plan para democratizar los medios de comunicación", un diario eclesiástico sudamericano describe una propuesta sometida a debate en la asamblea constituyente que "abriría la puerta a la participación ciudadana en los poderosos y concentradísimos medios de comunicación de Brasil." "Los obispos católicos de Brasil están entre los principales defensores [de esta]... propuesta legislativa para la democratización de los medios de comunicación del país," prosigue el informe, recalcando que "la televisión brasileña está en manos de cinco grandes cadenas [mientras que]... ocho enormes multinacionales y varias empresas estatales dan cuenta de la mayor parte de la publicidad en los medios de comunicación." La propuesta "contempla la creación de un Consejo Nacional de Comunicaciones compuesto de representantes civiles y gubernamentales [que]... desarrollaría una política de comunicaciones democrática y emitiría licencias para las operaciones de radio y televisión." "La Conferencia Episcopal de Brasil ha insistido repetidas veces sobre la importancia de los medios de comunicación y ha recomendado la participación popular. Ha elegido las comunicaciones como tema de su campaña de Cuaresma para 1989," una campaña anual "a nivel parroquial, de reflexión sobre algún tema social" iniciada por la Conferencia Episcopal.<sup>1</sup>

Los temas planteados por los obispos brasileños se están estudiando seriamente en muchas partes del mundo. En varios países de América Latina y de otras partes del mundo se están llevando a cabo proyectos que los exploran. Se ha producido una discusión sobre un "Nuevo Orden Mundial de Información" que diversificaría el acceso a los medios de comunicación y fomentaría alternativas al sistema mundial de medios de comunicación dominado por las potencias industriales de Occidente. Un estudio de la UNESCO en relación con dichas posibilidades causó una reacción extremadamente hostil en Estados Unidos.<sup>2</sup> La presunta preocupación la constituía la libertad de prensa. Entre los temas que desearía plantear a medida que avanzamos están los siguien-



res: ¿Hasta qué punto es seria esta preocupación, y cuál es su contenido esencial? Las preguntas adicionales que subyacen en el trasfondo están relacionadas con una política de comunicaciones democrática: cuál podría ser, si es o no deseable, y de ser así, si es viable. Y, de manera más general, ¿Cuál es exactamente el tipo de orden democrático al que aspiramos?

El concepto de la “democratización de los medios de comunicación” está desprovisto de significado real en los términos del discurso político en Estados Unidos. De hecho, la frase tiene unas connotaciones paradójicas, o incluso vagamente subversivas. La participación ciudadana se consideraría una violación de la libertad de prensa, un atentado contra la independencia de los medios de comunicación que distorsionaría la misión emprendida de información al público sin temer a nada ni favorecer a nadie. La reacción merece estudiarse. Bajo la misma subyacen las creencias en cuanto al modo en que funcionan los medios de comunicación, y al modo en que deberían funcionar dentro de nuestros sistemas democráticos, al igual que ciertas concepciones implícitas sobre la naturaleza de la democracia. Examinemos estos temas uno a uno.

La imagen estándar de la forma de actuar de los medios de comunicación, según la expresa el juez Gurfein en una sentencia por la que se rechazan los esfuerzos por parte del gobierno para prohibir la publicación de los *Documentos del Pentágono*, es la de que tenemos “una prensa pendenciera, una prensa obstinada, una prensa omnipresente”, y que estos foros del pueblo “han de ser tolerados por quienes ostentan la autoridad con el fin de preservar los valores aún mayores de libertad de expresión y el derecho del pueblo a estar informado”. En su comentario sobre esta sentencia, Anthony Lewis del *New York Times* observa que no siempre han sido los medios de comunicación tan independientes, vigilantes y desafiantes ante la autoridad como lo son hoy, pero que en las épocas de Vietnam y del Watergate aprendieron a ejercitar “el poder de indagar en nuestra vida nacional, sacando al descubierto lo que consideran adecuado descubrir”, sin consideraciones en cuanto a las presiones externas o a las exigencias del poder estatal o privado. También ésta es una creencia común.<sup>3</sup>

Mucho se ha debatido sobre los medios de comunicación durante este período, pero el debate no se ocupa del problema de “democratizar los medios de comunicación” y liberarlos de las restricciones del po-

der estatal y privado. Más bien, el asunto que se debate es si los medios no han sobrepasado los límites adecuados al escapar a dichas restricciones, incluso amenazando la existencia de las instituciones democráticas en su desafío pendenciero e irresponsable a la autoridad. Un estudio realizado en 1975 sobre la “governabilidad de las democracias” por la Comisión Trilateral concluyó que los medios de comunicación se han convertido en una “nueva fuente notable de poder nacional”, en un aspecto de un “exceso de democracia” que contribuye a “la reducción de la autoridad gubernamental” nacional y en consecuencia a una “disminución de la influencia de la democracia en el extranjero”. Esta “crisis de la democracia” general, mantenía la comisión, era el resultado de los esfuerzos de unos sectores de la población anteriormente marginados para organizar sus demandas e insistir sobre ellas, creando así una sobrecarga que impide que el proceso democrático funcione adecuadamente. En tiempos anteriores, “Truman había sido capaz de gobernar el país con la cooperación de un número relativamente pequeño de abogados y banqueros de Wall Street”, en palabras del relator americano Samuel Huntington, de la Universidad de Harvard. En dicho período no se produjo una crisis de la democracia, pero en la década de 1960 dicha crisis se desarrolló, alcanzando unas proporciones graves. El estudio, por tanto, instaba a una mayor “moderación en la democracia” para mitigar el exceso de democracia y superar la crisis.<sup>4</sup>

En pocas palabras, el público en general ha de ser reducido a su apatía y obediencia tradicionales, y expulsado del foro del debate y la acción políticos, para que la democracia pueda sobrevivir.

El estudio de la Comisión Trilateral refleja las percepciones y los valores de las élites liberales de Estados Unidos, Europa y Japón, incluyendo a las principales personalidades de la administración Carter. En la derecha, se percibe que la democracia se ve amenazada por los esfuerzos de organización de los que se conocen como “intereses especiales”, un concepto de retórica política contemporánea que hace referencia a los trabajadores, los agricultores, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los minusválidos, las minorías étnicas, etcétera —en breve, a la población en general—. En las campañas presidenciales de EEUU de la década de 1980, se acusó a los Demócratas de ser el instrumento de estos intereses especiales, minando así “el interés nacional”, que se asumía tácitamente que estaba representado por el sector destacadamente



omitido de la lista de intereses especiales: las grandes empresas, las instituciones financieras y otras elites de los negocios.

La acusación a efectos de que los Demócratas representan a los intereses especiales tiene poco fundamento. Representan, más bien, a otros elementos del "interés nacional", y participaron sin grandes remordimientos en el giro hacia la derecha que se produjo en la época posterior a Vietnam entre los grupos de elite, que incluyó la eliminación de programas estatales limitados destinados a proteger a los pobres y a los desvalidos; la transferencia de recursos a los ricos; la conversión del Estado, más incluso que antes, en un Estado benefactor para los privilegiados; y la expansión del poder estatal y del sector estatal protegido de la economía por medio del sistema militar –a nivel nacional–, una medida para impulsar al público a subvencionar la industria de alta tecnología y proporcionar un mercado garantizado por el Estado para su exceso de producción. Un elemento afín del giro hacia la derecha fue una política exterior más "activista" destinada a ampliar el poder de EEUU por medio de la subversión, el terrorismo internacional y la agresión; la Doctrina Reagan, que los medios de comunicación caracterizan como la vigorosa defensa de la democracia en todo el mundo, aun cuando critican a veces a los seguidores de Reagan por sus excesos en esta noble causa. En general, la oposición Demócrata ofreció un apoyo con reservas a estos programas de la administración Reagan que, de hecho, constituían en gran parte una extrapolación de las iniciativas de los años de Carter y, según lo indican claramente las encuestas, contaban, con pocas excepciones, con la fuerte oposición de la población en general.<sup>5</sup>

Desafiando a los periodistas durante la Convención Demócrata de julio de 1988, en relación con la constante referencia a Michael Dukakis como "demasiado liberal" para ganar, la organización de seguimiento de los medios de comunicación Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) citó una encuesta realizada conjuntamente en diciembre de 1987 por el *New York Times* y la CBS, en la que se manifestaba el abrumador apoyo popular a las garantías gubernamentales de pleno empleo, cuidados médicos y de guardería, y una proporción de 3 a 1 a favor de la reducción de los gastos militares entre el 50 por ciento de la población que está a favor de un cambio. Pero la elección de un Demócrata al estilo de Reagan como vicepresidente no obtuvo nada más que

elogios por parte de los medios de comunicación en cuanto al pragmatismo de los Demócratas a la hora de resistir a los extremistas del ala izquierda, que solicitaban unas políticas que contaban con el apoyo de una gran mayoría de la población. De hecho, las actitudes populares continuaron desplazándose hacia una especie de liberalismo a la "New Deal" a lo largo de la década de 1980, mientras que "liberal" se convirtió en una palabra impronunciable en la retórica política. Las encuestas indican que casi la mitad de la población cree que la Constitución de EEUU –un documento sagrado– es la fuente de la frase de Marx, "de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades"; así de evidentemente correcto parece el sentimiento en ella reflejado.<sup>6</sup>

Uno no debería dejarse engañar por las victorias electorales "aplastantes" de Reagan. Reagan obtuvo los votos de menos de un tercio del electorado; de los que votaron, una mayoría clarísima esperaba que sus programas legislativos no se promulgarían, y la mitad de la población sigue creyendo que al gobierno lo rigen "unos pocos grandes intereses que se preocupan de sus propios asuntos"<sup>7</sup>. Ante la opción entre el programa de Reagan, de crecimiento keynesiano sin preocupación por las consecuencias acompañado por un patrioterismo ondear de banderas por un lado, y la alternativa Demócrata de conservadurismo fiscal y "nos parecen bien vuestras metas pero tememos que sus costos serán excesivos" por el otro, los que se molestaron en votar prefirieron la anterior, lo que no resulta demasiado sorprendente. Los grupos de elite tienen el deber de elogiar, con una expresión audaz, los brillantes éxitos de nuestro sistema: "una democracia modélica y una sociedad que cubre excepcionalmente bien las necesidades de sus ciudadanos", en palabras de Henry Kissinger y Cyrus Vance cuando éstos resumen los "Objetivos de los Dos Partidos para la Política Exterior" en la época posterior a Reagan. Pero aparte de las elites cultas, gran parte de la población parece considerar al gobierno como un instrumento de poder que está más allá de su influencia y de su control; y si su experiencia no basta, una mirada a algunas estadísticas comparativas indicará hasta qué punto de magnificencia la sociedad más rica del mundo, con unas ventajas incomparables, "cubre las necesidades de sus ciudadanos"<sup>8</sup>.

El fenómeno Reagan, de hecho, puede permitir comprobar de ante-



mano las direcciones que sigue la democracia capitalista, con la eliminación progresiva de los sindicatos, los medios de comunicación independientes, las asociaciones políticas y, de manera más general, las formas de organización popular que interfieren en el dominio del Estado por el poder privado concentrado. Gran parte del mundo exterior puede haber considerado a Reagan como un "extraño jefe de vaqueros" que participó en actos de "locura" al organizar a una "banda de asesinos" para atacar a Nicaragua, entre otras hazañas (en palabras de los editoriales del *Globe and Mail* de Toronto), pero la opinión pública de EEUU parecía considerarlo como poco más que un símbolo de la unidad nacional, algo así como la bandera, o como la reina de Inglaterra. La reina inaugura el Parlamento dando lectura a un programa político, pero nadie pregunta si cree en él, o incluso si lo comprende. Del mismo modo, el público no parecía preocupado ante la evidencia, difícil de eliminar, de que el presidente Reagan no contaba con más que un vago concepto de las políticas promulgadas en su nombre, o del hecho de que, cuando no había sido adecuadamente informado por su personal, solía enunciar unos comentarios tan exóticos como para resultar embarazosos, si es que uno se los tomaba en serio.<sup>10</sup> El proceso de obstaculización de la interferencia pública en asuntos importantes da un paso adelante cuando las elecciones ni siquiera permiten al público seleccionar entre programas que tienen otros orígenes, sino que se convierten meramente en un proceso de selección de una figura simbólica. Por tanto, el hecho de que Estados Unidos funcionara prácticamente sin un jefe del Ejecutivo durante ocho años es de cierto interés.

Volviendo a los medios de comunicación, a los que se acusa de haber alentado las llamas peligrosas del "exceso de democracia", la Comisión Trilateral concluyó que los "intereses más amplios de la sociedad y el gobierno" exigen que si los periodistas no imponen "normas de profesionalidad", "la alternativa bien podría ser la regulación por el gobierno" con el fin de "restaurar un equilibrio entre el gobierno y los medios de comunicación". El director ejecutivo de Freedom House, Leonard Sussman, reflejando preocupaciones similares, preguntó: "¿Han de derrocar las insituciones libres debido a la misma libertad que sustentan?". Y John Roche, intelectual en residencia durante la administración Johnson, respondió solicitando una investigación por parte del Congreso de "los mecanismos de estos gobiernos privados"

que distorsionaban la realidad tan crasamente en su "misión anti-Johnson", aunque él temía que el Congreso estaría demasiado "atemorizado por los medios de comunicación" como para emprender esta tarea urgente.<sup>11</sup>

Sussman y Roche comentaban el estudio en dos volúmenes de Peter Braestrup, patrocinado por Freedom House, de la cobertura por los medios de comunicación de la Ofensiva Tet en 1968.<sup>12</sup> Este estudio se recibió de manera general como una contribución que constituía un hito, ofreciendo prueba definitiva de la irresponsabilidad de esta "notable nueva fuente de poder nacional". Roche lo describió como "una de las principales instancias de información investigadora y erudición de primera clase del último cuarto de siglo", un "estudio meticuloso de casos reales sobre la incompetencia, si no la malevolencia, de los medios de comunicación". Se alegaba que este clásico de la erudición moderna había demostrado que, en su cobertura incompetente y parcial que reflejaba la "cultura del adversario" de la década de 1960, los medios de comunicación perdieron efectivamente la guerra en Vietnam, dañando así la causa de la democracia y la libertad por la que Estados Unidos había luchado en vano. El estudio de la Freedom House concluyó que estos fallos reflejan "el estilo periodístico más volátil – impulsado por la exhortación o la complacencia administrativa – que tan popular ha llegado a ser desde finales de la década de 1960". El nuevo periodismo viene acompañado por una "disposición, a veces inconsciente, a buscar el conflicto, a creer lo peor del gobierno o de la autoridad en general, y, sobre dicha base, a dividir a los partícipes en cualquier asunto en 'malos' y 'buenos'". Entre los "malos" se incluían las fuerzas de EEUU en Vietnam, el "complejo militar-industrial", la CIA y el gobierno de EEUU en general; y, a los ojos de los medios de comunicación, los "buenos" eran presumiblemente los comunistas, quienes, según el estudio, eran objeto de algunos excesos de alabanzas y de una protección constantes. El estudio concebía "una continuación de los actuales estilos volátiles, siempre dentro de la oscura posibilidad de que, si los propios administradores no actúan, entonces se intentará aplicar remedios propios desde fuera – desde los tribunales, desde la Comisión Federal de Comunicaciones, o desde el Congreso".

Hoy en día, es una verdad establecida que "tendemos a autocastigarlos en tanto que americanos en relación con varios aspectos de



nuestras propias políticas y acciones con los que no estamos de acuerdo", y que, según lo reveló la experiencia de Vietnam, "es casi ineludible que dicha cobertura amplia mine el apoyo al esfuerzo de guerra", especialmente "la información pictórica, a menudo sangrienta, que se pasa en la televisión". (Landrum Bolling, durante una conferencia que dirigió sobre el tema de si de hecho no existe "un modo de implementar algún tipo de equilibrio entre las ventajas que disfruta un gobierno totalitario, debido a su capacidad de controlar o censurar las noticias desfavorables sobre la guerra, y las desventajas que supone para la sociedad libre permitir una cobertura abierta de todos los acontecimientos en tiempo de guerra"<sup>13</sup>.) El asunto Watergate, en el que una información investigadora "colaboró en la destitución de un presidente" (Anthony Lewis), reforzó estas horribles imágenes de destrucción inminente de la democracia por parte de algunos medios de comunicación independientes y adversos que obran a su antojo, al igual que lo hizo el escándalo Irán-Contra. Las clamorosas defensas de la libertad de prensa, como las del juez Gurfein y de Anthony Lewis, son una respuesta ante los intentos de controlar los excesos de los medios de comunicación y de imponerles normas de responsabilidad.

Dos tipos de preguntas surgen en relación con estos debates vigorosos sobre los medios de comunicación y la democracia: preguntas fácticas y preguntas sobre valores. La pregunta fáctica elemental es si los medios han adoptado realmente una postura adversa, quizá con celo excesivo; si, en particular, minan la defensa de la libertad en tiempos de guerra y amenazan a las instituciones libres "autocastigándonos" y castigando a los que ostentan el poder. Si es así, podría entonces preguntarse si resultaría adecuado imponer algunas restricciones externas para asegurar que se ciñan a los límites de la responsabilidad, o si deberíamos adoptar el principio manifestado por el juez Holmes, en un caso clásico de disenso, de que "la mejor prueba de la verdad es el poder del pensamiento para hacerse aceptar dentro de la competencia del mercado" por medio del "libre intercambio de ideas"<sup>14</sup>.

La cuestión de hecho rara vez se discute; se asume que el caso se ha demostrado. Algunos, no obstante, han mantenido que las premisas fácticas son sencillamente falsas. Partiendo de las más amplias de las reivindicaciones, consideremos el funcionamiento del mercado libre

de ideas. En su estudio sobre la movilización de la opinión popular para fomentar el poder estatal, Benjamin Ginsberg mantiene que

los gobiernos occidentales han utilizado mecanismos de mercado para regular las perspectivas y los sentimientos populares. El "mercado de las ideas", elaborado durante los siglos XIX y XX, disemina con eficacia las creencias y las ideas de las clases superiores al tiempo que subvierte la independencia ideológica y cultural de las clases inferiores. Por medio de la construcción de este mercado, los gobiernos occidentales fraguaron unos lazos fúnes y duraderos entre la posición socioeconómica y el poder ideológico, permitiendo a las clases superiores utilizar a cada uno de ellos para reforzar al otro. En Estados Unidos en particular, la capacidad de las clases alta y media-alta para dominar el mercado de las ideas ha solido permitir a estos niveles dar forma a la percepción, por parte de la sociedad en su totalidad, de la realidad política y de la gama de posibilidades realistas tanto políticas como sociales. Aunque los ciudadanos del mundo occidental suelen equiparar al mercado con la libertad de opinión, la mano oculta del mercado puede ser un instrumento de control casi tan potente como el puño de hierro del Estado.<sup>15</sup>

La conclusión de Ginsberg tiene cierta plausibilidad, en cuanto a las asunciones sobre el funcionamiento de un mercado libre guiado que no son particularmente controvertidas. Los segmentos de los medios de comunicación que pueden llegar a un público considerable son las principales grandes empresas, y están estrechamente integrados con conglomerados aún mayores. Al igual que otros negocios, venden un producto a los consumidores. Su mercado son los anunciantes, y el "producto" son los públicos, con una inclinación hacia los públicos más ricos, que aumentan los precios de la publicidad.<sup>16</sup> Hace más de un siglo, los Liberales británicos observaron que el mercado fomentaría aquellos diarios que "disfrutaban de la preferencia del público anunciante"; y hoy en día, Paul Johnson, comentando la desaparición de un nuevo diario de izquierdas, comenta templadamente que se había merecido su destino: "El mercado sentenció correctamente al inicio, negándose a adquirir toda la emisión de capital"; sin duda, ninguna



persona en su sano juicio puede dudar que el mercado representa la voluntad pública.<sup>17</sup>

En resumen, los principales medios de comunicación –en particular, los medios de elite que establecen el programa que los demás suelen seguir– son grandes empresas que “venden” públicos privilegiados a otras empresas. No podría constituir una sorpresa el hecho de que la imagen del mundo que presentan reflejara las perspectivas y los intereses de los vendedores, los compradores y el producto. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación es elevada, y va en aumento.<sup>18</sup> Además, quienes ocupan posiciones directivas en los medios, o adquieren categoría dentro de los mismos en tanto que comentaristas, pertenecen a las mismas elites privilegiadas, y se podría esperar que compartieran las percepciones, aspiraciones y actitudes de sus asociados, reflejando igualmente sus propios intereses de clase. Es poco probable que los periodistas que penetran en el sistema se abran camino salvo si se conforman a estas presiones ideológicas, generalmente por medio de la internalización de los valores; no es fácil decir una cosa y creer en otra, y quienes no consiguen conformarse tenderán a ser eliminados por medio de mecanismos familiares.

La influencia de los anunciantes es a veces mucho más directa. “Los proyectos inadecuados para su patrocinio por la empresa tienden a morir en la rama”, observa el *Economist* de Londres, recalcando que “las estaciones y los canales han aprendido a simpatizar con las simpatías más delicadas de las grandes empresas”. El diario cita el caso del canal público de televisión WNET, que “perdió su suscripción empresarial de Gulf + Western de resultas de un documental llamado ‘Hambre a cambio de Beneficios’, sobre la compra por parte de las multinacionales de inmensas extensiones de terreno en el tercer mundo”. Estas acciones “no habían sido las de un amigo”, escribió el jefe del ejecutivo de Gulf al canal, añadiendo que el documental era “violentamente antiempresa, si no antiamericano”. “La mayoría de la gente cree que hoy WNET no cometería el mismo tipo de error”, concluye el *Economist*.<sup>19</sup> Tampoco lo harían otros. El aviso no tiene que ser más que implícito.

Muchos otros factores llevan a los medios a conformarse a los requisitos del nexo estatal-empresarial.<sup>20</sup> Enfrentarse con el poder resulta costoso y difícil; se imponen elevados niveles de evidencia y argumentación, y naturalmente el análisis crítico no goza de buena acogida por

parte de quienes están en situación de reaccionar vigorosamente y de determinar la gama de premios y castigos. La conformidad con un “orden del día patriótico”, por el contrario, no impone tales costos. Los cargos contra los enemigos oficiales escasamente necesitan ser sustanciados; además, están protegidos contra la corrección, que se puede despachar como una apología de los criminales o como el hecho de ver los árboles pero no ver el bosque. El sistema se protege a sí mismo por medio de la indignación contra un reto al derecho al engaño al servicio del poder, y la misma idea de someter el sistema ideológico a una investigación racional provoca incompreensión o indignación, aunque a menudo se oculta tras otros términos.<sup>21</sup> Quien atribuye las mejores intenciones al gobierno de EEUU, aunque quizá deplora el fracaso y la ineptitud, no requiere ninguna evidencia para esta postura, como en el caso en que nos preguntamos por qué “el éxito sigue eludiéndonos” en Oriente Medio y en América Central, por qué “una nación con tal abundancia de riqueza, poder y buenas intenciones [no puede] conseguir sus propósitos más deprisa y con mayor eficacia” (Landrum Bolling).<sup>22</sup> Las normas son radicalmente diferentes cuando observamos que las “buenas intenciones” no son propiedades de los estados, y que Estados Unidos, al igual que todo otro Estado pasado y presente, persigue políticas que reflejan los intereses de quienes controlan al Estado en virtud de su poder nacional, axioma que es escasamente expresable en la corriente principal, por sorprendente que pueda parecer.

No se necesitan pruebas para condenar a la Unión Soviética por su agresión en Afganistán y su apoyo a la represión en Polonia; la cosa es muy distinta cuando se considera la agresión de EEUU en Indochina, o sus esfuerzos por impedir una solución política al conflicto árabe-israelí durante muchos años, fácilmente documentable pero incómodo, y que por tanto constituye un no-hecho. No se exige argumento alguno para condenar a Irán o a Libia en relación con el terrorismo que cuenta con apoyo estatal; la discusión del papel preeminente –podría decirse dominante– de Estados Unidos y sus clientes a la hora de organizar y llevar a cabo este azote de los tiempos modernos sólo provoca horror y desprecio para este punto de vista; la evidencia del apoyo, por irresistible que resulte, se descarta como irrelevante. Por sistema, los medios de comunicación y los diarios intelectuales elogian al gobierno de EEUU por su dedicación a la lucha en favor de la democracia en



Nicaragua, o lo critican por los medios que ha empleado para perseguir este encomiable objetivo, sin ofrecer evidencia alguna a efectos de que ésta sea la meta de las políticas. Resulta prácticamente impensable, dentro de la corriente principal, un desafío a la asunción patriótica subyacente, y, de permitirse su expresión, se descartaría como una variedad de fanatismo ideológico, un absurdo, a pesar de estar respaldado por una evidencia abrumadora —lo que en este caso no es tarea difícil—.

Caso por caso, averiguamos que la conformidad es la vía fácil, así como el camino para el privilegio y el prestigio; la disidencia comporta unos costos personales que pueden resultar considerables, incluso en una sociedad que no dispone de medios de control tales como escuadrones de la muerte, prisiones psiquiátricas o campos de exterminación. La misma estructura de los medios de comunicación está diseñada para inducir a la conformidad con respecto a la doctrina establecida. Resulta imposible, durante un lapso de tres minutos entre anuncios, o en setecientas palabras, presentar pensamientos poco familiares o conclusiones sorprendentes con los argumentos y la evidencia necesarios para dotarlos de cierta credibilidad. La regurgitación de beaterías bien aceptadas no se enfrenta con ese problema.

El hecho de que los principales medios de comunicación y otras instituciones ideológicas reflejen por lo general las perspectivas y los intereses del poder establecido constituye una pretensión natural, en cuanto a las asunciones incontrovertidas. El hecho de que se cumpla esta pretensión ha sido discutido por varios analistas. Edward Herman y yo hemos publicado una amplia documentación, por separado y conjuntamente, para apoyar una concepción del modo en que funcionan los medios de comunicación, que varía marcadamente con respecto a la versión estándar.<sup>23</sup> Según este “modelo de propaganda” —que cuenta con plausibilidad previa con respecto a las razones como las que se acaban de estudiar brevemente— los medios de comunicación prestan servicio a los intereses del poder estatal y empresarial, que están estrechamente interrelacionados, planteando su información y su análisis de manera que se apoye el privilegio establecido y se limiten el debate y la discusión como corresponde. Hemos estudiado una amplia gama de ejemplos, entre ellos los que proporcionan la prueba más severa para un modelo de propaganda, a saber, los argumentos que ofrecen como su más fuerte base de apoyo los críticos de los supuestos excesos

de los medios de comunicación contra las instituciones establecidas; la cobertura de las guerras de Indochina, el asunto Watergate y otros, tomados del período en que se dice que los medios de comunicación superaron el conformismo del pasado y adoptaron un papel de cruzados. Para someter el modelo a una prueba justa, hemos seleccionado sistemáticamente algunos ejemplos emparejados tan estrechamente como lo permite la historia; crímenes atribuibles a enemigos oficiales contrastados con aquellos cuya responsabilidad corresponde a Estados Unidos y sus clientes; buenas acciones, específicamente elecciones, llevadas a cabo por enemigos oficiales contrastadas con las llevadas a cabo en estados clientes. También se han emprendido otros métodos, que han aportado una confirmación adicional.

Existen ahora miles de páginas de documentación que apoyan las conclusiones del modelo de propaganda. Según las normas de las ciencias sociales, está muy bien confirmado, y sus predicciones con frecuencia se sobrepasan considerablemente. Si existe un reto serio a esta conclusión, desconozco su existencia. La naturaleza de los argumentos presentados en su contra, en las raras ocasiones en que el tema se puede incluso abordar dentro de la corriente principal, sugiere que el modelo es verdaderamente robusto. El estudio de Freedom House, muy bien considerado, del que se mantiene que ha proporcionado la demostración conclusiva del carácter adverso de los medios de comunicación y de su amenaza para la democracia, se derrumba al someterse a un análisis, y cuando se corrigen innumerables errores y representaciones erróneas, representa poco más que una queja a efectos de que los medios de comunicación fueron excesivamente pesimistas en su persecución de una causa noble; no conozco otros estudios con mejor suerte.<sup>24</sup>

Existen, sin duda, otros factores que ejercen una influencia sobre la actuación de unas instituciones sociales tan complejas como los medios de comunicación, y se pueden hallar excepciones al patrón general predicho por el modelo de propaganda. No obstante, creo que ha demostrado proporcionar una primera aproximación razonablemente precisa, que captura las propiedades esenciales de los medios de comunicación y de la cultura intelectual dominante de manera más general.

Una predicción del modelo es que quedará efectivamente excluido de la discusión, ya que cuestiona una asunción de hecho que resulta muy útil para los intereses del poder establecido: a saber, que los me-



dios de comunicación son adversos y pendencieros, quizás en exceso. Por muy bien confirmado que pueda estar el modelo, pues, resulta inadmisibles y, según lo predice el modelo, debería quedar fuera de la gama de debate en cuanto a los medios de comunicación. Esta conclusión también está bien confirmada a nivel empírico. Obsérvese que el modelo cuenta con una característica un tanto desconcertante. Sencillamente, o es válido o no es válido. Si no es válido, se puede descartar; si es válido, será descartado. Al igual que en el caso de la doctrina del SIGLO XVIII en cuanto a la difamación sediciosa, la verdad no constituye una defensa; más bien, realza la enormidad del crimen de hacer un llamamiento a la autoridad en relación con el desprestigio.

Si las conclusiones derivadas en relación con el modelo de propaganda son correctas, entonces las críticas a los medios de comunicación en relación con su postura adversa solamente se pueden comprender en tanto que una exigencia a efectos de que los medios de comunicación no deberían ni siquiera reflejar la gama del debate en relación con cuestiones tácticas entre las elites dominantes, sino que deberían limitarse a servir a aquellos sectores que en un momento dado dirigen el Estado, y deberían hacerlo con el entusiasmo y optimismo adecuados en cuanto a las causas –nobles por definición– a las que se dedica el poder del Estado. No le habría sorprendido a George Orwell que fuera éste el sentido de la crítica de los medios de comunicación por parte de una organización que se denomina “Freedom House” (Casa de la Libertad).<sup>25</sup>

Los periodistas a menudo cumplen con unas elevadas normas de profesionalidad en su trabajo, demostrando valor, integridad y espíritu emprendedor, incluso muchos de los que informan para unos medios de comunicación que se adhieren estrechamente a las predicciones del modelo de propaganda. No existe aquí contradicción alguna. Lo que se está debatiendo no es la honradez de las opiniones manifestadas o la integridad de quienes buscan los hechos, sino más bien la elección de los asuntos a tratar y la manera de recalcar los hechos, la gama de opinión cuya expresión se permite, las premisas incuestionadas que sirven de guía para la información y el comentario, y el marco general impuesto para la presentación de una determinada visión del mundo. Incidentalmente, no necesitamos detenernos en manifestaciones como la siguiente, que apareció en la portada del *New Republic* durante la

invasión del Líbano por Israel: “Gran parte de lo que ustedes han leído en periódicos y revistas sobre la guerra en el Líbano –incluso más en el caso de lo que han visto y oído en la televisión– sencillamente, no es verdad”<sup>26</sup>. Este tipo de actuaciones se pueden consignar a los lamentables archivos de las apologías de las atrocidades de otros estados favorecidos.

Presentaré ejemplos para ilustrar el funcionamiento del modelo de propaganda, pero asumiré que el caso básico ha sido establecido de manera creíble por el extenso material que ya está impreso. Este trabajo ha provocado indignación y falsificación considerables (algunas las estudiamos Herman y yo en *Manufacturing Consent*; otras, en otras obras), y también perplejidad y malentendidos. Pero, que yo sepa, no existe un esfuerzo serio para responder ante estas y otras críticas similares. Más bien, quedan sencillamente descartadas, de conformidad con las predicciones del modelo de propaganda.<sup>27</sup> Típicamente, el debate en cuanto al rendimiento de los medios de comunicación, dentro de la corriente principal, incluye una crítica de la postura adversa de los medios y una respuesta por parte de quienes los defienden, pero no una crítica de los medios de comunicación por adherirse a las predicciones del modelo de propaganda, o un reconocimiento de que ésta pueda ser una postura concebible. En el caso de las guerras de Indochina, por ejemplo, la televisión pública de EEUU presentó una serie retrospectiva en 1985, seguida de una denuncia, presentada por la organización de derechas de control de los medios de comunicación, Accuracy in Media, y de una discusión limitada a los críticos de los supuestos excesos de adversidad por parte de la serie y de quienes la defienden. Nadie argumentó que la serie se conforma a las expectativas del modelo de propaganda, como de hecho lo hace. El estudio de la cobertura por parte de los medios de comunicación de los conflictos en el Tercer Mundo a que se ha hecho referencia antes sigue un modelo similar, bastante consecuente, aunque el público considera que los medios de comunicación son demasiado conformistas.<sup>28</sup>

Los medios de comunicación publican alegremente las condenas de su “asombrosa falta de equilibrio o incluso de apariencias de imparcialidad” y “los males y peligros de la prensa díscola de estos tiempos”<sup>29</sup>. Pero sólo cuando, como en este caso, el crítico condena a la “elite de los medios de comunicación” por ser la “esclava de los puntos de vista



liberales de la política y la naturaleza humana” y por la “evidente dificultad que padecen la mayoría de los liberales a la hora de emplear la palabra dictadura para describir incluso a las más flagrantes de las dictaduras de izquierdas”; sin duda uno nunca vería a Fidel Castro descrito como dictador en la prensa de la corriente principal, siempre tan blanda con el comunismo y tan dada al autocastigo.<sup>30</sup> No se espera de dichas diatribas que cumplan ni siquiera con las normas mínimas de la evidencia; ésta contiene exactamente una referencia a lo que podría ser un hecho, una vaga alusión a la supuesta manipulación de estadísticas por parte del *New York Times* “para ocultar la caída de los tipos de interés durante el primer mandato de Ronald Reagan”, como si no se hubiera dado información plena sobre el asunto. A menudo este tipo de acusaciones no son mal recibidas, en primer lugar porque la respuesta es sencilla o superflua; y en segundo lugar, porque el debate que se produce sobre el tema ayuda a afianzar la creencia de que los medios de comunicación, o son independientes y objetivos, con elevados niveles de integridad profesional y apertura a todos los puntos de vista razonables, o, de manera alternativa, manifiestan una fuerte tendencia a la denuncia, elegantemente izquierdista, de la autoridad. Cualquiera de estas conclusiones es fácilmente aceptable para el poder y el privilegio establecidos –incluso para las propias elites de los medios de comunicación–, que no se oponen a la acusación de que podrían haber ido demasiado lejos en su persecución de algunos modos pendencieros y protestones de desafiar a la ortodoxia y al poder. La gama de la discusión refleja lo que predeciría un modelo de propaganda: una condena de la “tendencia liberal” y una defensa contra esta condena, pero ningún reconocimiento de la posibilidad de que la “tendencia liberal” pudiera sencillamente ser una expresión de una variante de la estrecha ideología estatal-empresarial –como lo es, demostrablemente– y una variante particularmente útil, que lleva el mensaje implícito: hasta aquí, y no más lejos.

Para volver a las propuestas de los obispos brasileños, una razón por la que parecerían superfluas u obstinadas si se plantearan dentro de nuestro contexto político es que se asume que los medios de comunicación están dedicados al servicio del bien público, si es que no son demasiado extremistas en su independencia de la autoridad. De este modo, están cumpliendo con su función social adecuada, según lo explicaba

el juez del Supremo Powell en palabras citadas por Anthony Lewis en su defensa de la libertad de prensa: “Ningún individuo puede obtener para sí la información necesaria para el cumplimiento inteligente de sus responsabilidades políticas... Al permitir al público imponer un control significativo sobre el proceso político, la prensa cumple una función crucial llevando a cabo el objetivo social de la Primera Enmienda”.

Un punto de vista alternativo, que considero válido, es que los medios de comunicación cumplen en verdad un “objetivo social”, pero considerablemente diferente. Es el objetivo social a cuyo servicio está la educación estatal según la concibió James Mill durante los primeros días del establecimiento de este sistema: para “formar las mentes del pueblo dentro de un apego virtuoso a su gobierno”, y de forma más general dentro de las disposiciones del orden social, económico y político.<sup>31</sup> Lejos de contribuir a una “crisis de la democracia” del tipo que temen las instituciones liberales, los medios de comunicación son guardianes vigilantes que protegen al privilegio de la amenaza de la comprensión y participación pública. De ser correctas estas conclusiones, la primera objeción a la democratización de los medios de comunicación se basa en el error fáctico y analítico.

Una segunda base para la objeción es más sustancial, y no está desprovista de justificación: el llamamiento a la democratización de los medios de comunicación podría enmascarar los esfuerzos muy mal recibidos para limitar la independencia intelectual por medio de presiones populares, variante de algunas inquietudes que resultan familiares en teoría política. El problema no es fácil de descartar, pero no es propiedad inherente a la democratización de los medios de comunicación.<sup>32</sup>

El asunto de base me parece que es diferente. Nuestra cultura política tiene un concepto de la democracia que difiere del de los obispos brasileños. Para ellos, la democracia significa que los ciudadanos deberían disponer de la oportunidad de informarse, de tomar parte en la investigación y la discusión y la elaboración de políticas, y de hacer avanzar sus programas por medio de la acción política. Para nosotros, la democracia se concibe desde un punto de vista más estrecho: el ciudadano es un consumidor, un observador, pero no un partícipe. El público tiene derecho a ratificar políticas que se originan en otro lugar, pero si se sobrepasan estos límites no tenemos de-



mocracia, sino “una crisis de democracia” que se ha de resolver de algún modo.

Este concepto se basa en doctrinas establecidas por los Padres Fundadores. Los Federalistas, escribe la historiadora Joyce Appleby, esperaban “que las nuevas instituciones políticas americanas continuarían funcionando dentro de las antiguas asunciones en cuanto a una elite políticamente activa y un electorado deferente y sumiso”, y “George Washington esperaba que su enorme prestigio llevaría a esa ciudadanía grande, sobria y dotada de sentido común a la que los políticos siempre se dirigen a ver los peligros de las sociedades autocreadas.”<sup>33</sup> A pesar de su derrota electoral, su concepto prevaleció, aunque con una forma diferente, a medida que el capitalismo industrial tomó forma. Esto lo manifestó John Jay, el presidente del Congreso Continental y el primer presidente del Tribunal Supremo de EEUU, en la que su biógrafo dice que es una de sus máximas preferidas: “El pueblo al que pertenece el país debería gobernarlo”. Y no han de ser demasiado blandos en el modo de gobernar. Aludiendo al creciente descontento, Gouverneur Morris escribió en 1783, en un despacho a John Jay, que aunque “es probable que se producirá una gran Convulsión”, no existe una causa real de preocupación: “El Pueblo está bien preparado” para que el gobierno asuma “aquel Poder sin el cual el Gobierno no es más que un Nombre... Cansados de la Guerra, se puede contar con su Conformidad con Certeza absoluta, y usted y yo, mi amigo, sabemos por Experiencia que cuando unos pocos Hombres de sentido y espíritu se reúnen y declaran ser la Autoridad, los pocos que tienen una opinión diferente pueden ser fácilmente convencidos de su Error por medio de ese poderoso Razonamiento, la Soga”. Por “el Pueblo”, observa el historiador constitucional Richard Morris, “quería decir una pequeña elite nacionalista, que su excesiva cautela no le permitía nombrar” –los terratenientes de sexo masculino y de raza blanca para los que se estableció el orden constitucional–. El “enorme éxodo de Legitimistas y negros” a Canadá y a otros lugares reflejó en parte la percepción de estas realidades por parte de los mismos.<sup>34</sup>

En otro lugar, Morris observa que en la sociedad posrevolucionaria, “lo que uno en efecto tenía era una democracia política manipulada por una elite”, y en los estados donde parecería que la “democracia igualitaria” podría haber prevalecido (como en Virginia), en realidad

“la dominación de la aristocracia se aceptó implícitamente”. Lo mismo sucede con la dominación de las nacientes clases empresariales de los períodos posteriores, que se considera que reflejan el triunfo de la democracia popular.<sup>35</sup>

La máxima de John Jay es, de hecho, el principio sobre el cual se fundó y mantuvo la República, y por su propia naturaleza la democracia capitalista no puede alejarse demasiado de este modelo, por causas que se perciben inmediatamente.<sup>36</sup>

A nivel nacional, este principio requiere que la política se reduzca, en efecto, a interacciones entre grupos de inversores que compiten por el control del Estado, de acuerdo con lo que Thomas Ferguson denomina la “teoría de inversión de la política”, que, según su argumentación plausible, explica gran parte de la historia política de EEUU.<sup>37</sup> Para nuestras dependencias, el mismo principio básico implica que la democracia se logra cuando la sociedad está bajo el control de las oligarquías locales, elementos basados en la empresa y relacionados con inversores de EEUU, los militares bajo nuestro control y los profesionales en quienes se puede confiar a la hora de que cumplan órdenes y sirvan a los intereses del poder y el privilegio de EEUU. Si existe algún desafío popular a su dominio, Estados Unidos tiene derecho a recurrir a la violencia para “restaurar la democracia” –para adoptar el término convencional utilizado al hacer referencia a la Doctrina Reagan en Nicaragua–. Los medios de comunicación establecen una diferencia entre los “demócratas” y los “comunistas”; los primeros son aquellos que sirven a los intereses del poder de EEUU, los segundos aquellos que sufren la enfermedad denominada “ultranacionalismo” en los documentos secretos de planificación, que explican, manifiestamente, que la amenaza para nuestros intereses la representan los “régimenes nacionalistas” que responden ante las presiones nacionales relacionadas con la mejora de la calidad de vida y la reforma social, prestando una consideración insuficiente a las necesidades de los inversores de EEUU.

Los medios de comunicación se limitan a seguir las reglas del juego cuando hacen un contraste entre las “democracias incipientes” de América Central, sometidas al control militar y empresarial, y la “Nicaragua comunista”. Y podemos apreciar por qué ocultaron las encuestas de 1987 en El Salvador que revelaron que solamente un 10 por ciento de la población “cree que existe un proceso de democracia y



libertad en el país en la actualidad". Los salvadoreños ignorantes sin duda no logran comprender nuestro concepto de democracia. Y lo mismo debe suceder con los redactores del principal diario de Honduras, *El Tiempo*. Ellos ven en su país una "democracia" que ofrece "desempleo y represión", como caricatura del proceso democrático, y escriben que no puede haber democracia en un país bajo la "ocupación de las tropas norteamericanas y de los Contra", donde "se abandonan los intereses nacionales vitales para servir a los intereses extranjeros", al tiempo que continúan la represión y los arrestos ilegales, y que los escuadrones de la muerte de los militares acechan, amenazantes, en el trasfondo.<sup>38</sup>

De acuerdo con los conceptos prevalecientes en EEUU, no existe violación de la democracia si unas pocas grandes empresas controlan el sistema de información; de hecho, ésa es la esencia de la democracia. En los *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, la principal figura de la industria de las relaciones públicas, Edward Bernays, explica que "la esencia misma del proceso democrático" es "la libertad de persuadir y sugerir", lo que él denomina "la ingeniería del consentimiento". "Un dirigente", continúa, "a menudo no puede esperar que el pueblo logre ni tan siquiera una comprensión general... Los dirigentes democráticos han de hacer su parte a la hora de... lograr... el consentimiento a unas metas y unos valores socialmente constructivos", aplicando "principios científicos y prácticas probadas a la tarea de lograr que la gente dé su apoyo a las ideas y los programas"; y aunque no se dice explícitamente, resulta bastante evidente que quienes controlan los recursos estarán en una posición que les permita juzgar qué es lo que es "socialmente constructivo", maquinar para lograr el consentimiento a través de los medios de comunicación e implementar las políticas por medio de los mecanismos del Estado. Si sucede que la libertad de persuadir está concentrada en unas pocas manos, debemos reconocer que ésa es la naturaleza de una sociedad libre. La industria de las relaciones públicas dedica enormes recursos a "educar al pueblo americano en cuanto a los hechos económicos de la realidad" para asegurar un clima favorable para los negocios. Su tarea consiste en controlar "la mente del público", que es "el único peligro serio con el que se enfrenta la empresa", como observó un ejecutivo de AT&T hace ochenta años.<sup>39</sup>

Las ideas similares son la norma a todo lo ancho del espectro político. El decano de los periodistas de EEUU, Walter Lippman, describió una "revolución" en "el ejercicio de la democracia" a medida que "la fabricación del consentimiento" se ha convertido en "un arte consciente de su propia existencia y un órgano habitual del gobierno popular". Éste es un acontecimiento natural cuando "los intereses comunes eluden considerablemente a la opinión pública en su totalidad, y pueden ser gestionados solamente por una clase especializada cuyos intereses personales van más allá de la localidad". Escribía poco después de la Primera Guerra Mundial, cuando la comunidad intelectual liberal estaba considerablemente impresionada por su propio éxito a la hora de servir a "los intérpretes fieles y colaboradores de lo que parecería ser una de las mayores empresas jamás iniciada por un presidente norteamericano" (*New Republic*). Esta empresa era la interpretación de Woodrow Wilson de su mandato electoral para una "paz sin victoria" como la ocasión para la persecución de una victoria sin paz, con la ayuda de los intelectuales liberales, quienes más tarde se autoelogiaron por haber logrado "imponer su voluntad sobre una mayoría reacia o indiferente", con la ayuda de invenciones propagandísticas sobre las atrocidades de los hunos (alemanes) y otros medios semejantes.

Quince años después, Harold Lasswell explicó, en la *Encyclopaedia of the Social Sciences*, que no deberíamos sucumbir ante "dogmatismos democráticos a efectos de que los hombres sean los mejores jueces de sus propios intereses". No lo son; los mejores jueces son las elites, a quienes, por tanto, se les deben asegurar los medios para imponer su voluntad, para el bien común. Cuando las disposiciones sociales les niegan la fuerza necesaria para obligar a la obediencia, es necesario recurrir a "toda una nueva técnica de control, principalmente a través de la propaganda" debido a la "ignorancia y la superstición [del... las masas]". Por aquellos mismos años, Reinhold Niebuhr argumentó que "la racionalidad pertenece a los observadores fríos", mientras que "el proletario" no sigue a la razón sino a la fe, basándose en un elemento crucial de "ilusión necesaria". Sin dicha ilusión, la persona ordinaria caerá en la "inercia". A continuación, en su fase marxista, Niebuhr instó a aquellos a los que se dirigía —los observadores fríos, sería de suponer— a que reconocieran "la estupidez del hombre medio" y suministraran las "simplificaciones excesivas con poder emocional" nece-



sarias para hacer que el proletario permaneciera dentro del trayecto que lleva a la creación de una sociedad nueva; las concepciones básicas experimentaron muy pocos cambios a medida que Niebhur se convirtió en "el teólogo oficial de las instituciones establecidas" (Richard Royere), ofreciendo su asesoramiento a quienes "se enfrentan con las responsabilidades del poder"<sup>40</sup>.

Después de la Segunda Guerra Mundial, a medida que el público ignorante recayó en su pacifismo indolente en unos tiempos en que las elites comprendían la necesidad de movilizarse para la renovación del conflicto global, el historiador Thomas Bailey observó que, "puesto que las masas son manifiestamente miopes y por lo general no pueden ver el peligro hasta que se les echa al cuello, nuestros estadistas se ven obligados a engañarlos para que alcancen la consciencia de sus propios intereses a largo plazo. El engaño del pueblo puede de hecho convertirse en algo cada vez más necesario, a no ser que estemos dispuestos a conceder mayor libertad a nuestros dirigentes de Washington". Comentando sobre el mismo problema durante el lanzamiento de una cruzada renovada en 1981, Samuel Huntington especificó que "puede que uno tenga que presentar la intervención u otra acción militar de tal manera que se cree la falsa impresión de que se está luchando contra la Unión Soviética. Esto es lo que Estados Unidos viene haciendo desde los tiempos de la Doctrina Truman" – observación aguda, que explica una función esencial de la Guerra Fría.<sup>41</sup>

En otro punto del espectro, el desprecio conservador por la democracia se ve sucintamente articulado por sir Lewis Namier, quien escribe que "no hay más libre albedrío en el pensamiento y las acciones de las masas del que hay en las revoluciones de los planetas, en las migraciones de los pájaros y en las hordas de lemmings cuando se arrojan al mar"<sup>42</sup>. Solamente se produciría el desastre si se diera a las masas una entrada significativa en el foro de la toma de decisiones.

Hay quienes son admirablemente directos en su defensa de la doctrina: por ejemplo, el Ministro de Defensa holandés escribe que "quien se vuelve en contra de la fabricación del consentimiento resiste ante cualquier forma de autoridad efectiva"<sup>43</sup>. Cualquier comisario soviético movería la cabeza en señal de asentimiento y comprensión.

En sus raíces, la lógica es la del Gran Inquisidor, que acusó con amargura a Cristo de ofrecer la libertad al pueblo y de este modo condenarlo

a la miseria. La Iglesia debe corregir el trabajo maléfico de Cristo, ofreciendo a la masa miserable de la humanidad el regalo que ésta más desea y necesita: la sumisión absoluta. Debe "vencer a la libertad" para "hacer felices a los hombres" y proporcionar la "comunidad de culto" total que buscan con avidez. En nuestros tiempos seculares, esto significa el culto a la religión estatal, que en las democracias occidentales incorpora la doctrina de la sumisión a los dirigentes del sistema de subsidios públicos y beneficios privados denominado empresa libre. Se ha de mantener al pueblo en la ignorancia, reducido a unos encantamientos patriotericos, por su propio bien. Y al igual que el Gran Inquisidor, que emplea las fuerzas del milagro, el misterio y la autoridad, "conquistar y tener cautiva para siempre a la conciencia de estos rebeldes impotentes, por su propia felicidad" y negarles la libertad de elección que tanto temen y desprecian, de modo que los "observadores fríos" han de crear las "ilusiones necesarias" y las "simplificaciones excesivas con poder emocional" que mantienen a las masas ignorantes y estúpidas disciplinadas y satisfechas.<sup>44</sup>

A pesar del reconocimiento franco de la necesidad de engañar al público, sería un error suponer que quienes practican el arte se dedican típicamente al engaño consciente; pocos alcanzan el nivel de sofisticación del Gran Inquisidor o mantienen estas perspicacias por mucho tiempo. Por el contrario, a medida que los intelectuales desarrollan su vocación lúgubre y exigente, adoptan de buena gana las creencias que sirven a las necesidades institucionales; los que no lo hacen han de buscarse empleo en otro lugar. El presidente del consejo puede creer sinceramente que todo su tiempo en vela está dedicado a atender a las necesidades humanas. Si actuara sobre la base de este engaño en lugar de perseguir los beneficios y su parte del mercado, dejaría de ser el presidente del consejo. Es probable que los monstruos más inhumanos, incluso los Himmlers y los Mengeles, se autoconvenzan de que están dedicados a causas nobles y valientes. La psicología de los dirigentes es un tema de escaso interés. Los factores institucionales que limitan sus acciones y sus creencias son los que merecen atención.

A lo ancho de una amplia gama de opinión articulada, el hecho de que la voz del pueblo se escuche en las sociedades democráticas se considera un problema que se ha de superar haciendo que la voz pública enuncie las palabras correctas. El concepto general consiste en que los



dirigentes nos controlan, no en que nosotros los controlamos. Si la población está fuera de control y la propaganda no funciona, entonces el Estado se ve obligado a llevar a cabo operaciones clandestinas y guerras secretas; la escala de las operaciones secretas a menudo constituye una buena medida de la disidencia popular, como era el caso durante la época de Reagan. Entre este grupo, que se autodefine como "conservadores", el compromiso con un poder ejecutivo sin límites y el desprecio por la democracia alcanzan niveles poco usuales. Del mismo modo, también lo hizo el recurso a algunas campañas de propaganda centradas en los medios de comunicación y en la población general; por ejemplo, el establecimiento de la Oficina del Departamento de Estado para la Diplomacia Pública en América Latina, dedicada a proyectos tales como la Operación Verdad, que un alto mandatario del gobierno describió como "una enorme operación psicológica del tipo que desarrolla el estamento militar para influir sobre una población en un territorio negado o enemigo"<sup>45</sup>. Los términos expresan con lucidez la actitud hacia el público errante: territorio enemigo, que se debe conquistar y someter.

En sus dependencias, Estados Unidos debe a menudo recurrir a la violencia para "restaurar la democracia". A nivel nacional, se requieren medios más sutiles: la fabricación del consentimiento, el engaño de las masas estúpidas con "ilusiones necesarias", las operaciones secretas que tanto los medios de comunicación como el Congreso hacen como que no ven hasta que el asunto es demasiado evidente como para ocultarlo. Pasamos entonces a la fase del control de daños para asegurar que la atención del público se desvíe a los patriotas que hacen gala de un celo excesivo o a las fallas en la personalidad de los dirigentes que se han desviado de nuestros nobles compromisos, pero no a los factores institucionales que determinan el contenido persistente y sustantivo de estos compromisos. La tarea de la Prensa Libre, en tales circunstancias, consiste en tomarse en serio los procesos, y en describirlos como un tributo a la validez de nuestras instituciones autocorrectoras, que protegen cuidadosamente del escrutinio público.

A nivel más general, los medios de comunicación y las clases cultas han de cumplir con su "objeto social", llevando a cabo sus tareas necesarias de acuerdo con la concepción prevaleciente de la democracia.

## NOTAS

- <sup>1</sup> José Pedro S. Martins, *Latinoamerica Press* (Lima), 17 de marzo, 1988.
- <sup>2</sup> Ver Philip Lee, ed., *Communication for All* (Orbis, 1985); William Preston, Edward S. Herman y Herbert Schiller, *Hope and Folly: The United States and UNESCO, 1945-1985* (Universidad de Minesota, en prensa).
- <sup>3</sup> "Freedom of the Press - Anthony Lewis distinguishes between Britain and America", *London Review of Books*, 26 de noviembre, 1987.
- <sup>4</sup> M.P. Crozier, S.J. Huntington y J. Watanuki, *The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission* (Universidad de Nueva York, 1975).
- <sup>5</sup> Ver mis obras *Turning the Tide* (South End, 1985, Capítulo 5) y *On Power and Ideology* (South End, 1987, conferencia 5). Para un estudio detallado de estos asuntos, ver Thomas Ferguson y Joel Rogers, *Right Turn* (Hill & Wang, 1986). Para un resumen de las consecuencias nacionales, ver Emma Rothschild, "The Real Reagan Economy" y "The Reagan Economic Legacy," *New York Review of Books*, 30 de junio, 21 de julio, 1988.
- <sup>6</sup> FAIR, Nota de Prensa, 19 de julio, 1988. Encuesta sobre la Constitución, *Boston Globe Magazine*, 13 de septiembre, 1987, citado por Julius Lobel en Julius Lobel, ed., *A Less than Perfect Union* (Monthly Review, 1988, 3).
- <sup>7</sup> Encuesta *New York Times*-CBS; Adam Clymer, NYT, 19 de noviembre, 1985.
- <sup>8</sup> Kissinger y Vance, *Foreign Affairs*, Verano de 1988. Como ejemplo, entre veinte países industrializados, EEUU ocupa el vigésimo lugar en cuanto a tasas de mortalidad infantil, con tasas superiores a las de Alemania Oriental, Irlanda, España, etc. *Wall Street Journal*, 19 de octubre, 1988. Para un estudio de la creciente pobreza, especialmente bajo la administración Reagan, ver Fred R. Harris y Roger Wilkins, eds., *Quiet Riots* (Pantheon, 1988).
- <sup>9</sup> *Globe and Mail*, 28, 18, 5 de marzo, 1986.
- <sup>10</sup> Ver una muestra en Mark Green y Gail MacColl, *Reagan's Reign of Error* (Pantheon, 1987).
- <sup>11</sup> John P. Roche, *Washington Star*, 26 de octubre, 1977.
- <sup>12</sup> Peter Braestrup, *Big Story* (Westview, 1977).
- <sup>13</sup> Landrum Bolling, ed., *Reporters under Fire: U.S. Media Coverage of Conflicts in Lebanon and Central America* (Westview, 1985, 35, 2-3).
- <sup>14</sup> El juez Holmes, disintiendo en *Abrams contra Estados Unidos*, 1919.
- <sup>15</sup> Benjamin Ginsberg, *The Captive Public* (Basic Books, 1986, 86, 89). El estudio de Ginsberg escasea en cuanto a evidencia y la lógica a menudo es floja; por



ejemplo, su creencia de que existe una contradicción en mantener que la "Guerra de las Galaxias" "no podría defender a Estados Unidos de un ataque nuclear" y que podría "aumentar la probabilidad de que tal ataque tuviera lugar," parte de su argumentación en el sentido de que la defensa de sus causas por "fuerzas políticas liberales" está motivada por el "interés político"; pero resulta evidente que no hay contradicción, sean cuales sean los méritos de su conclusión en cuanto a las fuerzas políticas liberales. También cree que los "manifestantes estudiantiles y otros parecidos... tienen poca dificultad a la hora de lograr para sí y para sus causas una publicidad favorable", en particular los que protestan contra la guerra de Vietnam, y acepta reivindicaciones familiares poco críticas sobre la "postura adversa adoptada por los medios de comunicación durante las décadas de 1960 y 1970", entre otras asunciones insostenibles.

<sup>16</sup> Enfocando el tema de manera ligeramente diferente, V.O. Key observa que "los directores de periódicos son en esencia personas que venden espacio en blanco a los anunciantes". Citado por Jérôme A. Barron, "Access to the Press - a New First Amendment Right," *Harvard Law Review*, vol. 80, 1967; de Key, *Public Opinion and American Democracy*.

<sup>17</sup> Sir George Lewis, citado en James Curran y Jean Seaton, *Power without Responsibility* (Methuen, 1985, 31); Paul Johnson, *Spectator*, 28 de noviembre, 1987.

<sup>18</sup> Un jurado de críticos de los medios de comunicación organizado anualmente por Carl Jensen, que selecciona los "diez artículos más censurados" del año, otorgó el primer premio para 1987 a un estudio de estos temas realizado por Ben Bagdikian, que se refería, por supuesto, no a una censura estatal literal, sino a la evasión o distorsión de los asuntos críticos por parte de los medios de comunicación.

<sup>19</sup> *Economist*, 5 de diciembre, 1987.

<sup>20</sup> Para un estudio más extenso de estos asuntos, ver Edward S. Herman y Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: the Political Economy of the Mass Media* (Phaeton, 1988), capítulo 1.

<sup>21</sup> Para cierta medida de discusión, ver apéndice I, sección 1.

<sup>22</sup> Bolling, *op. cit.*, 8.

<sup>23</sup> Herman y Chomsky, *Manufacturing Consent*; Chomsky, *The Culture of Terrorism* (South End, 1988). Ver también nuestro *Political Economy of Human Rights* en dos volúmenes (South End, 1979), ampliación de un estudio anterior que fue prohibido por el consorcio propietario de la editorial; ver el prefacio del autor para más detalles. Ver también Herman, *The Real Terror Network* (South End, 1982); mi *Pirates and Emperors* (Claremont, 1986; Amana, 1988); y muchas otras obras de los últimos veinte años. También James Aronson, *The Press and the Cold War* (Beacon, 1970); Michael Parenti, *Inventing Reality* (St. Martin's, 1986).

<sup>24</sup> Para algunos comentarios adicionales sobre estos temas, que se estudian en mayor extensión en las referencias de la nota anterior, ver el apéndice I, sección I.

<sup>25</sup> Sobre la función de Freedom House (Casa de la Libertad) como virtual brazo propagandístico del gobierno y la derecha internacional, ver Edward S. Herman y Frank Brodhead, *Demonstration Elections* (South End, 1984, apéndice I), y *Manufacturing Consent*. Según un informe del funcionario de NCS Walter Raymond, Freedom House fue uno de los beneficiarios del dinero recaudado por el aparato de propaganda de la Administración Reagan (ver nota 45, a continuación), acusación que niega Sussman, portavoz de la Freedom House. Ver Robert Parry y Peter Kornbluh, "Iran-Contra's Untold Story," *Foreign Policy*, Otoño de 1988; correspondencia, Invierno 1988-89. Para demostrar la imparcialidad y la buena fe de la Freedom House, Sussman señala que "nosotros citamos el lamentable historial de derechos humanos de los sandinistas, como también publicamos la violación de los derechos humanos en muchos otros países, tales como Chile y Paraguay". Nicaragua, Chile y Paraguay son los tres países de América Latina que la administración Reagan condena oficialmente por violación de los derechos humanos, y, cosa que no sorprende a nadie que esté familiarizado con estos sucesos, la Freedom House selecciona estos tres ejemplos. Sussman, sin embargo, se olvida de El Salvador y Guatemala, donde las violaciones de los derechos humanos son muchas más de las que se pueden atribuir a los sandinistas, cosa que no deplora la administración Reagan, que ostenta gran parte de la responsabilidad al respecto. El hecho de que se tome en serio a la Freedom House, visto su historial, es sorprendente.

<sup>26</sup> Martin Peretz, *New Republic*, 2 de agosto, 1982. Ver mi *Fateful Triangle* (South End, 1983) para más información sobre este curioso documento y otros parecidos; y el apéndice I, sección 2.

<sup>27</sup> Ver apéndice I, sección 1, para algunos comentarios.

<sup>28</sup> Bolling, *op. cit.* Ver apéndice I, sección 2, y *Manufacturing Consent* en relación con la retrospectiva televisiva sobre la guerra de Vietnam y otros. Sobre las actitudes del público hacia los medios de comunicación en el sentido de que éstos no son suficientemente críticos del gobierno y se dejan influir demasiado por el poder en general, ver Mark Hertsgaard, *On Bended Knee* (Farrar Straus Giroux, 1988, 84-85).

<sup>29</sup> Un antiguo redactor del *Times*, Timothy Foote, señalaba que "cualquier lector atento" de esta revista conocerá algunos de sus evidentes prejuicios. (Estudio de William Rusher, *The Coming Battle of the Media*, *WP Weekly*, 21 de junio, 1988). Rusher condena a los medios de comunicación de elite porque distorsionan las noticias con sus sesgos liberales. David Shaw, crítico de prensa del *Los Angeles Times*, en su análisis del mismo libro en el *New York Times Book Review*, responde con el punto de vista igualmente convencional de que "a los periodistas les encanta desafiar al *status quo*", y que son unos "críticos, quisquillosos, insatisfechos" que "se quejan de todo".

<sup>30</sup> Para un análisis detallado de la cobertura de los medios de comunicación en Cuba, ver Tony Platt, ed., *Tropical Gulag* (Global Options, 1987). Wayne Smith,



antaoño responsable de la Sección de Intereses de EEUU en La Habana y destacado especialista en asuntos cubanos, describe el estudio como una confirmación "devastadora" del tratamiento "abrumadoramente negativo" de Cuba en los medios de comunicación, de conformidad con la "versión del Departamento de Estado", citando ejemplos adicionales de "falta de objetividad" y negativa a la hora de cubrir una evidencia significativa que refuta las acusaciones del reaganismo; *Social Justice*, verano de 1988. Ver también apéndice I, sección 1.

<sup>41</sup> Citado por Ginsberg, *Captive Mind*.

<sup>42</sup> La aversión por la democracia a veces alcanza tales extremos que se entiende que el control estatal es la única alternativa imaginable al dominio por parte de la riqueza privada concentrada. Debe ser esta asunción tácita la que compele a Nicholas Lemann (*New Republic*, 9 de enero, 1989) a afirmar que en nuestro libro *Manufacturing Consent*, Herman y yo defendemos un "mayor control estatal" sobre los medios de comunicación, basando esta reivindicación en nuestra declaración, "A largo plazo, un orden político democrático necesita un control mucho más amplio de y el acceso a los medios de comunicación" por parte del público en general (p. 307). Esta declaración citada sigue a un estudio de algunas de las modalidades posibles, entre ellas la proliferación de canales de televisión de acceso público que "han debilitado el poder de la oligopolía de las redes" y tienen una "potencialidad para un acceso reforzado a los grupos locales", "estaciones de radio y canales de televisión locales sin ánimo de lucro", propiedad de las emisoras de radio correspondientes a "instituciones de la comunidad" (se cita una pequeña cooperativa de Francia como ejemplo), radio sufragada por los oyentes en las comunidades locales y demás. Estas opciones sin duda suponen un reto para el oligopolio de la empresa y el gobierno de los ricos en general. Por tanto, sólo se pueden interpretar como "control estatal" por alguien que considera que es impensable que el público en general pueda, o deba, conseguir un acceso a los medios de comunicación como un paso hacia la conformación de sus propios asuntos.

<sup>43</sup> Appleby, *Capitalism and a New Social Order* (NYU, 1984, 73). Sobre el absurdo culto a George Washington inventado como parte del esfuerzo "por cultivar las lealtades ideológicas de la ciudadanía" y crear así un sentido de "situación viable de nación," ver Lawrence J. Friedman, *Inventors of the Promised Land* (Knopf, 1975, capítulo 2). Washington fue un "hombre perfecto" de "perfección inigualada", elevado "por encima del nivel de la humanidad" etcétera. Este Kim Il Sungismo persiste entre los intelectuales, por ejemplo, en la reverencia por Franklin D. Roosevelt y su "grandiosidad", "majestad", etc., en el *New York Review of Books* (ver *Fateful Triangle*, 175, para algunas citas escasamente creíbles), y en el culto de Camelot. A veces un dirigente extranjero asciende a la misma semidivinidad, y puede describirse como "una figura prometeica" con una "fuerza externa colosal" y "poderes colosales", como en los momentos más ridículos de la era de Stalin, o en las salvas a la primera ministra de Israel Golda

Meir por parte de Martin Peretz, de quien se toman las citas que se acaban de repetir (*New Republic*, 10 de agosto, 1987).

<sup>44</sup> Frank Monaghan, *John Jay* (Bobbs-Merrill, 1935); Richard B. Morris, *The Forging of the Union* (Harper & Row, 1987, 46-47, 173, 12f.). Ver *Political Economy of Human Rights*, II, 41ff., sobre la huida de refugiados tras la Revolución Americana, incluidas personas que escapaban aterrorizadas en balsa del que quizás era el país más rico del mundo para sufrir y morir en el crudo invierno de Nueva Escocia; en relación con la población, las cifras son equiparables con la huida de refugiados del Vietnam asolado. Para una estimación reciente, que incluye a 80.000-100.000 Legitimistas, ver Morris, 13, 17.

<sup>45</sup> *The American Revolution Reconsidered* (Harper & Row, 1967, 57-58).

<sup>46</sup> Ver Joshua Cohen y Joel Rogers, *On Democracy* (Penguin, 1983), para un análisis perceptivo, y el capítulo siguiente para algunos comentarios adicionales.

<sup>47</sup> Para algo de discusión y referencias adicionales, ver *Turning the Tide*, 232f.

<sup>48</sup> Editoriales, *El Tiempo*, 5, 10 de mayo; traducidos en *Hondupress* (Managua), 18 de mayo, 1988, una publicación de exiliados hondureños que temen regresar a la "democracia incipiente" debido a la amenaza de asesinato y desaparición. Para más información sobre las elecciones de El Salvador, ver *Culture of Terrorism*, 102, y el apéndice IV, sección 5. No hallé ninguna referencia en los medios de comunicación, aunque existe un clamor habitual de alabanza por el progreso de este noble experimento democrático bajo los auspicios de EEUU.

<sup>49</sup> Alex Carey, "Reshaping the Truth," *Meanjin Quarterly* (Australia), 35.4, 1976; Gabriel Kolko, *Main Currents in American History* (Pantheon, 1984, 284). Para una discusión extensa, ver Alex Carey, "Managing Public Opinion: The Corporate Offensive", manuscrito, Universidad de Nueva Gales del Sur, 1986.

<sup>40</sup> Referencias: ver mi *Towards a New Cold War* (Pantheon, 1982, capítulo 1). Niebuhr, *Moral Man and Immoral Society* (Scribners, 1952, 221-23, 21; reimpresión de la edición de 1932); también Richard Fox, *Reinhold Niebuhr* (Pantheon, 1985, 138-39). Para más sobre sus ideas, y su recepción, ver mi estudio de varios libros de y sobre Niebuhr en *Grand Street*, invierno de 1987.

<sup>41</sup> Bailey, citado por Jesse Lemisch, *On Active Service in War and Peace: Politics and Ideology in the American Historical Profession* (New Hogtown Press, Toronto, 1975). Huntington, *International Security*, verano de 1981.

<sup>42</sup> *England in the Age of the American Revolution* (Macmillan, 1961, 40); citado por Francis Jennings, *Empire of Fortune* (Norton, 1988, 471).

<sup>43</sup> Ministro de Defensa Frits Bolkestein, *NRC Handelsblad*, 11 de octubre, 1988. Comenta (con indignación) cierto material que yo presenté sobre este tema como una conferencia Huizinga en Leiden en 1977, reimpreso en *Towards a New Cold War*, capítulo 1.

<sup>44</sup> Fyodor Dostoyevski, *The Brothers Karamazov* (Random House, 1950).

<sup>45</sup> Alfonso Chardy, *Miami Herald*, 19 de julio de 1987. La Oficina de Diplomacia



Pública del Departamento de Estado operaba bajo dirección CIA-NSC para organizar el apoyo a los Contra e intimidar y manipular a los medios de comunicación y al Congreso. Sobre sus actividades, condenadas como ilegales en septiembre de 1987 por el interventor general de la Oficina de Contabilidad General de EEUU, ver el Informe *State Department and Intelligence Community Involvement in Domestic Activities Related to the Iran/Contra Affair*, Comité de Asuntos Exteriores, Cámara de Representantes de EEUU, 7 de septiembre, 1988; Parry y Kornbluh, *op. cit.* También *Culture of Terrorism*, capítulo 10, que se refiere a las anteriores denuncias de Chardy en dos artículos destacados pero generalmente pasados por alto en el *Miami Herald*.

## 2 CONTENIENDO AL ENEMIGO

En el primer capítulo, me refería a tres modelos de organización de los medios de comunicación: (1) el oligopolio de las grandes empresas; (2) el control estatal; (3) una política democrática de las comunicaciones, tal como la proponen los obispos brasileños. El primer modelo reduce la participación democrática en los medios de comunicación a cero, como es el caso en otras empresas, que en principio están exentas de un control popular a través de la fuerza de trabajo o de la comunidad. En el caso de los medios de comunicación controlados por el Estado, la participación democrática puede variar, según cómo funcione el sistema político; en la práctica, la disciplina en los medios de comunicación estatales la suelen mantener las fuerzas que tienen poder para dominar al Estado, y un aparato de administradores culturales que no pueden sobrepasar en exceso los límites establecidos por estas fuerzas. El tercer modelo, en gran medida, está aún por probarse en la práctica; al igual que un sistema sociopolítico con participación popular significativa es asunto del futuro; una esperanza o un temor, según la valoración de cada uno del derecho del público a dar forma a sus propios asuntos.

El modelo de los medios de comunicación como oligopolio de las grandes empresas es el sistema natural para la democracia capitalista. Como corresponde, ha alcanzado su forma más elevada en las más avanzadas de estas sociedades, especialmente en Estados Unidos, donde la concentración de los medios de comunicación es elevada, el campo de acción de la radio y la televisión públicas es limitado y los elementos del modelo democrático radical existen solamente a nivel marginal, en fenómenos tales como la radio de la comunidad, que cuenta con el apoyo de la audiencia, y la prensa alternativa o local, a menudo con un efecto considerable sobre la cultura social y política y sobre la sensación de autoridad en las comunidades que se benefician de estas opciones.<sup>1</sup> En este sentido, Estados Unidos representa la forma hacia la cual la democracia capitalista está tendiendo; las tendencias afines incluyen: la eliminación progresiva de los sindicatos y otras organizaciones



populares que interfieren con el poder privado; un sistema electoral que, cada vez en mayor medida, se pone en escena como un ejercicio de relaciones públicas; el hecho de eludir las medidas de asistencia social tales como el seguro médico nacional que también chocan con las prerrogativas de los privilegiados, etcétera. Desde este punto de vista, resulta razonable que Cyrus Vance y Henry Kissinger describan a Estados Unidos como “una democracia modélica”, entendiéndose la democracia como un sistema de control empresarial de las instituciones políticas al igual que de otras instituciones principales.

Otras democracias occidentales van, por lo general, algunos pasos por detrás de Estados Unidos en estos aspectos. La mayoría no han logrado todavía el sistema de EEUU de un partido político, con dos facciones controladas por los segmentos cambiantes de la comunidad empresarial. Aún conservan algunos partidos basados en los trabajadores y en los pobres que, en cierta medida, representan los intereses de éstos. Pero estos partidos van en declive, junto con las instituciones culturales que apoyan valores y preocupaciones distintos, y con las formas de organización que proporcionan a los individuos aislados los medios para poder pensar y actuar fuera del marco impuesto por el poder privado.

Éste es el curso natural de los acontecimientos bajo la democracia capitalista, debido a lo que Joshua Cohen y Joel Rogers denominan “la limitación de recursos” y “la limitación de demandas”<sup>2</sup>. La primera es directa: el control de los recursos está muy concentrado, con efectos predecibles para cada aspecto de la vida social y política. La limitación de demandas es un medio de control más sutil, cuyos efectos rara vez se observan directamente en una democracia capitalista que funciona adecuadamente, tal como Estados Unidos, aunque resultan evidentes, por ejemplo, en América Latina, donde el sistema político permite a veces una gama más amplia de opciones en cuanto a las políticas, entre ellas los programas de reforma social. Las consecuencias son conocidas: fuga de capitales, pérdida de la confianza de las empresas y de los inversores y decadencia social general a medida que los “dueños del país” pierden la capacidad de gobernarlo —o sencillamente un golpe militar, típicamente respaldado por el guardián hemisférico del orden y de las buenas formas. La respuesta más benigna ante los programas de reforma ilustra la limitación de las demandas— el requisito de que los

intereses de quienes gozan de un poder efectivo queden satisfechos para que la sociedad pueda funcionar.

En resumen, es necesario asegurar que los dueños del país estén contentos; de otro modo, todos sufrirán, ya que éstos controlan la inversión y determinan qué se produce y distribuye y qué beneficios se filtrarán hasta quienes se alquilan a los propietarios, cuando pueden. Para la gente sin hogar de la calle, por tanto, la principal prioridad ha de ser la de asegurar que quienes habitan en los palacios estén razonablemente satisfechos. Dadas las opciones disponibles dentro del sistema y los valores culturales que éste refuerza, llevar al máximo el beneficio individual a corto plazo parece ser la trayectoria racional, junto con la sumisión, la obediencia y el abandono del foro público. Las fronteras de la acción popular son igualmente limitadas. Una vez que las formas de la democracia capitalista se han instalado, permanecen muy estables, con independencia del sufrimiento que se genere —hecho que desde hace mucho han comprendido los planificadores de EEUU—.

Una consecuencia de la distribución de los recursos y el poder para la toma de decisiones en la sociedad en general es que la clase política y los administradores culturales suelen asociarse con los sectores que dominan la economía privada; o provienen directamente de dichos sectores, o tienen la esperanza de unirse a ellos. Los demócratas radicales de la revolución inglesa del XVII mantenían que “jamás será éste un mundo justo mientras que nuestras leyes las hagan los caballeros e hidalgos, elegidos por temor y que no hacen sino oprimirnos, y no conocen los males del pueblo. Nunca nos irá bien hasta que tengamos Parlamientos de hombres llanos como nosotros, que conozcan nuestras necesidades”. Pero el Parlamento y los predicadores tenían una visión diferente: “cuando hablamos del pueblo, no nos referimos a la masa promiscua y confusa del pueblo”, sostenían. Tras la clamorosa derrota de los demócratas, la pregunta que se planteaba, en palabras de una octavilla de los Levellers (radicales que durante la Guerra Civil de Inglaterra propugnaban la igualdad ante la ley para todos los hombres), era “de quién serán esclavos los pobres”, del rey o del Parlamento.<sup>3</sup>

La misma polémica se planteó durante los primeros días de la Revolución americana. “Los autores de las constituciones estatales”, observa Edward Countryman, “habían insistido en que las asambleas de representantes deberían reflejar lo mas posible a la propia gente del Estado”;



se opusieron a una "casta distinta" de dirigentes políticos aislados del pueblo. Pero la Constitución Federal garantizaba que "los representantes, los senadores y el presidente sabrían todos que eran, precisamente, excepcionales". Al amparo de la Confederación, los artesanos, los agricultores y otros miembros del pueblo llano habían exigido estar representados por "hombres de su propia clase", habiendo aprendido de la experiencia revolucionaria que eran "tan capaces como cualquiera a la hora de decidir qué iba mal en sus vidas y de organizarse para poder hacer algo al respecto". Esto no pudo ser. "La última boqueada del espíritu original de la Revolución, con toda su fe en la comunidad y la cooperación, la dieron los agricultores de Massachusetts" durante la rebelión de Shay en 1786. "En las resoluciones y los discursos de sus comités de condado durante los dos años anteriores a la rebelión se decía exactamente lo que todo tipo de personas habían dicho en 1776". Su fracaso les enseñó la dolorosa lección de que "las vías antiguas ya no funcionaban", y "se vieron obligados a arrastrarse pidiendo perdón ante gobernantes que declaraban ser los servidores del pueblo". Así ha seguido siendo. Con rarísimas excepciones, los representantes del pueblo no van a o vuelven del lugar donde trabaja el pueblo; más bien, van a o vienen de bufetes que atienden los intereses de las empresas, despachos ejecutivos y otros lugares privilegiados.<sup>4</sup>

Por lo que concierne a los medios de comunicación, en Inglaterra existió una animada prensa de tendencias laboristas, que llegaba a un amplio público, hasta la década de 1960, cuando quedó finalmente eliminada por medio de las maniobras del mercado. En el momento de su extinción en 1964, el *Daily Herald* contaba con cinco veces más lectores que *The Times*, y "casi el doble de lectores que *The Times*, el *Financial Times* y el *Guardian* combinados", como observa James Curran, citando una encuesta que indica que sus lectores "también eran excepcionalmente fieles a su periódico". Pero este diario, propiedad en parte de los sindicatos y dirigido a un público de clase obrera en su mayor parte, "resultaba atractivo para la gente inadecuada", sigue Curran. Lo mismo sucedió con otros elementos de la prensa socialdemócrata que murieron al mismo tiempo, en gran medida porque estaban "desprovistos del mismo nivel de subsidios" por medio de la publicidad y del capital privado que mantenía a "la prensa de calidad", lo que "no sólo refleja los valores e intereses de sus lectores de clase media" sino que

también "les da fuerza, claridad y coherencia" y "juega un papel ideológico importante a la hora de ampliar y renovar el consenso político predominante".

Las consecuencias son considerables. Para los medios de comunicación, concluye Curran, se produce "un notable crecimiento en los editoriales relacionados con la publicidad" y "una creciente convergencia entre los contenidos de los editoriales y de la publicidad" que refleja "la creciente adaptación de las direcciones de los periódicos nacionales a las necesidades selectivas de los anunciantes" y de la comunidad empresarial en general; el mismo es, posiblemente, el caso en lo que respecta a la cobertura e interpretación de las noticias. Para la sociedad en general, continúa Curran, "la pérdida de los únicos periódicos socialdemócratas que contaban con gran número de lectores y dedicaban una atención seria a los asuntos de actualidad", entre ellos los sectores de la clase obrera que habían continuado siendo "destacadamente radicales en sus actitudes hacia una amplia gama de asuntos económicos y políticos", contribuyó a la "erosión progresiva en la Gran Bretaña de la posguerra de una tradición popular radical" y a la desintegración de "la base cultural que había sustentado la participación activa dentro del movimiento Laborista", que "ha dejado de existir como movimiento de masas en gran parte del país". Los efectos resultan manifiestos. Con la eliminación de "la selección y el tratamiento de las noticias" y de los "comentarios y análisis políticos relativamente detallados [que] ayudan a diario a mantener una subcultura socialdemócrata dentro de la clase obrera", ya no existe una alternativa articulada a la imagen de "un mundo donde la subordinación de los trabajadores [se] acepta como algo natural e inevitable", y ninguna expresión continuada del punto de vista de que los trabajadores tienen "derecho moral a una mayor porción de la riqueza que han creado, y a una mayor voz en cuanto a su distribución". Las mismas tendencias resultan evidentes en otros aspectos de las sociedades capitalistas industriales.

Existen, pues, procesos naturales en acción para facilitar el control del "territorio enemigo" a nivel nacional. Del mismo modo, la planificación global emprendida por las elites de EEUU durante y después de la Segunda Guerra Mundial asumió que los principios del liberalismo internacional servirían por lo general para satisfacer lo que se había descrito como el "requisito de Estados Unidos en un mundo en el que



se propone ostentar un poder indiscutido”<sup>6</sup>. La política global se conoce por el nombre de “contención”. La fabricación del consentimiento a nivel nacional es su equivalente doméstico. Las dos políticas, de hecho, están estrechamente entrelazadas, ya que la población nacional se ha de movilizar para pagar los costos de la “contención”, que pueden ser considerables –costos tanto materiales como morales–.

La retórica de la contención está diseñada para dar una apariencia defensiva al proyecto de gestión global, y sirve así como parte del sistema nacional de control del pensamiento. Resulta notable que la terminología se adopte con tanta facilidad, dada la pregunta que plantea. Si se observa más de cerca, se puede ver que el concepto oculta muchas cosas.<sup>7</sup>

La presunción subyacente es que existe un orden estable internacional que Estados Unidos debe defender. Los contornos generales de este orden general fueron desarrollados por planificadores de EEUU durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Reconociendo la escala extraordinaria del poder de EEUU, propusieron construir un sistema global que estaría dominado por Estados Unidos y dentro del cual florecerían los intereses empresariales de EEUU. Una parte tan grande del mundo como fuera posible constituiría una Gran Zona, como se denominó, que estaría subordinada a las necesidades de la economía de EEUU. Dentro de la Gran Zona, se alentaría el desarrollo de otras sociedades capitalistas, pero sin dispositivos protectores que pudieran interferir con las prerrogativas de EEUU.<sup>8</sup> En particular, sólo a Estados Unidos se le permitiría dominar los sistemas regionales. Estados Unidos se puso en acción para tomar el control efectivo de la producción mundial de energía y para organizar un sistema mundial donde sus varios componentes cumplirían con sus funciones, en tanto que centros industriales, mercados y fuentes de materias primas, o como estados dependientes dedicados a sus “intereses regionales” dentro del “marco general del orden” administrado por Estados Unidos (tal como explicaría más tarde Henry Kissinger).

Se ha considerado a la Unión Soviética como la principal amenaza para el orden internacional planificado, y con razón. En parte éste es el resultado de su propia existencia, en tanto que gran poder que controla un sistema imperial que no podía incorporarse a la Gran Zona; en parte, de sus esfuerzos ocasionales tendientes a ampliar el dominio de su

poder, como en el caso de Afganistán, y de la supuesta amenaza de invasión de Europa Occidental, si no de conquista mundial, posibilidad descartada habitualmente por los analistas serios en documentos tanto públicos como internos. Pero es necesario comprender hasta qué punto es amplia la forma de interpretar la “defensa,” si deseamos evaluar la ponderación de los crímenes soviéticos. Así, la Unión Soviética es una amenaza para el orden mundial si apoya a las personas que se oponen a las intenciones de EEUU; por ejemplo, a los ciudadanos de Vietnam del Sur dedicados a la “agresión interna” contra sus generosos defensores americanos (tal como lo explicaron los liberales de Kennedy), o a los nicaragüenses dedicados a combatir de forma ilegítima las depredaciones de la “resistencia democrática” gestionada por EEUU.

Estas acciones demuestran que los dirigentes soviéticos no se toman en serio la relajación de la tensión entre países, y que uno no se puede fiar de ellos, como observan sensatamente los estadistas y comentaristas. Así, “Nicaragua será un lugar selecto donde comprobar la previsión optimista de que [Gorbachev] está reduciendo sus actividades en el Tercer Mundo”, explican los editores del *Washington Post*, haciendo responsables a los rusos del ataque de EEUU contra Nicaragua, al tiempo que advierten de la amenaza que supone el que este puesto de avanzada soviético “arrolle y aterrorice” a sus vecinos.<sup>9</sup> Estados Unidos habrá “ganado la Guerra Fría” desde este punto de vista, cuando sea libre de ejercitar su voluntad en el resto del mundo sin interferencias soviéticas.

Aunque “la contención de la Unión Soviética” ha sido el tema dominante de la política exterior de EEUU solamente desde que Estados Unidos se convirtió en un poder auténticamente global tras la Segunda Guerra Mundial, se había considerado a la Unión Soviética como una amenaza intolerable para el orden desde la revolución bolchevique. Por tanto, ha sido el enemigo principal de los medios de comunicación independientes.

En 1920, Walter Lippmann y Charles Merz realizaron un estudio crítico de la cobertura de la revolución bolchevique por el *New York Times*, describiéndola como “nada menos que un desastre... desde el punto de vista del periodismo profesional”. La política editorial, extremadamente hostil, “tuvo una influencia profunda y crasa sobre las columnas de noticias”. “Por motivos subjetivos”, el personal del *Times*



“aceptó y creyó en gran parte lo que les dijeron” el gobierno de EEUU y “los agentes y adeptos del antiguo régimen”. Descartaron las ofertas soviéticas de paz como una mera táctica para permitir a los bolcheviques “concentrar sus energías en un nuevo impulso hacia la revolución mundial” y la inminente “invasión de Europa por los Rojos”. Se representaba a los bolcheviques, escribieron Lippmann y Merz, “de manera simultánea como... un cadáver y una amenaza mundial”, y el Peligro Rojo “aparecía en todas partes para obstruir el restablecimiento de la paz en Europa Oriental y en Asia y para frustrar la reanudación de la vida económica”. Cuando el presidente Wilson hizo un llamamiento a la intervención, el *New York Times* respondió instando a que expulsáramos “a los bolcheviques de Petersburgo y Moscú”<sup>10</sup>.

Si cambiamos algunos nombres y fechas, tenemos una evaluación bastante justa del tratamiento de Indochina ayer, y de América Central hoy, por parte de los medios de comunicación nacionales. Algunas asunciones similares sobre la Unión Soviética son reiteradas por los historiadores diplomáticos contemporáneos, que consideran que, en sí mismo, el desarrollo de un modelo social alternativo constituye una forma intolerable de intervención en los asuntos ajenos, contra la cual el Occidente ha tenido pleno derecho a defenderse por medio de la fuerza de las represalias, incluyendo la defensa de Occidente valiéndose de la intervención militar en la Unión Soviética después de la revolución bolchevique.<sup>11</sup> Según estas asunciones, muy extendidas y respetadas, la agresión se convierte fácilmente en autodefensa.

Volviendo a la política y la ideología posterior a la Segunda Guerra Mundial, resulta, por supuesto, innecesario *idear* razones para oponerse a la brutalidad de los dirigentes soviéticos a la hora de dominar su imperio interno y sus dependencias, al tiempo que se presta una alegre asistencia a monstruos contemporáneos, tales como la junta militar etíope o los generales neonazis de la Argentina. Pero un repaso honrado indicará que los enemigos principales han sido las poblaciones indígenas de la Gran Zona, víctimas de ideas equivocadas. Se hace entonces necesario superar estas desviaciones por medio de la guerra económica, ideológica o militar, o por medio del terror y la subversión. Ha de atraerse a la población nacional hacia la causa, dentro de la defensa contra el “comunismo”.

Éstos son los elementos básicos de la contención que se practican

en el extranjero, y de su equivalente nacional en el interior. Por lo que respecta a la Unión Soviética, el concepto ha tenido dos variantes a lo largo de los años. Las “palomas”, o los pacíficos, se reconciliaron con una forma de contención en la que la Unión Soviética dominaría aproximadamente las zonas ocupadas por el Ejército Rojo en la guerra contra Hitler. Los “halcones”, o violentos, tenían aspiraciones mucho más amplias, según se expresaban en la “estrategia de retroceso” trazada en el documento 68 del Consejo Nacional de Seguridad de abril de 1950, poco antes de la guerra de Corea. Este documento crucial, que se hizo público en 1975, interpretaba que la intención de la contención era “fomentar las semillas de la destrucción dentro del sistema soviético” y hacer posible “negociar un acuerdo con la Unión Soviética (o un Estado o estados sucesores)”. En los primeros años de la posguerra, Estados Unidos apoyaba a los ejércitos establecidos por Hitler en Ucrania y Europa Oriental, con la ayuda de figuras tales como Reinhard Gehlen, que dirigió la información militar nazi en el frente oriental y fue puesto a la cabeza del servicio de espionaje de Alemania Occidental, bajo la estrecha supervisión de la CIA, asignándosele la tarea de desarrollar un “ejército secreto” de miles de hombres de las SS para ayudar a las fuerzas que luchaban dentro de la Unión Soviética. Estos hechos están tan alejados de la comprensión convencional que un especialista en asuntos extranjeros muy bien informado del periódico liberal *Boston Globe* pudo condenar el apoyo tácito de EEUU a los Khmer Rouge presentando la siguiente analogía como si fuera el mayor de los absurdos: “Es como si Estados Unidos hubiera guiñado un ojo ante la presencia de un movimiento de guerrillas nazis de acoso a los soviéticos en 1945” —que era exactamente lo que estaba haciendo Estados Unidos a principios de la década de 1950, y no sólo limitándose a guiñar un ojo—.<sup>12</sup>

También se considera como algo totalmente natural el hecho de que la Unión Soviética esté rodeada de poderes hostiles, y que haga frente con ecuanimidad a importantes bases de la OTAN dotadas de misiles en estado de alerta, como las de Turquía, mientras que si Nicaragua obtiene aviones reactores para defender su espacio aéreo contra la penetración habitual por parte de EEUU, eso se considera, por palomas y halcones por igual, como una justificación para la acción militar de EEUU con el fin de protegernos contra esta grave



amenaza para nuestra seguridad, de acuerdo con la doctrina de la "contención".

El establecimiento de los principios de la Gran Zona en el extranjero y de las ilusiones necesarias a nivel nacional no se limita a esperar la acción de la mano oculta del mercado. El liberalismo internacional ha de suplementarse por medio del recurso periódico a la intervención por la fuerza.<sup>13</sup> A nivel nacional, el Estado a menudo ha empleado la fuerza para reprimir la disensión, y las empresas han realizado campañas habituales y bastante deliberadas para controlar "la mente pública" y reprimir los retos al poder privado, cuando no han bastado los controles implícitos. La ideología del "anticomunismo" ha servido para estos fines desde la Primera Guerra Mundial, con salvedades intermitentes. En años anteriores, Estados Unidos se defendía de otras fuerzas del mal: los hunos, los británicos, los españoles, los mexicanos, los papistas canadienses y los "despiadados salvajes indios" de la Declaración de Independencia. Pero desde la revolución bolchevique, y especialmente durante la era del poder mundial bipolar que emergió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, un enemigo más creíble ha sido la "conspiración monolítica e implacable" que intenta derrocar nuestras nobles empresas, en palabras de John F. Kennedy: el "Imperio del Mal" de Ronald Reagan.

Durante los primeros años de la Guerra Fria, Dean Acheson y Paul Nitze planearon "golpear la mente en masa del 'nivel superior del gobierno'", en palabras de Acheson, haciendo referencia al NSC 68. Presentaron "un cuadro terrorífico de la amenaza comunista, con el fin de vencer los deseos de paz, de impuestos reducidos y de políticas fiscales "justas" por parte del público, de la empresa y del Congreso" y de movilizar el apoyo popular para el rearme a gran escala que consideraban necesario "para vencer a la ideología comunista y la vulnerabilidad económica occidental", observa William Borden en un estudio de planificación de posguerra. La Guerra de Corea sirvió admirablemente para estos fines. Las interacciones ambiguas y complejas que llevaron a la guerra fueron ignoradas a favor de la imagen más útil de una campaña de conquista mundial por parte del Kremlin. Dean Acheson, mientras tanto, comentaba que, en las hostilidades de Corea, "se ofrece aquí una oportunidad excelente para trastornar la ofensiva de paz soviética, que... está adquiriendo serias proporciones y produciendo un cierto efec-

to sobre la opinión pública". La estructura de gran parte de la época posterior quedó determinada por estas manipulaciones, que también proporcionaron una norma para la práctica subsiguiente.<sup>14</sup>

En años anteriores, el Terror Rojo de Woodrow Wilson había demolido los sindicatos y otros elementos disidentes. Una característica destacada fue la supresión de la política independiente y la libertad de expresión, basadas en el principio de que el Estado tiene derecho a evitar el pensamiento inadecuado y su expresión. La Comisión Creel de Wilson, dedicada a crear la fiebre de guerra entre la población generalmente pacifista, había demostrado la eficacia de la propaganda organizada con la colaboración de los medios de comunicación leales y de los intelectuales, que se dedicaron a tareas tales como la "ingeniería de la historia", término acuñado por el historiador Frederic Paxson, uno de los fundadores de la Junta Nacional para el Servicio Histórico, establecida por los historiadores de EEUU para servir al Estado "explicando los temas de la guerra para que podamos ganarla mejor". Esta lección la aprendieron quienes estaban en situación de emplearla. Dos consecuencias institucionales duraderas fueron el auge de la industria de las relaciones públicas, una de cuyas figuras principales, Edward Bernays, había prestado servicio en la comisión de propaganda en tiempos de guerra, y el establecimiento del FBI, en realidad como una policía política nacional. Ésta es una función principal que ha continuado realizando, tal como lo ilustran, por ejemplo, sus acciones criminales para socavar la creciente "crisis de la democracia" en la década de 1960, y la vigilancia y desbaratamiento de la oposición popular a la intervención de EEUU en América Central veinte años después.<sup>15</sup>

La efectividad del sistema de propaganda estatal-empresarial queda ilustrada por el destino del Uno de Mayo, fiesta de los trabajadores de todo el mundo que se originó como respuesta al asesinato judicial de varios anarquistas tras el asunto Haymarket de mayo de 1886, en campaña de solidaridad internacional con los trabajadores de EEUU que luchaban por una jornada laboral de ocho horas. En Estados Unidos, todo se ha olvidado. El Uno de Mayo se ha convertido en el "Día de la Ley", celebración patrioter de nuestros "200 años de asociación entre la ley y la libertad", como declaró Ronald Reagan al designar el 1 de Mayo como el Día de la Ley para 1984, añadiendo que sin ley sólo puede haber "caos y desorden". El día anterior, anunció que Estados



Unidos haría caso omiso de los procesos del Tribunal Internacional de Justicia que posteriormente condenó al gobierno de EEUU por su "uso ilegítimo de la fuerza" y violación de los tratados en su ataque contra Nicaragua. El "Día de la Ley" también sirvió como ocasión para la declaración de Reagan, el 1 de mayo de 1985, en la que anunció un embargo contra Nicaragua "como respuesta ante la situación de emergencia creada por las actividades agresivas del gobierno nicaragüense en América Central", declarando de hecho una "emergencia nacional" que desde entonces se ha renovado cada año, porque "las políticas y las acciones del gobierno de Nicaragua constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos" —todo ello con la aprobación del Congreso, de los medios de comunicación y de la comunidad intelectual en general; o, en algunos círculos, ante un silencio vergonzoso.

La sumisión de la sociedad ante el dominio empresarial, asegurado por el Terror Rojo de Wilson, empezó a erosionarse durante la Gran Depresión. En 1938, la junta de gobierno de la Asociación Nacional de Fabricantes, adoptando la retórica marxista común en los archivos internos de los documentos de la empresa y el gobierno, describió el "peligro que amenaza a los industrialistas" en el "poder político de las masas de nueva realización". "A no ser que su pensamiento sea dirigido", advertía, "nos encaminamos definitivamente hacia la adversidad". No menos amenazador era el auge de la organización laboral, en parte con el apoyo de los industrialistas, que la consideraban como un medio de regularización de los mercados laborales. Pero todo tiene sus límites, y la empresa pronto se reorganizó para superar la amenaza por medio del dispositivo de "movilización del público por los patronos" para reventar las huelgas, como se observaba en un estudio académico de la huelga del acero en Johnstown en 1937. Esta "fórmula", se gloriaba la comunidad empresarial, era la que "la empresa ha venido esperando y soñando, por la que ha venido rezando". Las campañas propagandísticas, combinadas con métodos de fuerza, se utilizaron con eficacia para someter al movimiento laboral en años posteriores. Estas campañas invirtieron millones de dólares "en decir al público que nada iba mal y que serios peligros acechaban en los métodos propuestos" por los sindicatos, observó el Comité La Follette del Senado en su estudio de propaganda empresarial.<sup>16</sup>

En el período de posguerra, la campaña de relaciones públicas se intensificó, utilizando a los medios de comunicación y otros dispositivos para identificar a la que se denominaba empresa libre —esto es, beneficio privado subvencionado por el Estado sin usurpación alguna de las prerrogativas de la dirección— como "el sistema americano", amenazado por subversivos peligrosos. En 1954, Daniel Bell, entonces director de la revista *Fortune*, escribió que

Cambiar el clima de opinión establecido por... la depresión ha venido siendo la principal preocupación de la industria, durante los años de posguerra. Esta campaña de la "empresa libre" tiene dos objetivos esenciales: volver a ganar la lealtad del trabajador que ahora está depositada en el sindicato, y poner fin al progreso del socialismo,

esto es, del capitalismo ligeramente reformista del "New Deal". La escala de las campañas de relaciones públicas de la empresa, proseguía Bell, era "asombrosa", gracias a la publicidad en la prensa y en la radio y a otros medios.<sup>17</sup> En la legislación, se percibió que los efectos restringían la actividad sindical, el ataque al pensamiento independiente a menudo etiquetado erróneamente como McCarthysmo y la eliminación de cualquier reto articulado al dominio de la empresa. Los medios de comunicación y la comunidad intelectual colaboraron con entusiasmo. En las universidades, en particular, se efectuaron purgas, y así siguió la cosa hasta el inicio de la "crisis de la democracia" y hasta que los estudiantes y los profesores más jóvenes empezaron a plantear unas preguntas incorrectas. Esto causó una purga renovada, aunque menos eficaz, mientras que recurriendo una vez más a la "ilusión necesaria" se reivindicó, como todavía se reivindica, que las universidades prácticamente habían sido tomadas por totalitarios de izquierdas —esto es, que la ortodoxia había perdido algo de su fuerza—.<sup>18</sup>

Ya en 1947, un funcionario de relaciones públicas del Departamento de Estado comentó que "las relaciones públicas inteligentes [han] merecido la pena, como sucedió en el pasado y volverá a suceder". La opinión pública "no se está desplazando hacia la derecha, sino que ha sido desplazada —hábilmente— a la derecha". "Mientras que el resto del mundo se ha desplazado hacia la izquierda, ha admitido a los trabaja-



dores en el gobierno, ha aprobado una legislación liberalizada, Estados Unidos ha pasado a ser anti-cambios sociales, anti-cambios económicos, anti-trabajadores”<sup>19</sup>.

Para entonces, “el resto del mundo” estaba siendo sometido a presiones similares, a medida que la administración Truman, reflejando las preocupaciones de la comunidad empresarial, se dedicaba con energía a detener dichas tendencias en Europa, en Japón y en otros lugares, por medios que iban desde la violencia extrema hasta el control de los alimentos desesperadamente necesarios, las presiones diplomáticas y una amplia gama de otras medidas.<sup>20</sup>

La comprensión de todo esto es excesivamente limitada, pero no puedo profundizar adecuadamente en el tema aquí. A lo largo de toda la época moderna, se han empleado medidas para controlar “la mente del público” con el fin de recalcar las presiones naturales del “mercado libre”, el equivalente nacional a la intervención en el sistema mundial.

Merece la pena destacar que, a pesar de todo lo que se habla sobre políticas liberales de libre comercio, los dos sectores principales de la economía de EEUU que siguen siendo competitivos dentro del comercio mundial —la industria de alta tecnología y la agricultura de capital intensivo— se basan ambos en el subsidio estatal y en un mercado garantizado por el Estado.<sup>21</sup> Al igual que en otras sociedades industriales, la economía de EEUU se había desarrollado en años anteriores por medio de algunas medidas proteccionistas. Durante el período de posguerra, Estados Unidos proclamó a bombo y platillo unos principios liberales basados en la asunción de que los inversores de EEUU triunfarían ante cualquier competencia, expectativa creíble a la luz de las realidades económicas del momento, y que se cumplió durante muchos años. Por motivos similares, Gran Bretaña había abogado intensamente por el libre mercado durante el período de su hegemonía, abandonando estas doctrinas y la elevada retórica que las acompañaba durante el período de entreguerras, cuando ya no pudo resistir ante la competencia japonesa. Estados Unidos sigue un curso muy similar hoy en día, frente a retos similares, que hace cuarenta años, de hecho hasta la guerra de Vietnam, no eran de esperar. Sus costos imprevistos debilitaron la economía de EEUU al tiempo que fortalecieron a sus rivales industriales, que se enriquecieron por medio de su participación en la

destrucción de Indochina. Corea del Sur debe su despegue económico a estas oportunidades, que también supusieron un fuerte estímulo para la economía japonesa, al igual que la Guerra de Corea lanzó la recuperación económica de Japón y aportó una importante contribución a la de Europa. Otro ejemplo es el de Canadá, que se convirtió, *per capita*, en el primer país exportador a nivel mundial de material bélico durante los años de Vietnam, al tiempo que deploraba la inmoralidad de la guerra de EEUU a la que estaba contribuyendo con entusiasmo.

Las operaciones de control del pensamiento a nivel nacional se suelen emprender tras las guerras y otras crisis. Este tipo de confusión tiende a fomentar la “crisis de la democracia” que constituye el temor persistente de las elites privilegiadas, y requiere medidas para invertir el empuje de la democracia popular que amenaza al poder establecido. El Terror Rojo de Wilson sirvió para estos fines tras la Primera Guerra Mundial, y el modelo se repitió al final de la Segunda Guerra Mundial. Era necesario no sólo para superar la movilización popular que se produjo durante la Gran Depresión, sino también para “llevar al pueblo a [la] certeza de que la guerra no se ha terminado en modo alguno”, como observó el asesor presidencial Clark Clifford cuando se anunció la Doctrina Truman en 1947, “el pistoletazo de salida de [esta] campaña”.

La Guerra de Vietnam y los movimientos populares de la década de 1960 produjeron preocupaciones similares. Había que controlar y contener a los habitantes del “territorio enemigo” nacional, para restaurar la capacidad de las grandes empresas de EEUU, a la hora de competir en un mercado mundial más variado, por medio de la reducción de los salarios reales y de los beneficios de asistencia social, y del debilitamiento de la organización de la clase trabajadora. Se tenía que convencer a los jóvenes en particular de que debían preocuparse solamente de ellos mismos, en una “cultura del narcisismo”; puede que todo el mundo sepa, en privado, que dichas asunciones no son válidas para uno a nivel individual, pero en un momento de la vida en que uno no tiene mucha seguridad en cuanto a la identidad personal y a su lugar en la sociedad, es demasiado tentador adaptarse a lo que el sistema de propaganda declara que es la norma. Otros sectores recientemente movilizados de los “intereses especiales” también tenían que ser contenidos o disueltos, tareas que en algunos casos requerían medidas de fuerza, como en los programas del FBI para socavar los movimientos étnicos



y otros elementos de la cultura disidente en auge a través de la instigación a la violencia o del ejercicio directo de la misma, y otros medios de intimidación y hostigamiento. Otra tarea consistía en superar el temido “síndrome de Vietnam”, que impedía el recurso a la fuerza para controlar a las dependencias; tal como lo explicó el director del *Commentary*, Norman Podhoretz, la tarea consistía en superar “las inhibiciones enfermizas contra el uso de la fuerza militar” que se desarrollaron de resultados de la revulsión ante las guerras de Indochina,<sup>22</sup> problema que quedó resuelto, o así él lo esperaba, con la gloriosa conquista de Granada, en la que 6.000 soldados de elite lograron superar la resistencia de varias docenas de cubanos y algunos miembros de las milicias de Granada, consiguiendo 8.000 medallas de honor por su hazaña.

Para superar el síndrome de Vietnam, era necesario presentar a Estados Unidos como la parte agraviada y a los vietnamitas como los agresores –tarea difícil, podrían pensar quienes no estén familiarizados con las medidas disponibles para controlar la mente del público, o al menos a los elementos de la misma que cuentan—. Durante las últimas etapas de la guerra, la población general estaba desconcertada, y una gran mayoría consideraba que la guerra era “fundamentalmente injusta e inmoral”, y no “un error”, como lo indican las encuestas realizadas hasta el presente. En contraste, las elites cultivadas no planteaban un problema grave. En contra de la ilusión necesaria retrospectiva alentada por quienes ahora declaran haber sido “contrarios a la guerra durante sus etapas iniciales”, en realidad solamente se produjo en dichos círculos una oposición muy dispersa a la guerra, aparte de la preocupación en cuanto a las posibilidades de éxito y el aumento de los costos. Incluso los críticos más duros de la guerra dentro de la corriente principal rara vez fueron más allá de atormentarse por las buenas intenciones que salieron mal, alcanzando incluso este nivel de disensión mucho tiempo después de que el sector empresarial de Estados Unidos determinara que la empresa estaba resultando demasiado costosa y debería liquidarse, hecho que he documentado en otro lugar.

Los mecanismos por medio de los cuales se estableció una versión más satisfactoria de la historia también se han estudiado en otro lugar,<sup>23</sup> pero se deben decir unas palabras en relación con su notable éxito. En 1977 el presidente Carter pudo explicar durante una conferencia de prensa que los estadounidenses no tenemos por qué “disculparnos

o atormentarnos o asumir la condición de culpables” y no “estamos en deuda”, porque nuestras intenciones consistían en “defender la libertad de los ciudadanos de Vietnam del Sur” (destruyendo su país y pasando por las armas a su población), y porque “la destrucción fue mutua” –manifestación que, que yo sepa, pasó desapercibida, aparentemente por considerársela muy razonable—.<sup>24</sup> Por cierto, estos juicios tan equilibrados no se limitan a los sentimentales defensores de los derechos humanos. Se producen de manera habitual, sin suscitar comentario alguno. Para estudiar un caso reciente, después de que el buque de guerra estadounidense *Vincennes* derribara una aeronave civil iraní en aguas territoriales de Irán, el *Boston Globe* publicó una columna de Jerry Hough, especialista en ciencias políticas de la Universidad Duke y del Instituto Brookings, en la que éste explicaba:

Si el desastre del derribo del avión iraní lleva a este país a alejarse de su obsesión por el control simbólico de los armamentos nucleares y a concentrarse en los problemas de la guerra, el mando y el control de los militares y las limitaciones en cuanto a armamentos convencionales (entre los cuales, naturalmente, está incluida la flota), entonces 290 personas no habrán muerto en vano

—evaluación que difiere ligeramente del bombardeo al lector por parte de la prensa tras el derribo del vuelo KAL 007. Algunos meses después, el *Vincennes* regresó a su puerto de base para ser objeto de “una ruidosa bienvenida con banderas... en la que no faltaron los globos y una banda de la Armada tocando canciones marchosas” mientras que desde el buque el “altavoz emitía a todo volumen el tema de la película ‘Carros de Fuego’ y los buques de la Armada situados en las proximidades saludaban con salvas”. Los oficiales de la Armada no querían que el buque “entrara furtivamente en el puerto”, observó un funcionario de asuntos oficiales.<sup>25</sup> Y así se acaba la historia de los 290 iraníes.

Un editorial del *New York Times* mostró indirectamente su desacuerdo con el interesante juicio moral del presidente Carter. Bajo el encabezamiento de “La Persistente Deuda de Indochina”, los directores observaron que “ningún debate que pretenda determinar a quién debe cuán-



to a quién puede ocultar los peores horrores [de]... nuestra participación en el Sudeste Asiático”, haciendo referencia a los “horrores que sufrieron muchos de quienes huían” de los monstruos comunistas –por aquel entonces, una pequeña fracción de los muchos cientos de miles de personas que huían de sus hogares en Asia, entre ellos más de 100.000 personas que huyeron de Filipinas en balsas en 1977 y muchos millares que huyeron del terror apoyado por EEUU en Timor, para no hablar de las decenas de miles de personas adicionales que abandonaron los estados del terror respaldados por EEUU en América Latina, ninguno de los cuales fueron dignos de esta preocupación o incluso de nada más que una mención de pasada en las columnas de noticias, si es que merecieron incluso esto.<sup>26</sup> Otros horrores de la destrucción de Indochina quedan sin mencionar, y sin duda no suponen deuda persistente alguna.

Algunos años después, las preocupaciones aumentaron en el sentido de que “La Deuda hacia los Indochinos se Está Convirtiendo en una Sangría Fiscal”, en palabras de un titular del *Times*, que hacía referencia a la “deuda moral” contraída por medio de nuestra “implicación con el lado derrotado en Indochina”; siguiendo esta misma lógica, si los rusos hubieran ganado la guerra de Afganistán, entonces no habrían contraído deuda alguna. Pero ahora nuestra deuda se ha “saldado” por completo, explicó un funcionario del Departamento de Estado. Liquidamos esa cuenta moral aceptando a los refugiados vietnamitas que huían de las tierras que nosotros mismos arrasamos, “uno de los mayores esfuerzos, y de los más humanitarios, de la historia”, según Roger Winter, director del Comité de EEUU para los Refugiados. Pero “a pesar del orgullo”, sigue Bernard Gwertzman, corresponsal diplomático del *Times*, “algunas voces de la Administración Reagan y del Congreso están preguntando una vez más si la deuda de guerra ya está saldada”<sup>27</sup>.

Más allá de la imaginación de los círculos responsables queda el hecho de que hayamos podido tener alguna culpabilidad en relación con las matanzas y destrucción masivas, o de que tengamos alguna deuda con los millones de mutilados y huérfanos, o con los campesinos que siguen muriendo de resultas de la explosión de material de guerra abandonado tras la agresión de EEUU, mientras que el Pentágono, cuando se le pregunta si hay algún medio para eliminar los cientos de miles de bombas contra tropas que matan a los niños hoy día en zonas

como el Llano de Jars en Laos, responde con el útil comentario de que “la gente no debería vivir en esas zonas. Conocen el problema”. Estados Unidos se ha negado incluso a entregar sus mapas de minas de Indochina a los equipos civiles que se encargan de la desactivación de minas. Los antiguos Marines que fueron a Vietnam en 1989 para ayudar a eliminar las minas que ellos mismos habían colocado informan que aún quedan muchas en zonas donde la gente intenta realizar labores de agricultura y plantar árboles, y que se les dijo que en enero de 1989 éstas seguían matando e hiriendo a muchas personas.<sup>28</sup> Nada de esto es digno de ningún comentario, o de preocupación alguna.

La situación es, por supuesto, muy distinta cuando se trata de Afganistán –donde, por cierto, el régimen instalado por los soviéticos sí ha hecho entrega de sus mapas de minas–. En este caso, los titulares dicen “Los Soviéticos Dejan una Herencia Mortal a los Afganos”, “Las Minas Ponen en Peligro a los Afganos a su Regreso”, “EEUU Reprocha Comportamiento Soviético en cuanto a Eliminación de Minas Afganas”, “EEUU ayudará a Adiestrar a Refugiados para Destruir Minas Afganas”, “Las Minas Abandonadas tras la Marcha de los Soviéticos Están Mutilando a Afganos”, etcétera. La diferencia estriba en que éstas son minas soviéticas, con lo cual resulta muy natural que Estados Unidos haga un llamamiento a un “esfuerzo internacional para proporcionar a los refugiados formación y equipo para destruir o retirar” las mismas, y que acuse a los rusos por su falta de cooperación en esta empresa encomiable. “Los soviéticos no reconocerán el problema que han creado, ni ayudarán a resolverlo”, observó tristemente el secretario de Estado adjunto Richard Williamson; “Estamos decepcionados”. La prensa responde con el celo humanitario selectivo habitual.<sup>29</sup>

Los medios de comunicación no están satisfechos con la “destrucción mutua” que elimina toda la responsabilidad en cuanto a los grandes crímenes de guerra. Más bien, la carga de la culpabilidad ha de trasladarse a las víctimas. Bajo el encabezamiento “Vietnam, en su Intento de Ser Más Amable, Tiene Aún un Largo Camino que Recorrer”, la corresponsal del *Times* en Asia, Barbara Crossette, cita a Charles Printz, de la Asociación Internacional Pro Derechos Humanos, que dijo que “Ya iba siendo hora de que los vietnamitas demostraran algo de buena voluntad”. Printz se refería a las negociaciones correspon-



dientes a los hijos de padres americanos y madres vietnamitas, que constituyen una fracción minúscula de las víctimas de la agresión de EEUU en Indochina. Crossette añade que los vietnamitas tampoco han sido lo suficientemente directos en cuanto a los restos de los soldados americanos, aunque pudiera ser que su comportamiento esté mejorando: "Se ha producido algún progreso, aunque lento, en relación con los americanos desaparecidos". Pero los vietnamitas todavía no han saldado su deuda con nosotros, de manera que los asuntos humanitarios que la guerra dejó tras de sí quedan aún por resolver.<sup>30</sup>

Volviendo al mismo asunto, Crossette explica que los vietnamitas no comprenden su "falta de pertinencia" para los americanos, aparte de los asuntos morales que aún quedan pendientes —específicamente, el hecho de que los vietnamitas sean tan recalcitrantes "en cuanto al tema de los soldados americanos desaparecidos desde el final de la guerra"—. Descartando los "lamentos" vietnamitas en cuanto a la falta de voluntad por parte de EEUU a la hora de mejorar las relaciones, Crossette cita a un "funcionario asiático" que dijo que "si los dirigentes de Hanoi tienen intenciones serias en cuanto a la construcción de su país, los vietnamitas tendrán que tratar a Estados Unidos con justicia". También cita una declaración del Pentágono en la que se expresaba la esperanza de que Hanoi tomará acción "para resolver este viejo asunto humanitario" de los restos de los soldados americanos derribados sobre Vietnam del Norte por los malvados comunistas —que, por lo que parece, es el único asunto humanitario que nos viene a la mente cuando consideramos el legado de una guerra que dejó muchos millones de muertos y heridos en Indochina, y a tres países totalmente en ruinas. Otro informe deplora la negativa de Vietnam a colaborar "en aspectos humanitarios clave", citando las palabras de congresistas liberales correspondientes al comportamiento "horrible y cruel" de Hanoi y a la responsabilidad de Hanoi en cuanto a la falta de progreso en temas humanitarios claves, a saber, el asunto de los soldados americanos "que siguen desaparecidos desde la guerra de Vietnam". El comportamiento recalcitrante de Hanoi "reavivó los amargos recuerdos que Vietnam aún puede evocar" entre los dolientes americanos.<sup>31</sup>

La naturaleza de la preocupación por "resolver este viejo asunto humanitario" de los soldados americanos desaparecidos en combate se

ve iluminada por algunas estadísticas citadas por el historiador (y veterano de Vietnam) Terry Anderson:

Los franceses aún tienen 20.000 desaparecidos en combate durante su guerra de Indochina, y la lista vietnamita asciende a más de 200.000. Además, Estados Unidos aún cuenta con 80.000 personas desaparecidas en combate durante la Segunda Guerra Mundial y 8.000 durante la guerra de Corea, cifras que representan el 20 y el 15 por ciento, respectivamente, de los caídos confirmados en dichos conflictos; el porcentaje representa un 4 por ciento para la Guerra de Vietnam.<sup>32</sup>

Los franceses han establecido relaciones diplomáticas con Vietnam, al igual que los americanos lo hicieron con Alemania y Japón, observa Anderson, añadiendo: "Nosotros ganamos en 1945, por supuesto, de manera que parece que los desaparecidos en combate solamente son importantes cuando Estados Unidos pierde la guerra. La verdadera 'causa noble' para la administración [Reagan] no es la antigua guerra, sino su cruzada emocional e imposible para recuperar 'todos los restos recuperables'". De manera más precisa, la "causa noble" consiste en beneficiarse de la tragedia personal para fines políticos: superar el síndrome de Vietnam a nivel nacional, y "explotar a Vietnam".

Lee Hamilton, Demócrata de la Cámara con considerable influencia, escribe que "casi 15 años después de la guerra de Vietnam, el Sudeste Asiático continúa siendo una región que causa considerable preocupación a Estados Unidos desde el punto de vista humanitario, estratégico y económico". La preocupación humanitaria incluye dos casos: (1) "Se desconoce la suerte de casi 2.400 soldados americanos en Indochina"; (2) "Más de 1 millón de camboyanos murieron bajo el despiadado régimen de los Khmer Rouge de Pol Pot". Los números, mucho mayores, de indochinos que murieron bajo el despiadado ataque de Washington, y que siguen muriendo, quedan por debajo del umbral. Deberíamos, continúa diciendo Hamilton, "volver a evaluar nuestras relaciones con Vietnam" y buscar "una nueva relación", aunque sin abandonar nuestras preocupaciones humanitarias: "Éste podría ser un momento oportuno para políticas en las que la presión continuada se mezclara con premios al progreso logrado en relación con los



soldados americanos desaparecidos y las concesiones diplomáticas en Camboya". En el extremo liberal de la izquierda del espectro, en el diario del Centro de Política Internacional, proyecto del Fondo para la Paz, un asociado superior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional hace un llamamiento a la reconciliación con Vietnam, instando a que dejemos de lado "la agonía de la experiencia de Vietnam" y "las heridas del pasado", y superemos el "odio, la ira y la frustración" que nos causaron los vietnamitas, aunque no debemos olvidar "los asuntos humanitarios que persisten después de la guerra": los desaparecidos en combate, las personas cualificadas para emigrar a Estados Unidos y los reclusos que aún están en campos de reeducación. Tan profundos son los impulsos humanitarios que guían a esta sociedad profundamente moral que incluso el senador de derechas John McCain ahora hace un llamamiento a las relaciones diplomáticas con Vietnam. Dice que "no hay odio" en él hacia los vietnamitas, a pesar de que es "un antiguo piloto de la Armada que pasó 5 años y medio como huésped involuntario del Hilton de Hanoi", comenta el director del *Boston Globe*, David Greenway, añadiendo que "Si McCain puede dejar de lado su amargura, también podemos hacerlo todos los demás"<sup>33</sup>. Greenway conoce Vietnam bien, ya que acumuló allí un destacado historial como corresponsal de guerra. Pero en el clima moral predominante, a la comunidad culta a la que se dirige no le parecería extraño hacer un llamamiento a la superación de nuestra amargura natural que sentimos hacia los vietnamitas por lo que nos hicieron.

"En la historia," observa Francis Jennings, "el hombre de camisa con chorrera y chaleco bordado en oro parece levitar sobre la sangre que él ordenó que derramaran las manos sucias de los subalternos"<sup>34</sup>.

Estos ejemplos sirven para ilustrar el poder del sistema que fabrica las ilusiones necesarias, al menos entre las elites cultas que son los principales focos de la propaganda, y sus proveedores. Sería difícil evocar un logro que pudiera estar más allá del alcance de los mecanismos de un adroctinamiento que puede presentar a Estados Unidos como una víctima inocente de Vietnam, al tiempo que medita los excesos de autocastigo de la nación.

Los periodistas que no están sometidos a las mismas influencias y a los mismos requisitos ven una imagen un tanto diferente. En un diario israelí de gran circulación, Amnon Kapeliouk publicó una serie de ar-

tículos serios y compasivos durante una visita a Vietnam realizada en 1988. Uno tiene el siguiente encabezamiento: "Miles de Vietnamitas Siguen muriendo de Resultados de los Efectos de la Guerra Química Americana". Informa sobre un cuarto de millón estimado de víctimas en Vietnam del Sur, además de los miles que han muerto como resultado de material bélico sin explotar -3.700 desde 1975 sólo en la zona de Danang-. Kapeliouk describe las escenas "horripilantes" en los hospitales del sur, donde los niños mueren de cáncer y de horribles malformaciones congénitas; por supuesto, Vietnam del Sur fue el objetivo de la guerra química, no Vietnam del Norte, donde, según informa, no se hallan estas consecuencias. Los médicos vietnamitas temen que haya poca esperanza de mejora durante los próximos años, ya que los efectos persisten en la asolada región meridional de este "país afligido", con sus millones de muertos y millones adicionales de viudas y huérfanos, y donde uno oye "historias que ponen los pelos de punta, que me recuerdan a lo que oímos durante los procesos de Eichmann y Demjanjuk" de víctimas que, es de notar, "no expresan odio alguno contra el pueblo americano". En este caso, por supuesto, los culpables no son juzgados, sino que el mundo occidental civilizado los honra por sus crímenes.<sup>35</sup>

También aquí, hay a quienes les han preocupado los efectos de la guerra química, en la que se rociaron millones de galones de Agente Naranja y otras sustancias químicas venenosas sobre una zona de Vietnam del Sur del tamaño de Massachusetts, y más en Laos y en Camboya. La Dra. Grace Ziem, especialista en exposición a sustancias químicas y en las enfermedades producidas por las mismas que enseña en la Escuela Médica de la Universidad de Maryland, abordó el tema tras una visita de dos semanas a Vietnam, donde había trabajado como médico durante la década de 1960. Ella también describió visitas a los hospitales del sur, durante las cuales vio los recipientes transparentes sellados que contenían bebés con malformaciones espantosas y los muchos pacientes de las zonas fuertemente rociadas, mujeres con tumores malignos extraordinariamente raros y niños con deformidades mucho más allá de lo normal. Pero su narración apareció lejos de la corriente principal, donde la historia, si es que se informó sobre la misma, tenía un contenido y un enfoque muy diferentes. Así, en un artículo sobre el modo en que los japoneses están intentando ocultar sus crímenes de la Segunda Guerra Mundial, leemos que un apoloquista japonés hizo refe-



rencia a las tropas de EEUU que diseminaron venenos por medio de helicópteros; “probablemente”, explica el periodista, se refería al “Agente Naranja, un agente defoliante del que se sospecha que causó defectos congénitos entre los vietnamitas y los hijos de los soldados americanos”. No se sugieren reflexiones adicionales, en este contexto. Y podemos leer sobre “los 180 millones de dólares en compensación por parte de las empresas de productos químicos a las víctimas del Agente Naranja” —es decir, a los soldados americanos, no a los civiles vietnamitas cuyos sufrimientos son muchísimo mayores—. Y de algún modo, estos asuntos prácticamente no se plantearon cuando la indignación aumentó en 1988 en relación con los supuestos planes de Libia en cuanto al desarrollo de armas químicas.<sup>36</sup>

El giro hacia la derecha entre las elites adquirió forma política durante los últimos años de la administración Carter y durante los años de Reagan, cuando las políticas propuestas se implementaron y ampliaron con el consentimiento de ambos partidos. Pero, tal como descubrieron los administradores estatales reaganistas, el “síndrome de Vietnam” resultó ser un hueso duro de roer; de ahí el enorme aumento de operaciones clandestinas, a medida que el Estado se vio impulsado a ir bajo tierra por el enemigo interno.

A medida que se hizo necesario, a mediados de la década de 1980, hacer frente a los costos de las políticas militares keynesianas de Reagan, entre ellas los enormes déficits presupuestarios y comerciales y la deuda externa, llegó a ser predecible, y se predijo, que el “Imperio del Mal” se haría menos amenazador, y el azote del terrorismo internacional amainaría, no tanto porque el mundo hubiera cambiado mucho sino por los nuevos problemas con los que la administración del Estado se enfrentaba. Varios años después, los resultados son evidentes. Entre los propios ideólogos que vociferaban sobre el mal inextirpable de los bárbaros soviéticos y sus secuaces, el enfoque propio de estadistas ahora resulta obligatorio, junto con la celebración de reuniones en la cumbre y negociaciones armamentistas. Pero los problemas básicos a largo plazo prevalecen, y algo se habrá de hacer al respecto.

A lo largo de este período de hegemonía mundial por parte de EEUU, dejando de lado la retórica exaltada, no se ha dudado en recurrir a la fuerza si el bienestar de las elites de EEUU se ha visto amenazado por lo que los documentos secretos describen como la amenaza de los “re-

gímenes nacionalistas” que responden ante las demandas populares de “mejoras en las condiciones de vida insuficientes de las masas” y la producción para las necesidades nacionales, y que intentan controlar sus propios recursos. Para contrarrestar estas amenazas, según lo explican los documentos de planificación a alto nivel, Estados Unidos debe “fomentar un clima político y económico propicio para la inversión privada de capital tanto extranjero como nacional”, y que incluya la “oportunidad de adquirir, y en el caso del capital extranjero, de repatriar algunos ingresos razonables”<sup>37</sup>. El medio, se explica con franqueza, ha de ser la fuerza en última instancia, ya que estas políticas de algún modo no logran conseguir demasiado apoyo popular y se ven continuamente amenazadas por los elementos subversivos denominados “comunistas”.

En el Tercer Mundo, hemos de asegurarnos “la protección de nuestras materias primas” (como lo expresa George Kennan) y fomentar una producción orientada hacia la exportación, manteniendo un marco de internacionalismo liberal —al menos en la medida en que sirva a los intereses de los inversores de EEUU—. A nivel internacional, al igual que a nivel nacional, el mercado libre es un ideal a ensalzar si sus resultados están de acuerdo con las necesidades percibidas del poder y el privilegio nacional; de no ser así, se debe guiar al mercado por medio de un uso eficaz del poder estatal.

Si los medios, y la comunidad intelectual respetable en general, han de servir a su “fin social”, los asuntos de este tipo han de mantenerse al margen de la sociedad, lejos de la consciencia pública, y la evidencia masiva suministrada por el historial documental y la evolución de la historia se ha de consignar a los archivos polvorientos o a las publicaciones marginales. Podemos hablar retrospectivamente de errores, interpretación errónea, exageración de la amenaza comunista, evaluaciones defectuosas de la seguridad nacional, fallas personales, incluso de corrupción y engaño por parte de los dirigentes descarriados; pero el estudio de las instituciones y su funcionamiento se ha de pasar por alto escrupulosamente, de no ser en los elementos marginales o en una literatura erudita relativamente oscura. Estos resultados se han logrado de manera bastante satisfactoria.

En las democracias capitalistas del Tercer Mundo, a menudo la situación es muy parecida. Costa Rica, por ejemplo, se considera justa-



mente como la democracia modélica de América Latina. La prensa está firmemente en manos de la ultraderecha, de modo que no es necesario preocuparse por la libertad de prensa en Costa Rica, y esta preocupación no se manifiesta. En este caso, el resultado se logró, no por la fuerza, sino más bien gracias al mercado libre asistido por medidas legales para controlar a los "comunistas", y, aparentemente, a un influjo de capital norteamericano durante la década de 1960.

Allí donde estos medios no han bastado para imponer la versión aprobada de la democracia y la libertad de prensa, otros están disponibles y se consideran aparentemente como justos y adecuados, siempre que logren el éxito. El Salvador a lo largo de la pasada década constituye una ilustración espectacular en este sentido. En la década de 1970, se dio una proliferación de "organizaciones populares", muchas de ellas patrocinadas por la Iglesia, entre ellas, asociaciones campesinas, grupos de autoayuda, sindicatos, etcétera. La reacción fue una explosión violenta de terror estatal, organizado por Estados Unidos con el respaldo de ambos partidos y también con el apoyo general de los medios de comunicación. Todo escrúpulo residual desapareció tras la celebración de "elecciones ficticias" en beneficio del frente nacional,<sup>38</sup> mientras que la administración Reagan ordenó una reducción en las atrocidades más visibles cuando se juzgó que la población había quedado suficientemente traumatizada y se temió que los informes sobre torturas, asesinatos, mutilaciones y desapariciones podrían poner en peligro la financiación y el apoyo para los niveles menores de terror estatal que aún se consideraban necesarios.

Había existido una prensa independiente en El Salvador, dos pequeños periódicos, *La Crónica del Pueblo* y *El Independiente*. Ambos fueron destruidos en 1980-82 por las fuerzas de seguridad. Tras una serie de bombardeos, un redactor de *La Crónica* y un fotógrafo fueron sacados a la fuerza de una cafetería de San Salvador y destrozados a machetazos; las oficinas fueron asaltadas, bombardeadas e incendiadas por los escuadrones de la muerte, y el propietario huyó a Estados Unidos. El propietario de *El Independiente*, Jorge Pinto, huyó a México cuando el local de su periódico fue atacado y las tropas destruyeron sus equipos. Tal fue la preocupación por estos asuntos en Estados Unidos que no apareció una palabra al respecto en las columnas de noticias del *New York Times*, ni un comentario editorial sobre la destrucción de los

diarios, ni ha aparecido una palabra al respecto en los años que han transcurrido desde entonces, aunque a Pinto se le permitió efectuar una declaración en la página de opinión, en la que condenó a la "junta de Duarte" por haber "logrado extinguir la expresión de cualquier opinión disidente" y expresó su creencia de que los denominados escuadrones de la muerte no son "ni más ni menos que los propios militares" —conclusión respaldada por la Iglesia y los observadores internacionales de los derechos humanos—.

Durante el año anterior a la destrucción final de *El Independiente*, las oficinas fueron bombardeadas dos veces, un botones murió al ser ametrallado el taller, el coche de Pinto fue alcanzado por una ráfaga de disparos de metralleta, éste sufrió dos atentados más, y tropas del ejército fueron a buscarlo a sus oficinas en carros de combate y camiones blindados dos días antes de que finalmente el periódico fuera destruido. Estos acontecimientos no merecieron mención alguna. Poco antes de quedar definitivamente destruido, *La Crónica* había sido bombardeado cuatro veces en seis meses; uno de estos bombardeos, el último, mereció cuarenta palabras en el *New York Times*.<sup>39</sup>

No es que a los medios de comunicación de EEUU no les preocupe la libertad de prensa en América Central. En fuerte contraste con el silencio en relación con los dos periódicos salvadoreños está el caso de *La Prensa*, diario de la oposición en Nicaragua. El crítico de los medios de comunicación Francisco Goldman contó 263 referencias a sus tribulaciones en el *New York Times* a lo largo de cuatro años.<sup>40</sup> El criterio distintivo no resulta oscuro: los periódicos salvadoreños eran voces independientes silenciadas por la violencia asesina de los clientes de EEUU; *La Prensa* es una agencia de la campaña de EEUU para derrocar al gobierno de Nicaragua, y por tanto una "víctima digna", cuyo hostigamiento produce angustia e indignación. Volvemos a una evidencia adicional a efectos de que éste es sin duda el criterio operativo.

Varios meses antes de la destrucción de este periódico, el Dr. Jorge Napoleón Gonzales, propietario de *La Crónica*, efectuó una visita a Nueva York para implorar presión internacional a efectos de "disuadir a los terroristas de destruir su periódico". Citó amenazas efectuadas desde la derecha y "lo que [su periódico] denomina represión gubernamental", comentó sensatamente *The Times*. Informó haber recibido amenazas de un escuadrón de la muerte "que sin duda goza del apoyo



de los militares", que en su casa se habían hallado dos bombas, que las oficinas de su periódico habían sido ametralladas e incendiadas y su casa rodeada por los soldados. Estos problemas se iniciaron, dijo, cuando su periódico "empezó a exigir reformas en la tenencia de tierras", enfureciendo a "las clases dominantes". No se desarrolló presión internacional alguna, y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo su trabajo.<sup>41</sup>

Durante estos mismos años, la emisora de radio de la Iglesia en San Salvador fue bombardeada repetidas veces, y las tropas tomaron el edificio archidiecésano, destruyendo la emisora de radio y saqueando las oficinas del periódico. Una vez más, estos hechos no produjeron reacción alguna en los medios de comunicación.

Estos asuntos no surgieron durante la entusiasta información sobre las "elecciones libres" celebradas en El Salvador en 1982 y 1984. Más tarde, el corresponsal del *Times* en América Central, James LeMoyné, nos informó con regularidad de que el país disfrutaba de mayor libertad que la enemiga Nicaragua, donde nada ni de lejos comparable con las atrocidades salvadoreñas había tenido lugar, y los dirigentes y medios de comunicación de la oposición, sufragados por el gobierno de EEUU y que apoyan abiertamente su ataque contra Nicaragua, se quejan de hostigamiento, pero no de terror y asesinatos. Ni informarían los corresponsales en América Central del *Times* que los dirigentes de la Iglesia que huyeron de El Salvador (entre ellos un estrecho colaborador del arzobispo Romero, que fue asesinado), los escritores salvadoreños conocidos, y otros a quienes ni en sueños se los podría definir como activistas políticos, y que son bien conocidos de los corresponsales del *Times*, no pueden regresar a la democracia de los escuadrones de la muerte que alaban y protegen, por temor a ser asesinados. Los redactores del *Times* hacen un llamamiento a la administración Reagan para que utilice "su presión a favor de la paz y el pluralismo en Nicaragua", donde el gobierno tiene un "horrible historial" de "hostigación contra quienes osan hacer uso de... la libertad de expresión", y donde nunca se había celebrado "una elección libre, con candidatos"<sup>42</sup>. Ninguna de estas críticas se aplica a El Salvador.

De estos modos, la Prensa Libre se afana por implantar las ilusiones que son necesarias para contener al enemigo nacional.

## NOTAS

<sup>1</sup> Ver capítulo 1, nota 32. Existen varias complejidades y reservas, por supuesto, cuando pasamos de unas características muy generales del sistema a los pequeños detalles y efectos menores. Debe entenderse que éstas son características del análisis de cualquier sistema complejo.

<sup>2</sup> Ver su *On Democracy*, donde se elabora sobre algunas consecuencias más amplias.

<sup>3</sup> Christopher Hill, *The World Turned Upside Down* (Penguin, 1984, 60, 71), citando a autores contemporáneos.

<sup>4</sup> Edward Countryman, *The American Revolution* (Hill and Wang, 1985, 200, 224 ss.)

<sup>5</sup> James Curran, "Advertising and the Press," en Curran, ed., *The British Press: A Manifesto* (Londres: MacMillan, 1978).

<sup>6</sup> Lawrence Shoup y William Minter, *Imperial Brain Trust* (Monthly Review, 1977, 130), un estudio del Proyecto de Estudios de Guerra y Paz del Consejo para Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado desde 1939 hasta 1945.

<sup>7</sup> Ver apéndice II, sección 1, para una discusión adicional.

<sup>8</sup> Las excepciones se toleraron en los años iniciales debido a la especial necesidad de recuperación de los centros del capitalismo industrial por medio de la explotación de sus antiguas colonias, pero esto se entendió como un expediente provisional. Para más detalles, ver William S. Borden, *The Pacific Alliance: United States Foreign Economic Policy and Japanese Trade Recovery, 1947-1955* (Wisconsin, 1984); Andrew J. Rotter, *The Path to Vietnam: Origins of the American Commitment to Southeast Asia* (Cornell, 1987).

<sup>9</sup> *WP Weekly*, 28 de diciembre, 1987.

<sup>10</sup> Lippmann y Merz, "A Test of the News", suplemento, *New Republic*, 4 de agosto, 1920. Las citas que aparecen aquí son de citas en Aronson, *The Press and the Cold War*, 25s.

<sup>11</sup> Ver apéndice II, sección 1.

<sup>12</sup> H. D. S. Greenway, *Boston Globe*, 8 de julio, 1988. Sobre los antecedentes, ver *Turning the Tide*, 194s., y las fuentes citadas; Christopher Simpson, *Blowback* (Weidenfeld & Nicolson, 1988).

<sup>13</sup> A finales de la década de 1960, ya estaba claro que éstos eran los factores elementales tras la intervención de EEUU en el Sudeste Asiático, que, en la planificación mundial de EEUU, se había de reconstituir como una "esfera de prosperidad conjunta" para Japón, dentro de la Gran Zona dominada por EEUU, al tiempo que también servía como mercado y fuente de materias primas y dólares reciclados para la reconstrucción del capitalismo de Europa occidental. Ver mi



- obra, *At War with Asia* (Pantheon, 1970, introducción); *For Reasons of State* (Pantheon, 1973); Chomsky y Howard Zinn, eds., *Critical Essays*, vol. 5 de los *Pentagon Papers* (Beacon, 1972); y otras obras del período. Ver también, entre otros, Borden, *Pacific Alliance*; Michael Schaller, *The American Occupation of Japan* (Oxford, 1985); Rotter, *Path to Vietnam*.
- <sup>13</sup> Acheson, *Present at the Creation* (Norton, 1969, 374, 489); Borden, *op. cit.*, 44, 144.
- <sup>14</sup> Ver apéndice II, sección 2.
- <sup>15</sup> Carey, "Managing Public Opinion".
- <sup>16</sup> *Ibid.*, citando a Bell, "Industrial Conflict and Public Opinion", en A.R. Dubin y A. Ross, eds., *Industrial Conflict* (McGraw-Hill, 1954).
- <sup>17</sup> Ver apéndice V, sección 5.
- <sup>18</sup> Carey, "Managing Public Opinion". Sobre la purga de las universidades durante la década de 1950, ver Ellen Schreker, *No Ivory Tower* (Oxford, 1986). Para una pequeña muestra de la purga posterior, ver varios ensayos en Philip J. Meranto, Oneida J. Meranto y Matthew R. Lippman, *Guarding the Ivory Tower* (Lucha Publications, Denver, 1985).
- <sup>19</sup> Para alguna discusión, ver mi artículo "Democracy in the Industrial Societies" en *Z Magazine*, enero de 1989.
- <sup>20</sup> El programa Food for Peace (Alimentos para la Paz) (PL 480) es un ejemplo notable. El PL 480, descrito por Ronald Reagan como "uno de los mayores actos humanitarios jamás realizado por una nación para los necesitados de otras naciones", ha servido eficazmente para los fines para los que fue diseñado: dar subsidios al negocio agrícola de EEUU; inducir a los pueblos a "depender de nosotros para su alimentación" (senador Hubert Humphrey, uno de sus arquitectos en interés de sus votantes agricultores de Minesota); contribuir a las operaciones de contrainsurgencia; y financiar "la creación de una red militar mundial para respaldar a los gobiernos capitalistas de Occidente y del Tercer Mundo" al requerir que se utilicen fondos equivalentes en moneda local para el rearme (William Borden), también suministrando así un subsidio indirecto a los fabricantes militares de EEUU. EEUU emplea estos "subsidios a la exportación (considerados a nivel universal como una práctica comercial 'injusta') para conservar su enorme mercado japonés", entre otros casos (Borden). El efecto sobre la agricultura y la supervivencia en el Tercer Mundo ha sido a menudo devastador. Ver Tom Barry y Deb Preusch, *The Soft War* (Grove, 1988, 67f.); Borden, *Pacific Alliance*, 182s.; y otras fuentes.
- <sup>21</sup> NYT, 30 de octubre, 1985.
- <sup>22</sup> Ver *Political Economy of Human Rights y Manufacturing Consent*.
- <sup>23</sup> NYT, 25 de marzo de 1977; transcripción de conferencia de prensa.
- <sup>24</sup> *Los Angeles Times*, 25 de octubre, 1988; Robert Reinhold, NYT, mismo día.
- <sup>25</sup> Para estimaciones comparativas del momento, ver *Political Economy of Human Rights*, II, capítulo 3.

<sup>27</sup> NYT, 3 de marzo, 1985.

<sup>28</sup> T. Hunter Wilson, *Indochina Newsletter* (Asia Resource Center), noviembre, diciembre 1987. Mary Williams Walsh, *Wall Street Journal*, 3 de enero; George Esper, AP, 18 de enero; *Boston Globe*, titular de fotografía, 20 de enero, 1989.

<sup>29</sup> Walsh, *Wall Street Journal*, 3 de enero, 1989. Robert Pear, NYT, 14 de agosto; Elaine Sciolino, NYT, 17 de agosto; Paul Lewis, NYT, 8 de octubre; Mary Williams Walsh, *Wall Street Journal*, 1 de septiembre, 1988. En su artículo del 3 de enero de 1989, Walsh indica, con algo de pesar, que "la divulgación de los mapas afganos podría incluso representar una pequeña victoria propagandística para el régimen de Kabul, ya que sus enemigos en Washington" están todavía por hacer lo mismo, catorce años después de su marcha. La victoria propagandística sería muy pequeña, ya que no hay ningún reconocimiento de que EEUU haya dejado de suministrar esta información, o tenga ninguna responsabilidad al respecto.

<sup>30</sup> Barbara Crossette, NYT, 10 de noviembre, 1985.

<sup>31</sup> Crossette, NYT, 28 de febrero; E. W. Wayne, *Christian Science Monitor*, 24 de agosto, 1988.

<sup>32</sup> Anderson, "The Light at the End of the Tunnel", *Diplomatic History*, otoño de 1988.

<sup>33</sup> Lee H. Hamilton, "Time for a new American relationship with Vietnam", *Christian Science Monitor*, 12 de diciembre, 1988; Frederick Z. Brown, *Indochina Issues* 85, noviembre de 1988; *Boston Globe*, 8 de julio, 1988.

<sup>34</sup> Jennings, *Empire of Fortune*, 215.

<sup>35</sup> Kapeliouk, *Yediot Ahronot*, 7 de abril, 1988; también 1, 15 de abril.

<sup>36</sup> Ziem, *Indochina Newsletter* (Asia Resource Center), julio-agosto 1988; Susan Chira, NYT, 5 de octubre, 1988; *Wall Street Journal*, 4 de abril, 1985. Ver *Manufacturing Consent* sobre cómo la retrospectiva del décimo aniversario (1985) evadió los efectos de la guerra sobre los sudvietnamitas, las principales víctimas del ataque de EEUU.

<sup>37</sup> NSC 144/1, 1953; NSC 5432, 1954; y muchos otros. Para una discusión más detallada, ver *On Power and Ideology*. Los principios básicos se reiteran constantemente, a menudo con las mismas palabras.

<sup>38</sup> Sobre este recurso propagandístico, cuyo objeto es el frente nacional, ver Herman y Brodhead, *Demonstration Elections*.

<sup>39</sup> Jorge Pinto, NYT Editorial de Opinión, 6 de mayo, 1981; Ricardo Castañeda, socio más antiguo de un bufete salvadoreño, Becario Edward Mason, Kennedy School, Universidad de Harvard; "Salvador Groups Attack Paper and U.S. Plant". Noticias Breves del Mundo, NYT, 19 de abril, 1980. La información sobre la cobertura del *Times* se basa en una búsqueda en el índice del *Times* por Chris Burke de FAIR.

<sup>40</sup> "Sad Tales of La Libertad de Prensa", *Harper's Magazine*, agosto de 1988. Ver apéndice IV, sección 6, para una discusión adicional.



<sup>41</sup> Deirdre Carmody, NYT, 14 de febrero de 1980. Quizá podríamos considerar la breve reseña del 19 de abril, citada más arriba, como una respuesta a su petición.

<sup>42</sup> NYT, Editorial, 25 de marzo, 1988.

### 3 LOS LÍMITES DE LO EXPRESABLE

Aun reconociendo que rara vez se produce algo verdaderamente nuevo, podemos identificar algunos momentos en que las ideas tradicionales adquieren nueva forma, se cristaliza una nueva consciencia y las oportunidades futuras aparecen bajo un nuevo aspecto. La fabricación de ilusiones necesarias para la gestión social es tan vieja como la historia, pero el año de 1917 se puede considerar como un punto de transición dentro del período moderno. La revolución bolchevique dotó de una expresión concreta al concepto leninista de la intelectualidad como vanguardia del progreso social, explotando las luchas populares para adquirir el poder estatal e imponer el dominio de la “burocracia roja” que Bakunin había predicho. Esto se hizo inmediatamente, desmantelando consejos de fábrica, Soviets y otras formas de organización popular, de manera que se pudiera movilizar efectivamente a la población como un “ejército de trabajadores” bajo el control de dirigentes perspicaces que impulsarían a la sociedad hacia adelante –con las mejores intenciones, por supuesto. Para este fin, los mecanismos de la Agitprop son fundamentales; incluso un estado totalitario como los de Hitler o Stalin se basa en la movilización de las masas y en el sometimiento voluntario.

Una doctrina notable de la propaganda soviética consiste en que la eliminación por parte de Lenin y Trotsky de cualquier vestigio de control sobre la producción por parte de los productores y de participación popular en la determinación de la política social constituyen un triunfo del socialismo. El objeto de este ejercicio de contrasentido consiste en explotar el atractivo moral de los ideales que se estaba logrando destruir. La propaganda occidental se aprovechó inmediatamente de la misma oportunidad, identificando el desmantelamiento de las formas socialistas como el establecimiento del socialismo, con el fin de socavar



los ideales de izquierdas-libertarios, asociándolos con las prácticas de la tétrica burocracia roja. Hasta nuestros días, ambos sistemas de propaganda adoptan esta terminología, para sus distintos objetivos. Cuando los dos principales sistemas mundiales de propaganda están de acuerdo, al individuo le resulta extraordinariamente difícil escapar a sus tentáculos. El golpe a la libertad y la democracia en todo el mundo ha sido tremendo.

Durante el mismo año de 1917, el círculo de pragmáticos liberales de John Dewey se atribuyó el mérito de guiar a una población pacifista a la guerra “bajo la influencia de un veredicto moral alcanzado tras la más completa de las deliberaciones por los miembros más sensatos de la comunidad,... una clase que se ha de describir de forma inclusiva pero aproximada como los ‘intelectuales’”, quienes mantenían haber “realizado... el trabajo efectivo y decisivo a favor de la guerra”<sup>1</sup>. Este logro, o al menos su autopercepción articulada, trajo amplias consecuencias. Dewey, el mentor intelectual, explicó que esta “lección psicológica y educativa” había demostrado “que a los seres humanos les resulta posible hacerse con los asuntos humanos y gestionarlos”. Los “seres humanos” que habían aprendido la lección eran “los hombres inteligentes de la comunidad”, la “clase especializada” de Lippmann, los “observadores fríos” de Niebuhr. Debían ahora aplicar sus talentos y su comprensión a “lograr un orden social mejor reorganizado”, por medio de la planificación, la persuasión o la fuerza cuando ésta fuera necesaria; pero, insistía Dewey, solamente el “uso refinado, sutil e indirecto de la fuerza”, no “los métodos groseros, evidentes y directos” empleados con anterioridad al “adelanto del conocimiento”. El recurso sofisticado a la fuerza está justificado si satisface el requisito de “eficacia comparativa y economía en su empleo”. Las doctrinas recientemente articuladas de “fabricación del consentimiento” eran un factor concomitante natural, y en años posteriores tendríamos que oír hablar mucho de los “intelectuales tecnócratas, orientados hacia las políticas” que trascienden la ideología y que resolverán aquellos problemas sociales que pudieran permanecer por medio de la aplicación racional de los principios científicos.<sup>2</sup>

Desde aquel tiempo, el núcleo principal de intelectuales articulados ha demostrado una tendencia hacia uno u otro de estos polos, evitando los “dogmatismos democráticos” en relación con la comprensión

por parte de la gente de sus propios intereses, y permaneciendo conscientes de la “estupidez del hombre medio” y de su necesidad de ser llevado hacia el mundo mejor que sus superiores planifican para él. Un traslado de uno al otro polo puede ser bastante rápido e indoloro, puesto que no está en juego ningún cambio fundamental de doctrina o valor, sólo una evaluación de las oportunidades para lograr el poder y el privilegio; beneficiarse de una ola de lucha popular, o servir a la autoridad establecida en calidad de gestor social o ideológico. La transición convencional del “Dios que falló” desde los entusiasmos leninistas hasta el servicio al capitalismo estatal puede, en mi opinión, explicarse en medida considerable en estos términos. Aunque durante las etapas iniciales existían elementos auténticos, hace mucho que el asunto ha degenerado hasta alcanzar el nivel de una farsa ritualista. Es especialmente buena la acogida que se le otorga a la fabricación de un pasado maligno, que también constituye una vía segura para el éxito. De este modo, quien se confiesa pecador puede describir cómo animó a los carros de combate en las calles de Praga, apoyó a Kim Il Sung, acusó a Martin Luther King de traición, etcétera, de manera que aquellos que no han visto la luz queden implícitamente mancillados.<sup>3</sup> Una vez lograda la transición, el camino hacia el prestigio y el privilegio queda abierto, ya que el sistema valora considerablemente a quienes han visto sus propios errores y están ahora en situación de tachar a las mentes independientes de ser apologistas al estilo de Stalin, sobre la base de la clarividencia superior adquirida de resultados de su juventud mal empleada. Algunos optarán por convertirse en “expertos” al estilo que articula con candor Henry Kissinger, quien definió al “experto” como una persona adiestrada en la “elaboración y definición [del]... consenso [de]... su electorado”, aquellos que “tienen un interés personal en las opiniones comúnmente aceptadas: después de todo, la elaboración y definición de su consenso a nivel elevado lo ha convertido en un experto”<sup>4</sup>.

Una generación más tarde, Estados Unidos y la Unión Soviética se habían convertido en las superpotencias del primer sistema verdaderamente mundial, haciendo realidad las previsiones de Alexander Herzen y otros de un siglo antes, aunque las dimensiones de su poder nunca fueron comparables y las capacidades de ambos a la hora de ejercer una influencia y de coaccionar han ido disminuyendo durante algunos años.



Los dos modelos de la función de los intelectuales persisten, similares en su origen, adaptados a los dos sistemas prevalecientes de jerarquía y dominación. Del mismo modo, los sistemas de adoctrinamiento varían, según la capacidad del Estado a la hora de coaccionar y las modalidades de control efectivo. El sistema más interesante es el de la democracia capitalista, que se basa en el mercado libre —guiado por medio de la intervención directa donde pudiera ser necesario— para establecer la conformidad y marginar a los “intereses especiales”.

Los principales objetivos de la fabricación del consentimiento son aquellos que se consideran como “los miembros más sensatos de la comunidad”, los “intelectuales”, los “dirigentes de la opinión”. Un funcionario de la administración Truman comentó que “No supone demasiada diferencia para el público en general cuáles sean los detalles de un programa. Lo que cuenta es cómo ven el plan los dirigentes de la comunidad”; aquel “que moviliza a la elite, moviliza al público”, concluye un estudio erudito de la opinión pública. La “opinión pública” que Truman y sus asesores se tomaron en serio, e intentaron diligentemente cultivar, era la de la elite de los “líderes de la opinión”, el “público de la política exterior”, observa el historiador diplomático Thomas Paterson<sup>5</sup>; y esto sucede de manera consecuente, aparte de los momentos en los que se ha de superar una “crisis de la democracia” y se requieren medidas más vigorosas para relegar al público en general al lugar que le corresponde. En otros momentos se los puede satisfacer, es de esperar, con diversiones y una dosis permanente de propaganda patriótica, y fulminaciones contra diversos enemigos que ponen en peligro sus vidas y sus hogares a no ser que sus dirigentes permanezcan firmes ante la amenaza.

En el sistema democrático, las ilusiones necesarias no se pueden imponer por la fuerza. Más bien, se han de instilar en la mente del público por medios más sutiles. Un Estado totalitario puede estar satisfecho con niveles inferiores de lealtad hacia las verdades requeridas. Es suficiente que la gente obedezca; lo que piensen constituye una preocupación secundaria. Pero, en un orden político democrático, siempre existe el peligro de que el pensamiento independiente se pueda traducir en la acción política, de manera que es importante eliminar la amenaza de raíz.

No se puede silenciar el debate, y de hecho, en un sistema de propa-

ganda que funcione adecuadamente, no debería silenciarse, puesto que si queda constreñido a límites adecuados tiene una naturaleza que sirve para reforzar al sistema. Lo que resulta esencial es establecer los límites con firmeza. La controversia puede imperar siempre que se adhiera a los presupuestos que definen el consenso de las elites, y lo que es más, debería fomentarse dentro de estos límites, colaborando así al establecimiento de estas doctrinas como la condición misma del pensamiento pensable y reforzando al mismo tiempo la creencia de que reina la libertad.

En breve, lo que resulta esencial es el poder de fijar el orden del día a seguir. Si la controversia en cuanto a la Guerra Fría se puede centrar en la contención de la Unión Soviética —la mezcla adecuada de fuerza, diplomacia y otras medidas—, entonces el sistema de propaganda ya ha logrado su victoria, con independencia de las conclusiones que se alcancen. La asunción básica ya se ha establecido: la Guerra Fría es un enfrentamiento entre dos superpotencias, una agresiva y expansionista, la otra la defensora del *status quo* y de los valores civilizados. Queda fuera del orden del día el problema de la contención de Estados Unidos, así como la pregunta de si se ha formulado el asunto adecuadamente, si la Guerra Fría no se deriva más bien de los esfuerzos de las superpotencias para asegurarse para sí unos sistemas internacionales que puedan dominar y controlar —sistemas que difieren enormemente en escala, que reflejan enormes diferencias en riqueza y poder. Las violaciones soviéticas de los acuerdos de Yalta y de Postdam son el tema de una considerable cantidad de literatura y están bien establecidos en la consciencia general; pasamos entonces a debatir su escala y su importancia. Pero sería necesaria una búsqueda cuidadosa para localizar discusiones en cuanto a las violaciones por parte de EEUU de los acuerdos de los tiempos de guerra y de sus consecuencias, aunque el juicio emitido por los mejores investigadores actuales, años después, es que “De hecho, el patrón soviético de cumplimiento [de los acuerdos de Yalta, Postdam y otros acuerdos de tiempos de guerra] no era diferente desde el punto de vista cualitativo del patrón norteamericano”. Si el orden del día se puede restringir a las ambigüedades de Arafat, los abusos y fracasos de los sandinistas, el terrorismo de Irán y Libia y otros asuntos presentados adecuadamente, entonces el juego se ha acabado, en lo esencial; quedan excluidos de la discusión el rechazo sin ambages



por parte de Estados Unidos e Israel, y el terrorismo y otros crímenes de Estados Unidos y sus clientes, no sólo mucho mayor en escala sino también incomparablemente más significativo en lo que a cualquier dimensión moral se refiere para los ciudadanos norteamericanos, que están en posición de mitigar o de poner fin a estos crímenes. Las mismas consideraciones se pueden aplicar a cualquier asunto que aborremos.

Una doctrina crucial, que es norma a lo largo de la historia, es la de que el Estado está adoptando una postura defensiva, resistiéndose ante los retos al orden y a sus nobles principios. Así, Estados Unidos invariablemente se resiste ante la agresión, a veces ante la “agresión interna”. Los principales investigadores nos aseguran que la guerra de Vietnam se “emprendió en defensa de un pueblo libre que se resistía ante la agresión comunista” cuando Estados Unidos atacó a Vietnam del Sur a principios de la década de 1960 para defender a una dictadura, que era su cliente, contra los agresores de Vietnam del Sur que estaban a punto de derrocarla; no es necesario ofrecer justificación alguna para establecer una verdad tan evidente, y ninguna se ofrece. Algunos incluso se refieren serenamente a “la estrategia de la Administración Eisenhower para disuadir la agresión amenazando con el empleo de armas nucleares” en Indochina en 1954, “cuando las fuerzas francesas se enfrentaron con la derrota” en Dien Bien Fu “a manos de los Viet Minh comunistas”, los agresores que atacaron a nuestros aliados franceses que estaban defendiendo a Indochina (de su población).<sup>7</sup> La opinión culta por lo general ha interiorizado esta postura. De este modo, el hecho de que uno se oponga a la agresión por parte de EEUU, categoría que no puede existir, es una imposibilidad lógica. Con independencia del pretexto que adopten, los críticos han de ser “partidarios de Hanoi”, o “apologistas del comunismo” en otros lugares, que defienden a los “agresores”, quizás intentando disimular sus “intenciones ocultas”<sup>8</sup>.

Una doctrina afín es la de que “el anhelo de ver duplicada en todo el mundo la democracia al estilo norteamericano ha constituido un tema persistente en la política exterior norteamericana”, como lo proclamó un corresponsal diplomático del *New York Times* después de la represión violenta de las elecciones haitianas por parte del gobierno militar apoyado por EEUU, que se había predicho extensamente que sería la consecuencia probable del apoyo a la junta por parte de EEUU.

Estos lamentables acontecimientos, observó, son “el recordatorio más reciente de la dificultad con la que se enfrentan los creadores de políticas norteamericanos a la hora de intentar imponer su voluntad, por benévola que ésta sea, en otras naciones”<sup>9</sup>. Estas doctrinas no requieren discusión alguna y se resisten ante montañas de evidencia en contrario. En algunas ocasiones, la simulación cae bajo el peso de su manifiesto absurdo. Entonces resulta permisible reconocer que no siempre fuimos tan benévolos ni estuvimos tan profundamente dedicados a la democracia como es el caso hoy. El llamamiento habitual a esta conveniente técnica de “cambio de dirección” a lo largo de muchos años no produce ningún ridículo, sino elogios para nuestra benevolencia indefectible, al tiempo que nos lanzamos a alguna nueva campaña para “defender la democracia”.

No tenemos ningún problema a la hora de percibir la invasión soviética de Afganistán como una agresión brutal, aunque muchos se resistirían a describir a las guerrillas afganas como “fuerzas de resistencia democrática” (Andrew Sullivan, redactor del *New Republic*).<sup>10</sup> Pero la invasión de Vietnam del Sur por EEUU a principios de la década de 1960, cuando el estado del terror al estilo latinoamericano impuesto por la fuerza de EEUU ya no podía controlar por la violencia a la población nacional, no se puede considerar como lo que fue. Verdad es que las fuerzas de EEUU se dedicaron directamente al bombardeo y la defoliación a gran escala en un esfuerzo por llevar a la población a campos de concentración donde se los podría “proteger” del enemigo a quien ellos, se admitía, apoyaban de buena gana. Bien es verdad que posteriormente una enorme fuerza de expedición de EEUU invadió y asoló al país, y a sus vecinos, con el objeto explícito de destruir lo que se reconocía claramente como la única fuerza política basada en las masas, y de eliminar el peligro de un acuerdo político que todos los lados buscaban. Pero, a lo largo de todo el proceso, Estados Unidos resistía ante la agresión en su anhelo de democracia. Cuando Estados Unidos estableció la dictadura asesina de Diem como parte de su esfuerzo para socavar los acuerdos de Ginebra y bloquear las elecciones prometidas porque se esperaba que las ganaría el lado equivocado, estaba defendiendo la democracia. “El país está dividido entre el régimen comunista del norte y un gobierno democrático en el sur”, informó el *New York Times*, comentando la reivindicación a efectos de que “los



vietminh comunistas estaban importando armas y soldados de China Comunista ‘de la forma más descarada’, amenazando al “Vietnam libre” después de haber “vendido su país a Peiping”<sup>11</sup>. En años posteriores, a medida que la “defensa de la democracia” se fue torciendo, se produjo un movido debate entre los halcones, o violentos, que opinaban que con la dedicación suficiente se podía destruir al enemigo, y los pacíficos, o palomas, que temían que el recurso de la violencia para lograr nuestros nobles fines podría resultar demasiado costoso; algunos preferían no ser palomas ni halcones, sino búhos, distanciándose de ambos extremos.

A lo largo de la guerra, dentro de la corriente principal se daba por sentado que Estados Unidos estaba defendiendo a Vietnam del Sur; poco prudentemente, llegaron a opinar los pacíficos. Años después, la doctrina queda más allá de la posibilidad de duda. Esto es así no sólo para quienes parodiaron el comportamiento más vergonzoso de los comisarios soviéticos a medida que aumentaban las atrocidades, no viendo en el bombardeo de saturación en zonas densamente pobladas nada más que la “desafortunada pérdida de vidas producida por los esfuerzos de las fuerzas militares norteamericanas para ayudar a los sudvietnamitas a rechazar la incursión de Vietnam del Norte y sus partisanos” – por ejemplo, en el Delta del Mekong, donde no había tropas de Vietnam del Norte incluso mucho tiempo después de que la agresión de Estados Unidos se hubiera ampliado a Vietnam del Norte, y donde evidentemente no se puede definir a la población local que resistía ante la invasión de EEUU y sus clientes como “sudvietnamitas”. Quizá no resulta sorprendente que de dichas fuentes podamos leer aun hoy, con todo lo que se ha llegado a saber, que “el pueblo de Vietnam del Sur deseaba su libertad del dominio por parte del país comunista al norte de sus fronteras” y que “Estados Unidos intervino en Vietnam... para establecer el principio de que los cambios en Asia no debían ser precipitados por una fuerza externa”<sup>12</sup>. Mucho más interesante resulta el hecho de que, aunque muchos sentirían repugnancia ante la vulgaridad de las apologías de las atrocidades a gran escala, para un número considerable de personas cultas habría poco que les causara sorpresa en esta evaluación de la historia, demostración muy notable de la eficacia de los sistemas democráticos de control del pensamiento.

Del mismo modo, en América Central hoy en día, Estados Unidos

se dedica a la defensa de la libertad en las “democracias incipientes” y a la “restauración de la democracia” en Nicaragua –referencia al período de Somoza, si es que las palabras tienen un significado. Al extremo del disenso expresable, en una amarga condena del ataque de EEUU a Nicaragua que llegó al extremo de invocar a la sentencia de Nuremberg, el redactor Jack Beatty del *Atlantic Monthly* escribió que “La democracia ha sido nuestro objetivo en Nicaragua, y para lograrla hemos patrocinado la matanza de miles de nicaragüenses. Pero matar por la democracia –incluso matar por medio de intermediarios por la democracia– no constituye una razón suficientemente buena para la guerra”<sup>13</sup>. Difícilmente podría uno encontrar un crítico más consecuente de la guerra de EEUU en los medios de comunicación empresariales que el periodista Tom Wicker del *New York Times*, quien condenó la aplicación de la Doctrina de Reagan en Nicaragua porque “Estados Unidos no tiene ningún derecho histórico o divino a llevar la democracia a otras naciones”<sup>14</sup>. Los críticos hacen suya, sin darle más importancia, la asunción de que nuestro “anhelo de democracia” tradicional ha guiado sin duda la política de EEUU respecto de Nicaragua desde el 19 de julio de 1979, cuando Somoza, cliente de EEUU, fue derrocado, aunque bien es verdad que no antes de que se produjera la transformación, milagrosa y en un momento curioso, por medio de un proceso misterioso. Una búsqueda concienzuda en todos los medios de comunicación revelaría una excepción ocasional a este patrón, pero dichas excepciones son raras, tributo adicional a la eficacia del adoctrinamiento.<sup>15</sup>

“América Central tiene un evidente interés propio en acosar” a los sandinistas “para que cumplan con sus compromisos de democratización”, y “aquellos norteamericanos que han instado repetidamente a los demás a ‘dar a la paz una oportunidad’ ahora están obligados a dedicar su atención y su pasión a garantizar que también la democracia tenga una oportunidad”, amonestaban los redactores del *Washington Post*, inmediatamente debajo del titular que lo proclama con orgullo un “Diario Independiente”<sup>16</sup>. No hay problema alguno a la hora de “garantizar la democracia” en los estados del terror respaldados por EEUU, firmemente dominados por un gobierno militar que se esconde tras una delgada fachada civil.

El mismo editorial advertía que “sobre la base de las incursiones



realizadas en Honduras [en marzo de 1988], resulta evidente cuáles son las amenazas para Honduras por parte de Nicaragua". Estas palabras se referían a operaciones militares en la parte norte de Nicaragua cerca de una frontera sin marcar, donde las fuerzas nicaragüenses, en acalorada persecución de los invasores de los Contra, penetraron algunos kilómetros en zonas de Honduras que desde hacía mucho tiempo se habían cedido a las "fuerzas por procuración" de EEUU –puesto que así las describen los grupos de presión favorables a los Contra en los documentos internos que circulan en la Casa Blanca, al igual que su propio portavoz oficial.<sup>17</sup> En Estados Unidos, estas acciones causaron una renovada indignación ante la amenaza de invasión de sus vecinos por parte de los sandinistas al servicio del amo soviético.

Esta sentida preocupación en cuanto a la inviolabilidad de las fronteras resulta muy impresionante –aunque queda algo empanada por el curioso concepto de la frontera como una especie de espejo unidireccional, de manera que su inviolabilidad no queda violada por los vuelos de abastecimiento de la CIA para las fuerzas por procuración que invaden Nicaragua desde sus bases en Honduras, o por los vuelos de reconocimiento de EEUU sobre el territorio nicaragüense para guiar y dirigir a éstas, entre otros crímenes. Dejando de lado estos asuntos, podemos evaluar la seriedad de la preocupación si volvemos a los resultados de un experimento controlado que la historia tuvo la delicadeza de construir. En el mismo momento en que la Prensa Libre se consumía de rabia por esta prueba más reciente de la agresividad de los violentos comunistas totalitarios, manifestándose en artículos de fondo y comentarios airados, el estado de Israel, cliente de EEUU, lanzó otra serie de sus operaciones periódicas en el Líbano. Estas operaciones se produjeron al norte del sector del sur del Líbano que Israel "prácticamente [ha] anexionado" como "zona de seguridad", integrando a la zona en la economía de Israel y "obligando" a sus 200.000 habitantes libaneses "a suministrar soldados para el ejército del Sur del Líbano", fuerza mercenaria israelí, por medio de una serie de castigos e incentivos.<sup>18</sup> Las operaciones israelíes incluían el bombardeo de campos de refugiados palestinos y de ciudades y pueblos libaneses, con destrucción a gran escala, docenas de muertos y un número considerable de heridos, entre ellos muchos civiles. Prácticamente no se informó sobre estas operaciones, y no se produjo ninguna reacción notable.

La única conclusión razonable es que la ira que se produjo en relación con la incursión nicaragüense, considerablemente menos grave y mucho más justificada, carecía por completo de principio y constituía un mero fraude.

El gobierno de EEUU explica de buena gana por qué apoya la violencia israelí muy al interior del Líbano: la base para dicho apoyo consiste en el derecho sagrado e inherente a la autodefensa que Estados Unidos y sus clientes pueden invocar legítimamente, y someter a una interpretación bastante amplia –aunque el caso, por supuesto, no es el mismo cuando se trata de los demás, especialmente de las víctimas del terror de EEUU. En diciembre de 1988, en el mismo momento en que todos los gestos de Yasser Arafat se estaban sometiendo a un estrecho escrutinio para determinar si había cumplido con las rigurosas normas de EEUU en cuanto al terrorismo, al que volveremos, Israel lanzó su vigésimosexta incursión de aquel año en el Líbano, atacando una base del Frente Popular para la Liberación de Palestina cerca de Beirut. Como suele suceder, no hubo intento alguno de proporcionar un pretexto creíble. "Los israelíes no estaban persiguiendo terroristas", observó el *Guardian* de Londres, "ni disponían de su excusa habitual de venganza inmediata: sencillamente, organizaron una demostración" para probar que "el puño de acero funciona perfectamente". "La causa de la demostración, evidentemente, era hacer un alarde de fuerza". Esta "exhibición espectacular", en la que no faltaron "paracaidistas, helicópteros y lanchas cañoneras", fue una "operación combinada injustificable desde el punto de vista militar (y por tanto tenía motivaciones políticas)". El momento en que se produjo explica la motivación política: la incursión se realizó durante el primer aniversario del inicio del alzamiento palestino en los territorios ocupados, donde Israel impuso "una presencia militar masiva, un toque de queda y una censura estricta" para bloquear "una huelga general conmemorativa". Además de esta evidente motivación política, "uno también puede discernir un intento calculado de socavar al Sr. Arafat" y sus pasos, mal acogidos, hacia el compromiso político, reforzando la mano de los militantes en el interior de la OLP.<sup>19</sup>

El ataque israelí se llevó al Consejo de Seguridad de la O.N.U., que votó 14 a 1, sin abstenciones, a favor de una resolución que lo "deploraba enérgicamente". La embajadora Patricia Byrne justificó el veto de



EEUU basándose en el hecho de que la “resolución negaría a Israel su derecho inherente a defenderse” de los “ataques y represalias que han tenido su origen al otro lado” de la frontera. *A fortiori*, Nicaragua tiene derecho a llevar a cabo ataques masivos y habituales muy al interior de Honduras, e incluso a hacer estallar bombas en Washington. Obsérvese que dichas acciones estarían mucho más justificadas que las que Estados Unidos defiende en el caso de su cliente, como resulta evidente de la comparación del nivel de provocación. Huelga decir que esta verdad es inexpresable, incluso impensable. Concluimos por tanto que el comentario por parte de los medios de comunicación en cuanto a Nicaragua es tan hipócrita como el pretexto de las autoridades estatales, de las que uno no espera otra cosa.<sup>20</sup>

La ausencia de comentarios sobre las acciones israelíes, o incluso de una información seria al respecto, puede quizá ser comprensible. Estas operaciones, después de todo, eran más bien discretas para los criterios israelíes. Así, no se podían comparar con las asesinas operaciones “Puño de Hierro” que tuvieron lugar en el Líbano en 1985; ni con los bombardeos de pueblos del valle de la Bekaa en enero de 1984, con 100 muertos y 400 heridos en una incursión, víctimas civiles en su mayoría, entre ellas 150 niños de una escuela bombardeada; o el ataque a una escuela del Organismo sobre Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, de Damour, en mayo de 1979, por parte de un F-16 israelí que lanzó paquetes de bombas, causando cuarenta y una víctimas infantiles, entre muertos y heridos. Se informó sobre estos casos, pero sin que se produjera ningún efecto sobre la elevada condición de “esta pequeña nación, símbolo de la decencia humana”, como los redactores del *New York Times* describieron a Israel durante un período álgido de la represión del levantamiento palestino por medio de palizas, asesinatos, ataques con gas y castigos colectivos, “un país que se preocupa por la vida humana”, como dijeron con admiración los redactores del *Washington Post* tras las atrocidades del Puño de Hierro.<sup>21</sup> El hecho de que Israel mantenga una “zona de seguridad” en el sur del Líbano, controlada por un ejército terrorista compuesto por mercenarios y respaldado por el poder israelí, pasa desapercibido, al igual que el secuestro habitual de buques en aguas internacionales por parte de Israel y otras acciones sobre las que rara vez se informa, y que podrían quizá provocar un mur-

mullo de protesta en el caso de las “víctimas dignas”<sup>22</sup>. Si los judíos soviéticos sufrieran el tratamiento que habitualmente se les da a los árabes, o si algún enemigo oficial como Nicaragua impusiera medidas represivas que se aproximaran a las que constituyen la norma en este “símbolo de la decencia humana”, el clamor sería ensordecedor.

Volveré a algunas observaciones adicionales sobre la protección extraordinaria que los medios de comunicación han proporcionado a Israel, al tiempo que han presentado a sus enemigos, especialmente a la OLP, como la encarnación del mal, dedicados exclusivamente al terror y la destrucción; y a los importantes logros de “ingeniería de la historia” que se han conseguido, año tras año, para conservar la imagen necesaria.<sup>23</sup>

Durante las operaciones de Israel de marzo de 1988, en ningún caso se produjo una persecución acalorada, e Israel no es un país empobrecido que intente sobrevivir al ataque terrorista de una superpotencia y su mortal guerra económica. Pero Israel es un cliente de EEUU, y hereda por tanto el derecho a la agresión. A Nicaragua, por el contrario, se le niega el derecho incluso a expulsar a las fuerzas de ataque de su propio territorio, sobre la base de la asunción tácita de que ningún Estado tiene derecho a defenderse del ataque de EEUU, otra doctrina crucial que subyace bajo cualquier debate serio.

Es interesante observar hasta qué punto ha penetrado profundamente esta última doctrina. De este modo, nada produce mayor histeria en Estados Unidos que los informes a efectos de que Nicaragua está pensando en obtener cazas MiG. Cuando los seguidores de Reagan lanzaron este tipo de informes como parte de la campaña para eliminar el mínimo peligro de una información honrada sobre las elecciones nicaragüenses, no deseadas, de noviembre de 1984, incluso los moderados, que hablaban con franqueza, advirtieron que EEUU tendría que bombardear a Nicaragua para destruir los supuestos MiGs, ya que “también tienen capacidad para actuar en contra de Estados Unidos”, lo cual constituye una manifiesta amenaza para nuestra seguridad (senador por Massachusetts Paul Tsongas).<sup>24</sup> En otro golpe propagandístico de diciembre de 1987, se presentó con bombo y platillo a un desertor sandinista, dándose elaborada publicidad a sus “revelaciones” sobre las intenciones sandinistas, la más sorprendente de las cuales era que Nicaragua esperaba obtener aviones a reacción para defender su terri-



torio del ataque de EEUU, lo que constituiría un ultraje intolerable. Se entiende perfectamente, por supuesto, que Nicaragua no disponía de ningún otro medio para evitar que la CIA abasteciera a las fuerzas que dirige dentro de Nicaragua, o para interferir los vuelos de reconocimiento de EEUU para suministrar a dichas fuerzas una información actualizada al minuto sobre el despliegue de las tropas nicaragüenses, con el fin de que las primeras pudieran atacar con seguridad a los “objetivos blandos” (esto es, objetivos civiles prácticamente desprovistos de defensa) de acuerdo con las instrucciones del Pentágono y del Departamento de Estado. Pero ninguna de estas reflexiones perturbó la manifestación de indignación sobre esta prueba más reciente de la agresividad comunista.<sup>25</sup>

La lógica resulta evidente: Nicaragua no tiene derecho a la defensa propia. Es intolerable, equivalente a la agresión, que Nicaragua interfiera con la violencia y el terror de EEUU pretendiendo proteger su propio espacio aéreo, o defendiendo a su población de las fuerzas por procuración de EEUU, “la resistencia democrática” de la retórica pública. Por el mismo motivo, el informe del desertor sandinista a efectos de que Nicaragua tenía intención de reducir sus fuerzas militares al tiempo que suministraba armas ligeras a la población para su defensa contra una posible invasión por parte de EEUU produjo una indignación adicional, al transmutarlo la Prensa Libre en una amenaza de conquista del hemisferio.

Esta doctrina del consenso de elite es, una vez más, muy reveladora, al igual que lo es el hecho de que su significado no se pueda percibir. Podríamos imaginarnos la reacción si la Unión Soviética respondiera de manera similar a la amenaza a su seguridad, considerablemente más grave, que suponen Dinamarca o Luxemburgo.

Es interesante notar que, en pleno furor en cuanto a los planes sandinistas para obtener los medios para su propia defensa, Estados Unidos inició el envío de aviones a reacción avanzados F-5 a Honduras el 15 de diciembre de 1987, hecho sobre el cual el *New York Times* no informó.<sup>26</sup> Puesto que solamente Estados Unidos y sus aliados se preocupan por la seguridad, resulta evidente que Nicaragua no podía tener ninguna objeción legítima a este acontecimiento, y sin duda sería superfluo informar sobre las protestas en la prensa hondureña por las “deudas que nos ha impuesto injustamente la presión ejercida por

Estados Unidos” que nos obligan a “pagar la factura correspondiente a los cazas F-5, que de ningún modo contribuyen a dar de comer a nuestro pueblo hambriento”, aunque complacen a los dirigentes militares.<sup>27</sup>

Uno podría preguntarse por qué Nicaragua estaba tan decidida a obtener aviones *soviéticos*. ¿Por qué no aviones Mirage franceses? De hecho, a los sandinistas les habría encantado obtener interceptores de reactores franceses, y lo manifiestan abiertamente. No podían hacerlo, porque la presión de EEUU había bloqueado el suministro de cualquier fuente que no fuera comunista. Sobre todo esto no se puede informar, ya que se descubriría el pastel. Así, Stephen Kinzer y James LeMoyné del *New York Times* nunca modificarían sus esfuerzos a la hora de fomentar la histeria en relación con la amenaza sandinista informando sobre estos hechos, ni se preguntarían por las razones por las que podrían estar intentando los sandinistas obtener interceptores de reactores.<sup>28</sup> Este tipo de indagación va más allá de los límites del decoro, ya que socavaría la campaña para presentar la agresión y el terror por parte de EEUU como legítima defensa.

El asunto es más general. El ataque contra aquellos a los que se designa como “comunistas” normalmente les obligará a recurrir a la Unión Soviética para su defensa, especialmente cuando Estados Unidos presiona a sus aliados y a las instituciones internacionales de préstamos para que se abstengan de ofrecer ayuda, como sucede en el caso de la Nicaragua contemporánea, donde a principios de 1981 estaba suficientemente claro que “Nicaragua, antes o después, se convertirá en otro cliente soviético, a medida que EEUU ejerza su dominio completo para impedir su reconstrucción y desarrollo, rechace los esfuerzos por mantener relaciones decentes y apoye el hostigamiento y la intervención – modelo aplicado en China, en Cuba, a Arbenz de Guatemala, al Chile de Allende, a Vietnam en la década de 1940 y durante el período posterior a 1975, etc.”<sup>29</sup> Esta consecuencia predecible de las políticas, por tanto, se puede tomar como prueba retrospectiva de que, de hecho, estamos empeñados, sencillamente, en la defensa contra los designios del Kremlin para la conquista del mundo; y los periodistas que se comportan correctamente pueden referirse a los “sandinistas que reciben suministros soviéticos” en un tono debidamente lúgubre, como lo suelen hacer, eludiendo cuidadosamente los motivos. Una ventaja adicional es el hecho de que ahora verificamos la sinceridad de la Unión



Soviética en sus manifestaciones en relación con la relajación de la tensión, preguntando si ésta negará ayuda a Nicaragua si nosotros reducimos la ayuda a los Contra. La idea de que la sinceridad de EEUU podría verificarse negando ayuda a Turquía o El Salvador es demasiado exótica como para merecer un comentario.

Una consecuencia del principio de que los enemigos oficiales no tienen derecho a la defensa propia es que si Nicaragua ataca a las fuerzas de los Contra dentro de su territorio después de que éstas rompan las negociaciones, Estados Unidos claramente tiene derecho a suministrar una ayuda militar adicional a sus mandatarios. La Enmienda Byrd sobre "Ayuda para la Resistencia Nicaragüense", aprobada en agosto de 1988 con el efusivo apoyo de los principales pacíficos del Senado, permitió suministrar ayuda militar a las fuerzas por procuración dentro de Nicaragua de resultas de la "iniciación por parte sandinista de un ataque militar sin provocación y de cualquier otra acción hostil dirigida contra las fuerzas de la Resistencia Nicaragüense" o "un nivel inaceptable continuado de ayuda militar por parte de países del bloque soviético, Cuba entre ellos" (habiéndose eliminado todas las demás fuentes, y habiéndose otorgado a las autoridades de EEUU el derecho a determinar lo que es "aceptable").<sup>30</sup> Los medios de comunicación habían dado por sentado a lo largo de todo el proceso que sería indignante, y constituiría otra demostración de intransigencia comunista, que el ejército de Nicaragua atacara a las fuerzas terroristas dentro de su propio país. Unos meses antes, la prensa había informado sobre una carta de los Demócratas del Congreso al presidente Ortega manifestando su "grave preocupación" en relación con la posibilidad de una ofensiva militar dirigida hacia los Contra, que llevaría a la consideración de "una renovación de la ayuda militar a las fuerzas de la resistencia"<sup>31</sup>. La prohibición de la defensa propia permanecía en vigor después de que los clientes de EEUU hubieran socavado las negociaciones con exigencias de última hora pensadas para estos efectos, a las que volveremos.

La reacción de los medios de comunicación es comprensible, si nos basamos en la asunción convencional de que la "resistencia" y la oposición política que la apoya dentro de Nicaragua constituyen la más legítima de las "dos facciones nicaragüenses", como describió el *Times* a los Contra y al gobierno.<sup>32</sup> El consenso bipartidista en cuanto a estos

asuntos, incluidos los locuaces pacíficos del Congreso, refleja el entendimiento de que Nicaragua no tiene derecho alguno a resistir a las fuerzas terroristas de EEUU implantadas en su territorio, o a las que la atacan desde fuera; los clientes de EEUU quedan inmunes a estas limitaciones, y pueden incluso secuestrar buques, bombardear objetivos civiles en otros países, etcétera, en "legítima defensa".

El debate en el Senado celebrado el 5 de agosto sobre la enmienda Byrd adquiere un mayor significado de resultas del momento en que se produce. Tres días antes, la "resistencia", tras dejar paso a un barco patrulla del ejército, había atacado al *Mission of Peace*, un buque atestado de pasajeros, matando a dos personas e hiriendo a veintisiete, entre ellas a un ministro baptista de Nueva Jersey, el reverendo Lucius Walker, que encabezaba una delegación religiosa de EEUU. Todas las víctimas eran civiles. Los senadores Byrd y Dodd, y otros pacíficos, que condenaban amargamente a los sandinistas al tiempo que ensalzaban el "valeroso mando" de los "Presidentes Democráticos" de Guatemala, El Salvador y Honduras, no hicieron comentario alguno sobre este suceso; quizá pasaron por alto la minúscula mención que se hizo al respecto el día antes en el *New York Times*, inmediatamente después de una columna en la que se informaba sobre sus deliberaciones.<sup>33</sup> No se produjo ningún comentario posterior. La lógica, una vez más, es muy evidente. Si los sandinistas intentan extirpar a los terroristas dirigidos por EEUU que realizaron el ataque, eso prueba que son totalitarios comunistas y que Estados Unidos tiene derecho a enviar ayuda militar al igual que ayuda "humanitaria" a la "resistencia" para que pueda realizar este tipo de tareas con mayor eficacia. Dado el entusiasta apoyo a la acción del Senado por parte de las primeras voces liberales del mismo —Harkin, Kennedy, Kerry, Mitchell, Pell y otros—, podemos asumir que aceptan estos principios.

Se reconoce con franqueza que el principal argumento a favor de la violencia de EEUU es que "una guerra de desgaste más prolongada debilitará tanto al régimen, provocará un endurecimiento tan radical de la represión y logrará un apoyo tan suficiente por parte de la población descontenta de Nicaragua que antes o después el régimen será derrocado por la revolución popular, se autodestruirá por medio de golpes internos o divisiones de mando, o sencillamente capitulará para salvar lo que pueda". Esta formulación de Viron Vaky, secretario de



Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos bajo la administración Carter, se limita a reiterar el empuje del programa de la CIA para 1981, esbozado por el analista de la CIA David MacMichael en un testimonio ante el Tribunal Internacional. En tanto que pacífico, Vaky considera que el bosquejo de las acciones es “defectuoso” y la estrategia impracticable, ya que los Contra han sido incapaces de lograr éxitos militares a pesar de las extraordinarias ventajas que les ha aportado su patrocinador, o “de obtener un apoyo político significativo dentro de Nicaragua”. “Por muy razonable o idealista”, continúa, que sea la exigencia de EEUU a efectos de que los sandinistas “entreguen el poder” a los favoritos de EEUU, que carecen de apoyo político, esta meta está más allá de nuestro alcance. Insta por tanto a que se produzca una “contención positiva” en lugar de una “regresión” para evitar que “Nicaragua represente una amenaza militar para Estados Unidos” y para reducir a dicho país de manera que cumpla con los derechos humanos y se desplace hacia un “sistema interno... menos virulento”. Puesto que la fuerza no es factible, Estados Unidos debería buscar “otras estrategias” para perseguir “el objetivo de fomentar la autodeterminación nicaragüense” que con tanto idealismo ha perseguido. Debería buscar un acuerdo diplomático con “inspecciones de fronteras, observadores neutrales”, y otras medidas que Nicaragua llevaba siete años solicitando (hecho del que no se hace mención), aunque “Estados Unidos, francamente, tendrá que hacerse cargo de la mayor parte de su aplicación”. Estados Unidos ha de estar preparado a emplear la fuerza si detecta una violación, al tiempo que asiste a “las democracias de América Central” amenazadas por la subversión y la agresión nicaragüenses.<sup>34</sup>

Se ha de recordar que éstos son los pensamientos de uno de los principales pacifistas, y que no parecen ser remarcables para la opinión liberal americana, hechos importantes en relación con la cultura política. Estos pensamientos entran de lleno dentro del concepto de la política de EEUU esbozado por otro especialista en América Latina de la administración Carter, Robert Pastor, al extremo pacífico del espectro político e ideológico –ahora, quizá, mucho más allá del mismo. Defendiendo la política de EEUU a lo largo de muchos años, Pastor escribe que “Estados Unidos no quería controlar a Nicaragua o a otras naciones de la región, pero tampoco quería permitir que los acontecimientos quedaran fuera de control. Quería que los nicaragüenses ac-

tuaran independientemente, *salvo* cuando el hecho de hacerlo afectara adversamente a los intereses de EEUU”<sup>35</sup>. En pocas palabras, Nicaragua y otros países deberían tener libertad –para hacer lo que queremos que hagan– y deberían elegir su trayectoria independientemente, siempre que su elección se conformara a nuestros intereses. Si utilizan con imprudencia la libertad que les concedemos, entonces tendremos, como es natural, derecho a reaccionar por medio de la autodefensa. Obsérvese que estas ideas se compaginan estrictamente con el concepto nacional de la democracia como una forma de control de la población.

Los presupuestos elementales del discurso incluyen los que se acababan de estudiar: la política exterior de EEUU está guiada por un “anhelo de democracia” y una intención benévola general; la historia y el historial de planificación secreta pueden indicar algo considerablemente diferente, pero no están en el orden del día de los medios de comunicación. De donde se deduce que el uso de la fuerza solamente puede ser un ejercicio de autodefensa y que quienes se resisten han de ser agresores, incluso en su propio territorio. Lo que es más, ningún país tiene derecho a la autodefensa contra el ataque de EEUU, y Estados Unidos tiene el derecho natural a imponer su voluntad, por la fuerza si fuera necesario y factible. Estas doctrinas no se tienen que expresar, aparte de las odas periódicas a nuestra grandiosa nobleza de objetivos. Más bien, sencillamente se presuponen, fijándose los límites del discurso, y entre los adecuadamente formados, los límites del pensamiento pensable.

En el primer capítulo, hice referencia a algunas de las maneras de enfocar el estudio de los medios de comunicación y de evaluar los patrones de actuación de los medios de comunicación. Un método adecuado consiste en considerar el espectro de opinión cuya expresión se permite. Según el modelo de propaganda, uno esperaría que el espectro estuviera limitado por el consenso de las elites poderosas al tiempo que se fomentara un debate táctico en su interior. Una vez más, el modelo está bien confirmado.

Considérese la política de EEUU con respecto a Nicaragua, tema que probablemente ha provocado más controversia y más retórica apasionada que cualquier otro durante los últimos años. Se produce un debate entre los halcones y las palomas, o los violentos y los pacíficos. La postura de los violentos se expresa por medio de una declaración



conjunta de los Departamentos de Estado y de Defensa en el Día Internacional de los Derechos Humanos, en diciembre de 1986: “en el continente americano, no existe ningún régimen más bárbaro y sanguinario, ningún régimen que viole los derechos humanos de manera más constante y permanente que el régimen sandinista”. Sentimientos similares se manifiestan en los medios de comunicación y en el sistema político, y se deduce que deberíamos apoyar a la “resistencia democrática” ante el terror comunista. En el otro extremo, los pacíficos acuerdan por lo general que deberíamos hacer caso omiso del Tribunal Internacional, las Naciones Unidas y otros “foros hostiles” que se muestran complacientes con los comunistas y con el antiamericanismo patológico del Tercer Mundo. Ofrecen su apoyo al “noble objetivo” de la administración Reagan – “democratizar” Nicaragua de alguna manera – pero sienten que los Contra “no son el instrumento que logrará dicho objetivo” (representante Michael Barnes, uno de los críticos más volubles de la opción Contra).<sup>36</sup> Uno de los principales pacíficos del Senado, Alan Cranston, reconoce que “el esfuerzo de los Contra es lamentablemente inadecuado para lograr... la democracia en Nicaragua”, de manera que deberíamos hallar otros medios para “aislar” al “reprensible” gobierno de Managua y “dejar que se pudra en sus propios jugos” al tiempo que se bloquean los esfuerzos sandinistas “para exportar la revolución violenta”<sup>37</sup>.

Los medios de comunicación sí observan que “la política del Sr. Reagan de apoyo [a los Contra] es un fracaso evidente”, de manera que deberíamos “dar nuestro consentimiento a algún acuerdo regional negociado que los vecinos de Nicaragua hicieran cumplir” (Tom Wicker).<sup>38</sup> Manifestando la misma idea, los redactores del *Washington Post* ven a los Contra como un “instrumento imperfecto”, de manera que hemos de hallar otros medios para “devolver a Nicaragua a una modalidad centroamericana” e imponer “una conducta razonable según las normas de la región”. También hemos de reconocer que “los sandinistas son comunistas de la escuela cubana o soviética” y constituyen “una grave amenaza –para la paz civil y la democracia en Nicaragua y la estabilidad y seguridad de la región”. Hemos de “contener... el empuje agresivo de los sandinistas” y exigir “evidencia creíble en cuanto a la reducción del apoyo sandinista a la guerrilla de El Salvador”<sup>39</sup>. Nada de esto se puede someter a debate: es “una situación de hecho: es

verdad”, proclaman los redactores. Por tanto no es pertinente, por ejemplo, que los esfuerzos de la administración Reagan para proporcionar evidencia para sus acusaciones de apoyo nicaragüense a las guerrillas de El Salvador fueran desestimados por el Tribunal Internacional como carentes de mérito, y de hecho escasamente merezcan la burla. En los límites externos de la disensión, el periodista del *Nation*, Jefferson Morley, escribió en el *New York Times* que deberíamos reconocer que Nicaragua podría estar “más allá del alcance de nuestras buenas intenciones”<sup>40</sup>.

Otros pacíficos opinan que no deberíamos rechazar con excesiva celeridad el razonamiento del Departamento de Estado a efectos de que las cooperativas agrícolas son objetivos legítimos para los ataques de los Contra porque “en una sociedad marxista preparada para la guerra, no existen líneas divisorias claras que distingan entre oficiales, soldados y civiles”; lo que se requiere es un cuidadoso “análisis de los beneficios en comparación con los costos”, una determinación de “la cantidad de sangre y miseria que se introducirá, y de la posibilidad de que la democracia emerja al otro extremo” (Michael Kinsley, redactor del *New Republic*).<sup>41</sup> Ni Kinsley ni el Departamento de Estado explican por qué razonamientos similares no justifican los ataques de Abu Nidal a los kibbutzim israelíes, mucho mejor defendidos contra una amenaza incomparablemente menor. Y se considera que naturalmente tenemos derecho, en nuestra calidad de soberanos del mundo, a efectuar el análisis de los beneficios y los costos e introducir sangre y miseria si determinamos que la posibilidad de la “democracia” es lo suficientemente elevada.

Obsérvese que para los pacíficos resulta evidente, y no requiere comentarios, el hecho de que no hay necesidad de imponer “acuerdos regionales” a nuestros amigos salvadoreños y guatemaltecos, quienes durante este período han exterminado a unas 150.000 personas, o a nuestros clientes de Honduras, quienes exterminan abiertamente a un número menor de personas pero han permitido que cientos de miles mueran de hambre, cuando el país exporta comida para el beneficio de las empresas de agricultura. No tenemos necesidad de “aislar” a estas figuras admirables, ni de “dejar que se pudran en sus propios jugos”. Sus países ya se han adaptado a la “modalidad centroamericana” de represión, explotación y gobierno por parte de elementos privilegiados que



acceden a las demandas del poder de EEUU (la “democracia”), de manera que incluso las atrocidades más repugnantes no se han de tener en cuenta; y merecen ayuda y un apoyo entusiasta, acompañado por ocasionales suspiros de lamento en relación con las tendencias violentas en estas sociedades atrasadas si el terror, la tortura y las mutilaciones que nosotros organizamos y apoyamos se hacen demasiado visibles como para ser pasados por alto o atacan objetivos equivocados (por ejemplo, personalidades políticas de la democracia cristiana, en lugar de los organizadores sindicales o de grupos de campesinos).

Para 1986, la opción Contra contaba con la oposición del 80 por ciento de los “dirigentes”, según las encuestas.<sup>42</sup> Por tanto, el modelo de propaganda predeciría un debate en relación con la ayuda a los Contra, pero la práctica unanimidad en cuanto a la oposición a los sandinistas. Para verificar la hipótesis, considérese el período de máxima intensidad en el debate en cuanto a la política de Nicaragua, los tres primeros meses de 1986, cuando la atención se centraba en el asunto de la ayuda a los Contra. Durante estos meses, el *New York Times* y el *Washington Post* publicaron no menos de ochenta y cinco columnas de opinión sobre el tema (entre ellas, las de los periodistas habituales). Como era de esperar, existía una división de opiniones en cuanto a la ayuda a los Contra. Pero de las ochenta y cinco columnas, ochenta y cinco criticaban a los sandinistas, y la enorme mayoría los criticaba duramente; así, en cuanto al tema principal se logró una conformidad de cerca del 100 por ciento.

No es que no existan voces más favorables en la corriente principal. Hay muchas personas que fácilmente podrían ser admitidas al foro si las cosas que tienen que decir fueran las adecuadas,<sup>43</sup> entre ellas los especialistas en América Latina cuyos artículos de opinión se rechazan de manera habitual, o la agencia benéfica de desarrollo Oxfam, que cuenta con una dilatada experiencia en la región, y que halló que el historial de Nicaragua era “excepcional” entre los setenta y seis países en desarrollo en los que trabaja por lo que concierne al compromiso de los dirigentes políticos en cuanto a la “mejora de la condición del pueblo, y el fomento de su participación activa en el proceso de desarrollo”.

O pensemos en el fundador de la democracia costarricense, José Figueres, quien en ese mismo momento dijo en una entrevista estar “a favor de los sandinistas” y tener “una opinión muy favorable sobre los

sandinistas”, a pesar de que por lo general éste no es el caso en Costa Rica, ya que la opinión pública se ve “considerablemente influida” por la “oligarquía costarricense”, que es la “dueña de los periódicos y de las emisoras de radio”. Añadió que el margen de 2 a 1 a favor de los sandinistas durante las elecciones de 1984, que presencié en calidad de observador, “sin duda parecía reflejar lo que se puede ver por las calles”. Figueres condenó las “increíbles políticas de Washington de persecución a los sandinistas” y sus esfuerzos “por deshacer las instituciones sociales de Costa Rica” y “entregar la totalidad de nuestra economía a los empresarios,... a la oligarquía local o a las empresas de EEUU o de Europa”, aunque, dado su dedicado apoyo a Estados Unidos, para él estos esfuerzos “sin duda tienen buenas intenciones”. Estados Unidos está “convirtiendo a la mayoría de los centroamericanos en mercenarios” debido a su ataque contra Nicaragua, continuó. “He estado familiarizado con Nicaragua toda mi vida”, “y nunca he visto anteriormente, como lo veo ahora, un gobierno nicaragüense que se preocupe por su pueblo”. Comentando una visita reciente, dijo que había encontrado “una medida sorprendente de apoyo por el gobierno” en este “país invadido”, añadiendo que Estados Unidos debería permitir a los sandinistas “terminar lo que han comenzado en paz; se lo merecen”<sup>44</sup>.

Estos comentarios carecen de utilidad ideológica, al igual que la declaración de Figueres a efectos de que “comprende el porqué” de la clausura de *La Prensa*, habiéndose dedicado él mismo a censurar la prensa cuando Costa Rica estaba bajo el ataque de Somoza. Por tanto, en los medios de comunicación se ha de censurar a la principal personalidad democrática de América Central, aunque su nombre se puede seguir invocando en beneficio de la cruzada antisandinista. Así, el corresponsal del *New York Times* en América Central, James LeMoyne, en una de sus diatribas antisandinistas, se refiere a Figueres como “el hombre a quien se considera de manera generalizada como el padre de la democracia costarricense”, pero no nos cuenta, ni nos lo contarán jamás ni él ni sus colegas, lo que Figueres tiene que decir sobre los sandinistas.<sup>45</sup>

Las primeras páginas del *New York Times* presentan una imagen de Nicaragua tal como la vio James LeMoyne cuando pasó por allí; un estado brutal y represivo bajo “el gobierno de un partido” con “multitudes de chiquillos, con la tripa hinchada, en las calles”, unos agentes



de seguridad del Estado “omnipresentes” y el ejército “en todas partes”, un apoyo creciente por el “ejército campesino” que luchaba contra la opresión sandinista y la población reducida a la “amargura y la apatía”, aunque resistiendo de algún modo ante un ataque del extranjero bajo el cual cualquier otro Estado de la región, y de casi cualquier lugar, se hubiera desintegrado rápidamente. No presentan la imagen que vio Figueres, o Edgar Chamorro, portavoz de los Contra en la prensa nombrado por la CIA, durante una visita de tres semanas realizada inmediatamente antes que la de LeMoyne. Al hablar con “docenas de personas” en las calles tras una reunión sandinista, Chamorro encontró que estaban “muy al día, muy informados a nivel político, muy comprometidos. Pensaban por sí mismos; estaban allí porque querían estar allí”. “Ya se acabaron aquellos días en los que un dictador podía levantarse y arengar a la gente”. “Lo que he visto aquí es muy, muy positivo, la gente camina por sí sola”, recuperando la “dignidad y el nacionalismo” que habían perdido bajo Somoza. Los Contra es “como los gurkas de India”, con la “mentalidad colonial” de quienes “luchan por el imperio”. Habló en la radio y en la televisión de Managua, diciendo “todo lo que pensaba”, criticando al marxismo-leninismo. Vio “muy poca militarización” y “un profundo sentido de igualdad”, “uno de los logros de la revolución”. “No vi a la gente hambrienta”; “la mayoría de la gente tiene aspecto saludable, fuerte, animado”, y vio pocos pordioseros, a diferencia de en Honduras “o incluso en las calles de las ciudades de EEUU”. La oposición es la antigua oligarquía, “dependiente de Estados Unidos”. La guerra ha llevado a un sentido de “nacionalismo, patriotismo” en los jóvenes reclutados para el ejército. Los sandinistas siguen siendo un “partido del pueblo,” con compromisos y metas “que inspiran a mucha gente”. Son “nacionalistas nicaragüenses, revolucionarios”, que “desean un modelo más igualitario, para mejorar las vidas de la mayoría”. Las elecciones fueron “buenas”, el gobierno es “legítimo”, y deberíamos “intentar cambiar desde dentro”. Después de abandonar a los Contra, añade Chamorro en otro lugar, perdió la facilidad de acceso a los medios de comunicación de que disfrutaba en aquellos días en que formaba parte de ella.<sup>46</sup>

Los lectores del *New York Times* no están expuestos a una gama de percepciones como éstas, sino sólo a una; la que se conforma a las necesidades del Estado.

Un año después de estas visitas, en Managua y en algunas zonas rurales empezaron a aparecer graves problemas de desnutrición, a medida que el terror y la guerra económica de EEUU continuaron causando amargas pérdidas en un país patéticamente pobre, que, por razones históricas y geopolíticas evidentes, depende totalmente de las relaciones económicas con Estados Unidos. Quizá George Shultz, Elliott Abrams y sus cohortes no hayan derrocado al gobierno, pero pueden vanagloriarse de haber vencido a los programas de desarrollo, de cuidados médicos preventivos y de bienestar social que, por vez primera, habían ofrecido una esperanza a la mayoría pobre. Sus logros se pueden medir por el considerable aumento en las muertes infantiles, las epidemias y otras características normales de la “modalidad centroamericana” que se ha de “restaurar” en Nicaragua por parte de la benevolencia de EEUU.<sup>47</sup> Puede que el sistema de propaganda oculte sus huellas hoy en día, pero la historia juzgará de otro modo.

Volviendo a las ochenta y cinco columnas de opinión del *Times* y del *Post*, más interesante incluso que la hostilidad uniforme hacia los sandinistas era la selección de temas. Existen dos diferencias muy considerables entre los sandinistas y los favoritos de EEUU que se adhieren a las “normas de la región”. La primera es que los sandinistas, sean cuales sean sus pecados, no habían realizado campañas de asesinatos de masas, torturas, mutilaciones y terror general para traumatizar a la población. En ninguna de las ochenta y cinco columnas existe ni una frase que haga referencia a este asunto, ilustración de su importancia en la cultura política americana. La segunda diferencia principal consiste en que los sandinistas desviaron los recursos a la mayoría pobre e intentaron implementar medidas de reforma social significativas —con bastante éxito, de hecho, hasta que la guerra económica y militar de EEUU logró producir una inversión en las mejoras, mal recibidas, en las normas de sanidad y bienestar social, alfabetización y desarrollo. Estos hechos merecen dos frases de pasada en las ochenta y cinco columnas, una de ellas la amarga condena del “mando generalmente péximo” en esta “sociedad represora”. No se dice ni una palabra sobre el hecho de que, a diferencia de los clientes de EEUU, los sandinistas habían protegido a los pobres del hambre, causando de este modo gran desprecio por su mala administración económica —desprecio que no se siente con respecto a Honduras, donde se permite que las masas de



campesinos mueran de hambre mientras que se exportan productos agrícolas especializados y carne de vacuno a Estados Unidos; ni con respecto a los elaboradores de las políticas de EEUU, que impusieron políticas de desarrollo en América Central que produjeron un crecimiento estadístico (causa de considerable satisfacción en EEUU) y también hambre (aunque sobre ésta oímos hablar mucho menos). Tampoco se mencionan en ningún sitio los esfuerzos sandinistas para el mantenimiento de una postura neutral –por ejemplo, de las cifras comerciales durante el tiempo del embargo por parte de EEUU que prácticamente eliminaron la empresa privada y colaboraron para reducir a la economía a la mera supervivencia: en aquel momento el comercio nicaragüense con el bloque soviético estaba al mismo nivel que el comercio de EEUU con estos países, y muy por debajo del de Europa y de gran parte del Tercer Mundo.<sup>48</sup>

Estos asuntos no aportan ayuda alguna a la doctrina requerida, y por tanto es mejor pasarlos por alto.

De manera más general, la totalidad de las ochenta y cinco columnas permanecen prudentemente dentro de los límites aprobados. Incluso los pocos colaboradores que en otros lugares han adoptado una postura independiente aquí no lo hacen.<sup>49</sup>

Un lector llamó la atención de Tom Wicker, pacífico del *Times*, sobre el estudio publicado en relación con el espectro de la opinión expresable; éste dedicó parte de una columna a atacarlo.<sup>50</sup> Dio dos razones para descartar el estudio. En primer lugar, no veía “motivo alguno para que yo tenga que alabar a los sandinistas”, lo que es verdad y no viene al caso. Como quedó claro y evidente, el punto a discutir no eran las contribuciones individuales, sino más bien el alcance de los puntos de vista permitidos; no se trata de si se le debería dar a Wicker una oportunidad para manifestar su opinión a efectos de que se debe imponer un “acuerdo regional” solamente en Nicaragua, y que deben imponerlo los estados del terror de EEUU, sino de si, en una prensa libre, el espectro de la opinión debería verse limitado por esta postura, como extremo de disensión permisible de la política gubernamental. El segundo motivo de Wicker era que la “crítica basada en la regla y en la calculadora a menudo es tan simplista como el reportaje que pretende medir”. Curioso por saber si Wicker disponía de una u otra crítica metodológica para apoyar este juicio, le escribí una serie de cartas soli-

citando dicha información, a las que no recibí contestación alguna, de lo cual sólo puedo concluir que su objeción se corresponde con la idea misma de llevar a cabo una investigación racional sobre el funcionamiento de los medios de comunicación. Obsérvese que su reacción, y la forma general de descartar la documentación extensa que soporta al modelo de propaganda, está muy de acuerdo con sus predicciones.<sup>51</sup>

Quizá, no obstante, esta muestra extraída de los principales diarios durante el momento álgido del debate sea engañosa. Volvamos, pues, nuestra atención a otra muestra, de un año después. Durante los seis primeros meses de 1987, los dos mismos diarios publicaron sesenta y una columnas y editoriales correspondientes a la política de EEUU en Nicaragua. De éstos, trece preferían medidas diplomáticas a la ayuda a los Contra, sin hablar para nada de los sandinistas. De los cuarenta y ocho que manifestaron una opinión, cuarenta y seis eran antisandinistas; una vez más, en su mayoría, rabiosamente antisandinistas. De éstos, dieciocho estaban a favor de los Contra y veintiocho no lo estaban, basándose principalmente en el hecho de que los Contra eran ineptos y no podrían ganar, o de que la meta de “forzar a la revolución sandinista a acoplarse al molde democrático americano” podría no compensar “el riesgo” (John Oakes del *New York Times*, al extremo de la disidencia.<sup>52</sup>) De las dos columnas que manifestaron cierta simpatía por los sandinistas, una la firmaba el embajador nicaragüense Carlos Tunnerman, la otra el Dr. Kevin Cahill, director del centro de enfermedades tropicales del Hospital de Lenox Hill de Nueva York, el único comentarista no nicaragüense que podía basarse en una experiencia propia en Nicaragua y en otros lugares del Tercer Mundo<sup>53</sup>; la suya también fue la única columna que hizo mención del éxito de las medidas nicaragüenses en relación con la sanidad y la alfabetización y de la “lucha contra la opresión y la corrupción” bajo condiciones extraordinariamente adversas impuestas por el terror y la guerra económica de Estados Unidos. La de Cahill es una de las dos contribuciones, de un total de sesenta y una, que hacen referencia a la sentencia del Tribunal Internacional y al propio derecho internacional; otras dos, una de ellas de Tunnerman, incluyen una referencia indirecta a los mismos. Estos hechos reflejan la actitud hacia el gobierno por la ley que existe en la cultura intelectual dominante. Leemos que Estados Unidos “trabaja por medio de los Contra para restaurar la democracia en Nicaragua y



romper con los lazos cubanos y soviéticos de los sandinistas” y que el papel de Washington consiste en “colaborar para contener la propagación de la revolución sandinista más allá de Nicaragua” (los redactores del *Washington Post*, que sugieren que Estados Unidos verifique el consenso latinoamericano a efectos de que “existe más posibilidad de refrenar a los sandinistas por medio de una envoltura política que del ataque militar”). Y se nos presentan acusaciones de “genocidio” de los indios Miskito (William Buckley, que admite que los sandinistas no han llegado aún a los niveles de Pol Pot, aunque resulta evidente que ésta es la dirección a la que se encaminan). Pero aparte de las de Cahill, no leemos ni una palabra sobre las políticas constructivas que se desarrollaron con éxito, y que, en el mundo real, causaron que el terror de EEUU “refrenara a los sandinistas” –otro pensamiento inexpresable.<sup>54</sup>

Una vez más, ni una frase hace referencia al hecho de que, a diferencia de los clientes de EEUU en las “democracias incipientes”, los sandinistas no habían iniciado una campaña de terror y matanzas para traumatizar a sus poblaciones. Más bien, tal como lo demuestra una enorme cantidad de documentos de los que se suele hacer caso omiso, la tarea se les había asignado a las fuerzas por procuración de EEUU; este hecho inconveniente lo sitúa en su perspectiva adecuada el antiguo director ejecutivo del *Times*, A.M. Rosenthal, que escribe que “los artículos sensibles y cuidadosamente informados de James LeMoyne aparecidos en el *Times* sobre las tropas rebeldes en el interior de Nicaragua indican creciente seguridad en sí mismos y destreza”. Se contrasta a los sandinistas totalitarios con las “democracias en lucha de América Central”: las “democracias imperfectas pero que funcionan” en Guatemala y Honduras, y El Salvador, que aunque “asediado por la guerrilla comunista”, es “una democracia imperfecta, pero una democracia con un gobierno elegido” (Stephen Rosenfeld, periodista del *Post*), a diferencia de Nicaragua, donde, según Washington ha decretado, no hubo elecciones.<sup>55</sup>

Las asunciones que se revelan en estas muestras de opinión expresable son las propias bases del discurso, y no se pueden desafiar.

La eficacia de la doctrina estatal a efectos de que no hubo elecciones en Nicaragua, en contraste con el caso de los estados del terror de EEUU, proporciona unas lecciones útiles para los futuros comisarios de los soviets. Confirma el juicio del Comité de Información Pública

de Woodrow Wilson (la Comisión Creel) a efectos de “que uno de los mejores medios para el control de las noticias consistía en inundar los canales de noticias con ‘hechos’, o con lo que venía a ser información oficial”<sup>56</sup>. Por medio de una repetición interminable, combinada con la cobertura de las elecciones por parte de los medios de comunicación de acuerdo con los dictados de Washington, la doctrina requerida se ha convertido en la verdad establecida. Prácticamente no se puede hallar ninguna desviación de la misma. Incluso los grupos de derechos humanos que han realizado un esfuerzo auténtico por ser ecuanímenes son víctimas de estos impresionantes logros de la propaganda por parte del Estado y de los medios de comunicación. Así, el director adjunto de Human Rights Watch critica a los seguidores de Reagan por su falta de consecuencia: “han sido reacios a la hora de hablar [sobre]... abusos bajo los gobiernos elegidos” (menciona a El Salvador y Guatemala), pero condenan “los abusos de los derechos humanos por parte de los regímenes de izquierdas del hemisferio –Cuba y Nicaragua”. Por una parte, tenemos a los “gobiernos elegidos” de El Salvador y Guatemala, y por otra a Nicaragua, de izquierdas y por tanto desprovista de un “gobierno elegido”. El *Boston Globe*, periódico liberal situado al extremo de la disidencia dentro de los medios de comunicación, contrasta a El Salvador, Guatemala y Honduras (“democráticos inestables”) con Cuba, Nicaragua, Guyana y Surinam (“socialistas”). Los gobiernos “democráticos” tienen “presidentes civiles” que fueron “elegidos”, aunque “libran una batalla con el ejército en cuanto al control político”; pero, en Nicaragua, sólo disponemos de una “junta socialista en poder desde la revolución de 1979” –nada de elecciones, nada de “democracia” como sucede en el caso de los clientes de EEUU.<sup>57</sup>

Resulta bastante difícil escapar a los efectos de un sistema eficiente de propaganda que impide la disensión y los hechos indeseados al tiempo que alienta un animado debate dentro de los límites permitidos.

Reconociendo la importancia de evitar el libre flujo de ideas, el gobierno de EEUU lleva mucho tiempo intentando convencer a sus clientes de la necesidad de controlar y vigilar los viajes y las publicaciones. Así, el presidente Kennedy se reunió con siete presidentes de América Central en San José, Costa Rica, en marzo de 1963, dando los siete su acuerdo a una reunión que se celebraría en abril en la Nicaragua de Somoza “Para desarrollar y poner en vigor inmediatamente



medidas en común para la restricción de los movimientos a y de Cuba por parte de los súbditos subversivos, y el flujo de materiales, propaganda y fondos desde dicho país". En los documentos internos secretos, los liberales de Kennedy estaban preocupados por el liberalismo excesivo de los regímenes de América Latina, en particular por "la poca predisposición por parte de los gobiernos a establecer acuerdos bilaterales o multilaterales para el control de los viajeros", tales como los que existen y se aplican extensamente en Estados Unidos.<sup>58</sup> Por motivos similares, no se produce aquí ninguna preocupación cuando los medios de comunicación independientes se destruyen por medio de la violencia en las dependencias de EEUU o quedan en manos de elementos de derechas dignos de confianza, o cuando el terror gubernamental, el asesinato o el encarcelamiento de los periodistas impone una censura. En Estados Unidos, estas medidas resultan evidentemente inadecuadas. Se requieren medidas más delicadas, procedimientos más sofisticados de fabricación del consentimiento.

El compromiso para con el bloqueo del libre flujo de ideas refleja preocupaciones más profundas. Para los planificadores mundiales, a gran parte del Tercer Mundo se le ha asignado la función de prestar servicio a los centros del capitalismo industrial. Sus diversas regiones han de "cumplir con sus funciones" en tanto que fuentes de materias primas y de mercados, y han de "explotarse" para la reconstrucción y el desarrollo del capitalismo occidental, tal como lo explican con franqueza los documentos secretos. Se entiende, naturalmente, que este tipo de políticas dejan a Estados Unidos "políticamente débil" aunque "militarmente fuerte", lo que constituye el lamento constante de los especialistas del gobierno y de otros comentaristas, y asimismo un hecho que también reconocen las víctimas, en América Latina, el Sudeste Asiático y otros lugares. Aunque la prohibición de los pensamientos inadecuados, de la libertad para viajar y de los "súbditos subversivos" puede quizá compensar en parte las debilidades políticas de Estados Unidos y sus clientes, los planificadores han reconocido clara y explícitamente que Estados Unidos, en última instancia, tendrá que basarse en la fuerza, en las fuerzas locales de seguridad de ser posible, para contener la disidencia y los movimientos populares. Los compromisos básicos explican no sólo la dependencia habitual del terror militar y estatal, sino también la hostilidad hacia la democracia (en el sentido

de participación popular en los asuntos públicos) que constituye una característica tan considerable de la política de EEUU en el Tercer Mundo —llegando a veces a convertirse en una auténtica pasión, como en el caso de la administración Reagan.

Por los mismos motivos, la administración Kennedy modificó la misión de los militares de América Latina, haciéndola cambiar de la "defensa del hemisferio" a la "seguridad interna", y Estados Unidos prestó su apoyo a los Estados de Seguridad Nacional que se extendieron por la región en años posteriores. Lars Schoultz, especialista en América Latina, observa que estas reformas del "autoritarismo militar" desarrollado como respuesta a la "creciente participación política popular" y con el objeto "de destruir permanentemente una amenaza percibida para la estructura existente de privilegio socioeconómico por medio de la eliminación de la participación política de la mayoría numérica, principalmente las clases trabajadoras o (para utilizar un término más amplio y más preciso) populares"<sup>59</sup>. Sólo cuando se supera la amenaza de la participación popular pueden contemplarse con seguridad las formas democráticas.

Las mismas consideraciones explican por qué es necesario bloquear las ideas peligrosas y la "subversión anti-EEUU", de hecho cualquier cosa que pueda resultar atractiva para las "clases populares" que han de quedar excluidas del sistema político. Esta combinación de debilidad política y fuerza militar subyace a las preocupaciones del Departamento de Estado a efectos de que el gobierno de Guatemala a principios de la década de 1950 era demasiado democrático, y trataba al Partido Comunista "como un partido político nacional auténtico y no como parte de la trama comunista soviética mundial"<sup>60</sup>. También explica por qué, durante el inicio del período de posguerra, Estados Unidos emprendió una campaña mundial para socavar la resistencia antifascista, reprimiendo a los sindicatos y otras organizaciones populares y obstaculizando las políticas democráticas en Japón, Europa y gran parte del Tercer Mundo hasta que quedaron asegurados los resultados adecuados, al tiempo que su socio subalterno en la gestión mundial establecía su dominio férreo en sus propios dominios más limitados.<sup>61</sup>

Una de las bases para el mantenimiento de la estabilidad en los estados clientes de la variedad de los de América Latina es una relación simbiótica entre el liberalismo nacional y las personalidades polí-



ticas en las dependencias que proporcionan una fachada para el gobierno militar. Las condiciones para la relación son que los “demócratas” en América Central desarrollen su tarea de conservar el privilegio y los intereses de EEUU al tiempo que los liberales americanos elogian el crecimiento alentador de la tierna planta de la democracia, proporcionando mientras tanto los medios para el ataque terrorista continuado contra la población por parte de los servicios de seguridad del estado y de los escuadrones de la muerte estrechamente vinculados con los mismos.

Mucho tiempo después de las elecciones de 1984, que establecieron la “democracia” en El Salvador, ante el aplauso de la Prensa Libre, la organización para los derechos humanos Socorro Jurídico, que operaba bajo la protección de la Archidiócesis de San Salvador, observó que el terror continuado lo siguen dirigiendo

los mismos miembros de las fuerzas armadas que disfrutaban de una aprobación oficial y cuentan con una formación adecuada para llevar a cabo estos actos de sufrimiento colectivo... La sociedad salvadoreña, afectada por el terror y el pánico, resultado de la violación persistente de los derechos humanos elementales, muestra las siguientes características: intimidación colectiva y miedo generalizado, por una parte, y por la otra la aceptación internalizada del terror debida al uso diario y frecuente de medios violentos. En general, la sociedad acepta la aparición frecuente de cadáveres torturados, porque los derechos elementales, el derecho a la vida, no tienen absolutamente ningún valor primordial para la sociedad.<sup>62</sup>

El último comentario también es de aplicación a los supervisores de estas operaciones, tal como lo recalcó George Shultz en uno de sus lamentos sobre el terrorismo, discurso pronunciado en el mismo momento en que Estados Unidos estaba efectuando el bombardeo de Libia. En El Salvador, declaró, “los resultados son algo de lo que todos los norteamericanos pueden sentirse orgullosos” –al menos, todos los norteamericanos que disfrutaban viendo cuerpos torturados, niños hambrientos, terror y pánico, y miedo generalizado. Y James LeMoyne, en uno de sus “artículos sensibles y cuidadosamente informados”, concluye que

“el apoyo americano a los gobiernos elegidos [en El Salvador, Guatemala y Honduras] ha constituido un éxito relativo”. Verdad, sin duda, según ciertas normas.<sup>63</sup>

Las observaciones del Socorro Jurídico sobre la sociedad salvadoreña bajo la “democracia” se presentaron durante el Primer Seminario Internacional sobre la Tortura en América Latina, celebrado en Buenos Aires en diciembre de 1985, conferencia dedicada al “sistema represivo” que “dispone del conocimiento y de una tecnología multinacional del terror, desarrollada en centros especializados cuyo objetivo consiste en perfeccionar métodos de explotación, opresión y dependencia de los individuos y de pueblos en su totalidad” por medio del empleo del “terrorismo estatal inspirado en la Doctrina de Seguridad Nacional”. Los orígenes de esta doctrina se pueden hallar en la decisión histórica por parte de la administración Kennedy de desplazar la misión de los militares de América Latina a la “seguridad interna”, con consecuencias bien conocidas, o que deberían serlo.

La conferencia transcurrió sin comentarios en los medios de comunicación de EEUU. Nada de esto cae dentro de la descripción del terrorismo según se concibe en el mundo civilizado, ni tiene efecto alguno sobre los nobles esfuerzos por parte de Estados Unidos en defensa de las democracias imperfectas pero en progreso, así como para “restaurar la democracia” en Nicaragua. Del mismo modo, ninguna celebración del apasionado compromiso de EEUU para con los derechos humanos quedaría empañada por una mención de la sorprendente correlación entre la ayuda de EEUU y la tortura en todo el mundo que varios estudios documentan, especialmente en América Latina, donde el primer especialista académico en derechos humanos de la región concluye que la ayuda de EEUU “ha tenido una tendencia a fluir desproporcionadamente hacia los gobiernos de América Latina que torturan a sus ciudadanos... a los violadores relativamente notorios de los derechos humanos fundamentales”. Esto sucedía antes de la administración Reagan, con su comprometida dedicación al terror y la tortura.<sup>64</sup>

En uno de sus comentarios durante el período que hemos estudiado, los redactores del *Times* declararon que “los sandinistas han de comprender que sus vecinos y Washington ven, y con razón, una relación entre el comportamiento interno y el externo”<sup>65</sup>. Debe ser, entonces, que el comportamiento de “sus vecinos y Washington” ilustra este pro-



fundo compromiso para con los derechos humanos. Los redactores también preguntaron si la administración Reagan podría “llegar a correr [el riesgo calculado de un compromiso político] y tolerar a un vecino marxista, si queda cercado por tratados y compromisos de cara a los derechos humanos rudimentarios”, compromisos que son innecesarios para las “democracias incipientes” o su patrocinador. Instaron a que Estados Unidos verificara la posibilidad de “lograr el acuerdo sandinista a que las bases, los asesores y los misiles soviéticos y cubanos quedaran fuera de Nicaragua” y el acuerdo en cuanto a no “exportar la revolución al otro lado de las fronteras de Nicaragua”. Los misiles y las bases soviéticas y cubanas se añaden, es de suponer, para fines de efecto, y las ofertas repetidas por parte de Nicaragua en cuanto a la eliminación de asesores e instalaciones extranjeros no se mencionan, ni se informa habitualmente sobre las mismas, del mismo modo que no merece mención alguna el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, a principios del 1988, “reiteró la oferta de su país de retirar a los asesores militares de Nicaragua una vez que se ponga fin a la campaña de los Contra, con apoyo de EEUU, contra el gobierno sandinista”<sup>66</sup>. El problema que se percibe a lo largo de todo este período ha consistido en hallar algún modo de “refrenar a los sandinistas” y “contener su impulso agresivo” (*Washington Post*), forzar a Nicaragua a “refrenar a su ejército revolucionario”, como lo exige el senador demócrata Terry Sanford, ejército que alborota de manera ilegítima en Nicaragua cuando intenta defender al país del ataque por parte de EEUU.<sup>67</sup> El hecho de que Nicaragua pudiera tener que hacer frente a algún problema de seguridad es algo que queda más allá de la imaginación.

Aparte de los alegatos habituales carentes de fundamento a efectos de una ayuda sandinista a la guerrilla de El Salvador, que volveré a estudiar, la base manifiesta para estos temores en cuanto a la amenaza sandinista en el hemisferio es otro golpe de la Operación Verdad del Departamento de Estado, basado en un discurso del comandante Tomás Borge. En éste, expresaba sus esperanzas de que Nicaragua sería un ejemplo que otros seguirían, explicando que Nicaragua no puede “exportar nuestra revolución” sino que solamente puede “exportar nuestro ejemplo”, mientras que “los propios pueblos de estos países... han de hacer sus revoluciones”; en este sentido, dijo, la revolución nicaragüense “trasciende las fronteras nacionales”. Dedicándose a un engaño

consciente y determinado, las Operaciones Psicológicas del Departamento de Estado convirtieron estas palabras en la amenaza de una conquista militar en persecución de una “revolución sin fronteras”. La frase se utilizó como el título del patético Libro Blanco del Departamento de Estado, de septiembre de 1985, sobre la supuesta subversión nicaragüense,<sup>68</sup> así como repetidas veces desde entonces, acompañada a veces de la declaración de que constituye un *Mein Kampf* sandinista, tal como George Shultz advirtió al Congreso. La misma invención sirvió como punto culminante para el éxito en el esfuerzo por parte de Reagan para la obtención de \$100 millones del Congreso para el ejército por procuración en el mismo momento en que el Tribunal Internacional instaba a Estados Unidos a dar fin a su agresión, y sigue siendo un elemento principal para los medios de comunicación en las columnas de noticias y artículos de opinión, como he dicho en otro lugar. El fraude quedó descubierto inmediatamente por el Consejo para Asuntos Hemisféricos, e incluso fue objeto de una noticia marginal en un estudio de la “diplomacia pública” del Departamento de Estado en el *Washington Post*. Pero nada de esto tuvo efectos disuasorios en cuanto a la agitación propagandística en los medios de comunicación al servicio del digno proyecto “de demonizar al gobierno sandinista” y “convertirlo en un auténtico enemigo, en una auténtica amenaza en las mentes del pueblo norteamericano”, tal como expresó el objetivo un funcionario de la administración Reagan.<sup>69</sup> Tampoco tiene un efecto disuasorio sobre estos ejercicios de “gestión de la percepción” el evidente absurdo que supone la idea de que Nicaragua *pudiera* plantear una amenaza de agresión mientras que EEUU permanecería sin hacer nada, desamparadamente impotente. Una vez más, nos hallamos ante una demostración extraordinariamente impresionante de lo que se puede lograr por medio de una prensa independiente movilizada.

Sin duda, existía una base para la percepción de que Nicaragua constituía una amenaza. El miedo auténtico consistía en que las esperanzas de Borge llegaran a realizarse. Tal como observó Oxfam, Nicaragua constituía “la amenaza de un buen ejemplo”. Al igual que en el caso de Arévalo y Arbenz en Guatemala, Allende en Chile y muchos otros, se percibía a Nicaragua como una “manzana podrida” que podría “contagiar a todo el cesto”, un “virus” que podría infectar a los demás, un “cáncer” que podría extenderse, en la terminología que utilizan cons-



tanamente los planificadores cuando contemplan la temida posibilidad de un desarrollo independiente enfocado a las necesidades nacionales. El miedo auténtico lo manifestó el secretario de Estado Shultz en marzo de 1986, cuando advirtió que si los sandinistas “logran consolidar su poder”, entonces “*todos los países de América Latina, todos los cuales se enfrentan con graves problemas económicos internos, verán cómo las fuerzas radicales se animan para explotar estos problemas*”<sup>70</sup>. Resulta por tanto necesario destruir el virus e inocular a las regiones circundantes por medio del terror, característica persistente de la política externa de EEUU, basada en las mismas preocupaciones que animaban a Metternich y al zar con respecto a la amenaza que para el orden civilizado representaba la democracia americana. Pero también estas verdades quedan mucho más allá de los límites de lo que se puede expresar o imaginar.

Para volver a la gama de la opinión expresable, el segundo ejemplo de las columnas de opinión, al igual que el primero, confirma las expectativas del modelo de propaganda, al igual que lo hacen otros. La información sobre las noticias cumple con las mismas condiciones, tal como se ha documentado en muchas investigaciones, asegurando que la opinión pública no se desvíe de los límites apropiados, al menos entre aquellos sectores de la población que cuentan.

## NOTAS

<sup>1</sup> *New Republic*, 7 de abril, 1917.

<sup>2</sup> Para citas, referencias y antecedentes, ver mi *Towards a New Cold War*, capítulo 1, y fuentes citadas.

<sup>3</sup> Para algunos ejemplos, ver *Manufacturing Consent*, 343n.

<sup>4</sup> *American Foreign Policy* (Norton, 1969).

<sup>5</sup> Thomas Paterson, *Meeting the Communist Threat* (Oxford, 1988, 82-83), citando a un funcionario de la administración Truman y al politólogo Gabriel Almond.

<sup>6</sup> Mervyn Leffler, “Adherence to Agreements: Yalta and the Experiences of the Early Cold War,” *International Security*, verano de 1986.

<sup>7</sup> Robert W. Tucker, “Reagan’s Foreign Policy,” *Foreign Affairs*, “America and the World 1988/89”, invierno de 1989, artículo de fondo. John Lewis Gaddis, *The Long Peace* (Oxford, 1987, 129). El esfuerzo por liberar a Indochina de las fuerzas francesas respaldadas por EEUU fue en parte una guerra civil, como suele ser el caso en las luchas contra la ocupación extranjera y el dominio colonial –la revolución americana, por ejemplo. Debería quedar claro que este hecho no añade ninguna credibilidad al peregrino concepto de que EEUU estaba “disuadiendo la agresión” al ayudar al esfuerzo francés por reconquistar Indochina, incluso contemplando la utilización de armamentos nucleares para este fin.

<sup>8</sup> Véase apéndice V, sección 8, para ver un ejemplo, aunque éste se exceda de la norma.

<sup>9</sup> Neil Lewis, *NYT*, 6 de diciembre, 1987.

<sup>10</sup> *M. Daily Telegraph* (Londres), 28 de enero, 1988.

<sup>11</sup> *NYT*, 2 de junio, 195. La acusación la efectuó el secretario de Estado adjunto, Walter Robertson. Todavía podemos leer sobre “la memoria del sur correspondiente a la democracia” (Clayton Jones, *Christian Science Monitor*, 19 de enero, 1989) –bajo las dictaduras militares impuestas por la violencia de EEUU.

<sup>12</sup> Sidney Hook, “Lord Russell and the War Crimes ‘Trial’”, *New Leader*, 24 de octubre, 1966; “Politics Tests Philosophy’s Meaning,” estudio de Alan Ryan, *Bertrand Russell: A Political Life, Insight* (publicado por el *Washington Times*), 3 de octubre, 1988. El comentario de Hook sobre Russell será familiar para cualquier persona que conozca los ataques a los disidentes en la prensa del Partido Comunista durante los años de Stalin.

<sup>13</sup> *Boston Globe*, 15 de enero, 1988.

<sup>14</sup> *NYT*, 6 de agosto, 1987.



- <sup>15</sup> Para una excepción manifiesta, ver "Talk of the Town," *New Yorker*, 1 de febrero, 1988.
- <sup>16</sup> Editorial, *WP Weekly*, 4 de abril, 1988.
- <sup>17</sup> Bruce Cameron y Penn Kemble, "From a Proxy Force to a National Liberation Movement", manuscrito, febrero de 1986, detallando cómo debería actuar EEUU para efectuar esta transición. Edgar Chamorro, *Packaging the Contras: A Case of CIA Disinformation*, Serie Monográfica del Institute for Media Analysis, Núm. 2 (Nueva York, 1987, 49); Chamorro era el portavoz seleccionado por la CIA para la dirección de los Contra desde el mes de diciembre de 1982 hasta que abandonó la organización en diciembre de 1984.
- <sup>18</sup> *Doraz*, 8 de julio, 1988. Para un historial detallado de la información sobre estas operaciones, ver el apéndice III.
- <sup>19</sup> *Manchester Guardian Weekly* (Londres), 18 de diciembre, 1988. Julie Flint informa desde el Líbano, en el mismo número, que esta "operación extraña y probablemente chapucera" no dejó ningún efecto visible salvo los restos de cadáveres y "dos mastines muertos, con explosivos atados a sus cuerpos". Fue asesinado un oficial israelí, los comandos de elite tuvieron que ser rescatados colgando de los patines del helicóptero tras abandonar sus equipos y sus armas (que se exhibieron con orgullo en el Líbano), y no existe "evidencia de que los israelíes destruyeran ni siquiera un depósito de municiones —y estas colinas están plagadas de ellos— o causaran víctimas que justificaran el tamaño de la fuerza de ataque". El fracaso de la redada puede reflejar el declive en la eficacia para el combate de las fuerzas israelíes, que ha sido fuente de gran preocupación en los círculos militares durante algunos años, y que probablemente se ha acelerado a medida que se les ha asignado a las fuerzas militares la misión de aterrorizar a los civiles indefensos de los territorios.
- <sup>20</sup> AP, 14 de diciembre; NYT, 15 de diciembre, 1988. Un breve informe del *Times* cita al embajador libanés diciendo que Israel "ni se preocupa de los pueblos que no son israelíes ni les da importancia". Lo que de hecho dijo es que no se podía esperar que Israel "mostrara ninguna piedad con los animales" ya que no da importancia a los pueblos que no son israelíes. Repitió la acusación de que las fuerzas israelíes utilizaron perros con explosivos y botes de gas lacrimógeno atados a sus cuerpos para atacar a las personas ocultas en túneles subterráneos, añadiendo a continuación el comentario del cual llegaron a la prensa unas pocas palabras. Los miembros de la guerrilla habían mostrado cadáveres de perros doberman con explosivos atados a sus cuerpos (William Tuohy, *Los Angeles Times*, 10 de diciembre, 1988; ver nota precedente).
- <sup>21</sup> NYT, 19 de febrero, 1988; WP, 30 de junio, 1985. Sobre el ataque a la escuela de Damour, ver Liston Pope, *City Sun*, 1-7 de junio, 1988; Pope, que enseñaba inglés en la escuela, escribe que el ataque, uno de muchos, fue objeto de 20 palabras en el *New York Times*. Ver mi *Pirates and Emperors*, capítulo 2, sobre las operaciones Puño de Hierro y los bombardeos del valle de la Bekaa.

- <sup>22</sup> Ver el capítulo 5, a continuación, y *Pirates and Emperors*, capítulo 2, para muchos detalles.
- <sup>23</sup> *Ibid.*, capítulos 1, 2 y *Fateful Triangle*, sobre la protección de Israel por parte de los medios de comunicación. Para ver actualizaciones, véanse mis artículos en *Z Magazine*, mayo, junio de 1988, y "The U.S. and the Middle East", conferencia dictada en la universidad de Tel Aviv en abril de 1988, que aparecerá en Zachary Lockman y Joel Beinin, editores, *Intifada: the Palestinian Uprising against Israeli Occupation* (South End, 1989).
- <sup>24</sup> *Boston Globe*, 9 de noviembre, 1984.
- <sup>25</sup> Ver detalles en mi artículo en *Z Magazine*, marzo de 1988.
- <sup>26</sup> *Ibid.*, para ver detalles, incluidas las referencias posteriores en citas de Ortega y Arias, incluidas en artículos sobre otros temas.
- <sup>27</sup> Editorial, *El Tiempo*, 5 de mayo, 1988; reimpresso en *Hondupress*, 18 de mayo, 1988.
- <sup>28</sup> Que conocen, por supuesto, como lo indica alguna línea ocasional que los delata.
- <sup>29</sup> *Towards a New Cold War*, 51.
- <sup>30</sup> *Congressional Record*, Senado, 5 de agosto, 1988, S 11002; Susan Rasky, NYT, 11 de agosto, 1988.
- <sup>31</sup> Robert Pear, NYT, 25 de mayo, 1988.
- <sup>32</sup> Ver apéndice IV, sección 5, sobre el apoyo público a la oposición política. Sobre el apoyo de la oposición a los Contra, ver apéndice V, sección 6.
- <sup>33</sup> *Congressional Record*, 5 de agosto, 1988, S 10969f; AP, NYT, 4 de agosto; Bryna Brennan, AP, WP, 4 de agosto, una narración mucho más completa; *Barricada* (Managua), 3 de agosto; Julie Light, *Guardian* (Nueva York), 17 de agosto, 1988. El *Boston Globe* publicó un minúsculo artículo en el que aparecía una negativa de los Contra, 4 de agosto.
- <sup>34</sup> Vaky, *Foreign Policy*, otoño de 1987. Sobre el apoyo a la oposición política dentro de Nicaragua, ver apéndice IV, sección 5.
- <sup>35</sup> Pastor, *Condemned to Repetition* (Princeton, 1987, 32), su subrayado.
- <sup>36</sup> Ver *Culture of Terrorism* para referencias sobre Barnes y muchos ejemplos similares. A Barnes se lo consideraba "el cabecilla" de la oposición en el Congreso contra los programas ilegales de propaganda nacional y terror de los Contra por parte de la administración Reagan. Tenía que ser "destruido" políticamente para servir como "lección para los demás", según las notas de uno de los afiliados "privados" de estas operaciones (dirigidas por Carl Channell, que se declaró culpable de actuar en calidad de conducto para el dinero libre de impuestos destinado a los armamentos para los Contra). Barnes fue derrotado tras una campaña publicitaria dirigida por Channell en la que se lo describía como simpatizante sandinista, mensaje que no cayó en oídos sordos en el Congreso. Ver Parry y Kornbluh, *op. cit.*
- <sup>37</sup> Senado de EEUU, Comité para las Relaciones Públicas, 27 de febrero, 1986.
- <sup>38</sup> NYT, 14 de marzo, 1986.



- <sup>39</sup> Editorial, *WP Weekly*, 1 de marzo, 1986.
- <sup>40</sup> *New York Times Book Review*, 12 de abril, 1987. Vercartas, *Z Magazine*, enero de 1989, para la interpretación que hizo Morley de la frase citada.
- <sup>41</sup> *Wall Street Journal*, 26 de marzo, 1987.
- <sup>42</sup> John E. Rielly, ed., *American Public Opinion and U.S. Foreign Policy 1987*, Chicago Council on Foreign Relations, marzo de 1987. Se define a los "dirigentes" como "individuos destacados en Estados Unidos, del gobierno, la empresa, el mundo laboral, la esfera académica, los medios de comunicación, las instituciones religiosas, las organizaciones privadas de política exterior y los grupos de intereses especiales".
- <sup>43</sup> Ver una muestra en *Culture of Terrorism*, capítulo 11.
- <sup>44</sup> Andrew Reding, entrevista con Figueres, *World Policy Review*, primavera de 1986; *Culture of Terrorism*, 206-7. Para algunos extractos más largos de una entrevista publicada por COHA, *Washington Report on the Hemisphere*, 1 de octubre, 1986.
- <sup>45</sup> *NYT Magazine*, 10 de enero, 1988.
- <sup>46</sup> James LeMoyne, "Bitterness and Apathy in Nicaragua," *NYT*, 29 de diciembre, 1987. Chamorro, *Update*, Central American Historical Institute, Georgetown University, 13 de noviembre, 1987; *Extra! (FAIR)*, oct./nov. 1987. Al haber estado en Managua en el preciso momento en que LeMoyne hizo una breve visita, sé hasta qué punto era distorsionada su versión. Otros que cuenten con una experiencia personal elaborarán sus propias conclusiones. De lo que se trata, no obstante, es de que es la versión de LeMoyne, y no otras reacciones, la que puede llegar al público en general. Sólo ciertos tipos de respuestas –de hecho, las que se conforman con las condiciones del modelo de propaganda– pasan a través del filtro de los medios, y solamente con excepciones ocasionales.
- <sup>47</sup> Mary Speck, "Nicaragua's Economic Decline Takes Toll on Health," *Miami Herald*, 15 de septiembre, 1988; William Branigan, "Let Them Eat Fruit Rinds," *Washington Post Weekly*, 10-16 de octubre, 1988. Branigan, siendo consecuente con la política de los medios de minimizar la función de EEUU en la angustia de Nicaragua, alega que una encuesta de junio de 1988 indicó que sólo el 19 por ciento de los residentes de Managua consideraban la "agresión de EEUU en cualquiera de sus formas" como "la causa principal" de los problemas económicos. Pero, al basarse en una fuente secundaria, interpretó equivocadamente los resultados de la encuesta (ver apéndice IV, sección 5). La pregunta planteada fue identificar "los principales problemas económicos del país". Dos tercios de los encuestados seleccionaron la inflación, la carencia de bienes, los salarios bajos, la producción deficiente y "otros"; el 8 por ciento seleccionó un "mal gobierno"; y el 19 por ciento de Branigan seleccionó la "guerra", el "bloqueo económico", o la "agresión". Sin duda, las respuestas eran heterogéneas. Sin duda gran parte del 67 por ciento que identificó problemas económicos específicos hubiera estado de acuerdo en que eran atribuibles a la intervención de

EEUU y a la guerra económica; incluso los hombres de negocios de derechas y prosomocistas tienen esto claro.

- <sup>48</sup> Thomas W. Walker, *Nicaragua* (Westview, 1986, 67).
- <sup>49</sup> Ver mi introducción a Morris Morley y James Petras, *The Reagan Administration and Nicaragua*, Institute of Media Analysis, Serie Monográfica Núm. 1 (Nueva York, 1987), para un estudio detallado, anotando algunas excepciones marginales y algunos matices y comentando también una de las contribuciones más extravagantes, la de Ronald Radosh, ahora en su fase del "Dios que fracasó" y por tanto con fácil acceso a los medios de comunicación, que anteriormente se le negaba. También mi capítulo "U.S. Polity and Society; the Lessons of Nicaragua" en Thomas Walker, ed., *Reagan versus the Sandinistas* (Westview, 1987).
- <sup>50</sup> *NYT*, 31 de diciembre, 1987.
- <sup>51</sup> Ver Apéndice I para una discusión de estas predicciones.
- <sup>52</sup> *NYT*, 10 de febrero.
- <sup>53</sup> *NYT*, 14 de febrero.
- <sup>54</sup> Editoriales, *WP*, 9 de enero, 11 de marzo; Buckley, *WP*, 21 de mayo, 1987.
- <sup>55</sup> Rosenthal, *NYT*, 8 de marzo; Rosenfeld, *WP*, 24 de abril, 1987.
- <sup>56</sup> Stephen Vaughn, *Holding Fast the Inner Lines* (U. de Carolina del Norte, 1980, 194).
- <sup>57</sup> Kenneth Roth, carta, *NYT*, 17 de agosto, 1988; *BG*, 26 de diciembre, 1988. Los defensores de la violencia de EEUU condenan a Americas Watch debido a su cuidadosa y juiciosa información, que no cumple con sus normas de lealtad a la doctrina estatal. Así, el redactor del *New Republic*, Morton Kondracke, declara que Americas Watch y los propagandistas del Departamento de Estado "se merecen el uno al otro", cada uno de ellos exagerando y distorsionando las actividades de las que son partidarios, protegiendo a los clientes de Nicaragua y Estados Unidos, respectivamente ("Broken Watch", *The New Republic*, 22 de agosto, 1988; para algunos ejemplos de la apreciación por Kondracke de la violencia que logra el éxito, y otros puntos de vista, ver *Cultura del Terrorismo*; también el apéndice I, sección 2). De hecho, Americas Watch ha hecho lo imposible para detectar y denunciar abusos nicaragüenses, dedicando a los mismos mucha más atención de la que justificarían los hechos comparativos. Ha llegado a decir que se opondría al apoyo a Nicaragua si éste estuviera en cuestión, debido a sus abusos, aunque no ha propuesto que EEUU ponga fin a su ayuda a El Salvador, donde los abusos son considerablemente mayores; ni han solicitado los grupos Watch que se ponga fin a la ayuda a Israel y otros principales violadores de los derechos humanos (ver Americas Watch, *Human Rights in Nicaragua*, marzo de 1986). Pero Americas Watch se ha ceñido a los hechos determinables, escandalizando a varios comisarios.
- <sup>58</sup> Bernard Diederich, *Somoza* (E. P. Dutton, 1981, 74). *Memorandum* del secretario de Defensa Robert McNamara a McGeorge Bundy, 11 de junio, 1965; para más detalles, ver *On Power and Ideology*, 22s., y bibliografía.



- <sup>59</sup> Schoultz, *Human Rights and United States Policy toward Latin America* (Princeton, 1981, 7).
- <sup>60</sup> Citado por F. Parkinson, *Latin America, The Cold War, and The World Powers* (Londres, 1974), 40.
- <sup>61</sup> Ver mi artículo, "Democracy in the Industrial Societies" en *Z Magazine*, enero de 1989, para un estudio y referencias.
- <sup>62</sup> *Torture in Latin America*, LADOC (Latin American Documentation); Lima, 1987.
- <sup>63</sup> Secretario Schultz, "Moral Principles and Strategic Interests: The Worldwide Movement Toward Democracy", Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Estado, *Current Policy* núm. 820, alocución en la Universidad del Estado de Kansas, 14 de abril, 1986; LeMoyne, *NYT*, 7 de febrero, 1988.
- <sup>64</sup> Ver *The Political Economy of Human Rights*, vol. 1; Lars Schoultz, *Comparative Politics*, enero de 1981. Ver también su *Human Rights and United States Policy toward Latin America*.
- <sup>65</sup> *NYT*, 15 de marzo, 1987.
- <sup>66</sup> *AP*, 1 de febrero, 1988.
- <sup>67</sup> Editorial, *WP Weekly*, 31 de marzo, 1986; Pamela Constable, *BG*, 15 de marzo, 1987.
- <sup>68</sup> Para un análisis detallado, ver Morley y Petras, *op. cit.*
- <sup>69</sup> Ver mi artículo en Walker, *Reagan vs. the Sandinistas; Culture of Terrorism*, 219s; *WP*, 15 de octubre, 1985; Peter Kornbluh, *Nicaragua* (Institute for Policy Studies, Washington, 1987).
- <sup>70</sup> *Ibid.*

#### 4 ADJUNTOS AL GOBIERNO

"Es muy interesante", comentó el senador William Fulbright durante las vistas celebradas en el Senado en 1966, en relación con el gobierno y los medios de comunicación, "que tantos de nuestros principales diarios se hayan convertido prácticamente en agentes del gobierno o adjuntos al mismo; que no pongan en duda la política del gobierno, ni tan siquiera se planteen preguntas al respecto"<sup>1</sup>. Estos comentarios no son absolutamente ciertos; los medios de comunicación sí ponen en duda y plantean preguntas en cuanto a la política del gobierno, pero lo hacen casi exclusivamente dentro del marco determinado por los intereses, en lo esencial compartidos, del poder estatal-empresarial. Las divisiones entre las elites se reflejan en los debates que se producen en los medios de comunicación,<sup>2</sup> pero es raro que se produzca una desviación de su estrecho consenso. Es cierto que quienes ostentan los cargos de la administración estatal son, por lo común, quienes establecen el orden del día para los medios de comunicación. Pero, si las políticas fracasan, o si se percibe que pudieran ser dañinas para los intereses poderosos, los medios a menudo pondrán "en duda... la política del gobierno" e instarán a utilizar medios distintos para lograr metas que no se pueden desafiar o, con mucha frecuencia, ni siquiera conocer.

Como ilustración de lo anterior, he revisado algunas muestras de las contribuciones de los medios de comunicación al proyecto gubernamental de "demonizar a los sandinistas" elogiando al mismo tiempo a los violentos estados del terror de la región apoyados, o instalados directamente, por Estados Unidos. A pesar de todo el escepticismo personal que he desarrollado a través del estudio de la actuación de los medios de comunicación a lo largo de muchos años, no me esperaba que aceptaran este reto. Cuando escribía en 1985 sobre los programas de desinformación reaganistas en relación con América Central, no comparé a Nicaragua con El Salvador y Guatemala para demostrar la hipocresía de las acusaciones (cuando no su mentira manifiesta); aquello parecía un insulto a la inteligencia del lector. En vez de hacerlo, com-



paré las alegaciones en cuanto a Nicaragua con el comportamiento de Israel, la “democracia modélica”, durante el mismo período, y el del propio Estados Unidos en situación de guerra, mostrando que el historial sandinista era respetable según estas normas –no demasiado impresionantes, se ha de confesar.<sup>3</sup> Pero mi evaluación de los medios de comunicación fue ingenua. En el plazo de un año, habían logrado presentar a los asesinos clientes de EEUU como democracias progresivas aunque imperfectas, mientras que los sandinistas, inocentes de cualquier crimen que incluso parezca aproximarse a los de los favoritos de Washington, se habían convertido en la encarnación del mal.

El repaso que se ha hecho en los dos últimos capítulos de dos períodos de intenso debate sobre la política de EEUU en cuanto a Nicaragua se ceñía a los límites de la opinión expresable. La información que aparece en las noticias se conforma a las mismas premisas implícitas. El tratamiento dicotómico de las elecciones en El Salvador y en Nicaragua constituye un ejemplo, que se estudia en detalle en otro lugar. Los períodos estudiados en el capítulo anterior son otro ejemplo. El politólogo Jack Spence estudió 181 artículos sobre Nicaragua aparecidos en el *New York Times* durante los seis primeros meses de 1986; las conclusiones son parecidas a las que se derivan de los editoriales y las columnas de opinión.<sup>4</sup>

Spence observa que, en la práctica, se hizo caso omiso de América Central hasta que el control por parte de EEUU tuvo que hacer frente a un desafío en 1978. Desde 1969 hasta 1977, la televisión dedicó una hora en total a Nicaragua, tiempo que trató en su totalidad del terremoto de 1972. Se pasaron por alto las elecciones de 1972 en El Salvador, cuando la victoria aparente de la candidatura reformista.

Duarte-Ungo quedó derrocada por medio del fraude manifiesto y de la intervención de los clientes de EEUU en Nicaragua y Guatemala, asegurando al gobierno militar que ha continuado en el poder hasta el presente. Al no desafiarse el dominio de EEUU, no se planteó el problema de establecer la “democracia”, como tampoco se planteó en 1984 en Panamá cuando el general Noriega, notorio narcotraficante, que entonces era todavía un favorito de EEUU, celebró elecciones fraudulentas, legitimadas por la presencia de George Shultz en la inauguración, en cuyo momento “alabó las elecciones como un triunfo de la democracia, instando a Nicaragua a que hiciera lo mismo”, habiendo

recibido previamente información de la CIA y del embajador de EEUU a efectos de “que Noriega había robado más de 50,000 papeletas para garantizar la elección” de sus candidatos.<sup>5</sup>

A lo largo de la década de 1970, los medios de comunicación hicieron caso omiso de la creciente crisis de acceso a la tierra en América Central, que está en el origen de los presentes trastornos.<sup>6</sup> Durante los seis primeros meses de 1986, observa Spence, el “tema crucial” del “acceso a la tierra y los modelos de la propiedad de la tierra” en Nicaragua fue objeto de una única frase dentro de los referidos 181 artículos; también se pasó por alto prácticamente la política agraria en los espacios dedicados a El Salvador, salvo alguna mención ocasional de las reformas “progresistas” de El Salvador, que apareció desprovista de un análisis serio. Del mismo modo, “los temas nicaragüenses tales como los efectos de la guerra en Nicaragua, los programas de los sandinistas y la popularidad y el apoyo de que eran objeto, no formaban parte del orden del día de las noticias”. La mayoría de los artículos “emanaban de Washington” y presentaban la doctrina de la administración Reagan sin desafío o análisis alguno, incluyendo lamentos en cuanto a los luchadores por la libertad, obligados a enfrentarse tan sólo con “botas y vendas” contra armamentos soviéticos avanzados y helicópteros pilotados por cubanos, a la represión brutal en este “cáncer, aquí mismo en nuestro continente” (George Shultz), a las armas para los terroristas colombianos y la subversión desde Chile hasta Guatemala, a las tropas cubanas “que llenan las calles de Managua a veintenas” en este santuario del terrorismo situado a una distancia de dos días en coche de Tejas, una segunda Libia, etcétera, repitiendo la letanía familiar. En sus columnas de noticias, observa Spence, “el *Times* aceptaba tácitamente los puntos de vista [del reaganismo], sin buscar otros, contribuyendo así a una drástica reducción del debate público”. “En cuanto a las acusaciones contra los sandinistas, prácticamente no se podía hallar un punto de vista en contrario en el *Times* [y]... la evidencia que las apoyara jamás estaba presente”. “En cuatro ocasiones la Embajada nicaragüense fue objeto de una o dos líneas escondidas”, y en algunos artículos “el periodista incluía unas líneas sobre los antecedentes para añadir cierto equilibrio”; “era como si el *Times* tuviera un programa informático que, a intervalos escasos e irregulares, añadiera automáticamente unas pocas palabras para proporcionar ‘equilibrio’ que fueran más allá del



punto de vista medio del artículo". Se citó a críticos de las tácticas de los seguidores de Reagan, pero prácticamente nada que fuera más allá de estos límites.

Como es bien sabido, la selección de las fuentes puede ocultar prejuicios extremos tras una fachada de objetividad. Un estudio organizado por Lance Bennett, especialista en medios de comunicación de la Universidad de Washington, investigó la distribución de las fuentes a las que se atribuían las noticias durante el mes de septiembre de 1985 en el *New York Times* y la prensa de Seattle. En la cobertura de El Salvador por parte del *Times*, más del 80 por ciento de las fuentes estaban a favor del gobierno de El Salvador; el 10 por ciento eran fuentes de la oposición. En la cobertura de Nicaragua por parte del *Times*, el modelo se invertía; más de dos tercios de las fuentes seleccionadas eran fuentes opuestas al gobierno de Nicaragua, menos del 20 por ciento pertenecían a dicho gobierno. Lo mismo sucedía en el caso de los medios de comunicación local. De hecho, a pesar de la diferencia aparente, ambos modelos reflejaban el mismo criterio de selección de las fuentes; en ambos casos, las fuentes principales eran el gobierno de EEUU y sus aliados y clientes (el gobierno de El Salvador, la oposición política nicaragüense y los Contra). El estudio observa que, en ambos países, "la inmensa mayoría de los habitantes de América Central, los campesinos, los habitantes de las ciudades, los trabajadores y los comerciantes ordinarios, prácticamente no aparecen en la cobertura de sus propias vidas en las noticias de EEUU". Representan el 9 por ciento de las fuentes a las que se atribuyen las noticias, de las cuales un tercio son "individuos estadounidenses".

El estudio sugiere que los motivos para estas discrepancias podrían corresponder a la tendencia a basarse en "fuentes 'oficiales' de fácil acceso" y otros "factores institucionales" similares. Esto es creíble, pero uno no debería dejarse engañar. Las fuentes de la oposición, por supuesto, son fáciles de encontrar en Nicaragua, donde operan libre y abiertamente a pesar del hostigamiento del gobierno; en El Salvador y Guatemala, por otra parte, la mayoría habían sido asesinadas por las fuerzas de seguridad respaldadas por EEUU o habían huido; distinción en absoluto trivial que los medios de comunicación logran ocultar, incluso invertir. En la cobertura de Afganistán, el Kremlin es una fuente más "fácilmente disponible" que los miembros de las guerrillas de las

colinas, pero la cobertura tiene algunos prejuicios radicales en el sentido opuesto (como debe ser). Del mismo modo, se han realizado importantes esfuerzos para informar sobre la guerra en Nicaragua desde el punto de vista de los Contra. La información efectuada desde el punto de vista de la guerrilla salvadoreña o guatemalteca, o del Viet Cong, se puede decir que no ha existido, y las fuentes importantes que existen a menudo sencillamente se eliminan.<sup>7</sup> Lo mismo sucede en el caso de la publicación de estudios sobre refugiados, que habitualmente reflejan las prioridades políticas, no la facilidad de acceso.<sup>8</sup> Los "factores institucionales" sin duda son reales, pero en todo momento se toman opciones conscientes que fluyen de las necesidades doctrinales<sup>9</sup>.

Spence halló las mismas tendencias en su estudio de las noticias sobre Nicaragua a principios de 1986. La prioridad absoluta le correspondía al gobierno de EEUU. En segundo lugar de importancia venían las fuerzas por procuración de EEUU. Los Contra fueron objeto de 727 pulgadas de columnas, en comparación con las 417 que se dedicaron al gobierno nicaragüense, discrepancia incrementada por las 109 pulgadas sobre la oposición interna nicaragüense, apoyada por EEUU, dedicada en proporción abrumadoramente mayoritaria a quienes se habían negado a participar en las elecciones de 1984, tal como lo había exigido el gobierno de EEUU. Había amplios informes sobre las preocupaciones de la asociación de hombres de negocios COSEP, sobre el hostigamiento del diario *La Prensa*, financiado por EEUU, uno de cuyos propietarios estaba emitiendo llamamientos escasamente disimulados a la ayuda a los Contra en Washington en aquel momento, y otros abusos. La cobertura de los clientes de EEUU era en su mayoría favorable; sólo uno de los treinta y tres artículos sobre los Contra se centraba en los abusos de los derechos humanos, y existían unas pocas referencias adicionales a las atrocidades que para entonces estaban alcanzando una escala considerable. Al igual que el Departamento de Estado y que el Congreso, los medios de comunicación preferían lo que los investigadores de derechos humanos describían como "ignorancia internacional".<sup>10</sup>

Volviendo a El Salvador, vemos que el modelo se invierte por completo. Aquí se censuraba el terrorismo marxista de las guerrillas, y la postura oficial, según se expresaba en los editoriales del *New York Times*, era que las cosas estaban mejorando bajo el gobierno democrático del



“honorable Sr. Duarte”, “el demócrata cristiano honrado, dedicado a la reforma” que está tratando desesperadamente de llevar a su pueblo a una vida mejor al mismo tiempo que se ve “acosado por extremos implacables”, a pesar de que puede que haya sido “menos que riguroso a la hora de llevar a los miembros de los escuadrones de la muerte ante los tribunales” (traducción; no ha hecho nada para reprimir a las fuerzas de seguridad a las que alaba por su “valiente servicio al lado del pueblo en contra de la subversión” al tiempo que admite en voz baja que “las masas estaban del lado de la guerrilla” al asumir la función de personaje principal en la guerra contra la población). En la manera de informar sobre las noticias, el estilo era parecido. A Duarte se lo representaba en los principales medios de comunicación como una víctima, no como el agente voluntario cuya función consistía en asegurar una subvención adecuada por parte del Congreso para los terroristas estatales a los que protegía. En su análisis de más de 800 artículos aparecidos en los principales diarios entre marzo de 1984 y octubre de 1985, el periodista Marc Cooper halló un modelo consecuente de ocultación de las principales atrocidades y de “canto de alabanza a la política de la Administración”. Había cientos de pulgadas de columnas ensalzando las promesas de Duarte en lo referente a poner fin al desenfrenado terror estatal que se producía bajo sus auspicios, pero prácticamente nada sobre su verdadero historial de apologías del terror estatal y servicio al mismo, y ni un artículo “analizando la naturaleza de la alianza entre Duarte y la clase militar”, que eran los verdaderos gobernantes.<sup>11</sup>

En los editoriales estudiados, a lo largo de seis años y medio, el *Times* jamás habló de asuntos tales como el asesinato del arzobispo Romero o como la redada efectuada por las fuerzas de seguridad en la oficina de asistencia jurídica del arzobispado, con el fin de destruir las pruebas que las implicaban en el asesinato; la destrucción y el cierre de la universidad por el ejército, con muchos muertos; la destrucción física de los medios de comunicación independientes, y el asesinato y la expulsión de sus directores y propietarios; o el estado de sitio salvadoreño a partir de marzo de 1980, cuando Duarte se unió a la junta, cuyas atrocidades se llevaron a cabo con el apoyo y la constante apología de éste. Por el contrario, cuando Nicaragua declaró el estado de sitio el 15 de octubre de 1985, el *Times* hizo una amarga condena de esta demostración de la “falta de respeto por la democracia y los derechos huma-

nos” de Nicaragua, descartando con desprecio “la reivindicación del presidente Ortega a efectos de que estas medidas enérgicas son culpa de ‘la agresión brutal por parte de Norteamérica y sus aliados internos’; ‘la renovación de un estado de sitio mucho más riguroso en El Salvador, dos días después, no se comentó. Los acontecimientos que se pasaron por alto en los editoriales también se ocultaron o falsificaron en gran medida en las columnas de noticias.

No se reflejó ningún indicio o preocupación en los editoriales, y casi no hubo información (si es que la hubo) acerca del hecho de que “desde 1981 la prensa salvadoreña ha apoyado al gobierno o lo ha criticado desde un punto de vista derechista”, evitando “los artículos que critican a las fuerzas gubernamentales desde un punto de vista de los derechos humanos”, como se observó en un estudio de la libertad de prensa realizado por Americas Watch. Los miembros de la oposición política habían sido asesinados por las fuerzas de seguridad de Duarte o habían abandonado el país, de manera que no había necesidad alguna de informar sobre sus problemas, ni de comentarlos.<sup>12</sup> Del mismo modo, no se dio mayor importancia al hecho de que uno de los principales asesinos fuera seleccionado para ocupar el puesto de ministro de Defensa bajo el gobierno de Duarte, tras haber finalizado su servicio como director de la Guardia Nacional. Antes, había explicado fríamente que “las fuerzas armadas están dispuestas a matar a 200.000 o 300.000 personas, si eso es lo que se necesita para evitar una toma de poder comunista”, y actuó en consecuencia, ya que la Guardia bajo su mando administró la “pedagogía del terror”. Cuando fue nombrado ministro de Defensa, el *New York Times* describió a este asesino y torturador de masas como “un hombre amable, de voz tranquila, del que se dice que es un excelente administrador”. Aun admitiendo que la Guardia bajo su mando ha sido responsable de atrocidades horribles, entre ellas la violación y el asesinato de cuatro religiosas norteamericanas y el asesinato de dos asesores laborales de EEUU, el *Times* añade que “en su defensa, otros sostienen que bajo su mando la reputación de la Guardia Nacional ha mejorado hasta el punto de que ya no se la considera como la más abusiva de las tres fuerzas de seguridad de El Salvador” –logro impresionante, sin duda.<sup>13</sup>

Con respecto a Nicaragua, por el contrario, el modelo típico era que los servicios de propaganda estatal urdían alguna acusación que los



medios de comunicación transmitían a continuación de manera destacada y desprovista de crítica. De cuando en cuando, si se reconocía que las acusaciones eran peregrinas en exceso, podía aparecer una tibia rectificación en las páginas interiores. A menudo, las acusaciones persistían, aunque se reconociera que no tenían fundamento o incluso que eran inventadas, modelo que igualmente se ha documentado en el caso de otros enemigos oficiales.<sup>14</sup>

Para apreciar en su totalidad la dicotomía en el tratamiento otorgado, hemos de tener en cuenta lo que había estado sucediendo en Nicaragua y El Salvador durante esos años, hechos que presumo familiares y que por tanto no me dedicaré a repasar aquí.<sup>15</sup> La vergüenza para la Prensa Libre difícilmente podría ser más espectacular.

Merece la pena recalcar que aquí hay mucho más en juego que la negligencia, la incompetencia o el servicio al poder. La protección otorgada a los terroristas de estado en las “democracias incipientes” proporciona un velo tras el cual éstos pueden dedicarse a sus atrocidades, contando con el apoyo esencial de EEUU, al mismo tiempo que el hecho de centrar una indignada atención en los abusos de Nicaragua, con mucho inferiores, ha facilitado los programas de terror y guerra económica de Reagan, que invirtieron el progreso social y económico en Nicaragua y redujeron a su economía a un estado ruinoso, permitiendo que los medios de comunicación habituales se recrearan en la “incompetencia” y malevolencia “sandinista”. Los medios de comunicación fueron cómplices voluntarios en una explosión extraordinaria de violencia y represión.

El hecho es más general. El gobierno de EEUU ha sido capaz de proporcionar un apoyo crucial para los asesinatos masivos por parte de sus clientes indonesios en Timor (con ayuda de otras potencias occidentales) porque los medios de comunicación sencillamente se negaron a investigar los hechos o a informar sobre lo que sabían. Lo mismo sucedió en el caso de la destrucción de las sociedades campesinas del norte de Laos, de Camboya y de Vietnam del Sur, entre otros muchos casos. Para hablar sólo de un ejemplo actual, Israel se ha atrevido a desarrollar sus pogromes en los territorios ocupados debido a la misma indulgencia, sabiendo que todo podría explicarse como lamentables excepciones por parte de sus apologistas de EEUU; el personal de redacción del *New York Times*, la burocracia laboral de EEUU o Ellie

Wiesel, el eminente apóstol de la obligación del silencio ante las atrocidades cometidas por el Estado al que uno ama, entre muchos otros.<sup>16</sup>

Para elevar el nivel de la comprensión pública de los asuntos centroamericanos durante el período crítico de principios de 1986, el *Times* dedicó el artículo de fondo de la Revista Dominical a un análisis, firmado por James LeMoyne, de los asuntos más profundos que subyacen tras el desarrollo de la “red de guerrillas”<sup>17</sup>. LeMoyne observa que “prácticamente todos los estudios de la región... han llegado a la conclusión de que las revoluciones de América Central han sido causadas principalmente por varias décadas de pobreza, represión sangrienta y esfuerzos frustrados por lograr la reforma política”. Además, todos los estudios serios han llegado a la conclusión de que a Estados Unidos le corresponde cierta responsabilidad en relación con estas condiciones, y por tanto con el desarrollo de “la red de guerrillas”, pero ningún indicio de ello se podrá percibir en la discusión de LeMoyne. Este estudia la función de Cuba, la Unión Soviética, Corea del Norte, el FLP, Vietnam, etcétera; sin embargo, se echa en falta a un personaje de la tragedia, con la salvedad de la manifestación de que en El Salvador, “Estados Unidos reforzó al ejército salvadoreño, insistió en que se celebraran elecciones y solicitó ciertas reformas”. Tampoco se comenta el hecho de que el ejército al que “reforzamos” llevó a cabo un programa de matanzas y torturas para destruir a “las organizaciones populares que luchaban para defender sus derechos humanos más fundamentales”, para emplear las palabras del arzobispo Romero poco antes de ser asesinado, cuando rogaba en vano al presidente Carter que no “reforzara” a estas fuerzas, que “sólo saben reprimir al pueblo y defender los intereses de la oligarquía salvadoreña”.

Esta combinación de conveniente ignorancia histórica y alabanzas para con la benevolencia de nuestras intenciones es típica de los medios de comunicación y de otros comentaristas. Para citar sólo un ejemplo más, en un artículo de fondo anterior del *Times Magazine*, Tad Szulc comentaba los “vientos radicales del Caribe”, recalcando que “las raíces de los problemas caribeños no son totalmente cubanas”; también se debe culpar a la “ofensiva soviética”, al igual que a las consecuencias de “la avaricia y la mala administración colonial” por parte de las potencias europeas. A Estados Unidos se lo culpa sólo de “indiferencia” ante los problemas en fermento. Pocos parecen dispuestos a compren-



der la observación del antiguo presidente de Costa Rica, Daniel Oduber, a efectos de que los “matones” que amenazan “las vidas de los centroamericanos y de sus familias... no son los comisarios leninistas, sino los sargentos armados que se adiestraron en Estados Unidos”<sup>18</sup>.

Spence comenta que “la sentencia pendiente del Tribunal Internacional, cuya pertinencia es evidente, no se comentó en los 171 artículos que precedieron a la propia sentencia del Tribunal Internacional” del 27 de junio de 1986. En esta sentencia, el Tribunal condenó a Estados Unidos por su apoyo a los Contra y su guerra económica ilegal y le ordenó que desistiera de sus violaciones de la legislación internacional y los tratados vigentes, y que efectuara pagos de reparación. Se informó sobre la sentencia, pero ésta se despachó como un contratiempo de poca importancia. Sus contenidos se ocultaron o falsificaron, se presentó al Tribunal Internacional –no a Estados Unidos– como el criminal, y se mantuvo que el imperio de la ley no era aplicable a Estados Unidos.

En su respuesta editorial del 1 de julio, el *Times* despachó al tribunal como un “foro hostil”; los redactores no habían manifestado crítica alguna cuando este mismo “foro hostil” sentenció a favor de Estados Unidos en relación con la crisis de los rehenes de Irán. Declararon que “incluso la mayoría [del tribunal] reconoció que los anteriores ataques efectuados contra El Salvador desde Nicaragua hacían de la ‘defensa colectiva’ una justificación posible para las represalias americanas”. Los redactores daban por sentado, sin comentario alguno, que Estados Unidos tomaba “represalias” contra la agresión nicaragüense y dejaron de comentar el hecho de que el tribunal había rechazado explícitamente la reivindicación de “autodefensa colectiva” como justificación, incluso aunque Estados Unidos pudiera establecer las acusaciones contra Nicaragua que el tribunal rechazó como infundadas tras examinar la evidencia en los documentos oficiales del gobierno de EEUU; el tribunal también comentó, un tanto sardónicamente, que El Salvador ni siquiera había efectuado una acusación de “ataque armado” hasta agosto de 1984, cuatro meses después de que Nicaragua presentara sus reivindicaciones al tribunal. En un editorial de opinión del 17 de julio, Thomas Franck, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, destacado defensor del orden mundial, mantuvo que Estados Unidos debería hacer caso omiso de la sentencia del Tribunal Interna-

cional porque “América –actuando por sí sola o junto con sus aliados– sigue necesitando libertad para defender a la libertad”; como en el caso de Nicaragua, por ejemplo.<sup>19</sup>

Nadie sobrepasa al gobierno de EEUU y a los medios de comunicación en sus llamamientos al augusto imperio de la ley y al empleo de la diplomacia en lugar de la violencia –cuando se trata de las negligencias de los enemigos oficiales. De ahí que los acontecimientos del verano de 1986 requirieran cierta medida de cuidadosa “gestión de la percepción”. Hasta el mes de junio, el hecho de que Nicaragua no aceptara el borrador de tratado de Contadora constituía un punto de primordial importancia. Durante el mes de mayo, el *New York Times* publicó un dilatado informe de Stephen Kinzer con el titular, “Nicaragua se Resiste ante el Acuerdo de Paz Latinoamericano”, criticando a Ortega por su poca disposición a firmar el acuerdo sin algún compromiso por parte de Estados Unidos. “Nicaragua parece ser la única nación centroamericana que se resiste a firmar el borrador de acuerdo”, escribió Kinzer.<sup>20</sup> Algunas semanas después, Contadora quedó fuera del programa. A mediados de junio, los estados clientes de EEUU rechazaron el borrador del tratado, presionados por EEUU. Este hecho se excluyó de la prensa nacional, aunque se informó sobre el mismo en el extranjero. Nicaragua se declaró dispuesta a firmar el tratado el 21 de junio. El *Washington Post* hizo caso omiso de este hecho mal acogido, pero el mismo fue objeto de una mención indirecta en dos recuadros minúsculos del *New York Times* bajo los titulares, “Nicaragua Ofrece Limitar Algunos Armamentos” y “EEUU Condena la Oferta de Nicaragua sobre el Tratado” (22, 23 de junio), centrándose en el rechazo de este paso por parte de la administración Reagan por considerarlo “propagandístico”. Ambos recuadros aparecieron en la colección de noticias marginales de “Todo el Mundo.”

Para los adjuntos al gobierno, el valor de las noticias viene determinado por su utilidad para la guerra ideológica.

Pocos días después de la aceptación por Nicaragua del borrador del tratado bloqueado por Estados Unidos y sus clientes, el Tribunal Internacional condenó a EEUU por hacer “uso ilegítimo de la fuerza” e hizo un llamamiento a la terminación de la ayuda de EEUU a los Contra. El Congreso respondió votando a favor de una ayuda militar de \$100 millones para implementar el uso ilegítimo de la fuerza, mientras que los



funcionarios del gobierno comentaban alegremente: “Esto es de verdad. Ésta es una guerra auténtica”<sup>21</sup>.

Siguiendo aun los medios pacíficos a los que todos los estados están obligados en virtud de la legislación internacional (y de EEUU), Nicaragua llevó el asunto al Consejo de Seguridad de la O.N.U., donde Estados Unidos vetó una resolución (11 a 1, 3 abstenciones) por la que se hacía un llamamiento a todos los estados a cumplir con la legislación internacional. A continuación Nicaragua se dirigió a la Asamblea General, que aprobó una resolución por 94 votos a favor y 3 en contra, en la que se hacía un llamamiento al cumplimiento de la decisión del Tribunal Internacional. Dos estados clientes, Israel y El Salvador, se unieron a la oposición de Estados Unidos. El voto del Consejo de Seguridad fue objeto de una breve nota en el Boletín, pero el respaldo de la Asamblea General no obtuvo mención alguna; el corresponsal del *Times* en la O.N.U. prefirió aquel día publicar un artículo sobre los salarios de la O.N.U., excesivamente elevados. Durante la misma sesión, Nicaragua hizo un llamamiento a la O.N.U. para que ésta enviara una misión de investigación independiente a la frontera, tras un conflicto que tuvo lugar en la misma; la propuesta fue rechazada por Honduras, con apoyo de EEUU, y no se informó sobre la misma; éste es el destino general de los esfuerzos de Nicaragua por lograr el control internacional de las fronteras —que, naturalmente, refrenaría la agresión sandinista que tanto aterra a los dirigentes y administradores ideológicos de EEUU. Un año después, el 12 de noviembre de 1987, la Asamblea General hizo una vez más un llamamiento al “cumplimiento total e inmediato” de la decisión del Tribunal Internacional. Esta vez, sólo Israel se unió a Estados Unidos en la oposición al cumplimiento del derecho internacional, otro golpe para el acuerdo centroamericano que había sido firmado en agosto, para gran desconcierto de Washington. Ni el *New York Times*, ni el *Washington Post*, ni los tres canales de televisión informaron sobre el voto. Del mismo modo, los procesos subsiguientes del Tribunal Internacional sobre el asunto de las reparaciones a Nicaragua por los crímenes de EEUU rara vez han atravesado el umbral; así, la declaración del Tribunal Internacional de agosto de 1988 a efectos de que Estados Unidos no había cumplido con la fecha tope estipulada por el Tribunal para la determinación de las indemnizaciones de guerra pasó prácticamente sin ningún comentario<sup>22</sup>.

No todas las resoluciones de la O.N.U. se pasan por alto. El día anterior a la resolución de la Asamblea General de 1987, sobre la que no se informó, en la que una vez más se hacía un llamamiento a Estados Unidos a fin de que diera cumplimiento al derecho internacional, el *Times* publicó un artículo considerable, con el titular “La O.N.U. Insta a los Soviéticos a que saquen sus fuerzas de Afganistán”, informando que la Asamblea General votó “abrumadoramente hoy a favor de la retirada inmediata de las fuerzas soviéticas de Afganistán, bariendo el primer intento concertado por parte de Moscú para desviar este tipo de críticas de las Naciones Unidas” en esta “resolución anual”. Un informe del *Times* sobre la sesión de la Asamblea General del 26 de diciembre se titula “La Asamblea General Causa Reveses a EEUU y la Unión Soviética”, y lleva el subtítulo “Washington Pierde en Relación con Presupuesto, Moscú en Relación con Asuntos de Afganistán y Cambodia”. El informe nada decía sobre el voto de 94 a 2 sobre la sentencia del Tribunal Internacional, en el que se incluía entre la mayoría a los aliados de EEUU: Australia, Canadá, Dinamarca, España, Islandia, los Países Bajos, Noruega y Nueva Zelanda, al igual que los principales países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela), junto con Suecia, Finlandia y otros.<sup>23</sup>

La reacción del gobierno de EEUU y de los medios de comunicación ante la opinión mundial tal como ésta se expresa por medio de las instituciones internacionales merece una atención más estricta. La misma sesión de la O.N.U. proporciona varios ejemplos interesantes. Mientras que todos los ojos se centraban en la cumbre de Washington, el tratado sobre Fuerzas Nucleares Intermedias y los logros de Reagan como pacificador,<sup>24</sup> la O.N.U. votó sobre una serie de resoluciones de desarme. La Asamblea General votó 154 a 1, sin abstenciones, en contra de la acumulación de armamentos en el espacio exterior, resolución claramente dirigida contra la Iniciativa de Defensa Estratégica —“Guerra de las Galaxias” (SDI) de Reagan. Votó 135 a 1 contra el desarrollo de nuevos armamentos de destrucción masiva. En ambos casos, Estados Unidos fue el único país que emitió un voto negativo. Francia se unió a Estados Unidos a la hora de oponerse a una resolución, aprobada por 143 votos a favor y 2 en contra, por la que se hacía un llamamiento a favor de un tratado de prohibición de pruebas completas.



Otro voto por el que se hacía un llamamiento al cese de todas las explosiones nucleares de prueba fue aprobado con un voto de 137 a 3, en el que a la oposición por parte de Estados Unidos se unieron Francia y Gran Bretaña. Una semana después, el *New York Times Magazine* publicó un estudio del programa de la Guerra de las Galaxias firmado por su corresponsal William Broad, en el que éste observaba que, “desde el inicio de la era espacial, muchas personas han considerado que la última frontera del ser humano, el límite del universo, debería ser una reserva utilizada exclusivamente para fines pacíficos” y se planteaba la pregunta de si el espacio “debería armarse”. Pero la expresión de la opinión de la comunidad mundial sobre el asunto no obtuvo comentario alguno. No se informó sobre ninguno de estos votos, que tampoco se mencionaron en el informe sobre “Reveses para EEUU y la Unión Soviética” en las Naciones Unidas.<sup>25</sup>

Otros informes del *New York Times* sobre la misma sesión de la O.N.U. permiten una comprensión adicional del estilo de cobertura de la opinión mundial. Dos días después de la votación abrumadora en la O.N.U. a favor de las resoluciones de desarme sobre las que no se informó, y a las que Estados Unidos se opuso prácticamente solo, un artículo del *Times* informó acerca de una votación sobre una resolución que “reafirma la fuerte condena anterior por parte de las Naciones Unidas del terrorismo internacional en todas sus formas”, hace un llamamiento “a todos los países a cooperar en la erradicación del terrorismo”, e “invita al secretario general a obtener los puntos de vista de los estados miembros en cuanto al terrorismo y en cuanto a ‘los modos y formas’ de combatirlo”. La resolución fue aprobada por 128 votos contra 1, con la única oposición de Israel, la abstención de Estados Unidos y “el voto a favor de los 128 miembros restantes que se hallaban presentes”. El titular dice: “Siria, Aislada en la O.N.U., Abandona el Plan de Terrorismo”<sup>26</sup>.

Cinco días después, la Asamblea General aprobó una resolución por la que se condenaba al “Terrorismo, con Independencia de Dónde y por Quién se Cometa”. Se emitieron 153 votos a favor y dos votos en contra, los de Israel y Estados Unidos; únicamente Honduras se abstuvo. En particular, todos los países de la OTAN votaron a favor. No se informó sobre esta votación, y nada se dijo al respecto en el estudio de la sesión del 26 de diciembre. La objeción de EEUU e Israel

presumiblemente se basaba en la declaración de que “nada de lo contenido en la resolución perjudicaría al derecho de los pueblos, en particular de los que están sometidos a regímenes coloniales o racistas, o bajo ocupación extranjera u otras formas de dominación, a luchar por la autodeterminación, la libertad y la independencia, o a buscar y obtener apoyo para tal fin”<sup>27</sup>.

La negativa por parte de los medios de comunicación a informar sobre el aislamiento de Estados Unidos e Israel en cuanto a estos asuntos tiene una importancia considerable, como quedó ilustrado un año después, cuando el Consejo Nacional Palestino se reunió en Argel en noviembre de 1988 y aprobó una importante resolución política que se centraba en una declaración de independencia palestina, emitida el 15 de noviembre. La resolución se iniciaba manifestando que “Esta sesión [del CNP] culminó con la declaración de un Estado palestino en nuestro territorio palestino”. Esto, sin embargo, no era del gusto de los elaboradores de las políticas de EEUU, de manera que el asunto cruzó rápidamente las fronteras extremas de la discusión en los medios de comunicación. La resolución del CNP pasó a sugerir modalidades para la implementación de un acuerdo político que incluiría un Estado nacional independiente para los palestinos y “disposiciones de seguridad y paz para todos los estados de la región”. Aquí entramos en unas esferas que el gobierno de EEUU está dispuesto a considerar, de manera que estos asuntos pasaron rápidamente a convertirse en el centro de la atención de los medios de comunicación.<sup>28</sup>

La resolución del CNP solicitaba la celebración de una conferencia internacional “basada en las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la seguridad de los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino y, ante todo, de su derecho a la autodeterminación”. En su declaración, el CNP “una vez más declara su rechazo del terror en todas sus formas, incluido el terror estatal”, y “reitera su compromiso para con las resoluciones de las Naciones Unidas que afirman el derecho de los pueblos a resistir ante la ocupación extranjera, el colonialismo y la discriminación racial, y sus derechos a luchar por su independencia”. Las últimas frases reiteran el contenido y la redacción de la resolución sobre el terrorismo de aquella Asamblea General sobre la cual no se informó. El rechazo y la renuncia del terrorismo no eran nada nuevo. Así, la revista de la OLP *Shu'*



un Filastiniyya, de mayo-junio de 1986, presenta el texto de una propuesta de la OLP que hace un llamamiento a una conferencia internacional que incluya al “gobierno israelí” y cuyo objeto sea alcanzar “una resolución pacífica del problema palestino sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, entre ellas las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad”. El texto sigue: “La OLP declara su rechazo y denuncia del terrorismo, que se había manifestado en la Declaración de El Cairo de noviembre de 1985”<sup>29</sup>.

El gobierno de EEUU declaró que la declaración del CNP era inaceptable. Por supuesto, el logro con el que ésta “culminó” se descartó. Volviendo a los asuntos que Washington estaba dispuesto a considerar seriamente; en primer lugar, la aceptación por parte del CNP de la resolución 242 de la O.N.U. era demasiado “ambigua”, ya que se acompañaba de un llamamiento al reconocimiento de los derechos de los palestinos junto con los de Israel, y por tanto no cumplía con las exigencias de EEUU e Israel, en la que los dos países están aislados en gran medida.<sup>30</sup> En segundo lugar, el CNP no cumplía con las condiciones de EEUU en cuanto a la renuncia al terror; esto es, el CNP adoptaba la postura de la comunidad internacional, que sólo Estados Unidos e Israel rechazan.

Se pueden imaginar dos modos de presentar estos acontecimientos en los medios de comunicación. Uno sería informar que la suprema autoridad palestina ha emitido una declaración de independencia, aceptando oficialmente el principio de partición. Además, el CNP ha expresado, con una claridad aun mayor que la de antes, el apoyo por parte de la OLP al amplio consenso internacional a favor de un acuerdo político que reconozca los derechos de Israel y de los palestinos a la autodeterminación y la seguridad, y ha reafirmado oficialmente su apoyo a la postura de la comunidad internacional, que incluye a las potencias de la OTAN en cuanto al asunto del terrorismo. Mientras tanto, Estados Unidos e Israel quedan aislados en gran medida en relación con el primer tema, manteniendo su posición de rechazo y obstaculizando una vez más el proceso de paz, y totalmente aislados en su oposición al derecho de los pueblos a luchar por la libertad y la autodeterminación en contra de regímenes racistas y coloniales y ocupaciones extranjeras. Sólo Israel se niega a aceptar la declaración 242 de la O.N.U.; ver a continuación.

Una segunda alternativa consistiría en descartar la declaración de independencia como irrelevante, hacer caso omiso del aislamiento de Estados Unidos e Israel en relación con los restantes puntos y aceptar la posición de EEUU como correcta por definición, como “la postura moderada” y la base para cualquier discusión posterior. Entonces llevamos a cabo un debate sobre si se debería alentar el progreso adicional de los palestinos hacia la moderación ahora que, bajo nuestra tutela, han dado estos pasos vacilantes, o si su riguroso mentor debería sencillamente descartar estos pasos y exigir que la OLP empiece a actuar con seriedad o desaparezca.

La primera versión, cuyo mérito sería el de la verdad, no se puede hallar en los medios de comunicación de EEUU. La segunda alternativa no sólo prevaleció, sino que lo hizo prácticamente sin excepciones. En el *New York Times*, los redactores citaron la declaración sobre el terrorismo, describiéndola como “la vieja barrera de Arafat”, y omitieron mencionar que ésta reiteraba las resoluciones de la O.N.U., que sólo EEUU e Israel rechazaron. Anthony Lewis, prácticamente solo dentro de la corriente principal en sus esfuerzos por escapar a las limitaciones dogmáticas en relación con estos asuntos, deploró el fracaso a la hora de premiar a la OLP por su progreso en la dirección hacia la postura de EEUU, añadiendo que aún ha de alcanzar una mayor “claridad” en sus manifestaciones políticas y que “Estados Unidos declara correctamente que la OLP debe renunciar sin ambages a todo terrorismo antes de poder participar en las negociaciones”. No plantea pregunta alguna sobre la “claridad” de la postura de rechazo de EEUU, y mantiene que Estados Unidos tiene razón en no dejarse engañar por “la vieja barrera de Arafat”, esto es, la posición aceptada por la totalidad de la comunidad, Estados Unidos e Israel exceptuados (y, por supuesto, también África del Sur). Si Arafat no se une a nosotros fuera del consenso de la opinión mundial, resulta evidente que no se lo puede tomar en serio. En otros lugares, se observaron las mismas limitaciones, a veces incluso con mayor rigor.<sup>31</sup>

En resumen, el mundo no está de acuerdo con nosotros; por tanto, se puede deducir por simple lógica que el mundo está equivocado; no hay nada más que añadir. No se puede comentar, ni siquiera concebir, ninguna posibilidad alternativa. Lo que resulta aún más sorprendente, incluso el hecho de que el mundo no esté de acuerdo con nosotros no



se puede reconocer. Puesto que no ha logrado ver la luz, el mundo al exterior de nuestras fronteras no existe (Israel exceptuado). Aquí podemos ver la férrea mano de la doctrina en una forma que hubiera impresionado profundamente a la Iglesia medieval, o a los *mullahs* de Qum de hoy día.

Una vez más, las consecuencias no deberían pasarse por alto. La autocensura de los medios de comunicación a lo largo de muchos años ha permitido a Estados Unidos y a Israel bloquear lo que hace mucho viene siendo un acuerdo político posible para uno de los asuntos mundiales más explosivos y amenazadores. Éste seguía siendo el caso a medida que Estados Unidos modificó su postura, cada vez más insostenible, en cuanto a las conversaciones con la OLP bajo un pretexto fraudulento, al mismo tiempo que mantenía su compromiso de obstruir el proceso de paz.<sup>32</sup> La observación del senador Fulbright es pertinente, y al mismo tiempo muy significativa.

Volviendo a la cobertura de las Naciones Unidas, un artículo de marzo de 1988, titulado "O.N.U. Estudiará Derechos en Cuba: EEUU Ve Victoria Diplomática", informó sobre la invitación de Cuba a la Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U. para que ésta realizara una investigación *in situ*, socavando una campaña de EEUU a favor de una resolución de condena a Cuba. Los trece primeros párrafos presentan el punto de vista de Washington, convirtiendo el fracaso en un gran triunfo de la diplomacia de EEUU; el último párrafo cita las palabras de un funcionario cubano que manifiesta que "el resultado demuestra la creciente unidad política de nuestro continente" al rechazar el esfuerzo de EEUU. Otro artículo del *Times* informa sobre una visita realizada por especialistas norteamericanos en derechos humanos a las prisiones cubanas, e incluye una línea en el último párrafo en la que se declara, sin ningún comentario, que el Departamento de Estado ha negado visados a funcionarios cubanos para realizar una visita recíproca a las prisiones de EEUU, en el mismo momento en que Reagan lanzaba su campaña a favor de los derechos humanos en Moscú.<sup>33</sup>

No se informa de una resolución sobre el Oriente Medio, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos el mismo día de su rechazo de la iniciativa de EEUU en cuanto a Cuba. La resolución, aprobada por 26 votos a favor y 1 en contra, el de Estados Unidos solamente, manifestó una grave preocupación por "la continuación de actos de agre-

sión y las prácticas arbitrarias de las fuerzas de ocupación israelí en el sur del Líbano, que constituyen una violación manifiesta" del derecho internacional, e hizo un llamamiento a los aliados de Israel a efectos de que presionaran a dicho país para que pusiera fin a "su política agresiva y expansionista en el sur del Líbano"<sup>34</sup>.

La opinión mundial ha de pasar por los mismos filtros que establecen los límites de lo respetable a nivel nacional. Si incumple con estas normas queda descartada, o se somete a una investigación compleja con el fin de averiguar por qué el mundo está equivocado. Una vez más, el modelo lo impregna todo.<sup>35</sup>

La campaña del gobierno y los medios de comunicación para "demonizar a los sandinistas" se enfrentó con un nuevo reto cuando los presidentes centroamericanos alcanzaron un acuerdo de paz en agosto de 1987. La administración Reagan llevaba mucho tiempo intentando socavar las iniciativas diplomáticas. Tras una amarga condena de los sandinistas por su negativa a firmar el borrador de Contadora de 1984, la administración cambió rápidamente de táctica cuando Nicaragua anunció inesperadamente que firmaría, en cuyo momento el borrador se convirtió en un engaño y un fraude y Estados Unidos pasó a socavarlo por medio de denuncias adicionales de los traidores sandinistas. "Washington intentó por todos los medios disponibles bloquear la firma del documento de paz de Contadora", comentó el viceministro de asuntos exteriores de Costa Rica, Gerardo Trejos Salas, en una entrevista sobre la cual no se informó, en la que estudiaba cómo Estados Unidos había "presionado insistentemente" a Costa Rica y a sus estados clientes durante el período 1985-86, momento que él había presenciado como "testigo directo"<sup>36</sup>. Los acontecimientos siguieron el mismo curso en junio de 1986, como hemos visto.

Las iniciativas de Arias de 1987 también recibieron muy mala acogida por parte de la administración Reagan. En junio, su "emisario para la paz", Philip Habib, informó a "senadores de alto nivel" que "si la administración considerara que sus puntos de vista y sus intereses no se reflejaban en los acuerdos regionales, continuaría suministrando fondos a los rebeldes de los Contra nicaragüenses a pesar de los acuerdos alcanzados por los dirigentes [centroamericanos]", notificación previa que fue objeto de poca atención. Durante el mismo mes, la administración presionó al presidente Duarte para que bloqueara una reunión



concertada de presidentes centroamericanos en Guatemala. Un funcionario guatemalteco informó que Duarte “indicó personalmente al presidente de Guatemala que el motivo de su solicitud de un aplazamiento se debía a la presión por parte de EEUU”, aplicada por Habib.<sup>37</sup> La prensa guatemalteca y hondureña publicó el diálogo entre Habib y Duarte, según los funcionarios salvadoreños informaron sobre el mismo al gobierno guatemalteco (y a continuación al Congreso guatemalteco). Durante las conversaciones, Habib presionó a Duarte para que rechazara el plan de paz de Arias, informándole que el requisito a efectos de que El Salvador negociara con la oposición desarmada destruiría la “democracia en El Salvador”. Duarte accedió e insistió en un aplazamiento de la reunión de junio.<sup>38</sup>

Esto no interesó a los medios de comunicación de EEUU. A Habib se lo presenta habitualmente como un franco defensor de la diplomacia y la paz.

En un esfuerzo de última hora para socavar el acuerdo de paz, Washington presentó el plan Reagan-Wright el 5 de agosto, solicitando la desmantelación del sistema político en Nicaragua, el fin de la ayuda armamentista a Nicaragua y la desmovilización de las fuerzas sandinistas. A cambio, Estados Unidos se *comprometería* a interrumpir los envíos de armas a los Contra. Esta propuesta fue objeto de considerables aclamaciones en los medios de comunicación como algo objetivo y justo; las vistas del caso Irán-Contra que habían terminado dos días antes ya eran historia antigua, junto con su sugerencia de que un compromiso por parte de EEUU podría tener un valor algo inferior al del oro. No obstante, para sorpresa y enojo de la administración, los presidentes centroamericanos llegaron a un acuerdo el 7 de agosto.

La propaganda gubernamental pasó entonces, como era de suponer, a demoler los acuerdos inaceptables. Los medios de comunicación siguieron esta línea dócilmente. He estudiado los hechos en otro lugar, de manera que me limitaré a resumir esta importante campaña.<sup>39</sup>

El problema que se había de abordar era familiar: una gran potencia ha sido incapaz de imponer su voluntad y se encuentra ante condiciones y circunstancias que se niega a aceptar. Un Estado que cuenta con un poder inusual, tal como Estados Unidos, dispone de varias maneras de hacer frente al problema. Una es hacer creer que el adversario ha capitulado, aceptando la postura de EEUU. Esta opción se puede desa-

rollar sólo si se puede confiar en que el sistema de información siga el juego, presentando la versión del gobierno de EEUU como si fuera verdadera, por exóticas que fueran sus pretensiones. Si los medios de comunicación cumplen con sus responsabilidades en este sentido, entonces sin duda el adversario tendrá que aceptar los términos de EEUU, o de otro modo sufrirá la retribución correspondiente a la violación del supuesto compromiso solemne de adherirse a los mismos.

Un destacado ejemplo de esta técnica fue el trato acordado al tratado de paz de París de enero de 1973, que Estados Unidos se vio obligado a firmar tras el fracaso de su intento de obligar por la fuerza a Vietnam del Norte a someterse, por medio de los bombardeos navideños con B-52 de zonas pobladas. El gobierno de EEUU ofreció inmediatamente una versión del tratado diametralmente opuesta a sus términos en todos los puntos importantes. Esta versión fue aceptada y promulgada universalmente por los medios de comunicación, de manera que los términos reales del tratado de paz habían quedado relegados al baúl de los recuerdos en pocos días, literalmente. Estados Unidos y su cliente Vietnam del Sur pasaron a continuación a efectuar violaciones masivas del tratado real, en un esfuerzo por lograr por la violencia sus metas largo tiempo deseadas; cuando los adversarios vietnamitas finalmente respondieron del mismo modo, fueron acusados mundialmente de la ruptura de los acuerdos y obligados a pagar por su crimen.<sup>40</sup> El caso de los acuerdos de paz centroamericanos fue parecido. Era necesario volver a darles forma de manera que se conformaran a los dictados de EEUU, tarea que se logró con la cooperación anticipada de los medios de comunicación, aunque llevó algo más de tiempo que la victoria que se produjo de la noche a la mañana cuando los acuerdos de paz de París —quizás un indicio de que los medios de comunicación realmente han llegado a ser más “adversos” que en el pasado.

El primer requisito de la campaña de demolición era establecer que lo que obligó a los sandinistas a negociar había sido el apoyo de EEUU a los Contra. Esto siempre es una doctrina importante, ya que se puede explotar para justificar el posterior recurso a la fuerza armada y al terror. Esta tesis resiste malamente la evidencia de la historia; el esfuerzo por parte de Nicaragua a la hora de desarrollar los medios pacíficos requeridos por el derecho internacional a través del Tribunal Internacional, las Naciones Unidas y el proceso de Contadora, y el éxito de



Washington a la hora de “derrotar” estas iniciativas.<sup>41</sup> Estos problemas se superaron fácilmente, desterrando los hechos al baúl de los recuerdos. La verdad doctrinal requerida se convirtió a continuación en un estereotipo. Los redactores del *New York Times* pudieron, por tanto, criticar a Michael Dukakis durante la campaña electoral de 1988, diciendo que “infravalora la importancia de la fuerza a la hora de llevar a los sandinistas a la mesa de negociaciones”<sup>42</sup>. No sería razonable esperar que los hechos molestos supusieran un obstáculo para un principio que autoriza el recurso continuado a la violencia como medio necesario para lograr la paz. De manera más general, lo que es útil es verdad. Punto.

La primera tarea se logró con rapidez. El problema siguiente consistía en dismantelar los propios acuerdos. Su primera etapa duró desde su firma en agosto de 1987 hasta enero de 1988, cuando los presidentes centroamericanos debían recibir el informe de la comisión de verificación internacional (CIVS), a la cual se le había encomendado la supervisión de los acuerdos. El objetivo de la administración Reagan consistía en centrar toda la atención en los sandinistas, asegurándose así de que Estados Unidos pudiera mantener el ataque por parte de sus fuerzas por procuración y excluir a los estados clientes de EEUU de las estipulaciones de los acuerdos. Los medios de comunicación se dedicaron inmediatamente a estas tareas adicionales, y para enero desaparecieron los últimos jirones de los acuerdos originales, sustituidos por los términos iniciales de EEUU. A partir de entonces, los hechos irrelevantes sólo tienen interés para los archiveros. Prevalecen las ilusiones necesarias.

El plan de paz especificaba un “elemento indispensable” para la paz, a saber, una terminación de la ayuda manifiesta o secreta en cualquier forma (“militar, logística, económica, propagandística”) a las “fuerzas irregulares” (los Contra) o a los “movimientos insurreccionistas” (la guerrilla indígena). La respuesta de Estados Unidos fue aumentar inmediatamente sus vuelos de suministro ilegales de la CIA, que ya habían alcanzado el extraordinario nivel de uno al día, en un esfuerzo por mantener a las fuerzas por procuración en el terreno. Estos vuelos se duplicaron en septiembre, y prácticamente se triplicaron durante los meses siguientes. Los vuelos de reconocimiento también aumentaron. El éxito se manifestó inmediatamente, ya que la intensidad de los ata-

ques de los Contra a los civiles llegó a duplicarse, incluyendo emboscadas, asesinatos, ataques a cooperativas agrícolas y secuestros.<sup>43</sup> La CIA también ofreció sobornos a los dirigentes de los Miskitos para evitar que se unieran al proceso de paz.

Los acuerdos de paz, por tanto, murieron al nacer. Estos fueron con mucho los acontecimientos más significativos durante la etapa agosto-enero de los acuerdos.

Los medios de comunicación respondieron ante estos hechos inaceptables ocultándolos. Estados Unidos, por supuesto, no era un país signatario, de manera que técnicamente hablando no podía “violar” los acuerdos. Una narración honrada, sin embargo, habría indicado—de hecho, habría recalcado— que Estados Unidos actuó inmediatamente para hacer que los acuerdos fueran ineficaces. Nada parecido se puede hallar. Aparte de los grupos marginales con acceso a los medios de comunicación alternativos, que no estuvieran sometidos al código de disciplina, ni incluso el más asiduo de los adictos a los medios de comunicación podría haber tenido un conocimiento que no fuera mínimo de estos hechos esenciales. El comportamiento del *New York Times* fue especialmente notable, incluyendo falsificaciones directas junto con una concienzuda ocultación.

La ocultación de los hechos en relación con los vuelos de suministro de EEUU persistió una vez que se llegó finalmente a la destrucción de los acuerdos en enero de 1988. Los informes nicaragüenses, que habían sido correctos y se habían descartado en el pasado, continuaron siendo pasados por alto por los medios de comunicación, por no ser consecuentes con las imágenes que éstos desean transmitir. En diciembre de 1988, el ministro de Defensa, Humberto Ortega, alegó que la administración Reagan continuaba efectuando vuelos de suministro a los Contra en el interior de Nicaragua, violando la prohibición del Congreso (por no hablar de los acuerdos de paz olvidados, y de los términos incluso más profundamente improcedentes del derecho internacional). Declaró que el radar nicaragüense había detectado diez vuelos clandestinos de suministro a Nicaragua desde la base aérea de Ilopango, próxima a San Salvador, durante el mes de noviembre —la “ruta Hasenfus”—, añadiendo que “Hablamos de vuelos de la CIA; no sabemos si cuentan con la aprobación del gobierno salvadoreño”. Aparte de la fe en la doctrina del “cambio de ruta” milagroso, había pocos



motivos para dudar que el informe fuera verdad. Como de costumbre, se hizo caso omiso, y no se produjeron investigación, comentario o conclusión algunos. Estos informes de considerable significado realizados por Nicaragua estaban disponibles para los lectores de *Barricada Internacional* (Managua), publicación en lengua inglesa, pero no para los del *New York Times*, ni de cualquier otra publicación, en mi conocimiento. Los ataques a civiles por parte de las fuerzas terroristas operadas por EEUU también continuaron, sin que se informase sobre los mismos, de acuerdo con el modelo general, que contaba con una tradición de largos años.<sup>44</sup>

Los acuerdos hacían un llamamiento a la “justicia, la libertad y la democracia” y a las garantías de “la inviolabilidad de todas las formas de vida y libertad” y “la seguridad del pueblo”, a “un proceso democrático auténticamente pluralista y participativo para fomentar la justicia social” y al “respeto por los derechos humanos”. Estas estipulaciones también eran inaceptables para Estados Unidos, sencillamente porque su cumplimiento, o incluso la aproximación a su cumplimiento, era imposible en los estados clientes de EEUU sin el desmantelamiento de la estructura gubernamental, dominada por las fuerzas armadas y los servicios de seguridad. Habiendo eliminado las estipulaciones de aplicación a Estados Unidos, los medios de comunicación se enfrentaron por tanto a una segunda tarea: eliminar las prácticas de los estados clientes de su orden del día. Este problema se superó sin dificultades, empleando los mismos medios: la simple negativa a informar sobre los hechos, o su marginación y distorsión cuando eran demasiado evidentes como para pasarlos por alto en su totalidad. El terror estatal en los estados clientes de EEUU aumentó considerablemente, pero poco importaba. La atención de los medios de comunicación se centraba como un láser en Nicaragua, que recibía mucha más cobertura que todos los demás países juntos –prácticamente toda ella centrada en las desviaciones de los acuerdos tal como se interpretaban en Washington.

Otra característica inaceptable de los acuerdos era la función acordada a los supervisores internacionales, los CIVS. Estados Unidos no soporta interferencia alguna en sus dominios; de ahí la antigua oposición de EEUU a los esfuerzos por la paz de las democracias de América Latina, y ahora también a los CIVS. Además, la presencia de los CIVS impediría la violación de los acuerdos, lo que supondría una interfe-

rencia en las intenciones de EEUU. La primera fase de los acuerdos se concluyó en enero con un informe de los CIVS, que tuvieron tan mal gusto como para condenar a Estados Unidos y a sus clientes, al tiempo que encomiaban los pasos iniciados por Nicaragua. Era evidente que tenía que desaparecer. El *Times* colaboró ocultando en su práctica totalidad el informe CIVS, y, bajo la presión de EEUU, la comisión de seguimiento fue eliminada.

La victoria fue completa; no quedaba ni un jirón de los acuerdos originales. Nicaragua respondió anunciando que cumpliría con los términos de los anteriores acuerdos unilateralmente, solicitando una supervisión internacional para el seguimiento exclusivo de su acuerdo. Los medios de comunicación leales respondieron anunciando que Nicaragua había acordado por fin dar cumplimiento a los acuerdos de paz, aunque por supuesto uno no puede fiarse de los comunistas.

Mientras tanto, el terror estatal fue en aumento en los estados clientes, sin por ello influir sobre el juicio de que a Nicaragua le correspondía la principal responsabilidad en relación con la violación de los acuerdos; respuesta correcta, ya que Estados Unidos y sus clientes habían quedado eximidos de toda culpa, por edicto de los medios de comunicación de Washington. En el *Times*, el terror prácticamente no se comentó, aparte del terror de la *guerrilla* en El Salvador, ante el cual el gobierno a veces “respondía”, como comentó James LeMoyne con pesar. En octubre de 1988, Amnistía Internacional emitió un informe sobre el marcado aumento de matanzas, secuestros, tortura y mutilación por parte de los escuadrones de la muerte, hallando los orígenes del terror en las fuerzas de seguridad del gobierno. El *Times* hizo caso omiso del informe, mientras que el Senado aprobó una resolución advirtiéndole a Nicaragua que se enviaría una nueva ayuda militar a los Contra si los *sandinistas* continuaban violando los acuerdos de paz.<sup>45</sup>

Volviendo a enero de 1988, con los acuerdos limitados ahora al asunto del cumplimiento por parte de Nicaragua de los dictados de Washington, el tema crucial pasó a ser la disponibilidad sandinista para una negociación con los representantes civiles, establecidos por la CIA, de las fuerzas por procuración de Washington. Los propios acuerdos no requerían tales negociaciones, como se observaba de cuando en cuando en letra pequeña, pero hacía mucho que se habían descartado y habían pasado al olvido. A principios de 1988, Nicaragua accedió a



esta condición de EEUU, alcanzando un acuerdo inesperado de alto el fuego con los Contra. Mientras tanto, las guerrillas indígenas de El Salvador y Guatemala vieron continuamente rechazados sus esfuerzos por negociar, pero estos hechos se ocultaron por considerarse improcedentes, según la versión de los acuerdos presentada por los medios de comunicación de Washington. Cuando no se ocultaban, los hechos sencillamente se negaban, como cuando Jeane Kirkpatrick escribió en junio que “Duarte ha visto cómo sus generosas ofertas de amnistía y negociación han sido rechazadas por [las guerrillas del] FMLN, una por una”. Esta manifestación se produjo tras el rechazo por Duarte ante una serie de esfuerzos por parte del FMLN, la oposición política y la Iglesia por organizar las negociaciones; la generosa oferta de amnistía, como Kirkpatrick comprende perfectamente, sería una oferta de asesinato a mano de los escuadrones de la muerte, aparte del hecho de que el gobierno de Duarte —a diferencia de los sandinistas— negaba la amnistía a los dirigentes guerrilleros.<sup>46</sup>

El alto el fuego nicaragüense se firmó el 23 de marzo. El acuerdo declaraba que “solamente se negociará y se aceptará la ayuda humanitaria, según el artículo 5” de los acuerdos de agosto de 1987, que “se canalizará por medio de asociaciones neutrales”. A Joao Clemente Baena Soares, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se le encomendó la tarea de garantizar el cumplimiento del acuerdo. El Congreso respondió votando abrumadoramente a favor de la violación de los términos del alto el fuego, dando su aprobación a 47,9 millones de dólares de ayuda a los Contra, a administrar por el Departamento de Estado a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), de EEUU. La ayuda la entregaría en Honduras y en el interior de Nicaragua una “empresa privada”, informó James LeMoyne, citando al dirigente de los Contra Alfredo César; la frase “empresa privada” es un eufemismo para la CIA, para la que la AID ha admitido haber servido de fachada en el pasado. Adolfo Calero, dirigente de los Contra, declaró que el acuerdo de alto el fuego permitía la entrega de ayuda en la frontera nicaragüense por parte de la CIA, y el Demócrata David Bonior, miembro del Congreso, añadió que los rebeldes seleccionarían a la entidad “privada” que efectuaría el transporte. Ni en sueños puede considerarse que la AID sea una “organización neutral”<sup>47</sup>.

La legislación del Congreso estipulaba que toda la ayuda debería administrarse de manera consecuente con el acuerdo de alto el fuego del 23 de marzo, y según las decisiones de la Comisión de Verificación establecida por dicho acuerdo, cuya autoridad responsable era el secretario general Soares. En una carta a George Shultz fechada el 25 de abril, Soares llamó su atención a este pasaje de la legislación del Congreso, y declaró que el hecho de recurrir a AID suponía una manifiesta violación del acuerdo de alto el fuego, manifestando su “profunda preocupación en cuanto a esta situación en su totalidad”. Recalcó además que el artículo 5 de los acuerdos de paz, que determina cómo se ha de entregar la ayuda al amparo del acuerdo de alto el fuego, descarta explícitamente cualquier ayuda a los Contra, con la salvedad de la repatriación o el reestablecimiento. La ayuda se le puede enviar a los Contra dentro de Nicaragua por los medios acordados por ambos lados, como medio para su “reintegración a la vida normal”, pero con ningún otro fin. Las objeciones del funcionario encargado de la supervisión del acuerdo se descartaron —de hecho, que yo sepa, no se informó sobre las mismas— y las operaciones ilegales continuaron.<sup>48</sup>

Sería interesante saber si en los medios de comunicación de EEUU apareció alguna referencia a la decisión del Tribunal Internacional en cuanto a la “ayuda humanitaria” (párrafo 243). Si dicha ayuda ha “de escapar a la condena” en tanto que intervención ilegal, declaró el tribunal, “no sólo ha de limitarse a los objetivos consagrados por la práctica de la Cruz Roja, a saber, ‘evitar y aliviar el sufrimiento humano’, y ‘proteger la vida y la salud y garantizar el respeto por el ser humano’; también, y sobre todo, ha de otorgarse sin discriminación a todos los que la necesiten en Nicaragua, y no solamente a los miembros de la Contra y las personas a su cargo”. “Una característica esencial de los ayuda auténticamente humanitaria es que se otorga ‘sin discriminación’ de ningún tipo”. Incluso el comentarista, dotado de la mayor imaginación, experimentaría cierta dificultad a la hora de hacer que esta decisión fuera compatible con la legislación del Congreso. Lo mejor, por tanto, sería ocultar el asunto, cosa fácil en una cultura intelectual que desprecia el imperio de la ley como un absurdo infantil (cuando se nos aplica a nosotros) y que se conforma a los requisitos de los poderosos de manera prácticamente refleja.

El informe del *Times* sobre la decisión del Congreso a efectos de



otorgar fondos a los Contra, violando el acuerdo de alto el fuego, los acuerdos de paz y el derecho internacional, citaba puntos de vista que iban desde los de los halcones que la condenaban “como un momento bajo en la historia de Estados Unidos” (senador John McCain), al del senador Brock Adams, que votó en contra de la propuesta de ayuda basándose en el hecho de que “el intento por parte de Estados Unidos de crear un gobierno por medio de los Contra es un error histórico similar a nuestro intento de crear un gobierno en el Sudeste Asiático. Una vez más, estamos en una posición de dar apoyo a la fuerza militar sin lograr una victoria”. Estas dos citas también aparecieron en “Citas del Día”<sup>49</sup>. Convenientemente, la opinión recalcada queda muy dentro de los límites aceptables del mero desacuerdo táctico.

El mandatario de AID Alan Woods dijo que la ayuda habría de entregarse por “aeronaves privadas americanas” y que no había certeza alguna a efectos de que los sandinistas permitirían estos suministros aéreos a los Contra dentro de Nicaragua –en violación del acuerdo de alto el fuego, como lo había determinado el secretario general Soares. El artículo del *Times* en el que se informaba al respecto se titulaba “Funcionario Ve Problemas en cuanto a la Ayuda a los Contra: El Gran Obstáculo es la Desconfianza Sandinista”. A continuación, AID empezó a entregar suministros a los Contra en Honduras, violando la legislación del Congreso que estipulaba que la ayuda se había de entregar “en zonas del alto el fuego,” todas ellas en Nicaragua, y violando el acuerdo de alto el fuego por los motivos ya explicados; por una parte, porque “AID, un organismo de EEUU, evidentemente no es... [una] organización neutral”, indicó el Consejo para Asuntos del Hemisferio, recalcando la protesta de Soares, y la queja nicaragüense a efectos de “que los armamentos con origen en la base de la CIA de Swan Island, Honduras, se habían ocultado en los envíos prohibidos”. Los servicios telegráficos informaron que Nicaragua había ofrecido que los suministros se le enviaran a los Contra a través de la Cruz Roja u otros organismos neutrales, y que los representantes de grupos indios rebeldes “estaban de acuerdo con el gobierno en el sentido de que la Cruz Roja Internacional debería gestionar la distribución de la ayuda humanitaria a los mismos”, ofertas que fueron rechazadas o pasadas por alto por el gobierno de EEUU y sus mandatarios.<sup>50</sup>

El Grupo de Estudio Demócrata del Congreso elaboró un informe

en el que se condenaba a la administración por numerosas violaciones del acuerdo de alto el fuego y de la legislación del Congreso. Observó que los sandinistas habían propuesto a la Cruz Roja, a Unicef y a otros organismos de socorro reconocidos como agentes para la entrega, pero que todos menos uno habían sido rechazados por AID, que propuso a varias organizaciones con vínculos políticos con la derecha, y desprovistas de experiencia en América Latina. El Grupo de Estudio también informó que los sandinistas habían “invitado a los Contra a proponer otro organismo”, sin recibir respuesta alguna de la misma –lo cual no resulta sorprendente, ya que se les estaban efectuando suministros en violación del acuerdo de alto el fuego. El informe también observó que, mientras que enviaba ayuda de manera ilegal a los Contra, la administración se había negado a proporcionar ayuda a las familias de los rebeldes indios, y solamente efectuaba suministros a los combatientes estacionados en Honduras, utilizando los servicios de una empresa que había transportado suministros a los Contra.<sup>51</sup>

El *Times* por lo general hizo caso omiso de los hechos, de los que ofreció una versión diferente. James LeMoyne informó que “puesto que los sandinistas han logrado obstruir los esfuerzos para enviar nuevos suministros a los rebeldes, de acuerdo con los términos del alto el fuego, los podrán atacar en un momento de debilidad máxima, cuando termine el alto el fuego”. Robert Pear declaró que el presidente Ortega “ha obstaculizado las entregas” de la ayuda autorizada por el Congreso basándose en “que las entregas violarían el acuerdo de alto el fuego”. No se mencionó el hecho de que ésta también había sido la conclusión del funcionario encargado de supervisar el acuerdo; su nombre sí aparecía en el artículo, pero sólo dentro del contexto de la decisión de la administración Reagan a efectos de que éste no había cumplido con sus “normas de responsabilidad” financiera, de manera que no habían desembolsado los 10 millones de dólares proporcionados por el Congreso para que la comisión verificara el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego –reacción comprensible ante los mecanismos de verificación cuando el gobierno de EEUU está decidido a violar los acuerdos y el derecho internacional, con la protección de los medios de comunicación.<sup>52</sup>

Violando adicionalmente tanto el acuerdo de alto el fuego como la legislación del Congreso, la administración Reagan envió fondos a los



Contra para que los invirtieran como desearan, método “considerado por AID como una contabilidad suficiente”, como comentó con sarcasmo el miembro del Congreso Tony Coelho. Los funcionarios de AID anunciaron que además de socorro alimenticio, “también se entregó más de un millón de dólares en material —equipos y suministros militares”, aunque no armas ni municiones, informó el *Washington Times*. El Congreso había legislado sobre el envío de ayuda a los niños nicaragüenses, estipulando, no obstante, que “no se puede proporcionar ayuda alguna a o por medio del gobierno de Nicaragua”, que dirige la mayoría de las instalaciones médicas y hospitales. Como era de suponer, AID interpretó la condición de la manera más restringida posible, limitando así este gesto un tanto cínico por parte de quienes asignaban fondos al “uso ilegítimo de la fuerza” contra Nicaragua. AID también rechazó ofertas por parte de organizaciones humanitarias independientes a efectos de entregar la ayuda a los niños de Nicaragua. Una carta de la Escuela Médica de Brown University, ofreciendo la presentación de una propuesta detallada para la distribución de esta ayuda, no recibió ni siquiera un acuse de recibo. El gobierno nicaragüense rechazó posteriormente toda ayuda similar en tanto Estados Unidos apoyara a los Contra, basándose en el hecho de que “no tiene sentido recibir ayuda para los niños del mismo órgano que es responsable de sus daños”, dijo el encargado de prensa de la Embajada. “Es como si alguien te diera una paliza y luego, para descargar su conciencia, te pusiera una tiritita. Y luego te volviera a dar una paliza”<sup>53</sup>.

Los medios de comunicación nacionales permanecieron impertérritos durante todo el proceso, en cumplimiento de la doctrina que dice que Estados Unidos está por encima de cualquier ley o acuerdo internacional —y, huelga decirlo, por encima de cualquier principio moral.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció una nueva decisión que prohibía la importación de café nicaragüense procesado en un tercer país, que “no se considerará lo suficientemente transformado como para perder su identidad nicaragüense”. Basta sustituir “nicaragüense” por “judío” para saber a qué fase de la historia corresponde esta decisión. “En estas palabras se perciben ecos de las definiciones de la pureza étnica en el Tercer Reich”, observó el *Boston Globe*.<sup>54</sup>

Durante el mismo mes, las negociaciones en relación con una solu-

ción política se rompieron por medio del aumento de las exigencias por parte de los Contra, sin duda siguiendo el guión del Departamento de Estado. Cada nuevo acuerdo del gobierno, yendo mucho más allá de los términos del acuerdo de paz, olvidado hacía mucho, llevaba simplemente a nuevas exigencias. En su esfuerzo final por evitar un acuerdo, los Contra presentaron una nueva lista de exigencias el 9 de junio de 1988, entre ellas: la liberación inmediata de todas las personas encarceladas por delitos políticos o delitos comunes afines; el derecho de los reclutas a abandonar el ejército como mejor les pareciera; la dimisión forzosa de los Jueces del Tribunal Supremo (que serían sustituidos según la decisión de los Contra, la oposición y el gobierno, con lo cual se garantizaría a los clientes de Washington una mayoría de 2 a 1); la devolución de o compensación por los bienes confiscados a los Contra y distribuidos a minifundistas y cooperativas (y que beneficiaría principalmente a los somocistas); la suspensión del reclutamiento militar por parte del gobierno; el establecimiento de oficinas de los Contra en Managua y la emisión de licencias a canales de televisión “independientes” (lo que en realidad significa canales operados por Estados Unidos, que dominarían las ondas rápidamente por razones evidentes de acceso a los recursos). Todas estas acciones, algunas de ellas inconstitucionales, las debería tomar el gobierno mientras que los Contra permanecían armados y sobre el terreno. En su estudio del historial, el Centro para la Política Internacional observó que el objetivo sólo podía haber sido “torpedear las negociaciones y devolver el asunto una vez más a un Congreso de EEUU dividido”. Julia Preston comentó que “la propuesta de los Contra, de seis páginas, parecía ser un gesto de despedida más que un documento de negociación”, con sus “nuevas exigencias arrolladoras” tras las cuales se produjo su rápida partida de Managua, antes de que las negociaciones fueran posibles.<sup>55</sup>

El gobierno de Nicaragua instó a la renovación de las conversaciones, sin recibir respuesta alguna de Washington ni de los Contra, que añadieron nuevas exigencias. Incluso el cardenal Obando, que no logra ocultar su simpatía hacia los Contra, los instó a que reiniciaran las conversaciones, sin resultados. A continuación se produjo lo que el Consejo para Asuntos del Hemisferio describió como “una campaña, operada por la CIA, de provocación y trastorno internos dentro de Nicaragua”, que “estableció una atmósfera de falsa crisis” en la que el



Congreso podría volver a aprobar nuevas ayudas a los Contra. Las palomas del Congreso implementaron una legislación que proporcionaba ayuda renovada, al tiempo que advertían a los sandinistas que a continuación vendría la ayuda militar si Nicaragua continuaba obstaculizando individualmente la paz y la democracia o atacaba a las fuerzas de los Contra, que rechazan las negociaciones y llevan a cabo atrocidades en Nicaragua.<sup>56</sup> Los medios de comunicación siguieron alegremente dentro de esta misma línea.

A medida que la administración Reagan se aproximaba a su fin, se fue haciendo menos realista, y menos necesario, recurrir al terror de los Contra como instrumento de castigo a Nicaragua por sus esfuerzos por encaminar los recursos hacia la mayoría pobre, por mejorar los niveles sanitarios y de asistencia social y por seguir el camino del desarrollo independiente y de la neutralidad. A pesar de niveles y formas de apoyo militar desconocidos en los levantamientos auténticos y de la dominación de grandes zonas de Nicaragua por la propaganda de EEUU, Estados Unidos no había logrado crear una fuerza de guerrilla viable, lo cual constituye un hecho notable. Una administración nueva, menos resuelta a castigar la desobediencia por medio del terror, probablemente haría suyo el consenso de la elite de los años anteriores, que reconocía que existen más medios económicamente rentables de estrangular y destruir a un pequeño país en una región tan dependiente para su supervivencia de las relaciones con Estados Unidos. Son capaces de comprender la evaluación de una Misión del Banco Mundial de octubre de 1980, que concluyó que podría llegar a producirse un desastre económico si Nicaragua no recibía una amplia ayuda externa para superar los efectos de la destrucción y los robos de los últimos años de Somoza: "Los niveles de ingresos *per capita* de 1977 no se lograrán, incluso en las mejores circunstancias, hasta la década de 1990."<sup>57</sup> Con la empresa privada destrozada y la economía arruinada, probablemente sin posibilidad de reparación, por la guerra económica de EEUU, el recurso a la violencia –costoso para Estados Unidos en cuanto a la opinión mundial y perjudicial a nivel nacional– había perdido gran parte de su atractivo para aquellos para quienes causar dolor y sufrimiento no constituyen fines en sí mismos. Sin duda, hay medios distintos y más eficaces de eliminar el peligro del éxito del desarrollo independiente de un país débil y pequeño.

Podemos, entonces, convertirnos en una "nación más amable, más bondadosa", desarrollando políticas más "pragmáticas" para lograr nuestros fines.

Además, a pesar de que la campaña del gobierno y de los medios de comunicación logró destruir los acuerdos de paz de 1987 y sus promesas, sin embargo entraron en acción fuerzas que la administración no podía controlar. El apoyo ilegal clandestino a los Contra se hizo más difícil después de los descubrimientos parciales durante el asunto Irán-Contra, y ya no era posible organizar abiertamente el apoyo del Congreso a los Contra al nivel extraordinario necesario para mantenerlos activos en el terreno. A medida que el nivel de vuelos de suministro se redujo a principios de 1988, junto con las posibilidades de renovación de la ayuda oficial, las fuerzas por procuración huyeron a Honduras, y bien podrían haber sido borradas del mapa si no hubiera sido por el envío de unidades militares de elite de EEUU –la "invasión" de Honduras por Estados Unidos, como los medios de comunicación de la corriente principal de allí describieron el asunto, la defensa de Honduras de la agresión sandinista, en términos del discurso de EEUU.

Los elementos de los Contra se pueden mantener, y es de presumir que se mantendrán, dentro de Nicaragua en calidad de fuerza terrorista, para asegurar que Nicaragua no pueda desmovilizar sus recursos patéticamente limitados y dirigirlos a la reconstrucción a partir de las ruinas que dejaron tras de sí Somoza y Reagan. También se puede mantener una amenaza persistente de invasión por parte de EEUU para garantizar que Nicaragua tenga que mantenerse en guardia, con costos considerables, mientras que los comentaristas al estilo de Jeane Kirkpatrick ridiculizan la paranoia sandinista. Pero ya no será necesario representar a los Contra como el pueblo, unido, que se levanta contra sus verdugos, campesinos resueltos que luchan contra la "hegemonía" soviética, como los expertos preferidos de los medios habían explicado con gravedad. A principios de 1989, podemos leer que las "reivindicaciones sandinistas en el sentido de que los Contra consistían meramente en mercenarios de EEUU adquirieron nuevo crédito entre los nicaragüenses... se considera a los Contra como un ejército de nicaragüenses que pensaron que Estados Unidos les proporcionaría puestos de trabajo seguros y bien pagados, pero pensaron mal"<sup>58</sup>. El terror a bajo nivel, la "administración de la percepción" y la "conten-



ción" obligarán al gobierno nicaragüense a mantener un elevado nivel de preparación militar y de controles internos, y junto con la guerra económica e ideológica, deberían bastar para asegurar los logros de la violencia del reaganismo, incluso si el objetivo adicional de restaurar en Nicaragua la "modalidad centroamericana" se ha de abandonar con pesar. Eso es lo que deparará el futuro, si la población nacional de Estados Unidos lo permite. La tarea de los medios de comunicación consiste en asegurarse de que así sea.

El huracán devastador de octubre de 1988, con sus perspectivas bien acogidas de hambre masiva y enormes daños económicos a largo plazo, reforzó este modo de ver las cosas. Estados Unidos, como es natural, negó cualquier tipo de ayuda. Incluso los habitantes de la ciudad destruida de Bluefields, en la costa atlántica, con sus largos años de vínculos con Estados Unidos y su profundo resentimiento hacia los métodos sandinistas de extender la soberanía nicaragüense por la región, hubieron de quedar privados de sustento o de materiales de construcción; hubieron de morir de hambre, sin tejados que los protegieron de la lluvia, para castigar a los sandinistas. En los límites extremos, dentro de la corriente principal, de la crítica de las políticas de la administración Reagan, el *Boston Globe* explicó en un mensaje de Navidad por qué Estados Unidos no enviaba ninguna ayuda después del huracán. Bajo una imagen de Daniel Ortega, había un pie de foto que decía: "Nicaragua ha recibido poca ayuda humanitaria de EEUU debido a las políticas del presidente Daniel Ortega"<sup>59</sup>. Los aliados de EEUU, intimidados por la fuente de coacción mundial y mucho más sometidos a la propaganda de EEUU de lo que les gusta creer, también se negaron a enviar nada más que una ayuda muy limitada. Algunos manifestaron su disgusto con la represión sandinista; pura hipocresía, como podemos concluir inmediatamente a partir del hecho de que los regímenes mucho más brutales de El Salvador y Guatemala no ofenden sus sensibilidades.

Bajo estas circunstancias, la tarea para los medios de comunicación resulta evidente. En primer lugar, han de aplicar la técnica habitual de amnesia histórica y "cambio de dirección", que borra toda la memoria de las políticas de EEUU y sus efectos. Este medio, que es prácticamente un reflejo, se puede aplicar al momento. Al eliminarse de la conciencia el historial y los efectos de la violencia de EEUU, junto con la

naturaleza y las consecuencias de la guerra económica de EEUU que siempre han minimizado, pasamos a la fase siguiente. Todo el sufrimiento, el descontento y el trastorno se pueden atribuir ahora claramente a los malvados sandinistas. También es útil hacer que los nicaragüenses piensen del mismo modo, por medio de una cuidadosa selección de fuentes o de una falsa representación de las encuestas, por ejemplo.<sup>60</sup> Un buen modelo es el que se presenta en una serie en tres partes sobre Nicaragua, firmada por Edward Sheehan, que apareció en el *Boston Globe*, publicación liberal, bajo el titular "Un país que aún sufre". Los tres voluminosos artículos, a lo largo de los cuales se denunciaba amargamente a los sandinistas, contienen exactamente una frase que apunta de pasada que "Estados Unidos es culpable en parte de las penalidades de Nicaragua y de su economía destruida"<sup>61</sup>. Del sufrimiento de Nicaragua son responsables los sandinistas. Aparte de todo lo demás, la cobardía moral sigue siendo asombrosa, por muchas veces que suene el disco.

Para los planificadores inteligentes de EEUU, sería prudente evitar la destrucción total de Nicaragua o incluso su reincorporación a la "modalidad centroamericana", como prefiere la opinión liberal. Puede entonces servir como "lección objetiva" para los países pobres que podrían verse tentados a "enloquecer de nacionalismo fanático", como vociferaron los redactores del *New York Times* cuando la CIA logró derrocar el régimen parlamentario en Irán.<sup>62</sup> En un conflicto con un país del Tercer Mundo, una superpotencia violenta con restricciones internas limitadas difícilmente puede fracasar a la hora de lograr la meta de destruir cualquier esperanza.

Los logros de EEUU en América Central a lo largo de la última década constituyen una tragedia de primera magnitud, no sólo por su espantoso costo humano sino porque hace una década se estaban dando los primeros pasos prometedores en toda la región hacia la organización popular y hacia la posibilidad de hacer frente a las necesidades humanas básicas, con algunos éxitos tempranos que podrían haber resultado ser lecciones útiles para otros, acosados por problemas similares —lo que constituía precisamente el temor de los planificadores de EEUU. Estos pasos se han abortado con éxito, y quizá nunca se vuelvan a intentar.

Los logros de la administración Reagan en Nicaragua, manifestados



en las frías estadísticas de cadáveres, desnutrición, epidemias infantiles y otras calamidades, adquieren una dimensión más humana a través de la mirada ocasional a las vidas de las víctimas. Julia Preston proporciona uno de los escasos ejemplos en los medios de comunicación de la corriente principal bajo el titular: "En Jalapa, las dificultades producidas por la guerra apoyan la causa sandinista". Jalapa, escribe Preston, es una pequeña población en "un entrante de tierra vulnerable que penetra en la hostil Honduras", zona fácilmente asequible para los "Hijos de Reagan" en sus bases hondureñas y en su mayoría dominada por la propaganda hostil de las potentes emisoras de radio de Honduras operadas por EEUU. De poderse hacer en algúnsitio, es aquí donde los Contra podrían aplicar las lecciones que sus entrenadores de la CIA les han enseñado, y mostrar la "seguridad en sí mismos y habilidad crecientes" que tanto impresionaron a A.M. Rosenthal cuando leyó las "narraciones tan cuidadosamente informadas y tan sensibles de James LeMoyne"<sup>63</sup>.

En Jalapa, a los Contra se los desprecia, dice Preston, como mercenarios que "pensaron mal" al pensar en los "puestos de trabajo seguros y bien pagados" que les proporcionaría Estados Unidos (ver antes). Pero "la guerra de los Contra ha dejado a los jalapeños soportando una penuria mucho peor que cualquier otra que hayan conocido antes". El hambre impera. El hospital, construido en 1982 como "un símbolo del compromiso de los sandinistas para con la mejora de las condiciones sociales", está casi vacío porque la gente duda de que "tenga los medios para cuidarlos", gracias al desvío de los recursos hacia la guerra y "lejos de este tipo de proyecto social" —un logro del cual los ciudadanos de EEUU pueden estar orgullosos. No obstante, "la inmensa penuria no ha hecho que Jalapa se vuelva en contra de la revolución sandinista". Incluso sus habitantes antisandinistas "ven en la guerra una nueva etapa de una historia de intimidación por parte de EEUU a los nicaragüenses corrientes, de la cual la dinastía familiar de Somoza fue un ejemplo imborrable". Las campañas de alfabetización y "explosión educativa", severamente reducidas por la violencia de EEUU, "atraen lealtades duaderas" en Jalapa, aunque no sucede lo mismo en Estados Unidos, donde han sido objeto de gran mofa por considerarse como un instrumento del totalitarismo. Muchos residentes de la población ven "una sociedad más familiar, más igualitaria hoy día". Los campesinos

ya no son "serviles" ni los terratenientes "superiores", como sucedía bajo el régimen de Somoza y bajo el modelo de EEUU en general. "Los sandinistas ponen por vez primera créditos bancarios a disposición de los pequeños agricultores", y hoy "todo el mundo comparte la misma pobreza", aunque con "un grito de decepción" por el logro de Reagan a la hora de "retrasar la revolución", "dice un campesino agricultor de macrado".

Los objetivos a largo plazo de la administración Reagan para América Central estaban claros desde el principio. Mientras que Shultz, Abrams, Kirkpatrick y compañía ocupan una posición extrema en el espectro político en su entusiasmo por el terror y la violencia, los objetivos generales de la política son convencionales y están fuertemente arraigados en la tradición, la planificación de políticas y las instituciones de EEUU, lo cual explica por qué han sido objeto de poca atención y de pocas críticas dentro de la corriente principal. Por los mismos motivos, se puede esperar que perdurarán. Es necesario demoler "las organizaciones populares que luchan por defender sus derechos humanos más fundamentales" (arzobispo Romero) y eliminar cualquier amenaza de "ultranacionalismo" en las "democracias incipientes". Por lo que concierne a Nicaragua, si no se la puede devolver por la violencia a la "modalidad centroamericana" de represión y explotación, entonces al menos Estados Unidos deberá implementar la jactancia que se dice manifestó alguien perteneciente al Departamento de Estado en 1981: "convertir a Nicaragua en la Albania de América Central," esto es, pobre, aislada y radical". El gobierno de EEUU ha de asegurarse de que Nicaragua se "convierta en algo así como la Albania de América Latina", de modo que "el sueño sandinista de crear un modelo político nuevo y más ejemplar para América Latina quedara en ruinas" (periodista británico John Carlin).<sup>64</sup>

Estas metas se han logrado, en su mayoría. Ello se debe en gran parte a los medios de comunicación independientes, actuando en calidad de adjuntos al gobierno.



- <sup>1</sup> Audiencias del Comité del Senado sobre Relaciones Exteriores, 31 de agosto, 1966; citado por Aronson, *The Press and the Cold War*, 226.
- <sup>2</sup> Hay excepciones cuando los factores de interferencia distorsionan la operación del sistema. Incluso los sectores poderosos del mundo de la empresa pueden ver denegado su acceso inmediato al foro público; véase un caso en el siguiente capítulo.
- <sup>3</sup> *Turning the Tide*, 72f., y mi artículo en Walker, *Reagan versus the Sandinistas*. Ver también Michael Parenti, "Afterword," en Morley y Petras, *The Reagan Administration in Nicaragua*, y Michael Linfield, *Human Rights in Times of War*, manuscrito, 1988.
- <sup>4</sup> Spence, "The U.S. Media: Covering (Over) Nicaragua", en Walker, *Reagan vs. the Sandinistas*. Sobre la cobertura de las elecciones, ver apéndice I, sección 1, y las fuentes citadas.
- <sup>5</sup> Council on Hemispheric Affairs (COHA, Consejo sobre Asuntos Hemisféricos), "News and Analysis," 29 de febrero, 1988.
- <sup>6</sup> De manera más general, sería muy difícil hallar en los medios ninguna discusión sobre el efecto de la Alianza para el Progreso a la hora de intensificar la crisis, con su insistencia en programas de desarrollo que aumentaron tanto el producto nacional bruto como el sufrimiento humano (por ejemplo, pasando de la producción de los cultivos de subsistencia a la cría de ganado vacuno para la exportación), llevaron a un grave perjuicio ecológico, y en general constituyeron una catástrofe humana incluso cuando representaron un éxito a nivel estadístico.
- <sup>7</sup> Por ejemplo, Katsuichi Honda publicó en la prensa japonesa algunos estudios extensos de la vida en los pueblos controlados por las fuerzas de resistencia de Vietnam del Sur y bajo ataque de EEUU, pero nadie quiso la traducción al inglés. El especialista en Cambodia Serge Thion informó sobre su visita a las guerrillas de Cambodia en 1972 en *Le Monde*, pero el *Washington Post* rechazó el informe. El especialista en el sudeste asiático de *Le Monde*, Jacques Decornoy, publicó informes directos sobre el devastador bombardeo de Laos por parte de EEUU en 1968, pero a pesar de repetidos esfuerzos, ninguna publicación de EEUU estuvo dispuesta a reimprimir sus artículos o incluso a mencionar los hechos. Se hizo caso omiso de los informes elaborados por periodistas extranjeros sobre las atrocidades de las fuerzas salvadoreñas respaldadas por EEUU, e incluso del testimonio directo por parte de miembros de la Cámara. Ver *For Reasons of State, Towards a New Cold War, Manufacturing Consent*, sobre estos y otros ejemplos.



- <sup>8</sup> Los refugiados camboyanos en la frontera tailandesa a finales de la década de 1970 no eran más accesibles que los refugiados camboyanos de Phnom Penh unos años antes, pero los primeros tenían una historia útil que contar, lo que no sucedía en el caso de los últimos, que por tanto fueron ignorados. Los campamentos de la frontera tailandesa también eran más accesibles que Lisboa o Australia, a pesar de ciertas reivindicaciones considerables por parte de periodistas que sin duda están mejor informados que todo eso, pero lo que los refugiados de Timor tenían que decir no cumplía con los requisitos del poder de EEUU, en contraste con el caso de los que huyeron de las atrocidades de Pol Pot. Ver *Political Economy of Human Rights* y *Manufacturing Consent* para un comentario y detalles, en éste y otros casos.
- <sup>9</sup> Seattle, Central America Media Project, *Out of Balance*. Ver también el apéndice V, sección 6, sobre la selección de las fuentes dentro de Nicaragua por parte del *Times*.
- <sup>10</sup> Donald Fox y Michael J. Glennon, "Report to the International Human Rights Law Group and the Washington Office on Latin America", Washington D.C., abril de 1985, 21, donde se hace referencia a la reacción del Departamento de Estado ante su revelación de atrocidades de los Contra. La mayoría de los estudios, como éste, fueron pasados por alto o descartados.
- <sup>11</sup> Para un estudio de los editoriales del *New York Times* sobre El Salvador y Nicaragua desde 1980 hasta mediados de 1986, ver mi artículo en Walker, *Reagan vs. the Sandinistas*. Para una comparación de la imagen de Duarte aquí y en América Latina, incluido El Salvador, ver *Culture of Terrorism*, 101s. Sobre el historial de Duarte y la apreciación por los medios del mismo, ver *Turning the Tide*, capítulo 3, sec. 5.2; Cooper, "Whitewashing Duarte", información en EEUU sobre El Salvador, *NACLA Report on the Americas*, enero/marzo 1986.
- <sup>12</sup> Ver las fuentes citadas arriba para algunas referencias explícitas y más detalles, aquí y a continuación; apéndice V, sección 6, sobre los medios de comunicación centroamericanos.
- <sup>13</sup> Lydia Chavez, *NYT*, 24 de abril, 1983. Ministro de Defensa Gen. Vides Casanova citado por Ray Bonner, *Weakness and Deceit* (Times Books, 1984, 106). Ver apéndice IV, sección 1, para algunos de los muchos ejemplos. Para muchos otros casos, ver *Political Economy of Human Rights* y otras fuentes citadas antes.
- <sup>14</sup> Para un estudio del rendimiento de los medios de comunicación en El Salvador a medida que el terror aumentaba en 1980 y a principios de 1981, ver *Towards a New Cold War*, introducción; reimpresso en parte en *The Chomsky Reader*. Para más sobre la negativa de los medios a la hora de informar sobre atrocidades del gobierno, ver Ed Harriman, *Hack: Home Truths about Foreign News* (Zed, 1987); Harriman cubrió El Salvador para los medios británicos. Siguió un breve período de información seria a medida que las atrocidades alcanzaron niveles extremos, pero cuando pareció que el terror organizado por EEUU podría lograr el éxito y las elecciones de demostración se celebraron, el modelo volvió a la nor-

ma anterior de apologética y negligencia, con excepciones esporádicas. La retirada de Ray Bonner por el *Times* también fue importante. "Los funcionarios de la embajada de EEUU se jactaron en 1982 de haber obligado [a Bonner] a abandonar el país debido a su información desfavorable [y precisa] sobre el gobierno salvadoreño", informan Parry y Kombluh (*op. cit.*).

- <sup>16</sup> Ver apéndice IV, sección 2.
- <sup>17</sup> *NYT Magazine*, 6 de abril, 1986.
- <sup>18</sup> *NYT Magazine*, 25 de mayo, 1980. Oduber, en Kenneth M. Coleman y George C. Herring, eds., *The Central American Crisis* (Scholarly Resources Inc., 1985, 196).
- <sup>19</sup> Hubo excepciones, pero la reacción de los medios de comunicación fue similar por lo general, alcanzando a veces algunos extremos sorprendentes. Así, el *Washington Post* solicitó el comentario de Robert Leiken, que ejercía presión a favor de los Contra, y que "acusó al tribunal, que dijo sufre de la 'creciente percepción' de tener vínculos estrechos con la Unión Soviética"; el juez soviético se había retirado del caso, pero evidentemente sus súbditos cumplieron con las tareas asignadas (Jonathan Karp, *WP*, 28 de junio, 1986). Para más sobre el atractivo de la línea maoísta de Lieken y su interesante función en los medios de comunicación a medida que los especialistas en América Latina se negaron en su mayor parte a unirse a la causa, ver *Culture of Terrorism*, 205f.
- <sup>20</sup> *NYT*, 12 de mayo, 1986.
- <sup>21</sup> *NYT*, 29 de junio, 1986.
- <sup>22</sup> *Extra!*, publicación de la organización de supervisión de la prensa FAIR, diciembre de 1987; anuncio del Tribunal Mundial, *AP*, *WP*, 4 de agosto, 1988, breve artículo; *Boston Globe*, 29 palabras.
- <sup>23</sup> Nota de Prensa de la ONU GA/7572, 12 de noviembre; *AP*, 12 de noviembre; Paul Lewis, *NYT*, 11, 13 de noviembre, 26 de diciembre, 1987.
- <sup>24</sup> Sobre la cobertura de las reuniones en la cumbre de diciembre de 1987 y junio de 1988, ver el apéndice IV, sección 3.
- <sup>25</sup> Nota de prensa de la ONU GA/7591, 30 de noviembre; *AP*, 30 de noviembre; William Broad, "Star Wars is Coming, but Where is it Going?," *NYT Magazine*, 6 de diciembre, 1987.
- <sup>26</sup> Paul Lewis, *NYT*, 2 de diciembre, 1987.
- <sup>27</sup> Nota de prensa de la ONU GA/7603, 7 de diciembre, 1987.
- <sup>28</sup> Ciertos extractos de la traducción del gobierno de EEUU aparecen en el *New York Times*, 17 de noviembre, 1988.
- <sup>29</sup> Yehoshafat Harkabi, *Israel's Fateful Hour* (Harper and Row, 1988, 31).
- <sup>30</sup> Ver apéndice V, sección 4.
- <sup>31</sup> Editorial, *NYT*, 16 de noviembre; Lewis, *NYT*, 1 de diciembre, 1988. En el periódico liberal *Boston Globe*, por ejemplo, cuando el gobierno de EEUU accedió a hablar con la OLP bajo el pretexto de que ésta había aceptado las exigencias de EEUU, aparecieron dos columnas para revelar la diversidad de opinión sobre el tema, bajo el titular, "Taking Arafat's 'yes' for an answer" (*BG*, 24 de diciembre,



- 1988). Los halcones estaban representados por un dirigente de la comunidad judía de Boston, Philip Perlmuter, advirtiéndole sobre el engaño y la duplicidad de Arafat; las palomas, por el antiguo embajador israelí Benno Weiser Varon, que declaró, "No soy un pacifista, y me producen un desagrado visceral tanto 'Breira' como 'The New Agenda' y 'Peace Now' –pero los intereses de Israel requieren el reconocimiento de la realidad (Breira y la New Jewish Agenda son grupos sionistas moderados, el primero de ellos desaparecido de resultados de una eficaz difamación; Peace Now tiene credenciales ambiguas en tanto que grupo israelí a favor de la paz). Ver el capítulo siguiente y el apéndice V, sección 4, para más detalles.
- <sup>32</sup> Ver apéndice V, sección 4, para comentarios adicionales.
- <sup>33</sup> Paul Lewis, *NYT*, 11 de marzo; Joseph Treaster, *NYT*, 31 de mayo, 1988. Ver Karen Wald, *Z Magazine*, julio, agosto 1988, para un punto de vista diferente sobre el debate de Cuba en la ONU.
- <sup>34</sup> AP, 11 de marzo, 1988.
- <sup>35</sup> Para comentarios adicionales, ver apéndice IV, sección 4.
- <sup>36</sup> Ver *Culture of Terrorism*, capítulo 7, para un extracto más largo, y detalles adicionales sobre las maniobras diplomáticas y el plan de paz, hasta octubre de 1987. Ver mis artículos en *Z Magazine*, enero y marzo de 1988, para una discusión de los acontecimientos y los servicios de los medios de comunicación hasta febrero de 1988. Ver estas fuentes para referencias, cuando no se citan a continuación.
- <sup>37</sup> Dennis Volman, *Christian Science Monitor*, 26 de junio, 1987.
- <sup>38</sup> *El Tiempo*, 3 de julio, 1987, citando la publicación de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (ALASEI).
- <sup>39</sup> Ver Apéndice IV, sección 5, para más documentación y referencias. Por motivos de espacio, me limitaré considerablemente al boletín oficial. Para más detalles, ver las referencias de la nota 36, incluidas algunas excepciones al modelo general, principalmente en el *Christian Science Monitor* y *Los Angeles Times*, y editoriales en el *Boston Globe*.
- <sup>40</sup> Ver *Manufacturing Consent*, capítulo 5, y fuentes citadas. Una variante de esta estrategia diplomática fue llamada "el complot Troy" por los intelectuales de la era de Kennedy durante la crisis de los misiles cubanos, cuando intentaron eludir una propuesta por Krushev que reconocieron se consideraría de manera general como una forma razonable de poner fin a la crisis; el "complot" consistía en atribuir a Krushev una postura diferente y más aceptable, al igual que la heroína de una novela de Trollope interpreta un gesto insignificante como una oferta de matrimonio. La inversión de diciembre de 1988 en relación con las conversaciones con la OLP es otro ejemplo; ver apéndice V, sección 4.
- <sup>41</sup> Un informe clasificado de antecedentes para el Consejo de Seguridad Nacional después de que EEUU hubiera desbaratado las oportunidades de 1984 celebraba que "hemos impedido el más reciente esfuerzo por parte de Nicaragua y de México para la firma atropellada de un acuerdo de Contadora insatisfactorio", a saber,

el que EEUU había defendido enérgicamente hasta que Nicaragua anunció su apoyo al mismo. Ver Kombluh, *Nicaragua*, 181s.

- <sup>42</sup> Un defecto adicional de Dukakis es que "ahora negaría a los rebeldes nicaragüenses incluso la ayuda económica" (tal como lo exigían los acuerdos de paz de 1987, los redactores se olvidan de mencionar los acuerdos que aplauden sin cesar –cuando se pueden emplear como arma antisandinista). Editorial, *NYT*, 28 de agosto, 1988.
- <sup>43</sup> AP, 29 de enero, 1988, informando sobre un estudio de Witness for Peace. Hay una referencia al efecto, de Julia Preston, *WP*, 4 de febrero.
- <sup>44</sup> Ortega, *Barricada Internacional*, 22 de diciembre de 1988. Informe para 1988 (Apartado Postal 410150, San Francisco CA 94103); también AP, 15 de diciembre, 1988 (puesto que la información se emitía por las ondas, estaba inmediatamente disponible para todos los sectores de los medios de comunicación de masas). Sobre un ataque de los Contra en noviembre, ver Ellen V. P. Wells, carta, *NYT*, 31 de diciembre, 1988. Comentando sobre un informe del *Times* a efectos de que los Contra habían pasado a la historia, Wells informa sobre su experiencia como observadora para Witness for Peace viviendo con campesinos de la provincia de Jinotega. El 18 de noviembre, los Contra efectuaron una redada en su cooperativa, matando a dos personas, destruyendo casas, suministros, café cosechado y una clínica sanitaria (objetivo principal durante muchos años). En una redada del 17 de agosto, habían muerto cuatro niños.
- <sup>45</sup> Ver apéndice IV, sección 5, para más detalles sobre estos asuntos.
- <sup>46</sup> Kirkpatrick, *WP*, 6 de junio, 1988. Ver apéndice IV, sección 5, para detalles.
- <sup>47</sup> LeMoyne, *NYT*, 26 de marzo; Susan Rasky, *NYT*, 29, 30 de marzo, 1988.
- <sup>48</sup> Carta del secretario general de la OEA a George Schultz, 25 de abril, 1988.
- <sup>49</sup> *NYT*, 1 de abril. Susan Rasky informó que Adams también "dijo que incluso la ayuda humanitaria para los rebeldes era el equivalente al apoyo de una fuerza en lucha", quizás una referencia indirecta a la sentencia del Tribunal Mundial.
- <sup>50</sup> Robert Pear, *NYT*, 6 de abril; COHA, *Washington Report on the Hemisphere*, 11 de mayo; AP, 12 de mayo, 11; Reuters, BG, 13 de mayo, 1988.
- <sup>51</sup> "Informe Especial," DSG, 16 de mayo, 1988.
- <sup>52</sup> Le Moyne, *NYT*, 12 de mayo; Pear, *NYT*, 10 de mayo, 1988.
- <sup>53</sup> John Goshko, *WP*, 14 de mayo; John McCaslin, *WT*, 14 de junio, 1988; COHA, nota de prensa, 12 de mayo, 1988; Don Podesta, *WP*, 21 de septiembre, 1988.
- <sup>54</sup> *NYT*, Peter Kilborn, 5 de abril; editorial, BG, 17 de abril, 1988.
- <sup>55</sup> Center for International Policy, "The Nicaraguan Cease-Fire Talks: a Documentary Survey", 13 de junio, 1988; ver también *Cease-Fire Primer. International Policy Report*, CIP; Julia Preston, *WP*, 10 de junio, 1988.
- <sup>56</sup> COHA, "A Critique of the Dole Amendment", 1 de agosto, 1988, haciendo referencia a los acontecimientos de julio; ver apéndice IV, sección 5, también capítulo 3.



<sup>57</sup> Citado por Michael Conroy, en Thomas Walker, ed., *Nicaragua: The First Years* (Praeger, 1985, 232s).

<sup>58</sup> Julia Preston, *WP Weekly*, 2-8 de enero, 1989; el último comentario se refiere a Jalapa en el lejano norte. Sobre la curiosa amalgama de maoísmo y patriotismo de derechas que se elaboró a principios de la década de 1980 cuando los auténticos especialistas en América Latina se negaban a realizar los servicios que el gobierno y los medios de comunicación esperaban de ellos, ver *Culture of Terrorism*, 205s. Sobre las percepciones psiquiátricas de Kikpatrick en relación con la paranoia sandinista a medida que tejó una telaraña de mentiras sobre las políticas de EE UU, ver Holly Sklar, *Washington's War on Nicaragua* (South End, 1988, 114f.).

<sup>59</sup> BG, 25 de diciembre, 1988.

<sup>60</sup> Ver capítulo 3, nota 47.

<sup>61</sup> BG, 30, 31 de octubre, 1 de noviembre, 1988. La serie también contiene muchas distorsiones y mentiras manifiestas, por ejemplo, la declaración de que en diciembre de 1987 el ministro de Defensa Ortega "anunció su objetivo de fuerzas militares de 600.000 hombres para 1995", que se añadirán a aquellas "legiones de tropas [que] no producen nada". Como Sheehan y los redactores saben muy bien, Ortega anunció una *reducción* planificada de las fuerzas militares, con la distribución de armas ligeras a la población trabajadora. Las invenciones propagandísticas útiles no se abandonan con facilidad.

<sup>62</sup> Ver apéndice V, sección 3, para referencias y antecedentes.

<sup>63</sup> Preston, *WP Weekly*, 2- de enero, 1989. Sobre el dominio de EEUU sobre el sistema de información en zonas extensas de Nicaragua, ver Howard Frederick, "Electronic Penetration," en Walker, *Reagan vs. the Sandinistas*.

<sup>64</sup> Thomas Walker, en Coleman y Herring, *The Central America Crisis*: Carlin, *Independent* (Londres), 1 de febrero, 1988.

## 5 LA UTILIDAD DE LAS INTERPRETACIONES

La hipocresía, escribió Milton, es "el único mal invisible, salvo sólo para Dios". Sin embargo, la de asegurarse de que "ni Hombre ni Ángel puedan distinguir" el mal es una vocación exigente. Pascal la había comentado algunos años antes al observar "cómo los casuistas reconcilian las contradicciones entre sus opiniones y las decisiones de los papas, de los concilios y de la Escritura". "Uno de los métodos por medio de los cuales reconciliamos estas tradiciones", explica su interlocutor casuístico, "es la interpretación de alguna frase". Así, si el Evangelio dice, "Dad limosna de lo que tenéis en exceso" y la tarea consiste en "liberar a los más ricos de la obligación de dar limosna", "el asunto se arregla fácilmente dando a las palabras *lo que tenéis en exceso* una interpretación que haga que nunca o casi nunca nadie se vea afectado por tal cosa". Los sabios eruditos demuestran que "lo que los hombres de mundo acumulan para mejorar sus circunstancias, o las de sus parientes, no se puede definir como un *exceso*; y, por tanto, los hombres de mundo, incluso los reyes mismos, casi nunca tienen nada en exceso" —a esto ahora lo llamaríamos reforma fiscal. Podemos, por tanto, cumplir rigurosamente con las palabras del Evangelio a efectos de que "los ricos están obligados a dar limosnas de aquello que tienen en exceso... [aunque] esto nunca o casi nunca será obligatorio en la práctica". "He ahí la utilidad de las interpretaciones", concluye.<sup>1</sup>

En nuestros días, este mecanismo ha sido utilizado por Orwell, que lo llamó Newspeak; los logros de sus casuistas no son menores que los del monje de Pascal, aunque los seguidores de Orwell son menos abiertos que éste en cuanto a la práctica en sí.

En los dos últimos capítulos, siguiendo la recomendación de los intelectuales liberales a efectos de que con los "avances del conocimiento" deberíamos limitarnos a métodos "sutiles" y "refinados" de control social, evitando "métodos groseros, evidentes y directos", comenté algunas de las modalidades del control del pensamiento desarrolladas en



las sociedades democráticas. El mecanismo más eficaz consiste en la limitación de lo pensable, que se logra por medio de la tolerancia del debate, incluso del fomento del mismo, aunque sólo dentro de límites adecuados. Pero los sistemas democráticos también recurren a medios más crudos, y el método de la “interpretación de alguna frase” constituye un instrumento destacado. Así, la agresión y el terror estatal en el Tercer Mundo se convierten en la “defensa de la democracia y de los derechos humanos”; y la “democracia” se logra cuando se asegura que el gobierno esté en manos de “los hombres ricos que habitan en paz dentro de sus moradas”, como en la receta de Winston Churchill para el orden mundial.<sup>2</sup> A nivel nacional, el gobierno de los privilegiados se ha de garantizar, y se ha de reducir a la población a la situación de observadores pasivos; en las dependencias, podrían ser necesarias medidas estrictas para eliminar cualquier desafío a los gobernantes naturales. Bajo la interpretación adecuada de la frase, sí es verdad que “el anhelo de ver una democracia al estilo norteamericano duplicada en todo el mundo ha sido un tema recurrente en la política exterior de Estados Unidos”, como declaró el corresponsal del *Times*, Neil Lewis.<sup>3</sup>

No hay, por tanto, “contradicción” alguna cuando anhelamos la democracia y la independencia para Vietnam del Sur al tiempo que destruimos el país para erradicar al Frente de Liberación Nacional, y a continuación pasamos a la destrucción de los budistas, organizados a nivel político, antes de permitir “elecciones” manipuladas. La casuística incluso nos permite seguir adelante dentro de esta línea, aunque reconocamos que hasta que el terror de EEUU los obligó a “responder ante la fuerza para sobrevivir”, el enemigo indígena insistía en que su lucha contra Estados Unidos y sus clientes “debería tener lugar a nivel político, y que el empleo del poder militar masificado era en sí mismo ilegítimo”. Nuestro rechazo de la política a favor del poder militar es natural, ya que también reconocíamos que el Frente de Liberación Nacional era el único “partido político que verdaderamente estaba basado en las masas de Vietnam del Sur”, y que nadie, “con la posible salvedad de los budistas, se creía en situación, por su número y su poder, de arriesgarse a formar una coalición, temiendo que si lo hacían la ballena se tragaría al alevín”<sup>4</sup>. Siguiendo un razonamiento similar, resultaba adecuado derrocar la primera y última elección libre en la historia de Laos, ya que la ganaron las personas equivocadas; organizar o apoyar el derroca-

miento de gobiernos elegidos en Guatemala, Brasil, la República Dominicana, Filipinas, Chile y Nicaragua; apoyar u organizar directamente el terror a gran escala con el fin de obstaculizar la amenaza de la democracia, la reforma social y la independencia en América Central en la década de 1980; tomar medidas enérgicas para asegurar que el período de la posguerra volviera a las manos adecuadas; y muchas otras cosas –todos nuestros “anhelos de democracia”.

Desde el mismo punto de vista, podemos comprender por qué, en diciembre de 1965, los redactores del *New York Times* alabaron a Washington por haber “permanecido en un prudente segundo plano durante los recientes desórdenes” de Indonesia. En dichos “recientes desórdenes”, los militares de Indonesia habían “desactivado la bomba de relojería política del país, el poderoso Partido Comunista de Indonesia (P.K.I.)” eliminando “a la casi totalidad de los dirigentes de primera y segunda plana del P.K.I.” de uno u otro modo –y, de paso, asesinando a cientos de miles de personas, en su mayoría campesinos sin tierras, mientras que Washington observaba en “prudente” silencio, como optaron por creer los redactores.<sup>5</sup> Este factor concomitante a una victoria para la libertad, que gozó de buena acogida, no se mencionó, aunque los redactores sí advirtieron que las condiciones sociales que habían permitido al PKI organizar a 14 millones de personas seguían en pie. Instaron a Washington a ser cauteloso en cuanto al suministro de ayuda a los responsables de las matanzas, por temor a que el dirigente nacionalista Sukarno y los restos del PKI pudieran aún beneficiarse, a pesar de los alentadores logros de los amigos y aliados de Estados Unidos a la hora de llevar a cabo la mayor matanza desde el Holocausto.

De manera similar, es natural que el *New York Times* alabara al gobierno del Sha de Irán, al cual la CIA devolvió el poder, por el “considerable éxito en su campaña en contra de elementos subversivos” y su “dilatado historial de logros a la hora de reprimir la subversión sin suprimir la democracia”. Entre los subversivos, ahora afortunadamente reprimidos sin suprimir la democracia, se incluye al “partido Tudeh, pro-soviético”, anteriormente “una auténtica amenaza”, pero que “se considera que ahora está totalmente liquidado”, y a los “nacionalistas extremistas” que habían sido casi tan subversivos como los comunistas.<sup>6</sup> Y aparentemente, pocos perciben una discordancia al leer un informe actual sobre el “retomo de la democracia plena” a Filipinas bajo



el titular “el decreto de Aquino prohíbe al Partido Comunista”, y cuyo primer párrafo explica que un decreto presidencial estipuló la pena de prisión para quien perteneciera al partido, que había sido legalizado bajo la dictadura de Marcos.<sup>7</sup> No mucho tiempo antes, el propio Marcos había sido un demócrata modélico, un hombre “comprometido con la democracia”, en palabras de Ronald Reagan; “estimamos su adhesión al principio de la democracia y a los procesos democráticos” y su “servicio a favor de la libertad”, proclamó el vicepresidente George Bush, en Manila.<sup>8</sup> Eso, no obstante, fue antes de que Marcos perdiera el control, y con él las credenciales que hacían de él un demócrata amante de la libertad.

Basándonos en los mismos principios, podemos recordar con nostalgia los días de la “democracia” bajo las dictaduras de Diem y Thieu-Ky en Vietnam del Sur (ver capítulo 3). Y nada es más natural que comentar con orgullo que la “democracia está en marcha a nivel ideológico” porque la experiencia de las últimas décadas indica que lleva a la prosperidad y al desarrollo: “Como mecanismo económico, la democracia funciona probadamente”, escribe James Markham en el artículo de fondo de la *Times Week in Review*. Se ha producido, sin duda, el crecimiento económico en los países “recientemente en proceso de industrialización”, destacadamente en Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur. Hemos de entender, por tanto, que la “democracia” es un sistema que rechaza las formas democráticas con el fin de facilitar el consumo reducido y la sobreexplotación, junto con el control estatal de la economía, en coordinación con los consorcios nacionales y con las multinacionales; modelo más próximo al fascismo tradicional que a la democracia. Todo tiene sentido, no obstante, cuando entendemos que el término “democracia” significa el dominio de la economía y de la vida social y política por parte de los elementos nacionales que son adecuadamente sensibles a las necesidades de las empresas y del gobierno de EEUU.”

Éstos son temas constantes en los medios de comunicación y en el sistema político, y reflejan algunas normas más amplias. No existen contradicciones aquí, siempre que comprendamos la interpretación adecuada del término “democracia”.

Todo esto está muy de acuerdo con la doctrina de que los demás países deberían controlar sus propios destinos, a no ser que los “aconte-

cimientos... queden incontrolados” y “afecten adversamente a los intereses de EEUU” (ver p. 59 en la versión inglesa). La lógica es similar cuando una Estimación de la Información Nacional de 1955 comenta el problema con el que Estados Unidos se enfrenta en Guatemala tras derrocar con éxito el régimen democrático capitalista. “Muchos guatemaltecos conservan vínculos apasionados con los ideales democrático-nacionalistas de la revolución de 1944”, especialmente con “los programas sociales y económicos” del régimen derrocado por el golpe de la CIA, comenta el estudio con cierta congoja; pero pocos guatemaltecos “comprenden los procesos y las responsabilidades de la democracia”, de manera que “el gobierno democrático responsable es, por tanto, difícil de lograr”<sup>10</sup>. La contradicción aparente se dispersa cuando interpretamos adecuadamente la palabra “democracia”. Es tarea de los medios de comunicación, y de la clase especializada en general, asegurar que la hipocresía sea “invisible, salvo sólo para Dios”.

Como podemos ver a partir de estos y de otros muchos ejemplos, una solícita preocupación por la democracia y los derechos humanos puede estar unida a la tolerancia con respecto a las matanzas a gran escala, o a la participación directa en las mismas. El *Christian Science Monitor* observaba con aprobación –y con precisión– que tras el impresionante logro por parte del general Suharto a la hora de eliminar la amenaza política en Jakarta por medio de los asesinatos masivos, “muchos en Occidente deseaban tener tratos con el nuevo dirigente moderado de Jakarta, Suharto”; aquí, el término “moderado” se utiliza con una interpretación casuística adecuada. Los logros posteriores de Suharto incluyen violaciones extraordinarias de los derechos humanos a nivel nacional, y matanzas durante el curso de las agresiones en Timor Oriental que se podrían comparar con las de Pol Pot durante esos mismos años, con un respaldo entusiasta por parte de Estados Unidos, con el apoyo efectivo de Canadá, Gran Bretaña, Francia y otros guardianes de la moralidad. Los medios de comunicación cooperaron por medio de la simple eliminación del asunto; la cobertura por parte del *New York Times*, por ejemplo, disminuyó a medida que las atrocidades aumentaban con la participación de EEUU, llegando a desaparecer por completo cuando las atrocidades alcanzaron su punto máximo en 1978; y los pocos comentarios por parte de su destacado corresponsal para el Sudeste Asiático, Henry Kamm, nos aseguraron, basándose en la auto-



ridad de los generales indonesios, que el ejército protegía al pueblo que huía del control de las guerrillas. Se excluía escrupulosamente el testimonio de los refugiados, de los dignatarios de la Iglesia y de otros que podrían haber producido interferencias en la conformidad pública respecto de lo que parece ser la mayor matanza, en proporción con la población, desde el Holocausto. En retrospectiva, el *Economist* de Londres, en una oda a Indonesia bajo el gobierno del general Suharto, describe a éste como “de corazón benigno”, descripción que quizá se corresponde a su amabilidad para con las multinacionales.<sup>11</sup>

Siguiendo los mismos principios, es natural que el terror del régimen de Pol Pot evoque una tremenda ira, mientras que los periodistas que se hallaban en Phnom Penh en 1973, cuando el bombardeo por parte de EEUU de zonas pobladas de la Cambodia rural alcanzó su punto culminante, pasaron por alto el testimonio de los cientos de miles de refugiados que tenían ante sí.<sup>12</sup> Este tipo de percepción selectiva garantiza que se sepa poco en cuanto a la magnitud y naturaleza de estas atrocidades de EEUU, aunque sí lo suficiente como para indicar que podrían haber sido comparables a las atribuibles al Khmer Rouge en el momento en que el clamor de la indignación barrió Occidente en 1977, y que contribuyeron considerablemente al auge, y probablemente a la brutalidad, de los Khmer Rouge.<sup>13</sup>

Estos logros de la “ingeniería de la historia” permiten a los redactores del *New York Times* observar que “cuando la mirada de América se desvió de Indochina en 1975, la miseria de Cambodia no hacía más que empezar”, con “la nefasta barbarie del Khmer Rouge, y a continuación con la siniestra ocupación por parte de Vietnam” (que, por cierto, expulsó al Khmer Rouge). “Tras una dilatada indiferencia”, continúan, “Washington [ahora] puede ejercer un papel importante como agente honrado” y “curar una herida en Camboya que durante mucho tiempo ha estado olvidada”. La miseria se inició en 1975, no antes, bajo la “mirada de América”, y los redactores no nos recuerdan que durante el período de “indiferencia” Washington ofreció un apoyo indirecto al Khmer Rouge al apoyar la coalición en la que éste era el principal elemento debido a su “continuidad” con respecto al régimen de Pol Pot.<sup>14</sup>

Las relaciones entre EEUU y el Khmer Rouge requieren ciertas maniobras cuidadosas. El Khmer Rouge era, y sigue siendo, absolutamen-

te malvado en la medida en que se puede relacionar con la amenaza comunista, quizá debido a sus orígenes en los círculos de la izquierda parisina de Jean Paul Sartre. Más malvados incluso, evidentemente, son los vietnamitas, que terminaron reaccionando ante los incidentes fronterizos brutales y asesinos por medio de la invasión de Camboya y la expulsión del Khmer Rouge, dando fin a las matanzas. Nosotros, por tanto, hemos de apoyar a nuestros aliados tailandeses y chinos que apoyan al Pol Pot. Todo esto hace que los comentaristas se vean obligados a moverse con cuidado. El *New York Times* informa sobre el “desgano en Washington a la hora de ir demasiado lejos” cuando se trata de presionar a China para que ponga fin a su apoyo a Pol Pot —con el fin de sangrar a Vietnam, como nuestros aliados chinos han explicado abiertamente. El secretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia Oriental rechazó una solicitud del Congreso para hacer un llamamiento a la terminación de la ayuda a Pol Pot porque la situación era “delicada.” La presión de EEUU sobre China “podría causar una irritación innecesaria en las relaciones”, explicó el *Times*, y esta consideración supera nuestra apasionada preocupación por el destino de los camboyanos expuestos al terror del Khmer Rouge. La prensa explica adicionalmente que aunque naturalmente Estados Unidos es “una de las naciones a las que más preocupa un regreso del Khmer Rouge”, no obstante “EEUU y sus aliados han decidido que, de no haber algún signo de compromiso por parte de Vietnam en cuanto a una resolución política [basada en los términos de EEUU], se ha de permitir que las fuerzas del Khmer Rouge ejerzan la presión militar en Vietnam, a pesar de su pasado” —y a pesar de lo que la población pueda pensar sobre un “regreso del Khmer Rouge”. No sólo las relaciones con China, sino también las tareas de los propagandistas son “delicadas” bajo estas condiciones tan exigentes.<sup>15</sup>

Una interpretación casuística adecuada del concepto de la democracia solamente resuelve la mitad del problema; necesitamos también una frase para los enemigos de la democracia en algún país donde anhelamos establecerla o mantenerla. El mecanismo reflejo consiste en tachar al enemigo indígena de “comunistas”, con independencia de sus compromisos sociales y alianzas políticas. Han de ser eliminados a favor de los “demócratas” que no están “descontrolados”. José Napoleón Duarte y su ministro de Defensa Vides Casanova, por tanto, son “demócratas”, que defienden a la civilización contra los “comunistas”,



tales como los centenares de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad según intentaban huir a Honduras a través del Río Sumpul en mayo de 1980. Todos ellos eran miembros de las “guerrillas comunistas”, en palabras de Duarte; también lo eran, es de suponer, los niños de pecho asesinados a machetazos; los medios de comunicación optaron por el camino más sencillo, ocultar la matanza, uno de los actos iniciales de la campaña de terrorismo a la que Duarte dotó de clamorosa legitimidad.<sup>16</sup>

La actitud de EEUU hacia las democracias al “estilo norteamericano” ilustra el concepto prevaleciente de modos más sutiles. Europa y Japón constituyen ejemplos interesantes, en particular durante los primeros años de la posguerra, cuando era necesario devolver el poder a las elites tradicionales y socavar la resistencia antifascista y a quienes la apoyaban, muchos de ellos impregnados de compromisos democráticos radicales e inaceptables.<sup>17</sup>

El Tercer Mundo proporciona algunas ilustraciones similares, junto con los muchos casos de personas con ideas inadecuadas que son controladas por medio de la violencia o liquidadas “sin suprimir la democracia”. Consideremos el caso de Costa Rica, la única democracia parlamentaria que estuvo en vigor en América Central a lo largo del período posterior a la Segunda Guerra Mundial. A veces se mantiene, incluso por parte de eruditos que deberían saber que no es así, que el apoyo de EEUU a Costa Rica socava la tesis de que un objetivo principal de la política consiste en prohibir “regímenes nacionalistas” que no garantizan adecuadamente los derechos de la empresa,<sup>18</sup> tesis debidamente apoyada por el historial documental al igual que por el histórico. Esta manifestación refleja un grave malentendido. Estados Unidos no manifiesta ninguna oposición basada en principios a las formas democráticas, siempre que bajo éstas se mantenga el clima necesario para las operaciones de negocios. Como observó con precisión Gordon Connell-Smith en su estudio del sistema interamericano para el Royal Institute of International Affairs,<sup>19</sup> el “concepto de la democracia” de Estados Unidos se “identifica estrechamente con la empresa privada capitalista”, y sólo cuando ésta se ve amenazada por lo que habitualmente se denomina “comunismo” se toma acción para “restaurar la democracia”; la “preocupación de Estados Unidos por la democracia representativa en América Latina [al igual que en todos los demás lugares] es

una faceta de su política anticomunista”, o más precisamente, la política de oposición ante cualquier amenaza para la penetración económica y el control político de EEUU. Y cuando estos intereses están salvaguardados, no sólo se toleran las formas democráticas, sino que se aprueban, aunque sólo sea por motivos de relaciones públicas. Costa Rica está muy adaptada a este modelo, y proporciona una información interesante sobre el “anhelo de democracia” que se dice guía la política exterior de EEUU.

En Costa Rica, el sistema establecido bajo el mando de José (Don Pepe) Figueres tras el golpe de 1948 sigue en vigor. Siempre ha dado una calurosa acogida a la inversión extranjera, y ha fomentado un tipo de colaboración de clase que a menudo “sacrificó los derechos de la mano de obra”, comenta el biógrafo de Don Pepe,<sup>20</sup> al tiempo que se establecía un sistema de bienestar social que continúa funcionando gracias a los subsidios de EEUU, con una de las mayores deudas *per capita* del mundo. La constitución de 1949 de Don Pepe proscribió el comunismo. Con la represión de los sindicatos más militantes, los derechos laborales entraron en declive. “No se aplicaba la legislación correspondiente al salario mínimo”, y los trabajadores “perdieron todos los convenios colectivos salvo uno que amparaba a un único grupo de trabajadores del plátano”, indica Walter LaFeber. Para la década de 1960, “era casi como si la totalidad del movimiento laborista hubiera dejado de existir”, concluye un estudio académico. La United Fruit Company prosperó, llegando prácticamente a triplicar sus beneficios y sin tener que hacer frente a ninguna amenaza de expropiación. Mientras tanto, Figueres declaró en 1953 que “consideramos que Estados Unidos es un paladín de nuestra causa”<sup>21</sup>. Cuando Estados Unidos intentaba alinear a los estados latinoamericanos tras su plan de derrocamiento del gobierno guatemalteco, Costa Rica y Bolivia fueron los dos únicos gobiernos elegidos que se unieron a las dictaduras de América Latina a la hora de dar su pleno apoyo al borrador de resolución del Departamento de Estado, que autorizaba a Estados Unidos a violar el derecho internacional deteniendo e inspeccionando a “buques, aeronaves y otros medios de transporte que viajaban desde y hasta la República de Guatemala” con el fin de bloquear los envíos de armamentos para la defensa de Guatemala contra el inminente ataque de EEUU y los “viajes de los agentes del comunismo internacional”<sup>22</sup>.



Al alinearse inequívocamente con Estados Unidos, fomentando la inversión extranjera, garantizando la predominancia nacional de los intereses empresariales y manteniendo una base para la represión de la mano de obra y de la disidencia política, el gobierno democrático satisfizo las condiciones elementales exigidas por Estados Unidos. A cambio, ha recibido una medida de apoyo de EEUU. Así, en 1955, cuando una pequeña fuerza de costarricenses atacó zonas fronterizas desde Nicaragua, Figueres suspendió los derechos individuales y las garantías constitucionales y rechazó la incursión con ayuda de EEUU —sin perder, de este modo, sus credenciales democráticas por causa de las medidas represivas que instituyó, y que a los clientes de EEUU les están permitidas.

Sin embargo, las preocupaciones en relación con Costa Rica no amainaron. Los servicios de información del Departamento de Estado advirtieron en 1953 que Figueres había convertido a su país en un “paraíso para los exiliados de las dictaduras” y estaba jugando con ideas relacionadas con “un amplio programa de desarrollo económico y un control más firme sobre la inversión extranjera”. Esperaba financiar el desarrollo “preferentemente por medio del capital doméstico” y “no mira con buenos ojos al capital organizado más allá del nivel individual o familiar. Las grandes empresas privadas, como las de Estados Unidos, le son odiosas”. También intentó “aumentar el poder de negociación de los pequeños países subdesarrollados frente a las grandes naciones industriales”. Era peligroso, comenta LaFeber, “porque esperaba emplear los poderes del gobierno para liberar al desarrollo interno de Costa Rica del control extranjero en la medida de lo posible”, socavando así “la asunción de la política de Buena Vecindad a efectos de que se podía mantener a raya a América Latina sencillamente por medio de la presión económica”<sup>23</sup>.

Al gobierno de EEUU le preocupaba especialmente que la constitución de Costa Rica, al tiempo que proscribía al comunismo, siguiera proporcionando garantías libertarias que impedían el tipo de persecución de los disidentes que resulta obligatoria en una democracia que funciona adecuadamente. Y a pesar de la colaboración de Don Pepe con las empresas de EEUU y con la CIA, de su apoyo a las intervenciones de EEUU en la región y de su lealtad general a Estados Unidos a lo largo de los años, ha seguido manifestando un grado inaceptable de

independencia, hasta el punto de que el principal representante de la democracia capitalista en América Central ha de quedar excluido de los medios de comunicación, como hemos visto.<sup>24</sup>

Si los enemigos de la democracia no son “comunistas”, entonces son “terroristas”; mejor aún, “terroristas comunistas”, o terroristas apoyados por el Comunismo Internacional. El auge y el declive del terrorismo internacional durante la década de 1980 permite comprender la “utilidad de las interpretaciones”<sup>25</sup>.

Lo que Ronald Reagan y George Schultz denominan “el maligno azote del terrorismo”, epidemia que han extendido los “depravados oponentes de la civilización misma” por medio de “un regreso a la barbarie en la era moderna”, se incluyó en el programa de preocupaciones de la administración Reagan. Desde sus primeros días, la administración proclamó que el “terrorismo internacional” sustituiría a la cruzada de Carter a favor de los derechos humanos como “el Alma de nuestra política exterior”. Los seguidores de Reagan se dedicarían a la defensa del mundo civilizado contra el programa de terrorismo internacional que tan destacadamente se esbozaba en el influyente libro de Claire Sterling, *The Terror Network* (La Red del Terror). Aquí, se identificaba a la Unión Soviética como la fuente de la epidemia, con el apoyo de una nueva disciplina erudita; a quienes la ejercían les impresionó de manera especial la perspicacia de primer orden de Sterling, que proporciona una evidencia irrefutable en cuanto a la culpabilidad soviética. La prueba determinante, en palabras de Walter Laqueur en una crítica del libro de Sterling, es que el terrorismo se produce “casi exclusivamente en países democráticos o relativamente democráticos”. Para 1985, se seleccionó al terrorismo en la zona de Oriente Medio y del Mediterráneo como el tema más importante del año en una encuesta realizada entre redactores y locutores de la Associated Press; esta preocupación alcanzó una situación febril durante los meses siguientes. El bombardeo de Libia por EEUU en abril de 1986 domesticó al monstruo en gran medida, y a lo largo de los años siguientes la epidemia se redujo a proporciones más manejables a medida que la Unión Soviética y sus clientes se retiraron ante el valor y la determinación de Estados Unidos, según la versión preferida.

El auge y el declive de la epidemia mantenían poca relación con nada que estuviera sucediendo en el mundo, con una única salvedad;



el auge coincidió con la necesidad de movilizar a la población de EEUU para dar su apoyo al compromiso reaganista para con el poder y la violencia estatales; su declive, con la preocupación creciente en cuanto a la necesidad de hacer frente a los costos de los excesos keynesianos del reaganismo con su técnica de firmar “cheques sin fondos por doscientos mil millones de dólares al año” para crear la ilusión de prosperidad, en las palabras que el candidato a la vice-presidencia, Lloyd Bentsen, utilizó para manifestar la percepción de los elementos conservadores de los negocios durante la convención Demócrata de 1988.

El aparato de relaciones públicas –sin duda el componente más sofisticado de la administración Reagan– se enfrentó con un doble problema en 1981; atemorizar al enemigo en casa (la población en general) a un nivel suficiente como para que sufragara los costos de algunos programas a los que se oponía, al tiempo que se evitaban las confrontaciones directas con el Imperio del Mal en sí, por ser demasiado peligroso para nosotros. La solución al dilema consistió en inventar un ejército de pequeños Satanes, tentáculos del Gran Satán dispuestos a destruirnos, pero débiles e indefensos de tal manera que pudieran ser atacados impunemente: en pocas palabras, terrorismo internacional dirigido desde el Kremlin. La farsa se desarrolló perfectamente, con la colaboración de los casuistas, cuya tarea consistía en dar una interpretación adecuada al término “terrorismo,” protegiendo la doctrina de que sus víctimas son principalmente los países democráticos de Occidente.

Para llevar a cabo esta campaña de guerra ideológica con éxito, era necesario ocultar el papel central de Estados Unidos en la organización y la dirección del terror estatal, así como su extensa participación en el terrorismo internacional de los años anteriores, como en el ataque contra Cuba, principal ejemplo del “maligno azote del terrorismo” desde el principio de la década de 1960. También se necesitaba cierta medida de “ingeniería de la historia” en relación con el terrorismo en la región de Oriente Medio/Mediterráneo, principal centro de preocupación dentro de las operaciones de propaganda. Aquí, resultaba necesario ocultar el papel de Estados Unidos y de su cliente israelí.

Los medios de comunicación y los especialistas en terrorismo han estado a la altura de estas tareas<sup>26</sup>. La función de EEUU se suprime con facilidad; después de todo, la frase “terrorismo de EEUU” es un contrasentido, al igual que “silencio ensordecedor” o “agresión de EEUU”. El

terrorismo estatal israelí escapa amparándose en el mismo concepto literario, ya que Israel es un Estado cliente, aunque se reconoce que hubo terroristas judíos en un pasado lejano y olvidado. Este hecho se puede situar dentro de una perspectiva adecuada, siguiendo la sugerencia del editor de una colección de ensayos eruditos, que hace un llamamiento a la distinción creíble entre “ataques terroristas moralmente inaceptables” a personal civil y ataques más ambiguos a los agentes de la autoridad y la persecución. “Por tanto, efectuaríamos una tajante distinción entre los ataques a soldados británicos por parte del Irgun Zvai Leumi y la violencia del Frente Popular de Liberación de Palestina contra los pasajeros de líneas aéreas que viajan a Israel”<sup>27</sup>.

Uno puede imaginar una formulación diferente, por ejemplo, una distinción tajante entre los ataques contra los soldados de Israel y EEUU por parte de árabes denominados “terroristas”, y los muchos ataques asesinos a personal civil árabe por parte del Irgun Zvai Leumi, y el ejército israelí en años posteriores. Pero eso difícilmente crearía una imagen adecuada para un análisis correcto y prudente de “las consecuencias de la violencia política”.

El enorme significado del terrorismo internacional en tanto que instrumento ideológico lo ilustra la reacción que se produce cuando alguien rompe filas y documenta el papel realizado por Estados Unidos y sus clientes a la hora de llevar a cabo, organizar y apoyar al terrorismo internacional. Si este tipo de trabajo no se puede sencillamente pasar por alto, se produce una reacción frenética – “demente”, “absurdo” y “fantasías” son algunas de las frases extraídas de un comentario de 1988, que no se acompaña ni siquiera de una semblanza de discusión. Estas reacciones no dejan de tener cierto interés, y merecen que se les dediquen algunos comentarios.

Uno podría adoptar una de tres posturas en cuanto al terrorismo: (1) Lo podemos atribuir a los enemigos oficiales, sean los hechos los que sean. (2) Podemos descartar la discusión del terrorismo en su totalidad como tonterías cuya motivación es ideológica, y que no merecen atención. (3) Podemos tomar en serio el fenómeno, investigarlo, y dejar que sus trozos caigan donde puedan. Basándonos en presunciones racionales, descartamos la primera postura y aceptamos la tercera. La segunda postura es al menos discutible, aunque en mi opinión está equivocada; creo que existen todos los motivos para tomar el terrorismo en



serio, y el concepto es tan claro como la mayoría de los que entran en el discurso político.

Pero las consideraciones de racionalidad no vienen al caso. La primera postura, totalmente irracional, es la norma en los medios de comunicación y en lo que se escribe sobre el terror, y predomina de manera abrumadora. La segunda postura se considera como más o menos tolerable, ya que absuelve a Estados Unidos y a sus clientes de toda culpa, si se descartan sus intentos de manipulación ideológica. La tercera postura, por el contrario, está totalmente fuera de lugar, ya que si la adoptamos, alcanzamos rápidamente conclusiones totalmente inaceptables, descubriendo, por ejemplo, que Miami y Washington han estado entre los principales centros mundiales del terrorismo internacional desde la etapa de Kennedy y hasta la fecha, sea cual sea la definición del terrorismo —ya sea la del Código de EEUU, la de los convenios internacionales, la de los manuales militares o cualquier otra.

Una variación de la primera postura, que sigue siendo tolerable, aunque menos que su forma pura, consiste en reivindicar que es injusto condenar a los palestinos, a los secuestradores libaneses, etc., sin tener en cuenta los factores que los llevaron a estos crímenes. Esta postura tiene el mérito de aceptar tácitamente —y por tanto de reforzar— las premisas aprobadas en cuanto a los orígenes de la epidemia. La segunda postura se puede hacer más aceptable limitándola a un análisis psicocultural de la obsesión occidental con el terrorismo, evitando los factores institucionales que llevaron a la elección de este mecanismo de relaciones públicas que logró un éxito tan maravilloso durante la década de 1980 (un análisis de tales factores institucionales, inmediatamente discernibles, se puede descartar tachándola de “teoría de la conspiración”, otro reflejo familiar cuando resulta necesario evitar el pensamiento y proteger a las instituciones del escrutinio). La idea de que lo que se dice sobre el terrorismo no es más que confusión proporciona una postura que constituye un recurso útil siempre que el papel de Estados Unidos se pone al descubierto. Uno puede, en resumen, adoptar este mecanismo para despachar a aquellos que siguen la opción tercera, inaceptable, como fanáticos totales y teóricos de la conspiración, y a continuación volver a la primera postura, que es la favorecida, para la interpretación de los acontecimientos que se están produciendo.

La primera postura, simple y poco sutil, domina por completo la discusión pública, los medios de comunicación y lo que se considera como literatura erudita. Su predominio y utilidad resultan evidentes en todo lugar. Para seleccionar un ejemplo de finales de 1988, considérese la negativa por parte del Departamento de Estado a permitir que Yasser Arafat se dirigiera a las Naciones Unidas en noviembre. Los motivos oficiales fueron que su visita constituía un peligro para la seguridad de EEUU, pero nadie pretendió tomarlo en serio; ni siquiera George Schultz creyó que los guardaespaldas de Arafat fueran a secuestrar un taxi en Nueva York o a tomar el Pentágono (quizás es de algún interés el hecho de que a nadie le preocupara que el razonamiento oficial fuera indigno incluso de ser rebatido, pero pasemos esto por alto). Lo que sí se tomó en serio fue la historia que acompañó a los falsos motivos que se presentaron: que a Arafat no se le permitía poner los pies en territorio de EEUU debido al aborrecimiento al terrorismo por parte de los organizadores, que apoyaban la guerra de los Contra, los escuadrones de la muerte operados por el gobierno en El Salvador y Guatemala, el bombardeo de Trípoli y otros destacados ejercicios de violencia —todos los cuales constituyen terrorismo internacional, o algo peor aún, si estamos dispuestos a adoptar la tercera postura sobre el tema del terrorismo, esto es, la postura honrada, racional y por tanto totalmente impensable.

Mientras se sopesaba la invitación a Arafat, el senador Christopher Dodd advirtió que si se le permitía a Arafat dirigirse a la Asamblea General, el Congreso bloquearía los fondos de EEUU para las Naciones Unidas. “Creo que no se pueden subestimar los fuertes sentimientos que existen en este país en cuanto al terrorismo”, informó Dodd a la prensa; Dodd, pacífico destacado, tiene amplios conocimientos sobre América Central y la agencia del terror que allí existe. El titular de primera página del *New York Times*, explicando “El ‘No’ de Shultz a Arafat”, dice lo siguiente: “La repugnancia personal hacia el terrorismo está en el origen de la decisión del secretario a la hora de rechazar a la OLP”. El artículo continúa describiendo el “desprecio visceral por el terrorismo” de Shultz. El corresponsal en Washington del *Times*, R.W. Apple, añadió que el Sr. Schultz “ha librado lo que se puede denominar una cruzada personal contra el terrorismo”, que “al Sr. Shultz siempre le ha importado tan intensamente”<sup>28</sup>. La prensa, la televisión y



la radio o expresaron su admiración por Shultz por haber tomado una postura tan directa contra la epidemia del terrorismo, o lo criticaron por haber permitido que su ira, comprensible y digna de alabanza, venciera a la reserva propia de un hombre de estado.

Los informes y comentarios de prensa no hicieron llamamiento alguno a los testigos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, Angola, la zona sur del Líbano, Gaza y otros lugares para que estos compartieran sus opiniones sobre el “desprecio visceral por el terrorismo” y los “fuertes sentimientos” del Congreso en relación con el recurso a la violencia. Más bien, los medios de comunicación advirtieron gravemente que “Yasser Arafat no es el habitual solicitante de visado políticamente discutido: el grupo al que pertenece mata a la gente”<sup>29</sup>. Así, Arafat es muy diferente a Adolfo Calero, José Napoleón Duarte y sus adláteres, o Yitzhak Shamir, entre los muchos dirigentes extranjeros a los que acogemos porque, uno ha de suponer, no “matan a la gente”.

Aquellos que podrían haber esperado que los medios de comunicación aprovecharan la ocasión para repasar el historial de George Shultz en relación con la defensa y el apoyo al terrorismo, planteando quizá la pregunta de si no podría detectarse una nota de hipocresía en su “declaración personal” o en la interpretación de la misma por parte de los medios de comunicación, hubieran quedado muy decepcionados. Al igual que en los estados totalitarios, sin embargo, los dibujantes de viñetas gozaban de mayor libertad, y pudieron plasmar la imagen de los dirigentes en los que Shultz podría haber estado pensando cuando se lamentaba de que “la gente está olvidando la amenaza que el terrorismo internacional representa”: el francés Mitterrand, que “se olvidó de cuando hundimos el barco de Greenpeace”; la británica Thatcher, que “se olvidó de cuando hicimos que mataran a aquellos tipos del IRA en Gibraltar”, el soviético Gorbachov, que “se olvidó de cómo bombardeamos a todos aquellos niños de Afganistán”; y el americano Shultz, que “se olvidó de todos los civiles a quienes nuestros amigos de los Contra asesinaron en Nicaragua”<sup>30</sup>.

Es fácil añadir otros ejemplos. Que Arafat y la OLP hayan participado en actos terroristas no se pone en duda; tampoco se pone en duda el hecho de que sean actores de segunda en el escenario del terrorismo internacional.<sup>31</sup>

Uno de los actos de terror de la OLP que más ira produjo en el

secretario de Estado y sus admiradores del Congreso y de los medios de comunicación fue el secuestro del *Achille Lauro* y el asesinato de Leon Klinhoffer, sin duda un vil acto de terrorismo. Sus sensibilidades, sin embargo, no reaccionaron ante el bombardeo israelí en Túnez que se había producido una semana antes, matando a veinte tunecinos y a cincuenta y cinco palestinos con bombas inteligentes que destrozan a la gente, dejándola irreconocible, entre otros horrores descritos por el periodista israelí, Amnon Kapeliouk, que se hallaba en la escena. Las publicaciones de EEUU mostraron poco interés en el asunto, ya que las víctimas eran árabes y los asesinos eran clientes de EEUU. El secretario Shultz, sin embargo, tenía un decidido interés en el asunto. Estados Unidos había colaborado en la matanza negándose a avisar a Túnez, su aliado, de que los bombarderos estaban en camino, y Schultz telefoneó al ministro de Asuntos Exteriores israelí, Isaac Shamir, él mismo un destacado terrorista durante los primeros años de la década de 1940, para informarle que la administración de EEUU “sentía una considerable simpatía por la acción israelí”, según informó la prensa. Shultz se retractó de su aprobación pública cuando el Consejo de Seguridad de la O.N.U. acusó por unanimidad a los bombardeos como “un acto de agresión armada” (con la abstención de Estados Unidos). El ministro de Asuntos Exteriores Simon Peres fue recibido en Washington algunos días después como un hombre de paz, mientras que la prensa comentaba solemnemente sus consultas con el presidente Reagan sobre “el azote del terrorismo” y lo que se puede hacer para contarrestarlo.<sup>32</sup>

La ira en relación con los secuestros no se hace extensiva a los secuestros *israelíes* que se han producido en aguas internacionales durante muchos años, entre ellos secuestros de transbordadores civiles que hacían el trayecto entre Chipre y Líbano, con grandes números de personas secuestradas, más de 100 retenidas sin juicio en prisiones israelíes, y muchos muertos, algunos por bombarderos israelíes mientras intentaban mantenerse a flote tras el hundimiento de su buque, en palabras de prisioneros a quienes se entrevistó en la cárcel. Los fuertes sentimientos del Congreso y de los medios de comunicación tampoco se vieron afectados por el caso de Na' il Amin Fatayir, deportado del Banco Occidental en julio de 1987. Tras dieciocho meses de prisión, acusado de ser miembro de una organización prohibida, fue puesto en li-



bertad y devuelto a su casa de Nablus. Poco tiempo después, el gobierno ordenó que fuera deportado. Cuando apeló a los tribunales, el fiscal argumentó que la deportación había sido legítima puesto que había penetrado en el país ilegalmente –habiendo sido secuestrado por la armada israelí mientras viajaba del Líbano a Chipre a bordo del buque *Hamdallah* en julio de 1985. El Tribunal Supremo dio por válido este elegante razonamiento.<sup>33</sup>

La ira visceral producida por el terrorismo se limita a las víctimas dignas, siguiendo un criterio que resulta demasiado evidente.

El secuestro del *Achille Lauro* constituyó una represalia por el bombardeo de Túnez, pero Occidente descartó con razón esta justificación para un acto terrorista. El bombardeo de Túnez, a su vez, se realizó como represalia por un asesinato terrorista de tres israelíes en Chipre por un grupo que, como Israel admitió, tenía probables conexiones con Damasco pero ninguna con Túnez, que se seleccionó como objetivo en lugar de Damasco porque era una zona indefensa; la administración Reagan seleccionó a las ciudades libias como objetivo para su bombardeo algunos meses después en parte por el mismo motivo. El bombardeo de Túnez, con sus muchas bajas civiles, fue descrito por el secretario Shultz como “una reacción legítima” ante “ataques terroristas”, ante la aprobación general. Los asesinatos terroristas de Chipre, a su vez, fueron justificados por quienes los realizaron como una represalia por los secuestros israelíes de la década anterior. De haberse oído esta disculpa, también se habría descartado con desprecio. Al término “represalia” también se le debe dar una interpretación adecuada, como comprende cualquier casuista.

Lo mismo sucede en el caso de otros términos. Estudiemos, por ejemplo, el concepto de “evitar” o “reducir” la violencia. Un informe titulado “Las bajas palestinas, prácticamente duplicadas” inicia citando al jefe de estado mayor del ejército israelí, que dice “que el número de palestinos heridos, en el Banco Occidental y la Franja de Gaza ocupados, prácticamente se ha duplicado durante las semanas recientes, pero que el ejército no ha logrado reducir la violencia en las zonas ocupadas”. Esta declaración no tiene sentido alguno, pero si analizamos el trasfondo la podremos descifrar. Poco tiempo antes, el ministro de Defensa Yitzhak Rabin había autorizado la utilización de pelotas de goma, declarando que “lo que pretendemos es... precisamente más ba-

jas”: “nuestro objetivo consiste en aumentar el número de (heridos) entre quienes toman parte en actividades violentas”. También explicó el concepto de “actividades violentas”: “Queremos eliminar la ilusión de algunos habitantes de poblaciones alejadas en el sentido de que se han liberado”, dijo, explicando que las redadas del ejército “les dejan claro dónde viven, y dentro de qué marco”. Los palestinos deben “entender que la solución solamente se puede lograr por medios pacíficos”, no por medio de ilusiones de autogobierno. El ejército, por tanto, aumenta el número de redadas en poblaciones alejadas que se han declarado “zonas liberadas”, con el resultante aumento de lesiones, continúa el informe. En un ejemplo típico, “Las tropas israelíes efectuaron redadas en más de una docena de poblaciones del Banco Occidental e hirieron a 22 palestinos ayer”; una portavoz del ejército explicó que se había convocado una huelga, y el ejército deseaba “evitar la violencia” por medio de “una mayor presencia, y un mayor número de arrestos”<sup>34</sup>.

Podemos ahora volver a la redacción original codificada: “el número de palestinos heridos, en el Banco Occidental y la Franja de Gaza ocupados, prácticamente se ha duplicado durante las semanas recientes, pero... el ejército no ha logrado reducir la violencia en las zonas ocupadas”. Si traducimos estas palabras a un lenguaje inteligible, resulta que el ejército ha duplicado su violencia en los territorios ocupados por medio de acciones agresivas, con la intención específica de aumentar las bajas, y extendiendo sus ataques violentos a poblaciones alejadas y pacíficas que intentaban administrar sus propios asuntos. Pero hasta ahora no ha logrado quitar de la cabeza del pueblo las ilusiones de autogobierno. Para las autoridades israelíes y los medios de comunicación de EEUU, un intento de gestionar sus propios asuntos por parte de los habitantes de las poblaciones es “violencia”, y un ataque brutal para enseñarles quién gobierna es “evitar la violencia”. Esta forma de jugar con el lenguaje le hubiera impresionado a Orwell.

Un informe de unos días después, titulado “Los israelíes matan a tres personas en enfrentamientos del Banco Occidental y Gaza” describe cómo los soldados dispararon contra tres palestinos, hiriéndolos, en “una población remota, que los soldados rara vez visitan” y “que los militares suelen pasar por alto”. “El ministro de Defensa Yitzhak Rabin dijo hace dos semanas que el ejército aumentaría la frecuencia de sus acciones en este tipo de poblaciones para recordar a sus habitantes



dónde viven y quién controla la situación". Éste fue uno de los treinta pueblos en los que se produjeron redadas, "en una ofensiva encaminada a evitar la violencia", continúa el informe. Y el asunto se puede entender así; después de que los soldados israelíes dispararan contra tres palestinos de la población, en su "ofensiva encaminada a evitar la violencia", "los residentes airados arrojaron piedras a los vehículos de la zona". Un artículo que acompaña al anterior se plantea si la OLP verdaderamente "renunciará al terror", citando con incredulidad las palabras de oficiales del Partido Laborista de Rabin, y de otros.

Gracias a las interpretaciones adecuadas, por tanto, podemos estar tranquilos pensando que Estados Unidos y sus clientes defienden la democracia, la reforma social y la autodeterminación contra los comunistas, los terroristas y los elementos violentos de todo tipo. Es responsabilidad de los medios de comunicación alabar a los "demócratas" y denostar al enemigo oficial; los sandinistas, la OLP o cualquiera que se ponga en nuestro camino. De vez en cuando, esto requiere maniobras un tanto complicadas, pero por lo general la respuesta al reto ha sido satisfactoria.<sup>36</sup>

Nuestro "anhelo de democracia" se acompaña de un anhelo no menos profundo de paz, y los medios de comunicación también se enfrentan con la tarea de "ingeniería de la historia" para establecer esta verdad necesaria. De este modo, somos testigos de fenómenos denominados "misiones de paz" y "el proceso de paz", términos que se aplican a lo que Estados Unidos esté haciendo o propugnando en un momento dado. En los medios de comunicación o en la literatura erudita responsable, por tanto, uno no encontrará ninguna declaración del tipo "Estados Unidos se opone al proceso de paz", o "Se debe instar a Washington a que se una al proceso de paz". Esto se debe a que estas declaraciones constituirían algunas contradicciones lógicas. A lo largo de los años, cuando Estados Unidos estaba obstruyendo el proceso de Contadora, socavando los acuerdos de paz de América Central y desviando la amenaza de paz en Oriente Medio, nunca se opuso al proceso de paz en los comentarios aceptables, sino que siempre apoyó al proceso de paz e intentó fomentarlo. Se podría imaginar que incluso una gran potencia que es sublime hasta más allá de lo imaginable puede a veces obstaculizar el camino de algún proceso de paz, quizá debido a malentendidos o

a juicios erróneos. Esto no sucede en Estados Unidos, sin embargo –por definición.

Un titular del *Los Angeles Times* de finales de enero de 1988 dice: "Shultz Planea un Viaje de Paz a América Latina". Los subtítulos describen el contenido del "viaje de paz": "La misión constituiría un esfuerzo de última hora para desactivar a la oposición en relación con la ayuda a los Contra"<sup>37</sup>. El artículo cita a algunos funcionarios de la administración que describen a la "misión de paz" como "el único medio para salvar" la ayuda a los Contra frente a la "creciente oposición del Congreso". Para hablar claro, la "misión de paz" fue un esfuerzo de última hora para bloquear la paz y movilizar al Congreso al "empleo ilegítimo de la fuerza", ahora que Washington y sus medios de comunicación leales habían logrado dismantelar por completo el indeseado plan de paz de América Central y que Ortega había dado su acuerdo a efectos de que sus estipulaciones deberían ser de aplicación a Nicaragua solamente, haciendo fracasar la esperanza de que Nicaragua rechazara estas condiciones de EEUU de manera que se pudiera presentar a los nicaragüenses como los aguafiestas.

Un objetivo adicional de la "misión de paz", sigue diciendo el artículo, consistía en "relegar a los cuatro vecinos democráticos de Nicaragua al banquillo en las conversaciones de paz," en las que Estados Unidos tomaría el mando; las "democracias", aunque flexibles, siguen haciendo alarde de una molesta vena independentista. Pocos meses después, el *New York Times* informó sobre esfuerzos adicionales por parte de la administración "para 'mantener la presión' sobre los sandinistas continuando el suministro de apoyo a los Contra", que incluía "más ayuda militar", al tiempo que se instaba a los aliados de EEUU a "unirse a Estados Unidos en los esfuerzos por aislar a Nicaragua a nivel diplomático y reavivar el proceso de paz..."; se cita a George Shultz reflexionando que quizá podría haberse "involucrado en el proceso de paz" aun antes. El *Los Angeles Times* describió estos esfuerzos renovados de la administración "por crear apoyo para el reinicio de ayuda militar de EEUU a los Contra de Nicaragua" bajo el titular: "Shultz Intentará Reavivar el Proceso de Paz en América Latina"<sup>38</sup>.

En pocas palabras, la Guerra es la Paz.

La eficacia de la "ingeniería de la historia" ha sido menor en el caso del conflicto árabe-israelí. El problema ha estribado en presentar a Es-



tados Unidos e Israel como deseosos de paz y dedicados al proceso de paz, cuando de hecho, desde el inicio de la década de 1970, han estado a la cabeza del rechazo y se han dedicado a obstaculizar aquellas iniciativas de paz que han logrado un amplio apoyo internacional y regional. La técnica ha sido la habitual: el “proceso de paz” es, por definición, lo que proponga Estados Unidos. La conclusión deseada viene a continuación, sean cuales sean los hechos. La política de EEUU, también por definición, es “moderada”, de manera que quienes se oponen a la misma son “extremistas” e “intransigentes”. Se ha invertido la historia de manera muy interesante, como he documentado en otro lugar <sup>39</sup>.

Existen en realidad dos hechos que operan para producir la considerable distorsión de los historiales en relación con la “paz”, el “terrorismo”, y los asuntos afines en Oriente Medio. Uno es la función social de los medios de comunicación en su servicio a los intereses de la elite de EEUU; el otro, la protección especial otorgada a Israel desde que se convirtió en el “símbolo de la decencia humana” en virtud de la abrumadora victoria militar de 1967 que lo estableció como una baza estratégica digna.

El juego entre estos factores ha llevado a cierta medida de apartamiento del modelo habitual en los medios de comunicación. Lo típico, como se comenta a lo largo de la obra, es que los medios de comunicación fomenten el debate en relación con asuntos tácticos dentro del marco general del consenso de la elite en cuanto a objetivos y estrategia. En el supuesto del conflicto árabe-israelí, no obstante, la gama se ha estrechado aún más. Unos sectores sustanciales de la opinión de la elite, entre ellos grandes empresas con intereses en Oriente Medio, se han unido a gran parte del mundo a favor de la solución política que Estados Unidos e Israel han logrado obstaculizar durante muchos años. Pero su postura ha quedado en gran parte excluida de los medios de comunicación, que se han integrado al consenso de las dos principales agrupaciones políticas de Israel, considerando por lo general que el rechazo del Partido Laborista constituía la “opción de paz”.

Se plantea un problema cuando las posturas de EEUU y de Israel difieren. Uno de estos casos se produjo en octubre de 1977, cuando se emitió una declaración conjunta norteamericana y soviética por la que se hacía un llamamiento a la “terminación del estado de guerra y establecimiento de relaciones pacíficas normales” entre Israel y sus veci-

nos, al igual que a fronteras garantizadas a nivel internacional y zonas desmilitarizadas. La declaración iba respaldada por la OLP, pero Israel y sus grupos de presión nacionales dentro de EEUU la denostaron con acritud. La reacción de los medios de comunicación fue instructiva. Los medios de comunicación suelen adoptar la postura de su dirigente en la Casa Blanca en el caso de un conflicto con algún Estado extranjero. A la administración se le permite formular los temas y se le otorga la cobertura más destacada, permitiéndose a sus adversarios una línea aquí y allá de cuando en cuando, en aras de la objetividad y la justicia. En este caso, sin embargo, se invirtió el modelo. Tal como se describe en el detallado análisis que Montague Kern realizó de la cobertura en la televisión, los medios de comunicación destacaron la postura israelí, tratando a la administración Carter como si de un enemigo oficial se tratara. Las premisas israelíes se utilizaron para formular los temas, y las fuentes israelíes dominaron por lo general tanto la cobertura como la interpretación. Por lo general las fuentes árabes, en particular la OLP, se descartaron, o fueron objeto de un trato despectivo. “Israel pudo presentar su punto de vista en la televisión”, concluye Kern, mientras que “éste no fue el caso para la administración [de EEUU], que iba a la zaga de los israelíes en cuanto a todos los indicadores” de acceso a la influencia sobre los medios de comunicación.<sup>40</sup> Carter pronto se echó atrás. Al quedar desviada la amenaza de una solución pacífica, el “proceso de paz” pudo volver a su vía habitual de rechazo.

No obstante, se suele condenar duramente a los medios de comunicación de estar “a favor de la OLP” y de imponer una “doble moral” injusta a Israel. A continuación, debatimos sobre los orígenes de esta extraña enfermedad. Al igual que en otros casos, el ataque es la mejor defensa, especialmente cuando el dominio sobre los medios de comunicación y la exclusión de los puntos de vista contrarios ha alcanzado un nivel suficiente como para que cualquier crítica, por exótica que resulte, se trate con respeto.<sup>41</sup>

Reinhold Niebuhr comentó en una ocasión que “quizá la característica moral más significativa de una nación sea su hipocresía”<sup>42</sup>. Comentario acertado. Existe una medida sencilla de la hipocresía, que aplicamos adecuadamente a nuestros enemigos. Cuando los grupos a favor de la paz, las personalidades políticas, los medios de comunicación y los intelectuales leales de la esfera soviética lamentan los actos



brutales y represivos de Estados Unidos y sus clientes, nosotros verificamos su sinceridad preguntando qué es lo que dicen en cuanto a sus propias responsabilidades. Al determinar la respuesta, descartamos sus acusaciones, por precisas que sean, como la más burda hipocresía. Un mínimo de honradez exige que nos apliquemos las mismas normas a nosotros mismos.

La libertad de prensa, por ejemplo, constituye una preocupación de primera magnitud para los medios de comunicación y la comunidad intelectual. Durante la década de 1980, sin duda el principal caso relacionado con la libertad de prensa fue el hostigamiento de *La Prensa* en Nicaragua. La cobertura de sus tribulaciones probablemente supera a la totalidad del resto de la información y de los comentarios sobre la libertad de prensa en todo el mundo, y es única en lo apasionado de su retórica. Ningún crimen de los sandinistas ha sido objeto de mayor ira que su censura de *La Prensa* y la prohibición de dicho periódico en 1986, inmediatamente después de que el Congreso votara 100 millones de dólares para los Contra, voto que prácticamente representó una declaración de guerra por parte de Estados Unidos, como declararon alegremente los seguidores de Reagan, y un fuerte desaire para el Tribunal Internacional. Violeta Chamorro, propietaria de *La Prensa*, recibió inmediatamente un premio de la Fundación Nieman para el Periodismo, en Harvard, por su valerosa batalla en pro de la libertad de expresión. En el *New York Review of Books*, Murray Kempton hizo un llamamiento a todos los que están comprometidos con la libertad de expresión a efectos de que suministraran ayuda económica para la valiente lucha de los propietarios y redactores por mantener su personal y sus equipos; estos regalos supondrían un suplemento para las subvenciones del gobierno de EEUU, que se iniciaron poco tiempo después de la victoria sandinista, cuando el presidente Carter autorizó el apoyo por parte de la CIA a *La Prensa* y a la oposición antisandinista. Bajo el titular "El Valor de Un Periódico", el *Washington Post* elogió a Violeta Chamorro, comentando que ella y su periódico "merecen 10 premios". Los comentarios en otros medios de comunicación han sido abundantes y no menos efusivos, al tiempo que se han producido duras condenas contra los sandinistas por hostigar o silenciar a esta Tribuna del Pueblo.<sup>43</sup>

Preguntamos ahora si estos sentimientos reflejan valores libertarios

o el servicio al poder, aplicando la norma estándar de la sinceridad. ¿Cómo, por ejemplo, reaccionaron las mismas personas e instituciones cuando las fuerzas de seguridad del gobierno de Duarte, al que apoyamos, eliminaron los medios de comunicación independientes de El Salvador, Estado cliente de EEUU –no por medio de la censura y la suspensión intermitentes, sino del asesinato, la mutilación y la destrucción física? Ya hemos visto la respuesta. Se produjo el silencio. El *New York Times* no tuvo nada que decir sobre estas atrocidades, ni en sus columnas de noticias ni en sus editoriales, ni entonces ni después; y otros que manifiestan su indignación en relación con el trato deparado a *La Prensa* tampoco han reaccionado de manera diferente. El extremo desprecio por la libertad de prensa sigue en vigor, incluso al mismo tiempo que nos congratulamos por nuestros logros a la hora de llevar la "democracia" a El Salvador.

Concluimos que, entre los intelectuales que manifiestan su opinión, los que creen en la libertad de prensa cabrían fácilmente en el salón de cualquier casa, y entre ellos habría pocos que proclamaran valores libertarios al tiempo que acometían contra el enemigo del Estado.

Para someter esta conclusión a una prueba adicional, podemos estudiar el caso de Guatemala. En Guatemala, no fue necesaria ninguna censura mientras Estados Unidos apoyaba el terror, durante su momento culminante; bastó el asesinato de varias docenas de periodistas. Esto recibió poca atención en Estados Unidos. Con la "renovación democrática" que proclamamos con orgullo, se produjeron algunos esfuerzos indecisos por explorar el "espacio político" que quizá se había abierto. En febrero de 1988, dos periodistas que habían regresado del exilio inauguraron el semanario de centro-izquierda, *La Época*, probando a la "democracia" guatemalteca. El Ejército Secreto Anticomunista (ESA) había advertido por medio de un comunicado a los periodistas que regresaban: "Nos aseguraremos de que dejen el país o mueran dentro de él"<sup>44</sup>. En Estados Unidos, esto no fue objeto de atención alguna.

En abril, se produjo gran indignación cuando *La Prensa* no pudo aparecer debido a la escasez de papel de periódico. Para el *Washington Post*, esto representaba otra "lección significativa de poder arbitrario... al negar a *La Prensa* papel de periódico". Se alzaron gritos renovados de ira cuando se cerró *La Prensa* durante dos semanas en julio, tras lo que



el gobierno declaró habían sido unas versiones falsas e inflamatorias de la violencia que se produjo durante algunas manifestaciones.<sup>45</sup>

Mientras tanto, el 10 de junio, quince hombres fuertemente armados penetraron por la fuerza en las oficinas de *La Época*, robaron equipos valiosos y lanzaron bombas incendiarias en las oficinas, destruyéndolas. También secuestraron al vigilante nocturno, liberándolo más tarde bajo amenaza de muerte si hablaba sobre el ataque. El testimonio de testigos presenciales y otras fuentes dejó pocas dudas en cuanto al hecho de que este ataque había sido una operación de las fuerzas de seguridad. El director celebró una conferencia de prensa el 14 de junio para anunciar que la publicación se cerraría definitivamente, “ya que no existen en el país condiciones que garanticen el ejercicio de un periodismo libre e independiente”. Tras distribuirse una circular en la que se amenazaba a los “periodistas traidores”, entre los cuales se incluía a los “comunistas y quienes han regresado del exilio”, advirtiéndoles que abandonaran el país o se hallarían “muertos dentro de él”, regresó al exilio, acompañándolo al aeropuerto un diplomático occidental. Otro periodista también se marchó. La destrucción de *La Época* “señaló no sólo el fin de la voz de un medio independiente en Guatemala, sino que también sirvió como advertencia de que ni el gobierno ni las fuerzas de seguridad tolerarían en el futuro la independencia de la prensa”, comentó Americas Watch.<sup>46</sup>

Estos acontecimientos no suscitaron respuesta pública alguna por parte de los guardianes de la libertad de expresión. Ni el *New York Times* ni el *Washington Post* informaron sobre los hechos, aunque sin duda no fue por ignorancia.<sup>47</sup> Sucede sencillamente que la destrucción violenta de los medios independientes no es importante cuando se produce en una “democracia incipiente” apoyada por Estados Unidos. Se produjo, no obstante, una reacción en el Congreso, según informó la NACLA: “En Washington, la reacción de los senadores demócratas liberales fue añadir 4 millones de dólares a la solicitud de ayuda militar de la administración. Estos antiguos adictos a la libertad de prensa, con el senador Inouye a la cabeza, han ofrecido a los peces gordos del ejército 9 millones de dólares, más unos 137 millones de dólares en ayuda económica, que incluye 80 millones de dólares en efectivo, gran parte de los cuales terminan en las arcas del ejército”, mientras que Bryan Barrera, director de *La Época*, “ha vuelto a México” y “la prensa de

Guatemala está una vez más limitada al descubrimiento de escándalos por parte de la derecha y a la propaganda del ejército”<sup>48</sup>. Los vigilantes guardianes de la libertad de prensa observaban en silencio.

Unas semanas después, las fuerzas de seguridad israelíes efectuaron una redada en las oficinas de uno de los principales diarios de Jerusalén, *Al-Fajr*, arrestando a su director Hatem Abdel-Qader y encarcelándolo durante seis meses sin juicio alguno, basándose en motivos de seguridad no especificados.<sup>49</sup> No se produjeron denuncias clamorosas en los editoriales, ni llamamientos a la retribución; de hecho, ni el *New York Times* ni el *Washington Post* informaron sobre estos asuntos triviales. A diferencia de Violeta Chamorro, a quien nada por el estilo le ha sucedido, Abdel-Qader no “merece 10 premios”, ni uno, ni siquiera una línea.

Una vez más, los hechos están claros: la supuesta preocupación por la libertad de prensa en Nicaragua es un mero fraude.

Quizá podría argumentarse que la censura de *La Prensa* es más importante que el asesinato de un director por parte de fuerzas de seguridad que cuentan con el apoyo de EEUU y la destrucción de oficinas por parte del ejército o sus escuadrones terroristas, dada la gran importancia de *La Prensa*, diario que se opuso valerosamente a nuestro aliado Somoza bajo la dirección de Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por el dictador en 1978. En el mejor de los casos, ésa sería una razón insuficiente; la libertad de prensa significa poco si solamente sirve a las instituciones poderosas. Pero existen defectos aún mayores. Uno de ellos es que *La Prensa* de después de 1980 prácticamente no tiene nada que ver con el periódico que se oponía a Somoza. Tras el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, su hermano Xavier pasó a ocupar el puesto de director, en el que permaneció hasta que los propietarios lo despidieron en 1980; el 80 por ciento del personal se marchó con él, y juntos fundaron *El Nuevo Diario*, que es el sucesor del antiguo *La Prensa*, si consideramos que un diario se compone de su director y su personal, no de sus propietarios y la maquinaria. El nuevo director de *La Prensa*, hijo del director asesinado, se había dedicado con anterioridad a vender publicidad; más tarde, se unió a la dirección de los Contra operada por la CIA, permaneciendo en calidad de codirector del periódico, que apoya su postura públicamente.<sup>50</sup>

Estos hechos no se pueden hallar en los homenajes que los medios



de comunicación rinden a la valiente tradición de *La Prensa*; o no se mencionan durante el transcurso de los lamentos en cuanto al destino de este “periódico de valor”, o reciben un trato al estilo de Stephen Kinzer, que escribe que *El Nuevo Diario* “fue fundado... por un grupo secesionista de empleados de *La Prensa* con simpatías por la causa sandinista” – “grupo secesionista” que incluía al 80 por ciento del personal y al director, que se oponían a la nueva línea del diario apoyado por la CIA.<sup>51</sup>

El alcance de la hipocresía se hace aún más evidente cuando estudiamos más de cerca al “periódico de valor”. El diario ha apoyado abiertamente el ataque contra Nicaragua. En abril de 1986, a medida que aumentaba la campaña para el suministro de ayuda militar a los Contra, uno de los propietarios, Jaime Chamorro, escribió un editorial de opinión en el *Washington Post*, haciendo un llamamiento a la ayuda a “aquellos nicaragüenses que luchan por la democracia” (la referencia habitual a las fuerzas por procuración de EEUU). Durante las semanas que precedieron a las votaciones de verano en el Congreso, “una multitud de artículos por cinco miembros distintos de la redacción de *La Prensa* denunciaron a los sandinistas en los principales periódicos de Estados Unidos”, observa John Spicer Nichols, entre ellos una serie de editoriales de opinión firmados por redactores de *La Prensa* en el *Washington Post*, que viajaron a Estados Unidos bajo los auspicios de las organizaciones de fachada de la red de financiación de los Contra de North. Bajo su nuevo régimen, *La Prensa* escasamente ha pretendido ser un periódico; más bien, es un diario propagandístico dedicado a socavar al gobierno y apoyar el ataque contra Nicaragua por parte de una potencia extranjera. Desde su reapertura en octubre de 1987, los compromisos son muy abiertos y transparentes.<sup>52</sup> Que yo sepa, no existe precedente alguno para la supervivencia y publicación continuada de este tipo de diario durante un período de crisis en ninguna democracia occidental; sin duda, no en Estados Unidos.<sup>53</sup>

Los defensores de los valores libertarios, no obstante, deberían insistir en que Nicaragua rompa con el precedente en este sentido, a pesar de la dificultad de su situación, y lamentan su incapacidad para hacerlo. Como ya se ha dicho, sin embargo, estos defensores no son fáciles de descubrir, según lo demuestra la prueba más elemental de sinceridad.

Podría plantearse el razonamiento de que una comparación con Estados Unidos resulta inadecuada, dado el lamentable historial de EEUU. Podríamos considerar como tal el significado de los comentarios del juez del Supremo William Brennan durante un discurso pronunciado en la Escuela de Derecho de la Universidad Hebrea en diciembre de 1987, en el que comentó que Estados Unidos “cuenta con una dilatada historia en lo que respecta a dejar de preservar las libertades civiles cuando percibía que su seguridad nacional estaba amenazada” – como en el caso de la Primera Guerra Mundial, cuando ni siquiera existía una amenaza remota. “Bien puede ser que sea Israel, y no Estados Unidos, quien proporcione la mayor esperanza para la creación de una jurisprudencia que pueda proteger a las libertades civiles contra las exigencias de la seguridad nacional,” dijo Brennan, añadiendo que “las naciones del mundo, enfrentadas con amenazas repentinas contra su propia seguridad, estudiarán la experiencia de Israel a la hora de gestionar su crisis de seguridad continuada, y bien podrían hallar en dicha experiencia la pericia que permita rechazar exigencias de seguridad que Israel ha demostrado carecen de cualquier base, y el valor para conservar las libertades civiles que Israel ha conservado sin perjuicio para su seguridad”. Si podemos aprender lecciones del historial estelar de Israel, “bien puede ser que la adversidad sea la sierva de la libertad”<sup>54</sup>.

Siguiendo los preceptos de este panegírico característico del “símbolo de la decencia humana” –y, lo que no es coincidencia, leal aliado y cliente de EEUU– derivamos una prueba adicional de la sinceridad de quienes denuncian a los sandinistas totalitarios por su tratamiento de *La Prensa* y de la oposición política. Procedamos a aplicarlo.

En el momento mismo del cierre de *La Prensa* en 1986, tras la virtual declaración de guerra contra Nicaragua por parte de EEUU, Israel cerró definitivamente dos periódicos de Jerusalén, *Al-Mithaq* y *Al-Ahd*, basándose en que “aunque les ofrecemos libertad de expresión... está prohibido permitirles explotar esta libertad para dañar al Estado de Israel”. El Ministerio del Interior declaró que se veía obligado a actuar “en interés de la seguridad del Estado y del bien público”. Creemos en la libertad de prensa, declaró el Ministerio, pero “uno tiene que lograr un equilibrio adecuado entre la libertad de expresión y el bien del Estado”. El Tribunal Supremo apoyó el cierre basándose en que “es in-



concebible que el Estado de Israel permita a organizaciones terroristas que intentan destruirlo establecer negocios en su territorio, por legítimos que puedan ser"; el gobierno había acusado a estos dos periódicos árabes de recibir apoyo de grupos hostiles.<sup>55</sup> Que yo sepa, la única mención que se hizo de estos hechos en un periódico de EEUU es la que yo hice en una carta dirigida al *Boston Globe*.

Al tiempo que se volvía a abrir *La Prensa* en 1987, la prensa israelí informó sobre el cierre de una publicación política de Nazaret (dentro de Israel propiamente dicho) basado en el "extremo nacionalismo de su línea editorial" y una oficina de prensa de Nablus, de propiedad árabe, se cerró durante dos años; para entonces su propietario había estado encarcelado durante seis meses sin juicio, acusado de ser "miembro de una organización ilegal", y un comunicado militar declaró que su mujer había mantenido los vínculos de la oficina con la OLP. Este tipo de acciones de represión son "legales" en el estado de emergencia que está en vigor desde que se fundó el Estado en 1948. El Tribunal Supremo apoyó el cierre de la publicación de Nazaret, alegando que los servicios de seguridad habían suministrado evidencia a efectos de una conexión entre la publicación y "organizaciones terroristas", y descartando por considerarla fuera de lugar la alegación de su dueño a efectos de que todo lo que había aparecido en la publicación había pasado la censura israelí.<sup>56</sup> No parece que en Estados Unidos se haya informado sobre nada de esto; el corresponsal del *New York Times*, Thomas Friedman, eligió el día del cierre de la oficina de Nablus para elaborar una de sus habituales odas a la libertad de expresión en Israel.<sup>57</sup> No se produjo ningún clamor de protesta entre los defensores americanos de las libertades civiles, ninguna denuncia, incluso ningún comentario sobre actos que superaban con mucho el hostigamiento y el cierre provisional de la publicación nicaragüense subvencionada por EEUU que apoya abiertamente el derrocamiento del gobierno; ningún llamamiento a la organización de un ejército terrorista para imponer nuestras normas elevadas, tan gravemente ofendidas. El silencio continuó cuando se cerró el semanario de Nazaret *Al-Raia* por orden del Ministerio del Interior, después de que su editor permaneciera encarcelado sin juicio durante tres meses.<sup>58</sup>

Una vez más, la historia ha ideado un experimento controlado para demostrar el desprecio absoluto por la libertad de expresión por parte

de los supuestos defensores de las libertades civiles. Los críticos de los abusos nicaragüenses de la libertad de prensa que superan la prueba más elemental de sinceridad cabrían en un salón pequeñísimo, quizás en una cabina telefónica.<sup>59</sup>

Por lo que concierne a la jurisprudencia que tanto impresionó al juez Brennan, la prensa hebrea comenta que "el periodismo israelí carece de cualquier garantía, incluso la más mínima, de libertad. El Estado cuenta con armas que no tienen un paralelo en ninguna sociedad democrática del mundo", derivadas de la reglamentación colonial británica que fue restaurada por Israel tan pronto como el Estado quedó establecido. Entre estos reglamentos draconianos se incluyen medidas para prohibir y castigar las publicaciones que podrían fomentar "la desobediencia o el disgusto entre los habitantes del país" o "situaciones desagradables para las autoridades". La ley autoriza al Ministerio del Interior a "poner fin a la aparición de una publicación, durante cualquier período que se considere oportuno, si hubiera publicado mentiras o falsos rumores que, en su opinión, pudieran aumentar el pánico o la desesperación". Estas medidas se mantienen en reserva, a veces se aplican, y contribuyen al miedo y a una "atmósfera de McCarthyismo" que incrementa la autocensura que suelen practicar los redactores. Esta autocensura voluntaria, escribe el analista jurídico israelí Moshe Negbi, añade considerablemente a los efectos de la "rica y poco habitual variedad de herramientas para aplastar la libertad de prensa" con la que cuenta el gobierno. El censor tiene autoridad legal para prohibir cualquier información "que pudiera, en su opinión, causar daño a la defensa del país, a la seguridad pública o al orden público". El censor militar es "inmune al escrutinio público" y "la ley prohíbe a la prensa publicar cualquier indicio a efectos de que el censor ordenó que se produjeran cualesquiera cambios, adiciones o supresiones", aunque este hecho a veces resulta evidente, como cuando el editorial principal aparece en blanco en el periódico más respetado de Israel, *Ha'aretz*. El censor también tiene autoridad para castigar, sin juicio, a cualquier periódico que él considere que ha violado sus órdenes. La Declaración de Independencia de 1948, que manifestó las obligaciones de Israel con respecto a la libertad y a los derechos civiles, "no menciona la libertad de expresión", continúa Negbi, añadiendo que no fue una omisión accidental, sino que reflejaba las actitudes del primer ministro David Ben-Gurion,



que se “oponía vigorosamente a las referencias a estos derechos”, adhiriéndose, junto con sus asociados, a la “doctrina leninista” de que el Estado no debe ser sometido a críticas por aquellas acciones que considere correctas. El Estado incluso está autorizado a negarse a inscribir a una publicación en el registro (de manera que no se pueda publicar) o a rescindir su inscripción “sin presentar motivo alguno para su negativa”<sup>62</sup>.

Esta autoridad se utiliza: por ejemplo, a la hora de prohibir en Israel una publicación social y política en lengua árabe editada por un profesor árabe israelí de la Universidad Hebrea en 1982, decisión aprobada por el Tribunal Supremo por “razones de seguridad” que no se especificaron; o el arresto de un árabe de Nazaret algunos meses después “por publicar un periódico sin permiso”, esto es, cuatro hojas informativas. Los tribunales no ofrecen protección cuando el Estado exhibe la palabra mágica, “seguridad”.

Aunque los ciudadanos árabes son los objetivos habituales, los judíos no están inmunes a estos principios de jurisprudencia. Cuando la Lista Progresista, de tendencias pacíficas, uno de cuyos dirigentes es el general Matti Peled (jubilado), intentó emitir un anuncio de campaña en el que aparecía una entrevista en la que Arafat anunciaba que aceptaba las resoluciones 242 y 338 de la ONU, el juez Goldberg del Tribunal Supremo lo declaró ilegal, manifestando: “Desde el momento en que el gobierno declaró que la OLP es una organización terrorista, a la televisión solamente se le permiten las emisiones que cumplan con esta declaración. Está prohibido emitir cualquier cosa que contradiga la declaración y presente a la OLP como una organización política”. Comentando esto, el abogado Avigdor Feldman escribe: “La lógica es férrea. A la televisión estatal [no hay otra] no se le permite emitir una realidad que no sea consecuente con la decisión del gobierno, y si los hechos no son consecuentes con la postura del gobierno, entonces, por favor, en nuestra casa no”<sup>62</sup>.

En Estados Unidos, uno descubrirá muy pocas referencias a las restricciones severas que se han aplicado a la libertad de expresión en Israel a lo largo de muchos años. Hasta la violenta reacción ante el levantamiento palestino a partir de diciembre de 1987, estas prácticas no se observaron ni siquiera de pasada. En el *New York Times* no ha habido prácticamente nada; el antiguo redactor jefe A.M. Rosenthal

necesitaba una audacia considerable para manifestar en mayo de 1988 que la censura en Israel “merece y es objeto de críticas por parte de Occidente”<sup>63</sup>. Además, las escasas excepciones <sup>64</sup> no llevan a condenas de estas variaciones de nuestros elevados ideales o a un llamamiento a alguna acción por parte del principal patrocinador de Israel.

La reacción de los medios de comunicación de EEUU y de la comunidad intelectual estadounidense ante la legislación y las prácticas israelíes suministra una espectacular evidencia adicional a efectos de que la aparente preocupación por las libertades civiles y los derechos humanos en Nicaragua es un fingimiento cínico, que sirve a otros fines.

La prueba habitual de sinceridad produce resultados similares allá donde volvamos los ojos. En la actualidad, estas conclusiones están lo suficientemente bien documentadas en una amplia gama de casos como para plantear ciertas preguntas serias entre las personas dispuestas a tener en cuenta los hechos y la razón. No resultará agradable enfrentarse con las respuestas a estas preguntas, de manera que podemos confiar en que las preguntas no se hagan.

Hablando de “nuestra prensa que no es libre” hace medio siglo, John Dewey comentaba que la crítica de los “abusos específicos” solamente tiene un valor limitado:

El único enfoque verdaderamente fundamental del problema consiste en plantearse preguntas en cuanto al efecto necesario del actual sistema económico sobre el sistema de publicidad en su totalidad; en el juicio en cuanto a las noticias, en la selección y eliminación del material que se publica, en el tratamiento de las noticias tanto en los editoriales como en las columnas de información. De lo que se trata, bajo esta modalidad de enfoque, no es de cuántos abusos específicos existen y cómo se pueden remediar, sino de hasta qué punto la libertad intelectual y la responsabilidad social son posibles a cualquier gran escala bajo el régimen económico actual.

Los propietarios y los redactores, con sus compromisos para con “el orden social y público” del que son los beneficiarios, a menudo resultarán estar entre los “principales enemigos” de la verdadera “libertad de prensa”, continuó Dewey. No es razonable esperar que “los gestores de



esta empresa comercial actúen de manera distinta a los dirigentes y secuaces de las grandes empresas”, y “seleccionen y traten a sus mercancías especiales desde este punto de vista”. En la medida en que los gestores ideológicos están “dando al público lo que ‘desea’”, eso sucede debido al “efecto del presente sistema económico sobre la generación de la indiferencia y la apatía intelectuales, la creación de una demanda de distracción y diversión, e incluso un amor al crimen, siempre que éste resulte productivo” entre un público “corrompido por el ideal de salirse con la suya cuando pueda”<sup>65</sup>.

A estas reflexiones oportunas podemos añadir las relaciones íntimas entre el poder privado y el estatal, la necesidad determinada por las instituciones de acomodarse a los intereses de quienes controlan las decisiones sociales básicas y el éxito del poder establecido a la hora de desintegrar constantemente cualquier cultura independiente que fomente valores que no sean la avaricia, el provecho personal y la subordinación a la autoridad, y cualquier estructura popular que apoye al pensamiento y la acción independientes. La importancia de estos factores se ve destacada por el hecho de que incluso el derecho formal a la libertad de expresión se adquirió solamente por medio de una lucha popular incansable que desafió las disposiciones sociales existentes.<sup>66</sup>

Dentro del orden social dominante, el público ha de seguir siendo un objeto de manipulación, no un partícipe en el pensamiento, el debate y la decisión. Como los privilegiados han comprendido hace mucho, es necesario alejar las “crisis de democracia” periódicas. En capítulos anteriores, he comentado algunos de los modos en que estos principios se han manifestado durante la época moderna, pero las preocupaciones resultan naturales y han dimanado de los mismos orígenes del impulso democrático moderno. Al condenar a los demócratas radicales que habían amenazando con “volver el mundo del revés” durante la revolución inglesa del siglo XVII, el historiador Clement Walker se quejaba, en 1661, como sigue:

Han arrojado todos los misterios y los secretos del gobierno... a los pies del vulgo (como margaritas a cerdos), y han enseñado tanto a la soldadesca como al pueblo a examinarlos tan de cerca como para desenmarañar todos los gobiernos y volver a los primeros principios de la naturaleza... Al hacerlo, han logrado que

el pueblo se vuelva tan curioso y arrogante que nunca hallará la humildad suficiente como para someterse a un gobierno civil.<sup>67</sup>

Las preocupaciones de Walker pronto se superaron, a medida que se restauró un mundo ordenado y la “derrota política” de los demócratas “fue total e irreversible”, observa Christopher Hill. En 1695 se pudo abandonar la censura, “no debido a los principios libertarios de los radicales, sino porque la censura ya no era necesaria”, puesto que “los forjadores de la opinión” ahora se “autocensuraban” y “no se imprimía nada que pudiera atemorizar a los hacendados”. En aquel mismo año, John Locke escribió que a los “jornaleros y comerciantes, las hilanderas y las lecheras” se les debía decir qué era lo que debían creer. “La mayoría de ellos no pueden saber, y por tanto han de creer”. “Pero al menos,” comenta Hill, “Locke no pretendía que fueran los curas los que efectuaran la revelación; eso le correspondía a Dios”<sup>68</sup>. Con el declive de la autoridad religiosa durante la era moderna, la tarea le ha correspondido al “sacerdocio secular”, cuyos miembros comprenden su responsabilidad con cierta claridad, como ya se ha comentado.

A pesar de estas percepciones, algunos han seguido dejándose seducir por los “dogmatismos democráticos” de los que se mofan quienes se dedican al arte de la manipulación. John Stuart Mill escribió: “No el conflicto violento entre partes de la verdad, sino la callada supresión de la mitad de la misma, es lo que constituye el mal formidable. Siempre hay esperanza cuando la gente se ve obligada a escuchar a ambas partes”. Si volvemos al presente, el Código de Conducta Profesional del Sindicato Nacional de Periodistas Británicos insta al periodista a “eliminar la distorsión” y “esforzarse por asegurarse de que la información que él/ella divulga sea justa y correcta, evitar la expresión de comentarios y conjeturas como hechos establecidos y la falsificación por la distorsión, la selección o la falsa declaración”<sup>69</sup>. La manipulación del público durante la década de 1960 provocó las preocupaciones manifestadas por el senador Fulbright en 1966, que se han citado anteriormente. Un año después, Jerome Barron propuso “una interpretación de la primera enmienda [de la constitución de Estados Unidos] que se centre en la idea de que contener la mano del gobierno es bastante inútil a la hora de garantizar la libertad de expresión si quienes logran hacerse con la restricción del acceso son los grupos privados”,



esto es, “los nuevos medios de comunicación”: sólo ellos “pueden manifestar sentimientos al público, y son ellos, y no el gobierno, quienes pueden con mayor eficacia abreviar la expresión anulando la oportunidad para que una idea logre la aceptación. Como teoría constitucional o para la comunicación de ideas, el *laissez faire* está manifiestamente fuera de lugar” cuando los medios están estrechamente controlados por el poder privado.<sup>70</sup>

Hubo muchos que vieron estas ideas con alarma. Los redactores del *St. Louis Post-Dispatch*, durante muchos años uno de los sectores más independientes de la prensa local de calidad, manifestaron su acuerdo en el sentido de que el periódico “tiene una obligación hacia la comunidad donde se publica a la hora de presentar tanto los aspectos considerablemente impopulares como los aspectos populares de un asunto”, pero “tal dictado” no debería imponerse por la ley.”Desde el punto de vista práctico,” mantenían, “un periódico que se niega firmemente a dar expresión a puntos de vista con los que no está de acuerdo no tiene muchas probabilidades de éxito, éxito que no merece”<sup>71</sup>.

Los redactores se equivocaron en cuanto a su evaluación fáctica, aunque sus dudas en cuanto a las obligaciones legales no se pueden descartar a la ligera. En realidad, solamente los medios que limitan de manera consecuente “ambos aspectos” al restringido consenso de los poderosos logrará el éxito en el mercado libre dirigido.

Es de especial importancia comprender qué temas de artículos no se deben buscar, qué fuentes de pruebas se han de evitar. Los refugiados de Timor o de los bombardeos de EEUU en Laos y Camboya no tienen nada útil que contar en un artículo. Es importante mantenerse alejado de los campamentos de la frontera hondureña, donde los refugiados “sin excepción” informan que todos “huían del ejército que nosotros apoyamos” y “cada persona tenía una historia de atrocidades por parte de las fuerzas del gobierno, una vez más las mismas a las que nosotros estamos armando” a medida que llevan a cabo “una campaña sistemática de terrorismo” con “una combinación de asesinato, torturas, violaciones, cosechas incendiadas para crear condiciones de hambre”, y crueles atrocidades; el informe de la delegación del Congreso que llegó a estas conclusiones después de que su investigación directa de principios de 1981 quedara excluida de los medios de comunicación, que estaban evitando esta fuente principal de evidencias sobre el ambiente

rural de El Salvador.<sup>72</sup> No sería elegante despertar la atención del público sobre el “notable progreso” de Nicaragua “en el sector social, que está estableciendo una base sólida para el desarrollo socioeconómico a largo plazo”, sobre el que informaba en 1983 el Banco para el Desarrollo Interamericano, al que la presión por parte de EEUU no permitió contribuir a estos logros.<sup>73</sup> Del mismo modo, no es adecuado estipular los logros de la administración Reagan a la hora de invertir estos éxitos de los primeros tiempos, consignar el regreso de la enfermedad y la desnutrición, el analfabetismo y las muertes infantiles, mientras que el país se ve impulsado hacia el grado de vida cero para pagar por el pecado del desarrollo independiente. Por el contrario, sí estamos ante un periodismo responsable si James LeMoyne acusa a los sandinistas de la “amargura y apatía” con las que se encuentra en Managua.<sup>74</sup> Quienes esperan penetrar en el sistema han de aprender que el terror cuyos orígenes se pueden hallar en la OLP, Gadafi o Jomeini deja tras de sí víctimas dignas que merecen compasión y preocupación; pero aquellas que han sido el objetivo de Estados Unidos y sus aliados no entran dentro de esta categoría. Los periodistas responsables han de comprender que un ataque perpetrado con granadas contra los reclutas del ejército israelí y sus familias que produce un muerto y muchos heridos merece una fotografía de las víctimas en primera página y un artículo sustancial, mientras que un ataque de los Contra a un autobús de pasajeros que se produjo el día anterior y en el que hubo dos víctimas mortales, dos secuestrados y muchos heridos, no merece siquiera que se informe al respecto.<sup>75</sup> Si vamos estudiando las categorías una por una, veremos que se pueden aplicar las mismas lecciones.

Existe, de hecho, un algoritmo elaborado para quienes desean llegar a ser respetables y privilegiados. Sólo es necesario tener en la mente la prueba de sinceridad que ya se ha comentado, y asegurarse de incumplirla a cada paso. La misma lógica sencilla explica la forma de actuar característica de los medios de comunicación independientes, y de las clases cultas en general, por razones hartamente evidentes.

He venido comentando métodos de control del pensamiento y los motivos por los que adquieren tal preeminencia en las sociedades democráticas cuya población en general no puede ser arrojada fuera del escenario político por la fuerza. Los comentarios podrían producir la impresión de que el sistema es todopoderoso, pero eso dista mucho de



la verdad. Las personas están capacitadas para resistir, y a veces lo hacen, con efectos considerables.

Tomemos el caso de las matanzas en Timor, respaldadas por Occidente. Los medios de comunicación ocultaron los terribles acontecimientos y la complicidad de sus propios gobiernos, pero la historia, no obstante, terminó por salir a la luz, llegando a ciertos sectores del público y del Congreso. Éste fue el logro de unos cuantos jóvenes entregados a su causa, cuyos nombres la historia jamás conocerá, como suele suceder en el caso de aquellas personas cuyas acciones han hecho que éste sea un mundo mejor. Sus esfuerzos no pusieron fin al terror indonesio ni al apoyo del mismo por parte de EEUU, pero sí mitigaron la violencia. Por último, como resultado de su trabajo, se permitió un acceso limitado a la Cruz Roja. De esta y de otras maneras, se salvaron decenas de miles de vidas. Hay muy pocas personas que puedan reivindicar haber logrado algo que haya tenido tanta consecuencia para la humanidad. Lo mismo sucede en otros muchos casos. Las limitaciones internas dentro de un Estado poderoso permiten un margen de supervivencia para sus víctimas, hecho que jamás debería olvidarse.

Estados Unidos es un lugar mucho más civilizado de lo que era hace veinticinco años. La crisis de la democracia y la independencia intelectual que tanto aterran a las elites han sido muy reales, y sus efectos en la sociedad han sido profundos; y a fin de cuentas, por lo general han sido sanos. El efecto se percibe de manera inmediata a lo largo de toda una gama de temas, entre ellos el racismo, el medio ambiente, el feminismo, la intervención forzosa y muchas cosas más; y también en los medios de comunicación, que han permitido cierta medida de apertura a la opinión disidente y a la información crítica durante estos últimos años, considerablemente superior a la que hubiera sido imaginable incluso en el momento culminante del fermento de la década de 1960, y mucho menos en un momento anterior. Una ilustración de la mejora en el nivel moral y cultural es que ha llegado a ser posible, por primera vez, hacer frente con seriedad a lo que se les había hecho a los nativos americanos durante la conquista del continente; y se pusieron en duda muchas otras ilusiones necesarias, que se desmoronaron rápidamente al ser sometidas a inspección, a medida que se planteaban retos a la ortodoxia y la autoridad. Poco nos sorprende, por tanto, que la década de 1960 aparezca como un período de horror, caos y abando-

no destructivo en las reflexiones de los observadores privilegiados, angustiados, horrorizados incluso, por la independencia intelectual e integridad moral de los jóvenes.

Los mismos acontecimientos han producido su efecto en la política estatal. No se produjo ninguna protesta cuando John F. Kennedy envió a la Fuerza Aérea de EEUU a atacar a la sociedad rural de Vietnam del Sur. Veinte años después, la administración Reagan tuvo que recurrir al terror clandestino en América Central. El clima de opinión y las preocupaciones habían cambiado, fuera de los círculos de elite, y la capacidad del Estado para el ejercicio de la violencia se había reducido de manera proporcional. El número de víctimas del terror en tiempos de Reagan era impresionante: decenas de miles de personas torturadas y cuerpos mutilados, hambre, enfermedad y destrucción masivas, cientos de miles de refugiados miserables. Las cosas hubieran sido considerablemente peores de no ser por las limitaciones impuestas por personas que habían hallado maneras de escapar al sistema de adoctrinamiento, y un valor y una honradez que hicieron posible que actuaran. Éstos son logros considerables —una vez más, por parte de personas cuyos nombres la historia jamás conocerá.

Existen muchas oportunidades para ayudar a crear un mundo más humano y más decente, si optamos por aprovecharlas.

Empecé hablando de las preguntas planteadas por los obispos brasileños en relación con los problemas de la democracia y los medios de comunicación. Quizá podría terminar dando mis propias conclusiones sobre estos asuntos. La supuesta preocupación en relación con la libertad de prensa en Occidente no es demasiado convincente a la luz de la facilidad con que se pasan por alto incluso las violaciones extremas del derecho a la libertad de expresión en los estados clientes de EEUU, y de los resultados reales de los medios de comunicación a la hora de servir a los poderosos y a los privilegiados en tanto que organismo que manipula, adoctrina y controla. Una "política de comunicaciones democrática", por el contrario, intentaría desarrollar medios de expresión e interacción que reflejaran los intereses y las preocupaciones de la población en general, y fomentaran su autoeducación y su acción individual y colectiva. Una política concebida en estos términos sería un factor deseable, aunque existen escollos y peligros que no se deberían pasar por alto. Pero el tema es predominantemente académico,



cuando se estudia aislándolo de la escena social en general. Las perspectivas para una política de comunicaciones democrática se ven inevitablemente constreñidas por la distribución del poder efectivo para la determinación del curso y el funcionamiento de las principales instituciones sociales. De ahí que la meta solamente se pueda enfocar como una parte integrante de la democratización adicional del orden social. Este proceso, a su vez, requiere una política de comunicaciones democrática como componente central, que ha de efectuar una contribución indispensable. Cualquier paso serio hacia una democracia con mayor significado tendría como objetivo la disolución de la concentración del poder de toma de decisiones, que en nuestras sociedades reside principalmente en un nexo estatal-empresarial. Tal concepto de la democracia, a pesar de resultar tan familiar en años anteriores que incluso podría merecer el manido término de “conservador”, está alejado de quienes dominan el discurso público —lo cual no puede decirse que resulte sorprendente, si se considera su amenaza para el privilegio establecido.

Los seres humanos son la única especie con historia. Que también tengan un futuro es algo que no resulta tan evidente. La respuesta estribará en las perspectivas para los movimientos populares, con raíces firmemente establecidas entre todos los sectores de la población, dedicados a valores que dentro del orden social y político existente se ocultan o se arrinconan: la comunidad, la solidaridad, la preocupación por un medio ambiente frágil que deberá mantener a las generaciones futuras, el trabajo creativo bajo un control voluntario, el pensamiento independiente y la verdadera participación democrática en diversos aspectos de la vida.

## NOTAS

- <sup>1</sup> Milton, *Paradise Lost*, Libro III 682-84; Pascal, *Provincial Letters*, Carta VI. Para una exposición perceptiva de cómo los ricos y la comunidad empresarial transmutan la reforma fiscal para servir a sus intereses, utilizando el recurso de “confusión del público” para hacer que esto suceda “al tiempo que parece no suceder,” ver Linda Mc Quaid, *Behind Closed Doors: How the Rich Won Control of Canada's Tax System* (Penguin, 1987). Su estudio se centra específicamente en Canadá, pero las conclusiones son más generales.
- <sup>2</sup> Churchill, *The Second World War*, vol. 5 (Houghton Mifflin, 1951, 382).
- <sup>3</sup> Ver pág. 49.
- <sup>4</sup> Douglas Pike, estudioso del gobierno de EEUU, *Viet Cong* (MIT, 1966).
- <sup>5</sup> Editorial, *NYT*, 22 de diciembre, 1965. Washington se atribuyó el mérito de ayudar a preparar el campo para el golpe militar, y una función más directa de EEUU en el golpe y sus secuelas es escasamente imposible; ver *Culture of Terrorism*, 181, y un estudio importante de Peter Dale Scott, “The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967”, *Pacific Affairs*, verano de 1985. El asesor de Seguridad Nacional de Lyndon Johnson, McGeorge Bundy, comentó retrospectivamente que “nuestro esfuerzo” en Vietnam fue “excesivo” tras estos acontecimientos de Indonesia, que ayudaron a inocular a la región contra el nacionalismo inspirado por Vietnam, aguda percepción de los antecedentes de la guerra de Vietnam, ampliamente apoyados por otra evidencia; *Manufacturing Consent*, 174.
- <sup>6</sup> Sam Pope Brewer, “Iran is Reported Subversion Free”, *NYT*, 2 de diciembre, 1956; *NYT*, 30 de agosto, 1960. Citado por William A. Dorman y Mansour Farhang, *The U.S. Press and Iran* (California, 1987, 77, 72).
- <sup>7</sup> UPI, BG, 27 de julio, 1987.
- <sup>8</sup> Ver *Turning the Tide*, 161.
- <sup>9</sup> *NYT*, 25 de septiembre, 1988. Aparte de la eficacia de medidas cuasi fascistas, los éxitos económicos reflejan el crucial efecto de imprimación de las guerras asiáticas de América y el efecto persistente del colonialismo japonés, que explotó a sus colonias de manera diferente a la de Occidente, “llevando la industria a la mano de obra y a las materias primas, en lugar de hacer lo contrario”, observa Bruce Cummings, comentando la renovación del desarrollo industrial que se había iniciado bajo el imperialismo japonés con la dirección del Estado y la empresa (“The origins and development of the Northeast Asian political economy”, *International Organization* 38.1, invierno de 1984).
- <sup>10</sup> FRUS, 1955-57, Vol. VII, 88f., NIE 82-85. Para más sobre este esclarecedor



- documento, que refleja el análisis de los servicios de información al nivel más elevado, ver mi "Agenda of the Doves", *Z Magazine*, septiembre de 1988.
- <sup>11</sup> John Murray Brown, CSM, 6 de febrero 1987; *Economist*, 15 de agosto, 1987. Sobre la cobertura de Timor por los medios de comunicación, ver *Political Economy of Human Rights. Towards a New Cold War The Chomsky Reader*, el último de los cuales incluye cierta medida de estudio sobre la notable apologética posterior por parte de periodistas occidentales. Hay mucho que añadir sobre los esfuerzos posteriores por ocultar este lamentable historial, pero no los estudiaré aquí. Aunque en menor escala, el terror y la represión continúan, llamando poco la atención.
- <sup>12</sup> Para una presentación de los hechos, ver *Manufacturing Consent*, capítulo 6. Los bombardeos por EEUU de la zona rural de Laos poco antes también se ocultaron durante el peor período; *ibid.*, y fuentes citadas.
- <sup>13</sup> *Ibid.*, y fuentes citadas; Ben Kiernan, "The American Bombardment of Kampuchea," *Vietnam Generation* 1.1, invierno de 1989.
- <sup>14</sup> Editorial, NYT, 16 de julio, 1988. Sobre la función de EEUU durante el período de "indiferencia", ver *Manufacturing Consent*, capítulo 6.
- <sup>15</sup> Elaine Sciolino, NYT, 16 de octubre; Clayton Jones, CSM, 24 de agosto, 1988. Sobre lo que él llama adecuadamente la "hipocresía" de Occidente en relación con este asunto, ver Peter Carey, *Far Eastern Economic Review*, 22 de diciembre, 1988. Indica que gracias a los "generosos suministros de armas y dinero chinos" y "ayuda alimenticia de Occidente" enviada a través de la ONU, "el Khmer Rouge se ha convertido en una formidable fuerza bélica", bien establecida en partes de Cambodia. La autoridades militares tailandesas ejercen una función crucial a la hora de permitir a las bases y los "enclaves del terror" del Khmer Rouge operar dentro de Tailandia. Gran parte de la lucha se ha producido entre el Khmer Rouge y sus compañeros de coalición no comunistas que EEUU dice apoyar, uno de los cuales (el KPNLF de Son Sann) ha sido "casi eliminado," y el otro (el ejército de Sihanouk) "duramente vapuleado". Con la ayuda de los aliados tailandeses y chinos de Estados Unidos, el Khmer Rouge podría ser capaz de hacerse con el poder tras la retirada vietnamita, que es el supuesto objetivo de la política de EEUU. Estos acontecimientos han sido suficientemente evidentes durante varios años. Ver *Manufacturing Consent* para referencias anteriores.
- <sup>16</sup> Ver, para referencias, *Turning the Tide*, capítulo 3, sección 5.2.
- <sup>17</sup> Ver mi artículo "Democracy in Industrial Societies", *Z Magazine*, enero de 1989.
- <sup>18</sup> Ver Victor Bulmer-Thomas, estudio de *On Power and Ideology, Third World Quarterly*, enero de 1988.
- <sup>19</sup> Connell-Smith, *The Inter-American System* (Oxford, 1966).
- <sup>20</sup> Charles Ameringer, *Don Pepe* (U. de Nuevo México, 1978, 114).
- <sup>21</sup> LaFeber, *Inevitable Revolutions* (Norton 1983, 187, 105); Charles F. Denton y Preston Lee Lawrence, *Latin American Politics: a Functional Approach* (San Francisco, 1972), citado por LaFeber; Ameringer, *op. cit.*, 105.

- <sup>22</sup> FRUS, 1952-54, vol. IV, 1170, notas de la reunión del grupo Guatemala, en el Departamento de Estado, 16 de junio, 1954; Ver pp. 1157s. para el texto de la resolución. Guatemala, se esperaba, se vería obligada a dirigirse al bloque soviético para obtener armamentos, ya que Estados Unidos había prohibido las otras fuentes. Según lo explicó el funcionario de la embajada de la Ciudad de Guatemala, John Hills, parar los buques en aguas internacionales podría "trastornar la economía de Guatemala". Esto a su vez "alentaría al ejército u otros elementos no comunistas a tomar el poder", sin lo cual "los comunistas explotarán la situación para extender su control", lo que "justificaría que la comunidad americana, o si ésta no está de acuerdo, EEUU tomara medidas enérgicas" (Bryce Wood, *The Dismantling of the Good Neighbor Policy* (Texas, 1985, 177). De este modo obligamos a Guatemala a defenderse de nuestra amenaza de ataque, creando así una amenaza a nuestra seguridad que explotamos destruyendo la economía guatemalteca de manera que se provoque un golpe militar o una auténtica toma del poder comunista que justifique nuestra respuesta violenta, en defensa propia. Aquí vemos el verdadero significado de la frase "amenaza a la seguridad", manifestada con mucha perspicacia.
- <sup>23</sup> LaFeber, *op. cit.*, 105-6.
- <sup>24</sup> Cf. p. 63. Para más detalles, ver apéndice V, sección 1.
- <sup>25</sup> Para una narración de los orígenes y el progreso de esta campaña propagandística, ver, entre otros, Herman, *The Real Terror Network*, y mi *Towards a New Cold War* (introducción), *Fateful Triangle* y *Pirates and Emperors*; ver éstos para referencias, cuando no se citan a continuación.
- <sup>26</sup> Ver apéndice V, sección 2.
- <sup>27</sup> Martha Crenshaw, ed., introducción, *Terrorism, Legitimacy and Power: The Consequences of Political Violence* (Wesleyan, 1983).
- <sup>28</sup> Dodd, AP, 25 de noviembre; Shultz, Robert Pear, NYT, 28 de noviembre, 1988. Un artículo que lo acompaña, de Alan Cowell, se refiere a las "manifestaciones de indignación" por parte de las naciones árabes cuando se excluyó a Arafat. Shultz siente auténtica "indignación visceral"; los árabes hacen "manifestaciones", quizá meramente para cubrir el expediente. Apple, 15 de diciembre, 1988.
- <sup>29</sup> Editorial, *WP Weekly*, 5-11 de diciembre, 1988.
- <sup>30</sup> Szep, BG, 4 de diciembre, 1988. En letra impresa, las alusiones al mismo asunto en una columna del director del *Globe* Randolph Ryan, el 2 de diciembre, son la única nota de duda que yo detecté, aunque el asunto es tan transparente que debe de haber habido alguna otra entre la inundación de informes y comentarios obedientes.
- <sup>31</sup> Para algunas evaluaciones comparativas, ver las fuentes citadas antes en la nota 25.
- <sup>32</sup> Ver *Pirates and Emperors*, capítulo 2.
- <sup>33</sup> *Ibid.*, 87f.; *Al-Fajr*, 2 de agosto, 1987; Danny Rubinstein, *Ha'aretz*, 29 de agosto, 1987; Comité contra el Terrorismo de Estado en el Mar, *State Terrorism at Sea*



- (Jerusalén); Joseph Schechla, "Israel's Piracy on the High Seas," *The Return* (septiembre, 1988); Joost Hiltermann, *Middle East International*, 10 de octubre, 1987.
- <sup>44</sup> Servicios de cable, BG, 5 de octubre, 4; Joel Greenberg, *Jerusalem Post*, 28 de septiembre; Mary Curtius, BG, 28 de septiembre, 1988.
- <sup>45</sup> BG, 10 de octubre, 1988.
- <sup>46</sup> Para un caso informativo, ver apéndice V, sección 3.
- <sup>47</sup> Michael Wines y James Gerstzang, LAT, 26 de enero, 1988.
38. Robert Pear, NYT, 3 de julio, 1988; LAT, 17 de julio, 1988.
- <sup>49</sup> Ver apéndice V, sección 4, para comentarios adicionales.
- <sup>40</sup> Montague Kern, *Television and Middle East Diplomacy: President Carter's Fall 1977 Peace Initiative* (Centro de Estudios Arabes Contemporáneos, Georgetown, Occasional Paper Series, 1983).
- <sup>41</sup> Ver apéndice V, sección 5.
- <sup>42</sup> Niebuhr, *Moral Man and Immoral Society*, 95.
- <sup>43</sup> Kempton, NYRB, 26 de noviembre, 1986; Bob Woodward, *Veil* (Simon & Schuster, 1987, 113); editorial, WP, 29 de marzo, 1987. Ver John Spicer Nichols, *Columbia Journalism Review*, julio/agosto 1988, sobre la dotación de fondos para *La Prensa* por parte del gobierno de EEUU, la red de North y otras fuentes relacionadas con el gobierno de EEUU y los Contra; también cartas, CJR, septiembre/octubre. Según fuentes sobre las que informó el Consejo sobre Asuntos Hemisféricos, Violeta Chamorro recibió un estipendio de la CIA y el periódico obtuvo al menos \$500.000 de la CIA y otras fuentes de EEUU; *Washington Report on the Hemisphere*, 16 de marzo, 1988.
- <sup>44</sup> *South*, octubre de 1988.
- <sup>45</sup> Editorial, WP, 25 de abril, 1988. Ver capítulo 4 y apéndice IV, sección 5.
- <sup>46</sup> *Central America Report* (Guatemala Capital), 10, 17 de junio, 1988; Jean-Marie Simon, ed., *Guatemala News in Brief* núm. 23, 11 de mayo-julio de 1988, Americas Watch; Human Rights Watch, *The Persecution of Human Rights Monitors*, diciembre de 1988.
- <sup>47</sup> Un mes después, el artículo de diecisiete párrafos sobre Guatemala por Stephen Kinzer menciona el bombardeo de *La Época* que "algunos diplomáticos atribuyeron a las fuerzas de seguridad", y se volvió a mencionar en agosto en el informe sobre libros del *Times* en una reseña sobre una conferencia que trataba de los escritores centroamericanos. Kinzer, NYT, 6 de julio, 1988; David Unger, *NYT Weekly Book Review*, 7 de agosto de 1988. La casa del corresponsal de la TASS había sido bombardeada poco antes de la destrucción de *La Época*, y los corresponsales de Tass y de la *Prensa Latina*, de Cuba, se habían visto obligados a abandonar el país tras recibir amenazas de muerte; dos escuadrones de la muerte tradicionales, vinculados con las fuerzas de seguridad, se atribuyeron el mérito.
- <sup>48</sup> "Freedom of the Press," NACLA, *Report on the Americas*, mayo/junio de 1988.

- <sup>49</sup> Servicios de cable, *Boston Globe*, 5 de septiembre, 1988.
- <sup>50</sup> Ver apéndice V, sección 6.
- <sup>51</sup> Kinzer, NYT, 20 de abril de 1987. En otro lugar, Kinzer escribe que "En 1980, *La Prensa* se vió sacudida por el conflicto interno cuando un grupo de empleados plantearon objeciones a su línea, cada vez más antisandinista. Los empleados disidentes, encabezados por Xavier Chamorro Cardenal, hermano del propietario fallecido, se marcharon y fundaron su propio periódico, el *Nuevo Diario*" (NYT, 2 de octubre, 1987). Se omite el hecho de que Xavier Chamorro era el director, y que los "empleados disidentes" constituían el 80 por ciento del personal.
- <sup>52</sup> Chamorro, WP, 3 de abril, 1986; Nichols, *op. cit.*; ver apéndice V, sección 6.
- <sup>53</sup> Para una comparación de las prácticas de Nicaragua con las de EEUU e Israel, ver las referencias del capítulo 4, nota 3.
- <sup>54</sup> AP, 22 de diciembre, 1987; Cal Thomas, BG, 3 de enero, 1988.
- <sup>55</sup> *Al-Hamishmar*, 25 de julio, 13 de agosto; *Jerusalem Post*, 12 de agosto, 24; *Al-Hamishmar*, 25 de julio, 13 de agosto, 1986.
- <sup>56</sup> *Yediot Ahronot*, 16 de agosto, 1987, traducido en *The Other Israel* (Consejo Israelí para la Paz Israelí-Palestina), septiembre de 1987; *Ha'aretz*, 1 de enero, 1988; AP, 25, 26 de octubre. Sobre el estado de emergencia, ver Avigdor Feldman, B. Michael, *Hadashot*, 14 de agosto, 1987.
- <sup>57</sup> NYT, 26 de octubre, 1987.
- <sup>58</sup> Simon Edge, *Middle East International*, 20 de enero, 1989.
- <sup>59</sup> El pretexto de que no lo sabíamos es válido para los consumidores pasivos que creen que los medios de comunicación presentan al mundo como es en realidad. No es válido para aquellos que tienen cierta familiaridad con las instituciones ideológicas o que participan en las mismas, y que por tanto indudablemente han de tener consciencia de que se necesita esfuerzo y espíritu emprendedor para hallar hechos importantes e indeseables.
- <sup>60</sup> Leah Enbal, *Koteret Rashit*, 8 de junio, 1988, citando también una serie de casos recientes de represión estatal de los judíos israelíes. Moshe Negbi, *Politika*, septiembre de 1986; "Press in Chains", *Shomer Hanitzotz*, mayo de 1988 (publicado como protesta por la supresión del periódico hebreo *Derech Hanitzotz* y el arresto de sus redactores); "Paper Tiger: The Struggle for Press Freedom in Israel", *Jerusalem Quarterly*, #39, 1986. *Ha'aretz*, 29 de septiembre, 1986.
- <sup>61</sup> *Fateful Triangle*, 139.
- <sup>62</sup> Avigdor Feldman, *Hadashot*, 18 de noviembre, 1988. Ver apéndice V, sección 7, para comentarios adicionales.
- <sup>63</sup> Rosenthal, NYT, 27 de mayo, 1988.
- <sup>64</sup> Por ejemplo, Dan Fisher, *Los Angeles Times*, 5 de octubre, 1985.
- <sup>65</sup> Jo Ann Boydston, ed., John Dewey: *The Later Works*, vol. II, de *Common Sense*, noviembre de 1935.
- <sup>66</sup> Ver apéndice V, sección 8.



- <sup>67</sup> Citado por Hill, *The World Turned Upside Down*, 72.
- <sup>68</sup> *Ibid.*, 385, 353.
- <sup>69</sup> Ver Mark Hollingsworth, *The Press and Political Dissent* (Pluto, Londres, 1986), para el cual la manifestación de Mill sirve de epígrafe.
- <sup>70</sup> Barron, "Access to the Press", 1656.
- <sup>71</sup> *St. Louis Post-Dispatch*, 24 de agosto, 1967, citado por Jerome A. Barron, "An Emerging First Amendment Right of Access to the Media?", *George Washington Law Review* (marzo de 1969), 498. Ver Aronson, *The Press and the Cold War*, 273-74, para una discusión.
- <sup>72</sup> Ver *Towards a New Cold War*, 36-37, 228, para más detalles y algunas salvedades muy marginales.
- <sup>73</sup> Diana Melrose, *Nicaragua: The Threat of a Good Example?* (Oxfam, Londres, 1985).
- <sup>74</sup> NYT, 29 de diciembre, 1987.
- <sup>75</sup> Thomas Friedman, NYT, 16 de octubre; foto, p. 1, AP, 15 de octubre, 1986.

Esta edición se terminó de imprimir  
en agosto de 2007 en  
Artes Gráficas delSur  
Alte. Solier 2450 - Avellaneda  
agdelsur@hotmail.com





The Doctor

Libros, Revistas, Intereses:  
<http://thedoctorwho1967.blogspot.com.ar/>

## TÍTULOS DE LA EDITORIAL

---

FRIEDRICH NIETZSCHE

Así habló Zaratustra

El origen de la tragedia

El Anticristo /

Fragmentos póstumos 1887

PIERRE KLOSSOWSKI

Nietzsche y el círculo vicioso

IMMANUEL KANT

Filosofía de la historia /

Qué es la ilustración

GEORG SIMMEL

Schopenhauer y Nietzsche

Intuición de la vida

G.W.F. HEGEL

Introducción a la

historia de la filosofía

RENÉ DESCARTES

Discurso del método

Meditaciones metafísicas

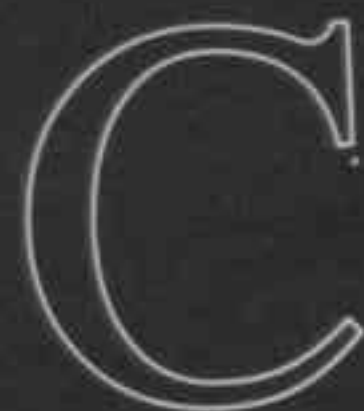
PLATON

Banquete

---



# NOAM CHOMSKY



El lingüista, profesor e intelectual estadounidense Noam Chomsky es fundador de la teoría generativo-transformacional que ha revolucionado la lingüística. En las décadas de 1960 y 1970 se opuso a la intervención de su país en la guerra del Vietnam por lo que escribió varias obras y pronunció numerosas conferencias en distintos ámbitos sociales y políticos.

Chomsky inició su activismo político relativamente pronto, pero comenzó a publicar más intensamente sobre estos temas en la década de 1960, en respuesta a la actuación de su país en el Suroeste asiático. Restó dedicación a su trabajo sobre lingüística para escribir acerca del papel de la comunidad académica y de los medios de comunicación en la obtención del apoyo de la opinión pública a la política de Estados Unidos. Abordó igualmente las consecuencias de la política exterior de Estados Unidos, y se manifestó a favor de que los intelectuales recurran a métodos científicos para cuestionar las políticas gubernamentales que encuentren inmorales y desarrollar estrategias prácticas que las combatan.

ISBN 978-987-617-015-4



9 789876 170154

 TERRAMAR  
EDICIONES

ILUSIONES NECESARIAS



NOAM CHOMSKY



Noam Chomsky



## ILUSIONES NECESARIAS

CONTROL DEL PENSAMIENTO  
EN LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS

 CARONTE  
ENSAYOS 



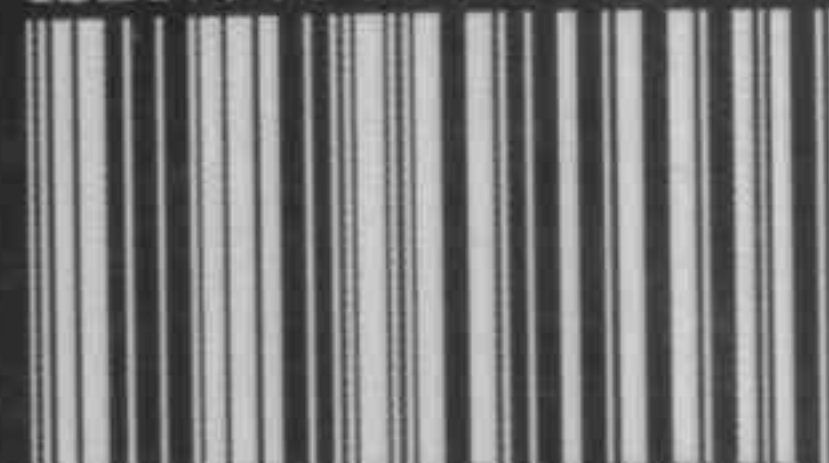
# NOAM CHOMSKY



El lingüista, profesor e intelectual estadounidense Noam Chomsky es fundador de la teoría generativo-transformacional que ha revolucionado la lingüística. En las décadas de 1960 y 1970 se opuso a la intervención de su país en la guerra del Vietnam por lo que escribió varias obras y pronunció numerosas conferencias en distintos ámbitos sociales y políticos.

Chomsky inició su activismo político relativamente pronto, pero comenzó a publicar más intensamente sobre estos temas en la década de 1960, en respuesta a la actuación de su país en el Sudeste asiático. Restó dedicación a su trabajo sobre lingüística para escribir acerca del papel de la comunidad académica y de los medios de comunicación en la obtención del apoyo de la opinión pública a la política de Estados Unidos. Abordó igualmente las consecuencias de la política exterior de Estados Unidos, y se manifestó a favor de que los intelectuales recurran a métodos científicos para cuestionar las políticas gubernamentales que encuentren inmorales y desarrollar estrategias prácticas que las combatan.

ISBN 978-987-617-015-4



9 789876 170154

 TERRAMAR  
EDICIONES

ILUSIONES NECESARIAS



NOAM CHOMSKY



Noam Chomsky



## ILUSIONES NECESARIAS

CONTROL DEL PENSAMIENTO  
EN LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS

 CARONTE  
ENSAYOS 



# NOAM CHOMSKY



El lingüista, profesor e intelectual estadounidense Noam Chomsky es fundador de la teoría generativo-transformacional que ha revolucionado la lingüística. En las décadas de 1960 y 1970 se opuso a la intervención de su país en la guerra del Vietnam por lo que escribió varias obras y pronunció numerosas conferencias en distintos ámbitos sociales y políticos.

Chomsky inició su activismo político relativamente pronto, pero comenzó a publicar más intensamente sobre estos temas en la década de 1960, en respuesta a la actuación de su país en el Sudeste asiático. Restó dedicación a su trabajo sobre lingüística para escribir acerca del papel de la comunidad académica y de los medios de comunicación en la obtención del apoyo de la opinión pública a la política de Estados Unidos. Abordó igualmente las consecuencias de la política exterior de Estados Unidos, y se manifestó a favor de que los intelectuales recurran a métodos científicos para cuestionar las políticas gubernamentales que encuentren inmorales y desarrollar estrategias prácticas que las combatan.

ISBN 978-987-617-015-4



9 789876 170154

 TERRAMAR  
EDICIONES

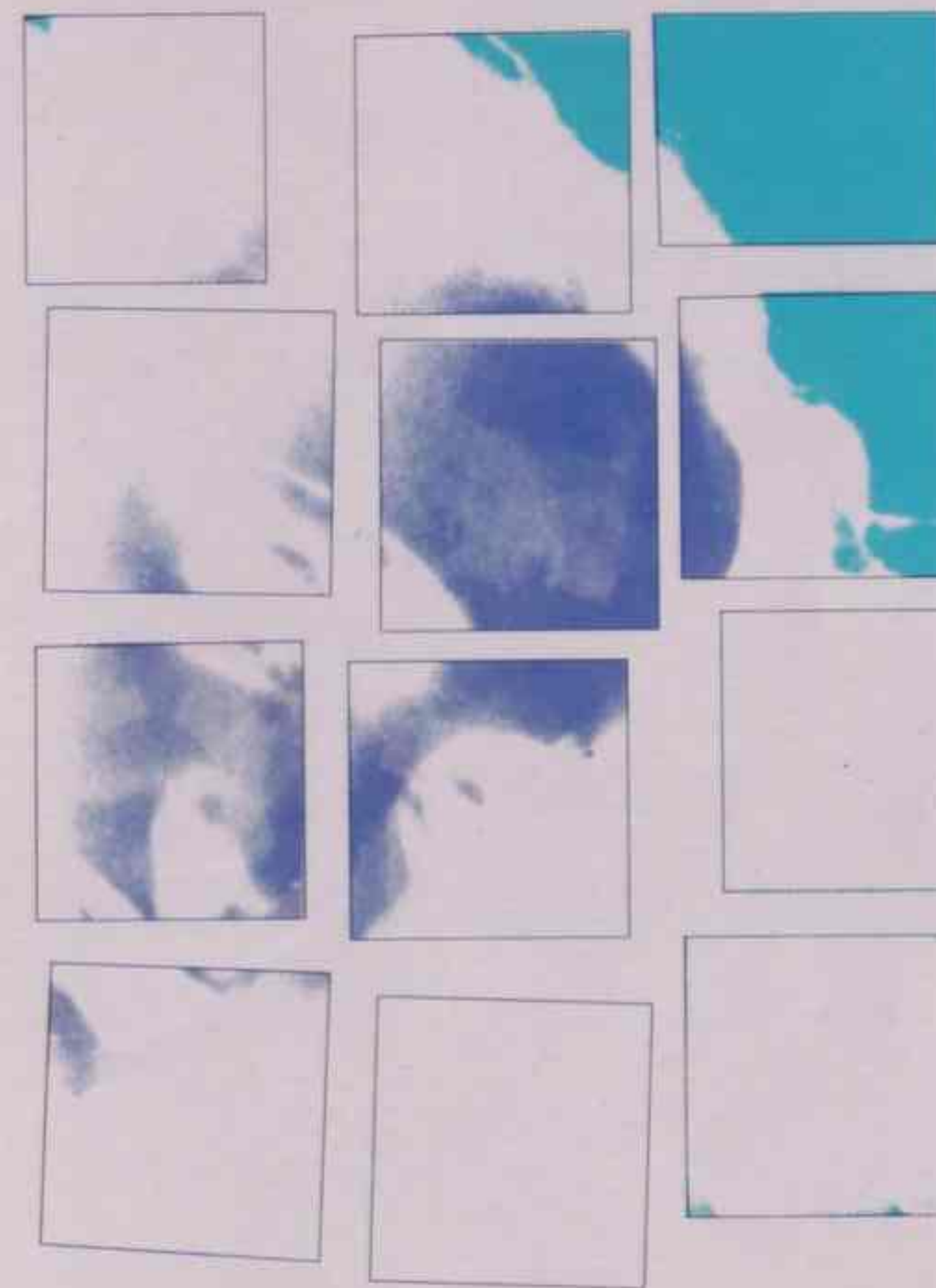
ILUSIONES NECESARIAS



NOAM CHOMSKY



Noam Chomsky



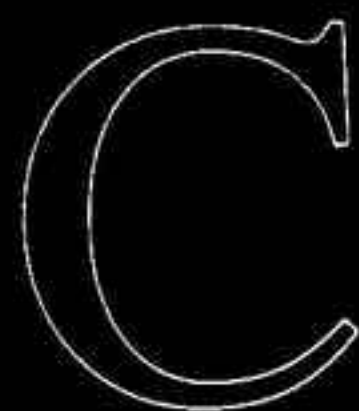
## ILUSIONES NECESARIAS

CONTROL DEL PENSAMIENTO  
EN LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS

 CARONTE  
ENSAYOS 



# NOAM CHOMSKY



Este libro representa una crítica a la ideología de Noam Chomsky, el más influyente de los intelectuales de la izquierda en los Estados Unidos. El autor, un destacado filósofo y lingüista, argumenta que la ideología de Chomsky, desarrollada en los años sesenta y setenta, ha sido una fuerza poderosa en la configuración de la política exterior de los Estados Unidos, especialmente en la guerra de Vietnam. El autor sostiene que la ideología de Chomsky es una ideología de la izquierda que ha sido utilizada para justificar la intervención militar de los Estados Unidos en Vietnam.

Chomsky es un autor muy influyente en la izquierda, pero su ideología, según el autor, es una ideología de la izquierda que ha sido utilizada para justificar la intervención militar de los Estados Unidos en Vietnam. El autor sostiene que la ideología de Chomsky es una ideología de la izquierda que ha sido utilizada para justificar la intervención militar de los Estados Unidos en Vietnam. El autor sostiene que la ideología de Chomsky es una ideología de la izquierda que ha sido utilizada para justificar la intervención militar de los Estados Unidos en Vietnam. El autor sostiene que la ideología de Chomsky es una ideología de la izquierda que ha sido utilizada para justificar la intervención militar de los Estados Unidos en Vietnam.

ISBN 978-987-617-015-4



9 789876 170154



ILUSIONES NECESARIAS



NOAM CHOMSKY



## Noam Chomsky



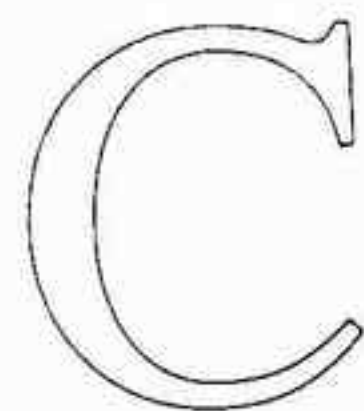
# ILUSIONES NECESARIAS

CONTROL DEL PENSAMIENTO  
EN LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS





# NOAM CHOMSKY



El libro de ensayos que constituye la obra de Noam Chomsky es una colección de los mejores trabajos que ha publicado en los últimos años. En él se aborda el tema de la libertad de expresión y el control del pensamiento en las sociedades democráticas. A través de una serie de ensayos, Chomsky analiza la situación de la libertad de expresión en Estados Unidos y en otros países, y propone una serie de medidas para garantizarla.

Chomsky es uno de los más importantes intelectuales de su generación, y su obra ha sido objeto de numerosos debates y controversias. En este libro, Chomsky aborda temas que son de gran actualidad y que afectan a la vida de todos los ciudadanos. Su análisis es claro y directo, y sus propuestas son realistas y viables. Este libro es una lectura obligada para todos aquellos que se interesan por la libertad de expresión y el control del pensamiento en las sociedades democráticas.

ISBN 978-987-617-015-4



9 789876 170154

 TERRAMAR

ILUSIONES NECESARIAS



NOAM CHOMSKY



# Noam Chomsky



## ILUSIONES NECESARIAS

CONTROL DEL PENSAMIENTO  
EN LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS

 CARONET  
ENSAYOS 